

Emerson Wendt  
Matteo Finco  
Thaís Janaina Wenczenovicz  
Organizadores

# DIREITOS HUMANOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM CONTEXTUALIDADE DIALÓGICA JURÍDICA

Prólogo por Roger Campione  
Prefácio por Antonio Carlos Wolkmer



© 2025 Editora Unoesc

Direitos desta edição reservados à Editora Unoesc

É proibida a reprodução desta obra, de toda ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios, sem a permissão expressa da editora.

Fone: (49) 3551-2065 - www.unoesc.edu.br/editora - editora@unoesc.edu.br

Editora Unoesc

Coordenação  
Tiago de Matia

Agente administrativa: Simone Dal Moro  
Revisão metodológica: Carlos Libman  
Projeto gráfico e capa: Simone Dal Moro  
Diagramação: Simone Dal Moro

Esta obra possui apoio da CAPES.

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

D598	Direitos humanos e inteligência artificial em contextualidade dialógica jurídica / Emerson Wendt, Matteo Finco, Thais Janaina Wenczenovicz, organizadores. – Joaçaba: Editora Unoesc, 2025. 276 p. : il. ; 23 cm  ISBN: 978-85-8422-271-1 Inclui bibliografias  1. Direitos humanos. 2. Inteligência artificial. 3. Direitos fundamentais. 4. Políticas públicas. I. Wendt, Emerson, (org.). II. Finco, Mateo, (org.). III. Wenczenovicz, Thais Janaina, (org.).  Dóris 341.12191
------	---

Ficha catalográfica elaborada por Edina Mari Cavichioli - CRB 14/757

**Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc**

Reitor  
Ricardo Antonio De Marco

Vice-reitores de Campi  
Campus de Chapecó  
Carlos Eduardo Carvalho  
Campus de São Miguel do Oeste  
Vitor Carlos D'Agostini  
Campus de Videira  
Carla Fabiana Cazella  
Campus de Xanxerê  
Genesio Téo

Pró-reitora de Ensino  
Jaciney Aparecida Danielli

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação,  
Extensão e Inovação  
Kurt Schneider

Diretor Executivo  
Jarlei Sartori

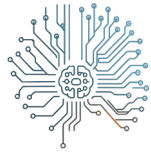
**Conselho Editorial**

Kurt Schneider  
Tiago de Matia  
Aline Pertile Remor  
Marcos Cordeiro Freitas  
Juliano Spuldaro  
Ieda Margarete Oro  
Robison Tramontina

Thais Janaina Wenczenovicz  
Simone Silveira  
Maurício Vicente Alves  
Rodrigo Geremias  
Marconi Januário  
Marilda Pasqual Schneider  
Camila Rostirola

**A revisão linguística é de responsabilidade dos autores.**





## PRÓLOGO

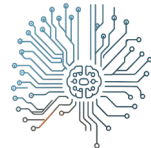
El derecho surge con la vocación de poner coto a la arrogancia humana, a esa falta de moderación que incita nuestra especie a superar, gracias a la técnica, los límites que su ‘desvalimiento’ orgánico le impone como especie animal. De ahí que exista una tensión nunca resuelta del todo entre el derecho y la tecnología, como si esta fuera un zapato que nunca acaba de encajar completamente en la horma de aquél.

Las nuevas tecnologías, de modo particular la inteligencia artificial (IA), han venido a complicar aún más la relación entre el derecho y la técnica. El impacto social, jurídico e incluso filosófico que la IA está teniendo a nivel global pone a la comunidad *lato sensu* normativa, a la luz de los sofisticados efectos que producen sus algoritmos de autoaprendizaje autónomo, en una encrucijada que es, a la vez, un espejo.

Digo esto porque, a mi modo de ver, toda investigación de orden filosófico-jurídico sobre la IA implica una reflexión sobre la inteligencia humana. Indagar sobre los fundamentos, los presupuestos y las consecuencias de la IA es como mirarnos al espejo en nuestra condición de humanos. Nos obliga a hacernos preguntas que, más allá de descubrir cosas sobre los artefactos tan sofisticados que fabricamos con las nuevas tecnologías, nos permiten comprender piezas de nosotros mismos, los humanos, que quizá dábamos por acotadas definitivamente.

Por esta razón, una materia tan humanamente sensible no puede ser solo objeto de análisis de los ‘técnicos’, de quienes conocen los entresijos lógicos, matemáticos, informáticos e ingenieriles de las máquinas y de los algoritmos inteligentes. Qué duda cabe de que es ese el conocimiento imprescindible e irrenunciable para una comprensión cabal de cualquier fenómeno asociado a la IA. Sin embargo, esta condición necesaria de cara al esclarecimiento de problemas no es suficiente para medir el impacto social y normativo de la IA. Porque la tarea requiere también un acercamiento filosófico a los desafíos que estas aplicaciones



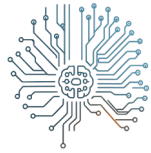


suponen para ciertas categorías básicas de la dimensión humana y, por tanto, también jurídica: cuestiones de subjetividad e imputación, de responsabilidad de las acciones, de motivación y argumentación de las decisiones. Por tanto, lo más ineludible debería ser la interdisciplinariedad y transversalidad de las aproximaciones al estudio del impacto de la IA en las sociedades del próximo cuarto del siglo XXI: especialistas en tecnologías y expertos en ciencias humanas luchando juntos, en el mismo lado de la barricada, contra la barbarie de la compartimentación del saber.

Los resultados y las consecuencias, los éxitos y los fracasos de investigar sobre la IA son, en realidad, elementos de reflexión sobre la inteligencia humana. Sin embargo, esto es así solo desde que las aplicaciones de la IA han prosperado de una forma sensacional, porque antes los resultados aplicativos de una tecnología que existe desde los años cincuenta no habían alcanzado el nivel de los últimos años. Hace ya tiempo que la IA se ha integrado en muchos aspectos de nuestras vidas, aunque no se etiquetara como tal (por ejemplo, los sistemas de navegación o de recomendación de productos en las plataformas audiovisuales). Lo que ha transformado nuestra percepción más recientemente han sido aplicaciones, como ChatGPT, en las que los usuarios pueden interactuar de manera directa con la máquina y han dejado de ser meros destinatarios ‘pasivos’ de sus algoritmos.

Esta facilidad de adopción ha provocado un salto en la trayectoria de la IA, con el paso de máquinas que dependen totalmente de un sujeto humano, a pesar de su capacidad para procesar operaciones de una manera velocísima, a sistemas capaces de crear informaciones nuevas, no introducidas ni previstas por quien los diseñó, a partir de los datos recibidos. Por tanto, hablamos de herramientas proyectadas por humanos que, sin embargo, adquieren una capacidad autónoma para elaborar proyectos y ejecutarlos. Esto ocurre porque ahora los algoritmos que se utilizan en IA ya no son solo “extractivos”, es decir, capaces de identificar secuencias lingüísticas, sino “abstractivos”, es decir, capaces de articular nuevas frases a partir del contenido integral de las anteriores.

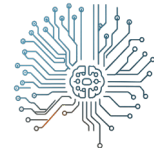




A menudo se dice que la IA va a tener, está teniendo, el mismo impacto en la humanidad que la electricidad. Pero hay una diferencia entre IA y electricidad, pues de esta, a diferencia de la primera, sabemos lo que hace antes de que lo haga. Se puede ver, por ejemplo, en ámbitos como la medicina. Hoy en día, a diferencia de los algoritmos ya existentes hace años, que permitían descifrar patrones complejos en una amplia gama de diagnósticos (radiografías, resonancias, etc.), los algoritmos actuales de IA manifiestan una capacidad predictiva, es decir, han pasado de saber detectar tendencias a saber predecir si un paciente específico sufrirá una determinada patología. Al poder analizar, por ejemplo, miles de imágenes oculares en pocos instantes, una red neuronal artificial puede aprender a detectar signos muy tempranos de ceguera diabética antes que el ojo clínico humano. Las imágenes de mamografías leídas por programas de IA pueden detectar los casos de cáncer de mama con un porcentaje de identificación mayor que los radiólogos. Y no me detengo en los avances en el diseño de proteínas, que abren escenarios increíblemente prometedores. Sin embargo, hay también un reverso de la moneda, relacionado con la ambivalencia del progreso científico. Un screening masivo hecho por IA puede provocar muchas mejoras diagnósticas, pero, al mismo tiempo, puede surgir el problema del sobrediagnóstico que puede afectar a la indiscutible perspectiva de beneficio: existen patologías diagnosticadas de manera precoz que posiblemente no lleguen nunca a manifestar síntomas. Al mismo tiempo, existen otras que, por mucho se diagnostiquen con antelación, no son curables. ¿Queríamos entonces saber que las tenemos mucho antes de que se manifiesten o sabiendo que quizá no lo hagan nunca? Y solo es un ejemplo de una realidad más extensa y compleja.

En definitiva, para abordar a través de los instrumentos normativos los efectos de la IA, conviene reflexionar con ponderación sobre las posibilidades, los medios, los fines y las consecuencias no previstas de estas nuevas tecnologías. Iniciativas como el libro que aquí se prologa se mueven en esa dirección desde el prisma de los derechos fundamentales. Se trata de un campo de investigación indispensable para que la tecnología sirva para emancipar a los seres humanos y



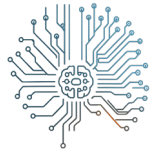


mejorar su condición en términos de igualdad y libertad. Sin olvidar que la forma cabal de llevar a cabo un análisis de esta índole consiste en la antes mencionada transversalidad científica, pues la perspectiva tecnológica nos proporciona el conocimiento de lo que es la IA y cómo funciona; la perspectiva normativa nos proporciona el conocimiento de cómo debería ser y funcionar. De forma aislada, los dos saberes son parciales e insuficientes. De forma conjunta, son la clave de acceso a la solución de problemas.

**Roger Campione**

Catedrático de Filosofía del derecho  
de la Universidad de Oviedo





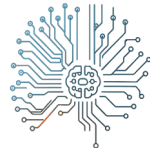
## PREFÁCIO

A emergência das novas tecnologias, sobretudo aquelas baseadas em inteligência artificial e em grandes acervos de dados de plataformas digitais, vem transformando radicalmente os modos de existir, comunicar, trabalhar, consumir e construir sentido. Essa rapidez, frequentemente percebida como inevitável e legitimada pelo discurso da neutralidade técnica, na verdade oculta dinâmicas de poder e conflitos estruturais que questionam nossa própria concepção de humanidade e sua organização nos âmbitos da produção, comunicação e consumo.

A centralidade dos dados digitais em processos econômicos, políticos, sociais e na governança cotidiana aponta para profundas mudanças estruturais, impondo uma nova racionalidade instrumental. Há que se entender criticamente que não se trata apenas da substituição de mecanismos, mas da reconfiguração das relações entre sujeitos, mercados, instituições e culturas. A inteligência artificial, ao transformar dados em decisões, recomendações e previsões, automatiza formas de discriminação e efetua um deslocamento dos espaços — ou seja, da capacidade de agir e decidir — para sistemas não transparentes e muitas vezes inacessíveis à compreensão comum. São linguagens complexas, algoritmos e padrões criados em ambientes de corporações mediáticas de poucos países, principalmente nos Estados Unidos e Europa, e exportados globalmente, de modo impositivo sem mediações críticas, ou autonomia de decisão interna, principalmente das nações periféricas.

Nesse contexto, emerge o conceito de “colonialismo de dados”, expressão provocadora que convoca a memória de processos coloniais históricos para embasar as desigualdades do presente. O “colonialismo de dados” refere-se à apropriação, extração e uso de grandes volumes de informações, geralmente provenientes de populações marginalizadas ou periféricas do Sul global, sem o devido retorno social equânime, governança participativa, redistribuição de benefícios comunitários e controle regulatório efetivo. Plataformas transnacionais e grandes corporações digitais atuam como novos colonizadores com suas práticas



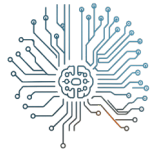


neoimperialistas, transformando dados em ativos financeiros de valorização exorbitante, enquanto exercem controle perverso sobre infraestrutura, padrões tecnológicos e até mesmo sobre regulações internas de privacidade e acesso.

A história nos mostra que todo processo de colonização pressupõe não apenas dominação territorial, mas também controle simbólico, mental e epistemológico que expressam novas formas de colonialidade de poder. O “colonialismo de dados” atual repete, em escala digital, práticas de extração e silenciamento: vozes e experiências de determinadas populações tornam-se fontes de informação para alimentar sistemas de inteligência artificial, mas raramente participam das decisões sobre o uso, os padrões éticos e as consequências dessas tecnologias. Além disso, vastas regiões do planeta permanecem dependentes de infraestrutura tecnológica e da lógica algorítmica desenvolvidas em centros imperiais hegemônicos do Norte global, o que reforça dinâmicas de subordinação, vulnerabilidade e incapacidade de reação.

Esse cenário exige uma reflexão profunda sobre os impactos negativos e dilemas éticos que marcam a ascensão da inteligência artificial e dos dispositivos digitais de decisão sobre a ser humano e sobre a própria natureza. A dimensão ética e filosófica não pode ser reduzida à discussão sobre a mera privacidade individual, num mundo em que cada ação digitalizada deixa rastros passíveis de captura, análise, monetização e robotização. Uma fundamentação ética que se busca para a inteligência artificial exige respostas mais concretas: como assegurar responsabilidade, equidade, inclusão social e controle em sistemas que decidem sobre liberdades, oportunidades, recursos e até mesmo sobre a integridade física das pessoas? Como desconstruir preconceitos e discriminações invisíveis, que podem ser automatizados e replicados em larga escala por algoritmos que aprendem com bases de dados enviesadas, marcadas por manipulação humana e por desigualdades sociais? Há uma inquietação crescente e crítica sobre o poder invisível das plataformas, que decidem não apenas o que se visualiza e o que se consome, mas moldam comportamentos, ideias e até emoções.



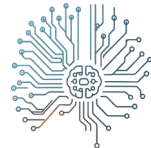


O desafio ético é também político. Por trás do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, há escolhas que refletem valores, interesses e visões de mundo de setores específicos, convertidos em códigos e automações supostamente “neutros”. O risco é que esse novo instrumental tecnológico perpetue relações de desigualdade e exclusão, ao invés de abri-las ao debate democrático, à participação comunitária e ao controle plural descentralizado. Ora, os gigantes corporativos transnacionais de tecnologia concentram condições de conhecimento, acesso a recursos e poder para definir padrões de mercado globais, frequentemente em confronto com direitos individuais e coletivos — ou mesmo com a soberania interna de países dependentes.

Nesse contexto, a ausência de marcos regulatórios claros e efetivos permite uma corrida desenfreada pela inovação a qualquer custo, frequentemente à revelia dos interesses públicos e de salvaguardas dos direitos fundamentais. Estados nacionais buscam, com variados graus de êxito, criar leis, diretrizes e mecanismos de fiscalização, mas enfrentam o poder organizacional e a influência das grandes corporações (*big tech*), que operam transversalmente a serviço de interesses do capitalismo digital e com capacidade de pressionar legislações e de intervir na soberania de múltiplos países. Além disso, cresce a fragmentação global das abordagens regulatórias, o que favorece lacunas e a evasão de responsabilidades.

Diante desse ambiente complexo e incerto, ganha centralidade o papel indiscutível dos Direitos Humanos como horizonte normativo e prático para orientar a relação entre tecnologia, poder e sociedade. Os direitos humanos enquanto “gramática de resistência” oferecem a base ética e jurídica para enfrentar os desafios postos pela inteligência artificial e para regular o setor digital de modo que promova a dignidade, a igualdade, a liberdade e a justiça. Direitos como privacidade, transparência, não discriminação, liberdade de expressão, acesso à informação, proteção contra vigilância indevida e direito à participação nas decisões que afetam coletivamente tornam-se pontos de referência para a construção de políticas públicas, legislações regulatórias, práticas de cidadania responsável e de convivência no exercício plural de participação democrática.



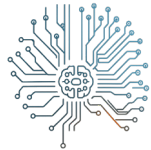


É necessário, portanto, superar a postura meramente reativa diante do avanço tecnológico — que também pode gerar novas formas de hiperconsumismo — e adotar uma estratégia propositiva. Nessa abordagem, os direitos humanos devem funcionar simultaneamente como escudo protetor e instrumento de luta para conquistar demandas legítimas, ampliar oportunidades, compartilhar benefícios e garantir processos igualitários de justiça informacional. Somente com a participação ativa de diferentes setores sociais — incluindo populações historicamente marginalizadas e excluídas — será possível corrigir rumos, democratizar decisões e projetar usos da inteligência artificial que respeitem a diversidade, reconheçam as desigualdades e favoreçam a inclusão social.

Esse movimento demanda não apenas regulação normativa, mas também uma cultura de direitos humanos que inspire o desenvolvimento, a implementação e o controle das tecnologias disruptivas. Tal cultura deve fundamentar-se em princípios compartilhados, formas de controle comunitário-participativo e compromissos genuínos. Trata-se, em última análise, da missão de reconstrução ético-política do paradigma tecnológico contemporâneo.

Essa perspectiva de reconstrução encontra eco na importante obra coletiva “Direitos Humanos e Inteligência Artificial em Contextualidade Dialógica Jurídica”, organizada pelos professores Emerson Wendt, Matteo Finco e Thaís Janaína Wenczenovicz. Por meio da reflexão interdisciplinar de seus coautores, a obra evidencia as necessárias preocupações sobre a realidade digital e os avanços das novas formas de dominação técnica — representadas, particularmente, pela inteligência artificial. Os questionamentos levantados dialogam diretamente com a urgência de democratizar o desenvolvimento tecnológico e garantir que os direitos humanos orientem essa transformação. Daí a tarefa coletiva que se impõe: afirmar os Direitos Humanos como bússola para a regulação das grandes corporações e plataformas transversais do setor digital, e assim pavimentar um caminho pelo qual a tecnologia, ao invés de instrumento de dominação e aprofundamento das desigualdades, transforme-se, criticamente, em força





produtiva, capaz inverter sua lógica no sentido da pluralidade, emancipação e justiça social.

Por certo, não há como negar que a significativa contribuição presente nesta obra nos coloca em relação com novas interrogações, exigências e desafios, que passam a ser referência obrigatória para um debate crítico, oportuno e paradigmático acerca do diálogo entre o lócus político de resistência dos Direitos Humanos e os horizontes de incertezas da inteligência artificial em suas formas de dominação presentes no século XXI. Parabenizo aos organizadores e a todos seus coautores por nos brindar com essa muito bem-vinda publicação.

**Antonio Carlos Wolkmer**

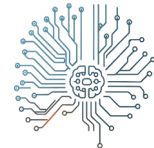
Prof. Emérito e Titular do PPGD/UFSC

Docente Permanente dos Programas de Pós-Graduação da Unilasalle-RS e da  
Unesc-SC

Pesquisador Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível A-1.

Agosto de 2025





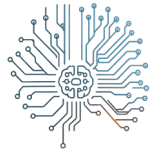
## APRESENTAÇÃO

A tríade escolhida para a elaboração desse Livro: Direitos Humanos e Inteligência artificial em contextualidade dialógica no espaço jurídico são temas convergentes aos organizadores Dr. Emerson Wendt, Dr. Matteo Finco e Dra. Thaís Janaina Wenczenovicz, organizadores desta Obra. Dentre os objetivos deste diálogo interinstitucional destaca-se a internacionalização, que opera com diversas formas de interação, abrangendo diferentes tradições jurídicas e epistemológicas no cenário de pós-graduação no Brasil. Diferentemente de outras áreas do conhecimento, que possuem uma língua franca para comunicação científica, o Direito é uma área que depende do contexto jurídico-normativo de cada nação, o que impede a universalização de certos temas. Contudo, em subáreas específicas, é possível desenvolver colaborações internacionais mais ampliadas e resguardadas as especificidades da geoespacialidade, assim como a pluriversalidade científica, a exemplo desse livro.

Dentre os eixos geradores a obra possui: Eixo 1: Direito fundamental à Proteção de Dados Pessoais & Inteligência Artificial; Eixo 2: Sociedade Digital: construção social da realidade a partir dos algoritmos; Eixo 3: Políticas públicas de inserção e educação digital; Eixo 4: Colonialismo digital e Eixo 5: Direitos Humanos, Educação e Inteligência Artificial. A opção pela escolha dos eixos assenta-se na observância em impulsionar um diálogo interdisciplinar e a intraprofissionalidade.

Destaca-se ainda, que o Livro possui representação de autores das cinco grandes regiões do país, bem como a participação de pessoas com deficiência e representatividade feminina na organização, autoras e co-autoras de modo a reforçar o processo de inclusão na cartografia da ciência nacional. Esse esforço coletivo também é o resultado de convergências temáticas entre docentes e discentes do Pós-Graduação de três Programas de Pós-Graduação que permitiu impulsionar a reflexão e escrita dos 9 capítulos e uma resenha que contempla a integralidade da Obra.





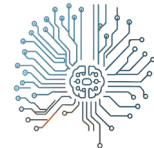
Nesse lume, um dos pontos convergentes a se destacar é o uso da interdisciplinaridade, com vistas a impulsionar a criação de redes de pesquisa nacional e internacional. A interdisciplinaridade tem o objetivo de promover a integração dos mais variados atores sociais, campos de saberes, instituições e multiplicidade de metodologia, procedimentos metodológicos, técnicas metodológicas e outros tantos que se fazem necessários na complexa teia do construto científico do século XXI. Uma prática educacional e investigativa que procura fazer com que as áreas do conhecimento se complementem de forma que as reflexões e resultados sirvam de apoio ao aprendizado umas das outras, criando e ressignificando a ciência nacional e internacional.

Nesse contexto, esse livro circunda por eixos temáticos como Cidadania, Colonialismo digital; Constituição, Democracia, Direitos Humanos, Inteligência Artificial, Justiça Informacional, Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a Inteligência Artificial, Plataformização; Programas de Reconhecimento facial Sociedade da Informação; Sociedade do Hisperconsumo entre outros.

O primeiro capítulo titulado **DIREITOS DIGITAIS E INICIATIVA POPULAR DE LEI: A DEMOCRACIA DELIBERATIVA E A RECONFIGURAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA NO BRASIL** com autoria de Adriana Rocha de Holanda Coutinho e João Paulo Allain Teixeira dialoga sobre direitos digitais e democracia deliberativa. A democracia moderna se consolidou a partir do final do século XVIII, estruturando-se em bases principiológicas, textos normativos e na arquitetura institucional que materializa o constitucionalismo contemporâneo. Nas sociedades contemporâneas, a evolução tecnológica e a transformação das estruturas de poder impõem a reconfiguração dos modelos democráticos, exigindo a preservação dos direitos fundamentais e da cidadania plena.

Nesse sentido, a democracia deliberativa surge como modelo central para a participação política, privilegiando processos argumentativos inclusivos e a legitimidade procedimental das decisões públicas. Jürgen Habermas é referência teórica fundamental para o debate ao propor o modelo de racionalidade comunicativa como pilar de sustentação da esfera pública, onde o consenso





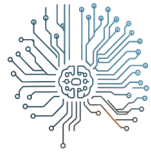
legítimo se obtém pela força do melhor argumento, sempre respeitando a participação de minorias e sujeitos historicamente marginalizados.

No contexto brasileiro, a Constituição de 1988 prevê mecanismos de participação direta, através de referendo, plebiscito e iniciativa popular de lei, instrumentos de efetivação da soberania popular. Os direitos digitais emergem como extensão dos direitos fundamentais, exigindo proteção normativa frente aos desafios da sociedade conectada, incluindo inteligência artificial, big data e automação. A análise evidencia que, apesar das possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias, a efetividade da iniciativa popular no Brasil permanece limitada, com poucas leis aprovadas desde 1988. A experiência brasileira demonstra que a digitalização pode ser instrumento de ampliação da participação cidadã, mas depende de compromisso legislativo e institucional para assegurar o pleno exercício da democracia deliberativa e da soberania popular.

Na sequência Alberto Enrique Nava Garcés e intitulado *¿QUIÉN LE TEME A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? EL DELITO Y EL REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 13 DE JUNIO DE 2024* aponta que a inteligência artificial impulsiona preocupação no âmbito regulatório devido às suas potenciais consequências. No entanto, proibi-la ou limitá-la não resolve o problema se leis semelhantes não forem adotadas em outros lugares, com determinação e ética. E, nesse contexto o capítulo analisa quais **são** as limitações e desvantagem das tecnologias elaboradas/produzidas em países de formação histórica diferenciada e seus marcos regulatórios. Tem sido argumentado que a tecnologia só pode ser resolvida com mais tecnologia. Entretanto, restringir o desenvolvimento ou a pesquisa não poderia se tornar um problema maior no futuro? Este e outros questionamentos conduzem a reflexão do estudo de contexto geoespaciais diferenciados: Europa e América.

O terceiro capítulo denominado **TECNOLOGIAS DIGITAIS, PLATAFORMIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM OLHAR PELA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DE**



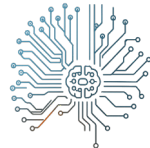


**MANGABEIRA UNGER** sob autoria de Lucas Fucci Amato, Rafael A. F. Zanatta e Caio Rezende Missaglia apresenta um diálogo sobre o ‘modelo’ de direitos fundamentais inspirado na obra de Roberto Mangabeira Unger com destaque em quatro funções – direitos de desestabilização, direitos de imunidade, direitos de participação e direitos de autonomia ou autorregulação –, testando sua aplicabilidade para responder aos riscos e problemas associados às tecnologias digitais (como a plataformização e datificação), particularmente com o avanço da inteligência artificial.

A abordagem centrada em direitos humanos ou fundamentais, típica da regulação europeia sobre inteligência artificial, é vista como alternativa às regulações focadas na liberdade econômica (Estados Unidos) ou na supervisão estatal (China) e se propõe a mitigar os riscos associados à perda de controle humano sobre as tecnologias e a seus impactos sobre a liberdade, a privacidade, os direitos trabalhistas e a democracia. Diante disso, consideramos que o modelo proposto ajuda a mapear e descrever as funções necessárias para a proteção dos direitos humanos ou fundamentais no cenário contemporâneo, particularmente equilibrando as possibilidades de proteção estatal com a inescapabilidade da autorregulação privada das plataformas digitais.

O capítulo quatro intitulado **COLONIALISMO DIGITAL: REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RECONHECIMENTO FACIAL PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA BRASILEIROS** das autoras Bianca Muterlle de Farias e Thaís Janaina Wenczenovicz dialoga com o colonialismo digital e os programas de reconhecimento facial. O colonialismo digital é um fenômeno de poder, caracterizado pela ascensão da tecnologia a níveis globais. Esse fenômeno é caracterizado pela automatização de serviços, pela ampliação de aplicativos de mobilidade urbana, pelo aumento de trabalhadores informais ligados à uberização, pela hiperinformação promovida pelos aplicativos de redes sociais, pela disseminação de informações falsas e pelo monitoramento da sociedade através de programas de reconhecimento facial.





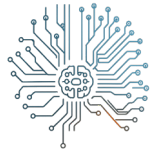
O objetivo deste capítulo é investigar os reflexos do colonialismo digital no cotidiano social, com ênfase nos programas de reconhecimento facial, sob a perspectiva racial, de discriminação de gênero e violação de direitos fundamentais individuais. Para atingir o objetivo proposto será utilizado o procedimento bibliográfico-investigativo com a coleta de dados científicos que comprovam os vieses discriminatórios dos programas de reconhecimento facial. Os vieses discriminatórios presentes nas plataformas digitais e programas de reconhecimento facial expõem o padrão colonial de classificação de pessoas sob ideia de raça, gênero e idade. Dessa forma, os programas de reconhecimento facial não são tecnologias confiáveis para serem utilizadas na seara da segurança pública.

O quinto capítulo com o título **EXPECTATIVAS ALGONORMATIVAS: OPACIDADE E TRANSPARÊNCIA NAS IAs GENERATIVAS** com autoria de Germano Schwartz busca refletir sobre Algoritmos e IAs generativas. Estas, possuem uma lógica paradoxal de transparência e de opacidade que os tornam fatores relevantes para o cumprimento da referida função do Direito. De que forma esse (re)processamento acontece é, portanto, o objetivo deste capítulo. Para tanto, é preciso, antes, delimitar os conceitos operacionais a serem utilizados em sua argumentação.

**AMERICAN WAY OF LIFE DO SÉCULO XXI: OS ALGORITMOS COMO FERRAMENTA DE CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO** com autoria de Julia Reinicke Job e Fernanda Nunes Barbosa o capítulo 6 tem o propósito de analisar o uso dos algoritmos como ferramenta de consolidação da sociedade do hiperconsumo. Para tanto, são desenvolvidas três seções relativas a cada objetivo específico. A primeira objetiva explicar o conceito e a utilização dos algoritmos nos dias atuais; a segunda intenta examinar a relação entre o período do *American Way of Life* com a sociedade do hiperconsumo de hoje; e, por fim, a terceira investiga a utilização dos algoritmos de recomendação como ferramenta de solidificação da sociedade do hiperconsumo.

Com o fim de responder a problemática da pesquisa, utiliza-se o método de abordagem dedutivo, uma vez que, inicialmente, serão analisadas categorias e





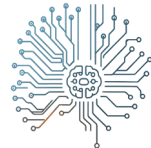
conceitos gerais para, após, concluir-se de que forma os algoritmos são utilizados como ferramenta de construção e, mais do que isso, de consolidação de uma sociedade de consumo em massa, bem como suas repercussões para a população, constituída por usuários finais dos algoritmos e *softwares* deles provenientes.

O sétimo capítulo traz uma reflexão sobre o impacto da Inteligência artificial sobre a sociedade do século XXI. O texto nomeado **REFLEXÕES SOBRE OS IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SOCIEDADE** de Luciano Andreatta Carvalho da Costa também indica que As redes sociais, para além de sua influência crescente sobre diferentes espectros da sociedade, têm exercido um impacto cada vez mais preocupante sobre os jovens, uma realidade que vem sendo objeto de estudo de autores oriundos de diferentes áreas acadêmicas e níveis de ensino, a exemplo da Educação Básica.

Na sequência, sob o título **EFICIENTISMO NA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA ESFERA PENAL** com autoria de Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth, Milena Cereser da Rosa e Leonardo Unser Guerra Moletta o texto artigo busca analisar o déficit legislativo brasileiro acerca do direito fundamental à proteção de dados pessoais na esfera penal, considerando as práticas voltadas para a eliminação de um “inimigo comum” que fomentam o eficientismo na política de segurança pública. Inicialmente, objetiva-se compreender o direito à proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental para, posteriormente, analisar a (in)efetividade desse direito na esfera penal em decorrência do eficientismo na política de segurança pública.

Considerando essa conjuntura, o Estado e instituições se utilizam cada vez mais do uso de novas tecnologias objetivando garantir uma atuação voltada para o eficientismo na política de segurança pública, o que corrobora para a inexistência de legislação de proteção de dados pessoais aplicável na esfera penal. Embora o direito à proteção de dados pessoais figure enquanto direito fundamental, verifica-se a existência de um paradoxo, pois há limites em sua aplicabilidade no âmbito penal, porém, diante do déficit legislativo sobre o tema, incorre na ausência de





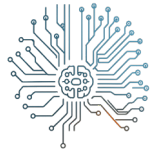
limites aos órgãos institucionais no campo de segurança pública, cujas práticas são voltadas para o eficientismo.

O capítulo nove intitulado **DIREITO, REGULAÇÃO E COLONIALISMO DIGITAL: NOTAS SOCIOJURÍDICAS SOBRE O PAPEL DAS AUTORIDADES DE PROTEÇÃO NA AMÉRICA LATINA** com autoria de Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros, Vinícius Sampaio e Julia Tosatto analisa o fenômeno do colonialismo digital sob uma perspectiva latino-americana, com ênfase nas novas dinâmicas impostas por grandes corporações transnacionais do setor digital. A pesquisa tem como primeiro objetivo examinar, por meio de estudos de caso, as manifestações do colonialismo digital em três escalas distintas: macro-macro, Estado-cidadão e empresa-usuário.

Em um segundo momento, busca-se compreender de que forma a fragmentação regulatória observada na América Latina reflete a persistência de estruturas coloniais na governança digital. Para isso, analisa-se o grau de articulação entre as autoridades nacionais de proteção de dados na região, com o intuito de avaliar os desafios e limitações enfrentados na construção de uma governança regulatória regional integrada. Compreende-se que, embora haja avanços importantes com a criação de autoridades nacionais consolidadas, os países latino-americanos ainda carecem de mecanismos coordenados que possibilitem uma atuação conjunta frente aos desafios impostos pelas grandes plataformas digitais.

O capítulo dez da autora Michelle Fernanda Martins busca compreender se há um eurocentrismo nas legislações brasileiras que regulamentam aspectos da internet e seus algoritmos, e se isso pode representar um problema. Através do método dedutivo e uma pesquisa exploratória, foi analisada a necessidade do pensamento descolonial na teoria dos direitos humanos. Foram exploradas também as ideias de colonialidade do poder e geopolítica do conhecimento dentro da teoria dos direitos humanos. Por fim, foi estudada a internet como direito humano e o pensamento colonial nas legislações brasileiras que regulamentam a internet. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, através de legislações,





artigos científicos, doutrina e revistas especializadas. Ao final, se concluiu que há uma tendência eurocêntrica e de pensamento colonial nas legislações adotadas pelo Brasil que regulamentam a Internet, o que deve ser observado, pois pode apresentar uma série de riscos, porém ainda não é possível observar as consequências de tal fenômeno. O capítulo intitula-se **O PENSAMENTO COLONIAL E OS ALGORITMOS NO BRASIL**.

O último capítulo é dedicado a uma resenha da Obra do professor e pesquisador Antonio Carlos Wolkmer, a qual rendemos homenagem pela sua brilhante trajetória e configurar o ‘professor’ de todas/todos nós. A resenha é o resultado de leitura realizada por Emerson Wendt da Obra intitulada “**Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito**”.

Excelente leitura.

Outono de 2025.

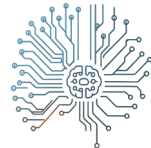
Emerson Wendt/PPGD UNILASALLE, Brasil

Matteo Finco/ Universidade La Sapienza de Roma, Itália

Thaís Janaina Wenczenovicz/PPGD UNOESC e PPGEd/UERGS,  
Brasil

Organizadores

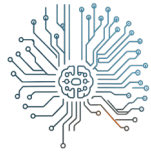




## SUMÁRIO

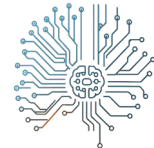
PRÓLOGO .....	3
Roger Campione	
PREFÁCIO .....	7
Antonio Carlos Wolkmer	
APRESENTAÇÃO.....	12
DIREITOS DIGITAIS E INICIATIVA POPULAR DE LEI: A DEMOCRACIA DELIBERATIVA E A RECONFIGURAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA NO BRASIL.....	22
Adriana Rocha de Holanda Coutinho, João Paulo Allain Teixeira	
¿QUIÉN LE TEME A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? EL DELITO Y EL REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 13 DE JUNIO DE 2024.....	41
Alberto Enrique Nava Garcés	
TECNOLOGIAS DIGITAIS, PLATAFORMIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM OLHAR PELA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DE MANGABEIRA UNGER .....	62
Lucas Fucci Amato, Rafael A. F. Zanatta, Caio Rezende Missagia	
COLONIALISMO DIGITAL: REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RECONHECIMENTO FACIAL PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA BRASILEIROS.....	91
Bianca Mutterle de Farias, Thaís Janaína Wenczenovicz	
EXPECTATIVAS ALGONORMATIVAS: OPACIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS IAs GENERATIVAS.....	109
Germano Schwartz	





AMERICAN WAY OF LIFE DO SÉCULO XXI: OS ALGORITMOS COMO FERRAMENTA DE CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO .....	123
Julia Reinicke Job, Fernanda Nunes Barbosa	
REFLEXÕES SOBRE OS IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SOCIEDADE .....	142
Luciano Andreatta Carvalho da Costa	
EFICIENTISMO NA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA ESFERA PENAL.....	156
Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth, Milena Cereser da Rosa, Leonardo Unser Guerra Moletta	
DIREITO, REGULAÇÃO E COLONIALISMO DIGITAL: NOTAS SOCIOJURÍDICAS SOBRE O PAPEL DAS AUTORIDADES DE PROTEÇÃO NA AMÉRICA LATINA.....	180
Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros, Vinícius Sampaio, Julia Tosatto	
O PENSAMENTO COLONIAL E OS ALGORITMOS NO BRASIL .....	207
Michelle Fernanda Martins	
PLURALISMO JURÍDICO: FUNDAMENTOS DE UMA NOVA CULTURA NO DIREITO .....	239
Emerson Wendt	





# DIREITOS DIGITAIS E INICIATIVA POPULAR DE LEI: A DEMOCRACIA DELIBERATIVA E A RECONFIGURAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA NO BRASIL

Adriana Rocha de Holanda Coutinho<sup>1</sup>

João Paulo Allain Teixeira<sup>2</sup>

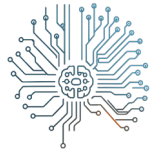
## INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho consiste em investigar instrumentos, estratégias e técnicas voltados ao fortalecimento da democracia, com ênfase na análise da iniciativa popular digital de lei. Pretende-se examinar de que modo essa modalidade de participação pode ampliar as formas de deliberação e intervenção cidadã no processo legislativo. Para tanto, parte-se do referencial teórico habermasiano ao tematizar a ideia de esfera pública, buscando compreender se e em que medida

<sup>1</sup> Doutoranda em Direito pela UNICAP; Mestra em Direito pela PUC-SP; Professora de Direito Constitucional na UNICAP; Foi Secretária de Trabalho e Qualificação Profissional da cidade do Recife, Conselheira Federal e Vice-presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero do CFOAB e Vice-presidente da OAB-PE; Advogada.

<sup>2</sup> Pesquisador do CNPq (bolsa produtividade em pesquisa nível 2); Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2005); Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (1999); Master em Teorías Críticas del Derecho pela Universidad Internacional de Andalucía, Espanha (2000); Graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (1995); Professor Associado na Universidade Federal de Pernambuco; Professor na Universidade Católica de Pernambuco; Integrante do Banco Nacional de Avaliadores do Sinaes - BASIS para os cursos de Direito Avaliador “ad hoc” do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação (INEP/MEC); Integra a “rede de pesquisa para o constitucionalismo democrático latino-americano”; a “rede de pesquisa constitucionalismo Latino-Americano, Direitos da Cidadania e Justiça Ambiental”, o “Observatório de Políticas Constitucionais Descolonizadoras para a América Latina”, a “Rede Hispano-Brasileira de Direito Constitucional”, a “Rede Latino-Americana Democracia e Direitos Sociais” e a “Rede de Pesquisa Teoria Crítica do Direito e De(s) colonialidade Digital”. Líder do Grupo de Pesquisa REC - Recife Estudos Constitucionais; Possui estágio de pesquisa pós-doutoral no CES (Centro de Estudos Sociais) da Universidade de Coimbra, Portugal (2018); Coordenador do Doutorado Interinstitucional UNICAP (Recife, Pernambuco) / UNICATÓLICA (Quixadá, Ceará). Coordenador da Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos da UNICAP; Colabora com participação em bancas, palestras e atividades de pesquisa em diversos centros de pesquisa no Brasil e no exterior.





a iniciativa popular digital de lei pode ser concebida como um mecanismo de potencialização democrática, favorecendo a circulação de argumentos, a formação da opinião pública e a legitimação democrática das decisões políticas.

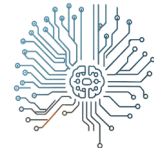
A ideia de democracia acompanha a organização política das sociedades modernas e ganhou um contorno específico a partir do constitucionalismo do final do séc. XVIII, que definiu suas bases e garantias em um texto constitucional. Articula-se com este modelo, a criação de três poderes constituídos com o objetivo de respeitar soberania popular e os direitos e liberdades individuais.

A contemporaneidade vem proporcionando reconfigurações institucionais, admitindo novas estruturas de poder nas democracias que ainda resistem ao autoritarismo. No constitucionalismo contemporâneo, este debate é enfrentado a partir de premissas teóricas axiológicas e jurídicas lançadas a partir do pós-segunda guerra mundial, em atenção à proteção dos direitos fundamentais e da condição humana. No contexto da revolução digital, os desafios postos passam pela garantia da ampliação da participação popular como forma de afirmação democrática.

Como forma de compreender a relevância da dinâmica participativa direta em processos legislativos de fonte constitucional, utilizaremos como referência o modelo de democracia deliberativa nos moldes formulados por Jürgen Habermas para a análise, e compreensão do caso brasileiro.

A escolha do referencial habermasiano se deve sobretudo à sua contribuição para pensar a esfera pública na Modernidade. Assim, compreendida como espaço de encontro da cidadania, mediada pela dialogicidade e igualdade. É oportuno lembrar que as transformações decorrentes da revolução digital apresentam desafios ao modelo habermasiano, estabelecidos em um campo ambíguo: se por um lado favorecem a ampliação de vozes silenciadas, por outro lado podem favorecer a fragmentação e a desinformação, corroendo a coesão democrática (Habermas, 2023).



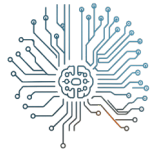


## 1 DEMOCRACIA DELIBERATIVA COMO PONTO DE PARTIDA

O termo “democracia” comporta múltiplas abordagens e significados, que variam em função da área do conhecimento, bem como das contingências históricas que acompanham a experiência histórica. No campo jurídico, a construção do sentido normativo e teórico da democracia exige, como etapa preliminar, a definição dos marcos conceituais e epistemológicos que irão ajudar em sua compreensão. Tal tarefa pressupõe a eleição de referenciais teóricos, cujas contribuições contribuam para a delimitação conceitual do instituto e para a compreensão de seus desdobramentos normativos, institucionais e tipológicos. Dentre os modelos reconhecidos na teoria política contemporânea, a democracia deliberativa destaca-se como um paradigma que articula procedimentos decisórios no interior de um espaço político-estatal a partir da centralidade do discurso público e da formação racional da vontade coletiva. Trata-se de um modelo que valoriza a legitimidade procedimental das decisões públicas, não apenas sob o prisma da legalidade formal, mas pela sua conformação a processos inclusivos e argumentativos, onde não se pode deixar de observar a relevância crescente da participação das minorias historicamente sub-representadas, sobretudo nos canais institucionais de deliberação e decisão, como o próprio parlamento. A expansão e a ressignificação do que seja a vontade pública, nesse contexto, refletem um esforço de incorporação plural e dialógica dos diversos sujeitos políticos que integram a esfera pública democrática, mas igualmente revelam as deficiências e lacunas das democracias atuais.

Jürgen Habermas descreve a gênese histórica da esfera pública a partir do século XVIII, com o surgimento de ambientes como cafés, salões literários e a imprensa burguesa. Nesses locais, indivíduos privados se reuniam para discutir criticamente os assuntos de interesse público, formando uma opinião pública capaz de exercer pressão e controle sobre o Estado (Habermas, 2014). Contudo, esse modelo inicial estava longe de ser universal, pois se tratava de uma esfera pública restrita e marcada pela exclusão de mulheres, classes populares e sujeitos





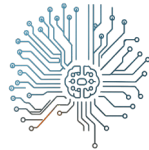
colonizados. Em Teoria da Ação Comunicativa, Habermas passa a pensar a esfera pública como elemento estruturante da democracia deliberativa, na medida em que viabiliza a formação da vontade política coletiva a partir do diálogo racional (Habermas, 1987).

Armando Estrada Villa e William Gonzalez reconhecem que o tema das democracias deliberativas tem sido objeto de aprofundada análise por parte de diversos pensadores, revelando assim um campo consolidado de investigação teórica e empírica. Nesse sentido, destacam a relevância histórica de Joseph M. Bessette, a quem se atribui a criação da expressão “deliberative democracy”, bem como a centralidade do pensamento de Jürgen Habermas, considerado um dos mais influentes teóricos na formulação e desenvolvimento conceitual do modelo deliberativo de democracia (Estrada Villa; Gonzalez, 2021).

A função do Estado no pensamento habermasiano, estrutura-se a partir de uma abordagem crítica, ancorada nos fundamentos teóricos delineados em sua vasta produção. Reconhece o jusfilósofo que a legitimidade do poder político não se sustenta unicamente na legalidade formal ou na eficácia institucional, mas sobretudo na capacidade de promover e institucionalizar processos discursivos orientados pela razão comunicativa. É nesse contexto que surgem dois conceitos centrais na teoria de Jürgen Habermas: a ação comunicativa e a racionalidade comunicativa, ambos articulados como vetores normativos para a constituição de uma esfera pública deliberativa e inclusive (Habermas, 1987). Neste sentido, a ideia de interação e de argumentação entre os sujeitos é priorizada:

A ação comunicativa, tal como concebida por Habermas (2012), caracteriza-se pela busca de entendimento mútuo entre os sujeitos falantes, alicerçada no princípio da força do melhor argumento, qual seja, aquele que após o processo dialógico seja de fato capaz de resolver o dissenso de forma racional e validada pelos sujeitos envolvidos. Diferentemente das ações estratégicas, que se orientam pela obtenção de êxito ou vantagem, a ação comunicativa se pauta pela pretensão de alcançar o consenso legítimo, mediante o reconhecimento recíproco entre os interlocutores. Habermas enfatiza que: “no caso da ação comunicativa,





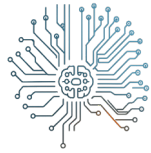
as operações interpretativas de que se compõe os processos cooperativos de interpretação representam o mecanismo de coordenação da ação; a ação comunicativa não se esgota no ato de entendimento efetuado na interpretação”. (Habermas, 2012, p. 181).

Essa concepção impõe uma reconfiguração do papel do Estado no interior das democracias constitucionais contemporâneas, exigindo que suas práticas normativas, legislativas e administrativas estejam conformadas por padrões discursivos de legitimidade. Em outras palavras, o Estado deve atuar como garantidor de condições institucionais que favoreçam a deliberação pública livre de coerções, assegurando a participação dos cidadãos enquanto sujeitos de direitos e de razão, capazes de influenciar, mediante argumentação, os rumos da vontade política coletiva.

Já a racionalidade comunicativa, conforme proposta por Habermas surge do diálogo orientado ao entendimento mútuo entre sujeitos capazes de linguagem e ação. Para que essa racionalidade alcance a efetividade, é necessário que os interlocutores atuem sob condições simétricas, nas quais cada enunciado seja construído e possa ser criticado com base em quatro pretensões de validade: entendimento, verdade, correção normativa, e sinceridade. A aceitação intersubjetiva dessas pretensões, segundo a “força do melhor argumento”, é que traria legitimidade à comunicação (Habermas, 2012, p. 191; 461).

João Paulo Allain Teixeira (2006) afirma que “de acordo com Habermas, a sociedade é integrada por dois aspectos que se entrecruzam, mas que são diferentes: o sistema (System) e o mundo da vida (Lebenswelt)”. O sistema corresponde à realidade objetiva expressa nas relações externas entre os membros da sociedade, sendo regulado por mecanismos não linguísticos, a exemplo do poder e do dinheiro que sustentam a estrutura burocrática e funcional das instituições sociais, e em contraposição ao sistema situa-se o Lebenswelt (mundo da vida), fundamentado na comunicação intersubjetiva e orientado à busca pela compreensão mútua entre os indivíduos. (Teixeira, 2006).





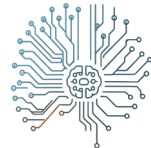
Jürgen Habermas alerta ainda que quando o sistema começa a invadir e dominar o mundo da vida ocorre um processo indicado como colonização da *Lebenswelt*, onde há risco de enfraquecimento da democracia, da ética e da autonomia individual. Isso ocorre, por exemplo, quando decisões políticas ou sociais são tomadas exclusivamente com base em critérios técnico-instrumentais, sem participação dialógica dos cidadãos (Habermas, 2012). Compreender o processo de comunicação e deliberação em democracias onde o capitalismo se imponha é antes de tudo não negar a influências de grandes corporações e indivíduos que detém a força avassaladora do capital e acabam por influenciar e determinar grande parte das decisões políticas do Estado.

Em contextos contemporâneos, esse ideal pressupõe também o acesso igualitário aos meios de informação, manifestação e conhecimento, incluindo os ambientes tecnológicos e digitais, sob risco de exclusão comunicativa e déficit democrático.

Conferir legitimidade ou validade a todas as portas de participação popular em democracias que se mantêm vivas apesar dos anúncios pessimistas de sua falência na atualidade em razão de crises institucionais, proliferação de *fake news*, e manipulação de dados algorítmicos por grandes empresas de tecnologia, ainda parece ser um caminho para a sobrevivência dos ideais republicanos e de participação direta incluídos em grande parte dos textos constitucionais da atualidade.

Em *Como as Democracias Morrem*, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018) dedicam-se a uma análise crítica do primeiro governo de Donald Trump, com especial atenção às estratégias políticas adotadas por líderes que, embora legitimamente eleitos por vias democráticas, atuam de modo a subverter os próprios fundamentos do regime representativo. Os autores demonstram como tais dirigentes ou governantes, valendo-se de mecanismos institucionais e da retórica populista, frequentemente desrespeitam normas informais essenciais à estabilidade democrática, minando a confiança pública e obscurecendo a percepção do eleitorado quanto à legitimidade e integridade do processo político.



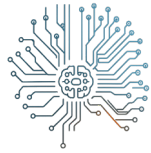


Insistem na importância do direito à informação como pressuposto para a livre manifestação democrática, e escrevem: “numa democracia, os cidadãos têm direito básico à informação. Sem informações críveis sobre o que nossos líderes eleitos estão fazendo, não podemos exercer de forma efetiva o nosso direito de voto. Quando o presidente dos Estados Unidos mente para o público, nosso acesso a informações dignas de crédito é colocado em risco e a confiança no governo é corroída (e como poderia ser diferente?). Quando cidadãos não acreditam em seus líderes eleitos, as fundações da democracia representativa se enfraquecem. O valor das eleições é diminuído quando cidadãos não têm fé nos líderes que elegem” (Levitsky; Ziblatt, 2018, p. 103).

O paradigma estadunidense permanece como referência emblemática e, ao mesmo tempo, problemática, para qualquer projeção que se pretenda minimamente otimista acerca dos caminhos normativos e constitucionais indispensáveis ao enfrentamento da crescente erosão democrática. Tal processo de desgaste, cumpre destacar, não se restringe aos contextos do Norte Global, irradiando-se igualmente com intensidade preocupante sobre as democracias do hemisfério Sul e da Europa. Nesse cenário, a formulação de estratégias jurídicas e institucionais voltadas à proteção do legado emancipatório de mecanismos de participação política direta, tais como o sufrágio universal, o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular legislativa, impõe a incorporação crítica das potencialidades e limites que decorrem da evolução tecnológica no domínio digital. É imprescindível, portanto, que a análise constitucional contemporânea reconheça a complexidade desse novo ecossistema comunicacional, no qual os instrumentos de deliberação democrática são atravessados por riscos informacionais, assimetrias de acesso e disputas por legitimidade, exigindo renovadas categorias interpretativas e respostas institucionais compatíveis com a preservação dos direitos fundamentais e da integridade do pacto democrático.

Não desconsideramos, do ponto de vista crítico, os aspectos contrafáticos da concepção habermasiana. Nesse sentido, aponta-se que o esforço teórico de Jürgen Habermas aproxima-se de um idealismo filosófico com muito boas





intenções, mas ao ser aplicado ao mundo político real parece não se sustentar (Estrada Villa; Gonzalez, 2021).

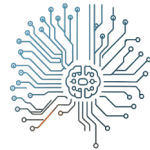
Não obstante, diante dos novos desafios impostos pela tecnologia e pelo avanço da desigualdade socioeconômica na contemporaneidade consideramos oportuna a defesa da pluralidade argumentativa como forma de trazer à superfície a discussão sobre a agonia e a luta por sobrevivência do próprio modelo ocidental de democracia.

## **2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A CIDADANIA DIGITAL: ELEMENTOS PARA A ANCORAGEM CONSTITUCIONAL**

A consolidação comunicativa dos Estados democráticos exige, necessariamente, a observância de critérios objetivos de transparência. Tal exigência visa garantir aos cidadãos o acesso a instrumentos efetivos de controle institucional, aptos a permitir a verificação empírica dos dados públicos por um número amplo e plural de indivíduos. Trata-se, portanto, de assegurar a legitimidade do processo democrático mediante a publicização das informações e a possibilidade concreta de fiscalização dos atos administrativos por parte da sociedade civil.

Como desdobramento dessa inafastável responsabilidade de transparência atribuída aos órgãos estatais, espera-se ainda que haja a incorporação progressiva de novos mecanismos que garantam proteção a todos os direitos fundamentais, especialmente aqueles que vêm sendo reconhecidos e consolidados no contexto das democracias ocidentais e ofereçam cada vez mais igualdade de participação. Nesse cenário, destacam-se os denominados direitos digitais, vinculados à crescente sofisticação tecnológica das relações sociais, cuja relevância decorre de sua natureza transversal e de seu potencial de incidência sobre diversos direitos fundamentais. Esses impactos alcançam tanto as esferas mais íntimas da vida





privada quanto os domínios da vida pública, relacionados ao exercício pleno da cidadania.

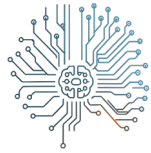
Aponta-se assim que a tecnologia pode impactar um universo cada vez mais amplo de direitos, desde o simples direito de petição até a liberdade de expressão considerada em suas múltiplas manifestações. Nesse contexto de inovação digital, emerge com relevância a efetividade do direito social à educação, que deve ser entendido como condição indispensável para a igualdade de participação dos indivíduos nos processos decisórios do Estado, sobretudo em modelos democráticos de matriz deliberativa.

A expressão “direito digital” vem avançado em significado para alcançar bem mais que apenas um novo “ramo do direito”, influenciando e modificando institutos e soluções jurídicas em distintas áreas, trazendo desafios legislativos para sua regulação. É um terreno fértil para investigações teóricas e propostas regulatórias, diante da multiplicidade de instrumentos normativos disponíveis, bem como da sobreposição de regimes jurídicos que disputam incidência sobre fenômenos tecnológicos em escala global (Amato, 2024).

Retomar os fundamentos doutrinários da teoria geral dos direitos fundamentais revela-se estratégia importante não apenas por trazer um respaldo teórico consolidado em vasta e qualificada produção doutrinária, mas também por proporcionar uma base político- jurídica segura para a construção conceitual dos chamados direitos digitais, que vêm sendo cada vez mais alçados à condição de direitos fundamentais pela sua importância estratégica e axiológica dentro do debate constitucional contemporâneo. Esse retorno à base teórica permite integrar as inovações tecnológicas às estruturas normativas já estabelecidas ou em processo de formação, conferindo legitimidade e densidade argumentativa a qualquer solução legislativa e/ou jurisdicional delineada nesse cenário desafiador.

No que se refere à interpretação dos direitos fundamentais a partir de constituições orientadas por valores democráticos, Canotilho adverte que é “necessária uma doutrina constitucional dos direitos fundamentais” que seja guiada por um texto jurídico-positivo e não por uma abordagem meramente





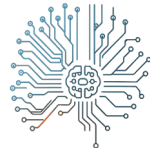
abstrata, de modo a assegurar uma compreensão adequada desses direitos em função de seus valores intrínsecos (Canotilho, 1993, p. 522–523).

As normas constitucionais são o ponto inicial do debate, não obstante a relevância da regulação estrangeira ou de normas transnacionais. No caso brasileiro, o § 2.º do art. 5.º da Constituição da República estabelece a abertura do catálogo de direitos fundamentais quando literalmente determina que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, permitindo a ampliação progressiva do reconhecimento de novos direitos, à medida que surgem igualmente novas exigências e desafios oriundos das transformações tecnológicas e sociais, inclusive aqueles que impactam diretamente direitos individuais ou outros direitos consagrados na ordem constitucional. Não há obstáculo jurídico-normativo no texto constitucional que crie eventual dificuldade na aceitação dos direitos digitais como mais um dos elementos que conformam a expressão direitos fundamentais na ordem positiva pátria (Brasil, 1988).

Como bem lembra Ingo Wolfgang Sarlet ao analisar a cláusula de abertura hermenêutica da Constituição Federal brasileira, a mencionada norma traduz o entendimento de que, para além do conceito formal de Constituição (e de direitos fundamentais), há um conceito material, no sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, por sua substância, pertencem ao corpo fundamental da Constituição de um Estado, mesmo não constando no catálogo. Nesse contexto, importa salientar que o rol do art. 5º, apesar de analítico, não tem cunho taxativo (Sarlet, 2018, p. 70).

Nosso sistema constitucional é assim totalmente receptivo à nomenclatura “direitos fundamentais digitais”. A questão que remanesce é a localização de outros direitos que embora digitais, não pertençam formal e materialmente à Constituição, e por conseguinte não sejam dotados de supremacia hierárquica. Mas esse ponto em específico interessa mais à hermenêutica, dialogando com a temática da validade e eficácia jurídica das normas, escapando da perspectiva



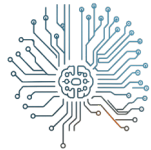


restrita do simples reconhecimento conceitual da expressão. Sendo assim, os direitos fundamentais digitais revelam primeiro a conexão de conteúdo com a ambiência tecnológica e digital e em segundo lugar que situem-se no texto da Constituição diretamente (proteção de dados digitais com a Emenda 115/2022), ou que possam ser reconhecidos como constitucionais por força da cláusula de interpretação ampliativa do §2.º do art. 5.º (Brasil, 1988). O reconhecimento do direito à proteção de dados pessoais no inciso LXXIX da Constituição Federal, com ênfase especial em sua aplicação no ambiente digital foi um marco normativo extremamente relevante, pois não apenas reafirmou a centralidade da autodeterminação na era da conectividade, como também sinalizou um avanço institucional relevante no enfrentamento dos desafios regulatórios impostos pelas novas tecnologias, especialmente no que se refere à inteligência artificial. Ao elevar formalmente esse direito à categoria de garantia fundamental, o constituinte derivado contribuiu para o amadurecimento do debate jurídico pátrio, deixando clara a necessidade de compatibilização entre inovação tecnológica e proteção dos direitos fundamentais no contexto da sociedade digital.

No entanto, é preciso lembrar que a positivação normativa por si só não é suficiente, pois é indispensável a existência de um sistema mais complexo e eficaz de proteção, que enfrente os riscos decorrentes do uso indiscriminado dessas tecnologias digitais, como a aplicação de sistemas de inteligência artificial e automação no reconhecimento facial ou de gênero em espaços públicos, ou ainda os problemas graves nas democracias que podem advir dos algoritmos de busca que direcionam o usuário a conclusões ideológicas ou de interesses privados escusos e ilegais (Campelo Filho, 2023, p. 122).

Proteger dados sensíveis não atinge exclusivamente a esfera privada, pois muitas vezes é o Estado que se vê em risco com ações criminosas de hackers e, como temos visto recentemente no cenário mundial, chantagem de outros países que possuem domínio mais elevado sobre a utilização de conhecimento tecnológico, levando a uma subjugação do respeito recíproco às soberanias estatais. É diante desse cenário de incertezas e avanços regulatórios que precisam estar conectadas





as ideias de democracia e de direitos fundamentais digitais para a realização plena da cidadania, e da soberania popular.

### 3 A SOBERANIA POPULAR NA CONSTITUIÇÃO E A INICIATIVA POPULAR DE LEI

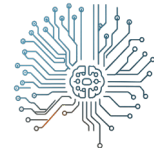
Com a promulgação da Constituição brasileira de 1988 o processo legislativo de formação de leis ordinárias foi reformulado para atender princípios da democracia então reinaugurada, e na fase de iniciativa de projetos de lei foram estabelecidas condições reais para oportunizar a participação popular direta, conforme escrito no art. 61 §2.º do texto constitucional.

Esse dispositivo garante a iniciativa popular de projeto de lei que pode ser exercida mediante a apresentação, à Câmara dos Deputados, de proposição subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco Estados da Federação, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. É um importante instrumento de democracia participativa, que confere à sociedade civil organizada a possibilidade de influenciar diretamente o processo legislativo, impondo uma agenda política legislativa por meio da força da organização social, subvertendo parcialmente a a lógica tradicional da representação política em democracias deliberativas.

Entender as potencialidades das tecnologias digitais no contexto da participação ativa dos indivíduos na vida social e nas decisões do Estado é tema de relevo para a compreensão e prevenção dos déficits democráticos que vêm se alargando nas sociedades contemporâneas.

No sentido de apresentar iniciativa voltada ao incremento da participação direta no processo legislativo brasileiro, trazemos a experiência do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS, 2020) que implementou ferramenta digital voltada à ampliação da participação direta da sociedade civil na atividade legislativa. Trata-se de um aplicativo que viabilizava a manifestação popular por meio da coleta de



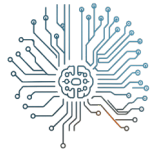


assinaturas digitais autenticadas, possibilitando o apoio a proposições normativas em âmbito nacional. Posteriormente, a tecnologia foi disponibilizada em formato de código aberto, permitindo que qualquer pessoa física ou jurídica possa utilizá-la ou adaptá-la conforme suas finalidades. A segurança e a autenticidade das assinaturas são asseguradas por meio do uso da tecnologia blockchain (ITS, 2020). Este é um exemplo de sucesso na utilização positiva da via digital para abrir novas portas para a efetividade do princípio constitucional da soberania popular, mas infelizmente observa-se resultados diferentes na atuação do Congresso Nacional, haja vista a quantidade de projetos de lei (e até de Emenda à Constituição) que tratam do assunto, mas que não conseguem ser aprovadas.

Desde a análise de Norberto Bobbio, a modernização do conceito de democracia também deve refletir a ampliação do processo participativo em todo o corpo social, impedindo que a representação política acabe por esvaziar o tecido engenhoso e plural das vozes oriundas da sociedade civil. Nesse sentido afirma que: “o processo de alargamento da democracia na sociedade contemporânea não ocorre apenas através da integração da democracia representativa com a democracia direta, mas também, e sobretudo, através da extensão da democratização - entendida como instituição e exercício de procedimentos que permitem a participação dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo - a corpos diferentes daqueles propriamente políticos” (Bobbio, 2012, p. 155).

A iniciativa popular legislativa, além de depender do cumprimento dos requisitos formais expressamente previstos na Constituição, demanda ampla mobilização da sociedade civil, de modo que a escolha do tema proposto reflita efetivamente os interesses e necessidades dos grupos envolvidos. O processo em si exigiria o alargamento democrático mencionado por Bobbio, e isso é mais um ponto positivo. Contudo, impõe-se uma reflexão crítica sobre esses mesmos requisitos procedimentais, cuja excessiva rigidez pode, paradoxalmente, restringir a efetividade do mecanismo participativo, especialmente diante das peculiaridades geográficas do território brasileiro e da complexidade estrutural de seu pacto federativo.





A utilização da tecnologia para acelerar e garantir o acesso à manifestação plural dos indivíduos para inovar a ordem jurídica em um Estado Democrático, parece ser um avanço em vários sentidos, inclusive na ampliação do espectro de indivíduos e grupos sociais que serão incluídos na ação comunicativa defendida por Habermas, mas agora por via digital.

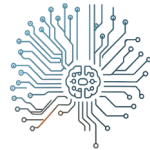
Apesar da ausência de lei federal específica no Brasil que regule a utilização de assinatura digital em projetos de lei popular, em respeito à norma constitucional, que seja capaz de garantir o controle da veracidade e da integridade dos dados utilizados para tal fim, estados e municípios se movimentam em seus próprios espaços legiferantes para permitir assinaturas digitais no âmbito de suas competências federativas.

No âmbito estadual, destaca-se o exemplo de Minas Gerais, onde a Assembleia Legislativa discute, atualmente, a Proposta de Emenda à Constituição nº 4/2023, que visa incluir na Constituição Estadual a previsão expressa de que projetos de iniciativa popular possam ser subscritos por meio de assinaturas digitais. A proposta condiciona essa possibilidade ao cumprimento de requisitos técnicos e jurídicos, tais como a autenticidade, integridade, validade legal e interoperabilidade das assinaturas, nos termos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, ou de tecnologia que a venha substituir, bem como à observância das disposições constantes no Regimento Interno da própria Assembleia Legislativa.

Normas semelhantes já existem em outros estados, a exemplo do Paraná (Lei nº 19.132, de 25 de setembro de 2017) que menciona a possibilidade da subscrição digital, mas a redação da proposta mineira reflete uma visão mais atualizada, preocupada com os riscos inerentes ao universo digital cercado por armadilhas que podem mascarar, por meio de ações fraudulentas, toda a expectativa de avanço no horizonte cada vez mais complexo das democracias deliberativas.

Várias legislações vêm sendo aperfeiçoadas mundo afora, sobretudo na Europa, objetivando diminuir as consequências negativas da falta de controle no





ambiente vasto da tecnologia, onde a identificação de autoria na prática de crimes ainda é um desafio.

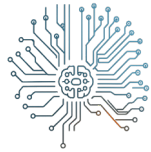
Seria precipitado, contudo, supor que a mera adoção da assinatura digital resultaria, por si só, em uma transformação significativa na quantidade de proposições legislativas oriundas da iniciativa popular no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, na ausência de condições equânimes entre os sujeitos envolvidos no processo deliberativo, bem como da efetiva transparência e controle social sobre a atuação dos representantes políticos, qualquer inovação procedimental seja digital ou analógica, corre o risco de comprometer gravemente a integridade democrática e produzir efeitos contraproducentes ao próprio ideal republicano de participação popular.

Por outro lado, a teoria da eficácia das normas constitucionais e em especial das normas de direito fundamental, é suficiente para causar estranhamento na aparente inércia do Congresso Nacional que não concluiu até aqui nenhum projeto de lei ou emenda à Constituição para destravar a pauta da participação popular direta.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A partir da teoria habermasiana entendemos que o exercício da cidadania deve ser compreendido como um processo contínuo de aprendizado, onde os indivíduos ao interagirem em espaços de deliberação pública desenvolvem sua capacidade de participação democrática. Essa participação não é uma aptidão inata, mas uma prática social sujeita a erros e aperfeiçoamentos, que exige ambientes de diálogo marcados pelo reconhecimento recíproco entre os sujeitos. Como destacam Iocohama, Monteschio e Durán Alba (2023, p. 76), é somente por meio desse reconhecimento mútuo, respeitando-se as esferas pública e privada, que os cidadãos são capazes de lidar com a complexidade das demandas jurídicas e contribuir para a legitimação do processo democrático.



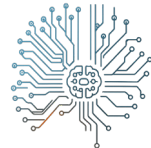


É claro que a discussão aqui trazida não pretendeu esgotar outros caminhos analíticos sobre democracia e direitos digitais, ou tão pouco ignorar as advertências do próprio Jürgen Habermas, sobre as consequências das novas mídias digitais no empobrecimento democrático do mundo atual (Habermas, 2023), mas evidenciar a ausência de diretrizes normativas oriundas do Poder Reformador e uma certa ausência normativa a respeito da pauta inegociável da concretização constitucional do direito à participação popular, apontando caminhos possíveis através dos meios digitais atualmente disponíveis.

A inércia, ou mesmo a ausência de um esforço efetivo, por parte dos legisladores brasileiros em superar a baixa efetividade da norma constitucional que prevê a iniciativa popular de lei (com apenas quatro leis aprovadas desde 1988), ao recusarem a incorporação de mecanismos mais ágeis que facilitem a manifestação e o escrutínio dos cidadãos, revela-se problemática. A via digital, conforme demonstrado ao longo deste artigo, constitui, uma das possibilidades concretas de alcançar o objetivo maior delineado pelo constituinte, ao estabelecer expressamente, no art. 14 da Carta Constitucional, que a soberania popular é um princípio que se concretiza por meio da manifestação igualitária de cada cidadão, exercida através do voto, do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular de lei. Conclui-se, portanto, que, sob a perspectiva procedimental, a experiência brasileira tem encontrado desafios significativos no que diz respeito à transparência, e também no tocante à viabilização de mecanismos jurídicos formais, implementados pelo Estado, que promovam a necessária abertura democrática voltada à participação ativa, responsável, consciente e direta dos cidadãos na produção normativa voltada aos interesses da sociedade.

Apesar dos riscos decorrentes da superação da lógica tradicional de formação de opinião em uma esfera pública mediada pelos meios de comunicação tradicionais como jornais, revistas, e *gatekeepers* especializados, a nova configuração amplificada pelos meios digitais apresenta igualmente oportunidades de fortalecimento democrático, desde que ancoradas em parâmetros prévios, tais como a adoção de políticas de inclusão digital efetiva, garantias de segurança e





transparência e sobretudo a criação de espaços destinados ao debate público antes da coleta de assinaturas digitais.

## REFERÊNCIAS

AMATO, Lucas Fucci. **O direito da sociedade digital** [recurso eletrônico]: tecnologia, inovação jurídica e aprendizagem regulatória. São Paulo: Faculdade de Direito, 2024.

BOBBIO, Norberto. **Estado, governo e sociedade**: para uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 18. reimpr. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.

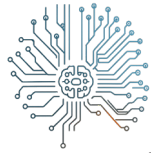
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html).

CAMPELO FILHO, Francisco Soares. Em direção ao equilíbrio entre o direito fundamental à proteção de dados pessoais e a utilização da inteligência artificial no mundo contemporâneo. *In*: MENDES, Laura Schertel *et al.* (org.). **Direitos fundamentais na era digital** [recurso eletrônico]: anuário 2023 das Comissões Especiais de Proteção de Dados (CEPD) e de Direito Digital (CEDD). Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 2023. p. [inserir páginas]. (Série Direito; 87). Disponível em: Acesso em: 19 jul. 2025.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.

ESTRADA VILLA, Armando; CERÓN GONZÁLEZ, William. La democracia deliberativa de Jürgen Habermas. **Revista de Filosofía**, v. 39, n. especial, 2022.





HABERMAS, Jürgen. **Mudança Estrutural da Esfera Pública**. São Paulo: UNESP, 2014.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria da ação comunicativa**: racionalidade da ação e racionalização social. Vol. I. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria do agir comunicativo**. Vol. II: crítica da razão funcionalista. 2. ed. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

HABERMAS, Jürgen. **Uma nova mudança estrutural da esfera pública e a política deliberativa**. São Paulo: UNESP, 2023.

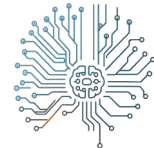
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE. **Parecer sobre Assinaturas Eletrônicas em Projetos de Iniciativa Popular**. Rio de Janeiro: ITS Rio, 2020. Disponível em: [https://itsrio.org/wp-content/uploads/2020/05/FichaTecnica\\_Capa\\_Parecer-merged.pdf](https://itsrio.org/wp-content/uploads/2020/05/FichaTecnica_Capa_Parecer-merged.pdf). Acesso em: 27 jul. 2025.

IOCOHAMA, Celso Hiroshi; MONTESCHIO, Horácio; DURÁN ALBA, Juan Fernando. A teoria discursiva de Jürgen Habermas: sua relação interna entre democracia e direitos fundamentais. **Relações Internacionais no Mundo Atual**, Curitiba, v. 2, p. 59-80, abr./jun. 2023. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/3887>. Acesso em: 27 jul. 2025.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as Democracias Morrem**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

PARANÁ. Lei n. 19.132, de 25 de setembro de 2017. Regulamenta a execução do disposto no art. 2º da Constituição do Estado sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular. **Diário Oficial do Estado**. 2017. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=350698>.

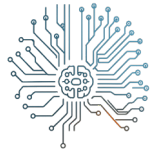




SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018.

TEIXEIRA, João Paulo Allain. Direito e sociedade: um diálogo com Niklas Luhmann e Jürgen Habermas. *In*: SEVERO NETO, Manoel (org.). **Direito, cidadania e processo**. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2006.





# ¿QUIÉN LE TEME A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? EL DELITO Y EL REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 13 DE JUNIO DE 2024

Alberto Enrique Nava Garcés<sup>1</sup>

“Las personas llegarán a amar su opresión,  
a adorar las tecnologías que deshacen su capacidad de pensar”.

*Un mundo feliz* - Aldous Huxley

## 1 ACLARACIÓN PERTINENTE

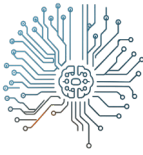
En la más rancia doctrina respecto del derecho penal existe el principio de que los reglamentos no son las normas con que se regula un delito. Eso debe ocurrir, luego del procedimiento legislativo ordinario, mediante una ley o código. El reglamento europeo a que se hace referencia en este artículo no pretende transgredir tal principio, sino establecer las bases de la regulación acerca de la inteligencia artificial y, por ende, indica también cuáles conductas requieren que sean objeto de una revisión en el ámbito penal.

Por otro lado, como punto de partida, queremos hacer el siguiente cuestionamiento: ¿qué pasará si con la regulación se detiene o impide el desarrollo de la inteligencia artificial sólo del lado de Occidente, mientras en otras partes se avanzará sin límite ni ética al respecto?<sup>2</sup> Porque una cosa es que

<sup>1</sup> Abogado penalista. Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, México. E-mail: iusnava@yahoo.com.br

<sup>2</sup> Por eso, el reglamento europeo Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) prevé: “El presente Reglamento no se aplicará a ninguna actividad de





se pueda sancionar en el espacio territorial donde pudiera ocurrir una conducta reprochable penalmente, y otra que se inhabilite a través de la tecnología que ha sido impedida para tal efecto.

En esencia, la inteligencia artificial implica una forma de control o de manipulación sobre aspectos que pueden ir de lo más simple a lo más complejo de la vida cotidiana. Mientras no se presuponga con detenimiento lo que nos espera en los años siguientes, los reguladores en ciertas regiones menos desarrolladas sólo estarán dando “palos de ciego” normativamente hablando. El quid de este problema radica en el avance de la inteligencia artificial y la constante dependencia humana de la tecnología hasta en las tareas más sencillas.

## 2 INTRODUCCIÓN

Durante poco más de veinticinco años he estudiado el acaecimiento de las tecnologías y su repercusión paulatina en la sociedad, en específico en el derecho penal. De pasar de meros medios comisivos a convertirse en un espectro de conductas particularizadas por el cómputo, hemos observado esa evolución que va de meras menciones en los códigos penales a que sean asumidas nuevas entidades legislativas que vayan al ritmo que el progreso tecnológico impone.

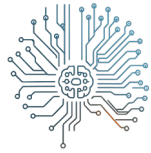
Primero fueron los delitos informáticos, luego había que ampliar el espectro para los electrónicos, posteriormente surgieron las redes sociales y un mundo de posibilidades se abrió paso en las legislaciones punitivas. El Convenio de Budapest (Moran, 2021, 308.)<sup>3</sup> fue resultando obsoleto y en el tránsito

---

investigación, prueba o desarrollo relativa a sistemas de IA o modelos de IA antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Estas actividades se llevarán a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable”.

<sup>3</sup> Morán (2021, p. 308) señala: “La necesidad de regulación, encuentra una razón más, en el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa del 2001 que pese a ser una ley modelo y un tratado vinculante solo para los países firmantes, no ha sido considerado por la mayoría de las legislaturas locales de nuestro país, pudiendo ser utilizado sin problema dadas las áreas de oportunidad que existen en ese tema, debido a que no existe el avance esperado en las regulaciones actuales, por causas que van desde el desinterés legislativo, el desconocimiento y hasta los cambios de gobierno, como en México, donde no fue considerado en el plan





por Internet, la WWW, las aplicaciones y otros prodigios de la ciencia y de la tecnología alcanzamos la nube, la responsabilidad de los operadores, hasta esto que se conoce como Metaverso (Ghizlane, 2024, p. 85)<sup>4</sup> y las nuevas fronteras que se ensanchan con la inteligencia artificial.

No obstante, como en cualquier creación humana, el uso indebido o la transgresión social están latentes. El delito acompaña a la humanidad en su evolución y en sus creaciones.

### 3 ¿ES POSIBLE REGULAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

¿Qué tan lejana se encuentra la probabilidad de que las actividades jurisdiccionales llevadas a cabo por humanos sean sustituidas por computadoras? ¿En quién se confiaría más para que dictara una sentencia, en un juez o en una máquina? En el proceso de aprendizaje, la inteligencia artificial hace acopio de mucha información, pero ¿se halla garantizado el buen uso de ésta? ¿Podría alterarse para imputar un delito a una persona inocente? Hoy día, y en el umbral de su aparición, la inteligencia artificial supone un reto para el derecho.

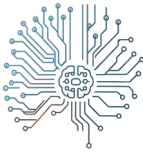
---

de trabajo del actual presidente (como resultado de ello, la probable desaparición de la Estrategia Digital Nacional *-que no pasó afortunadamente, y que quedó rezagada en un cajón y sigue ahí-*) de hecho, no fue considerado el aspecto tecnológico dentro del Plan Nacional de Desarrollo vigente, desperdiciando el trabajo realizado con apoyo de la comunidad internacional y colaboración multi-stakeholder, y particularmente del resultado, como lo fue la Estrategia Nacional de Ciberseguridad publicada en 2017”.

<sup>4</sup> Ghizlane (2024, p. 85) señala: “El derecho penal ante el reto del metaverso. A pesar de que estos mundos digitales aún están en sus inicios y son accesibles solo para un número reducido de usuarios, los testimonios relacionados con los comportamientos en estos mundos virtuales distan mucho de ser idílicos. Muy pronto, se denunciaron actos que pueden calificarse como delitos graves. Por lo tanto, los penalistas han abordado la cuestión planteada por algunos: ¿lo que sucede en el metaverso debe quedarse en el metaverso? ¿La respuesta es claramente no! En otro orden de ideas, ¿es necesario implementar un derecho dedicado o un concepto de ‘derecho penal virtual’? ¿O el derecho positivo, debido a su extrema resiliencia ampliamente demostrada durante el surgimiento del derecho digital, es capaz de absorber el impacto del metaverso?

<sup>1a</sup> caracterización de estos comportamientos: el cómo. Las ocasiones en las que un avatar entra en contacto con otros avatares en el metaverso son innumerables y las posibles fricciones implican repercusiones en la aplicación del derecho penal y en la calificación de los delitos. De hecho, es durante la navegación en el metaverso que las acciones de un avatar pueden afectar a otro, sin importar si es controlado por un humano o por inteligencia artificial” (p. 85).





Con la inteligencia artificial se pretenden emular las funciones más complejas que tiene el ser humano; hasta ahora se ha alcanzado un nivel básico pero, paulatinamente, ha despuntado gracias al rol creativo. Por lo cual, en principio, podríamos asegurar que no es posible regular la inteligencia artificial, como no se puede acotar con el trabajo legislativo la inteligencia humana. Sin embargo, destacan los casos en que un automóvil autónomo atropelló a un robot y abandonó el lugar de los hechos, o la pretensión de colocar (Neuralink) un dispositivo en el cerebro humano para continuar con la investigación en torno a las conexiones nerviosas y su entramado para tomar decisiones o corregir defectos fisiológicos. La capacidad de mimetizar diversas actividades humanas (Reglamento PE, 2024/1689).<sup>5</sup> y aprender de manera continua todavía generan preocupación respecto de sus alcances, porque “lo malo también se aprende” o porque el carácter predictivo llevaría ante la justicia a mucha gente inocente.

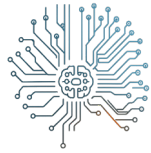
Óscar Cortina señala que la palabra en todo 2022 fue “inteligencia artificial”, y que además resulta curioso porque es la única que no es una, sino dos palabras, y se ha elegido por la importancia que se cree ha tenido en ese año y todo lo que esto supone en avances y en influencia en nuestra sociedad, así como por la injerencia cada vez más creciente que tendrá la propia inteligencia artificial.

El ChatGPT<sup>6</sup> puede parecer un videojuego, como aquellos que metieron a tantos niños a sus casas en los años ochenta y abandonaron los pasatiempos

<sup>5</sup> El reglamento europeo Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) prevé: “El presente Reglamento no impedirá que la Unión o los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que sean más favorables a los trabajadores en lo que atañe a la protección de sus derechos respecto al uso de sistemas de IA por parte de los empleadores ni que fomenten o permitan la aplicación de convenios colectivos que sean más favorables a los trabajadores”.

<sup>6</sup> El propio ChatGPT formuló sus bondades: “ChatGPT, como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, ofrece varias ventajas y aplicaciones útiles que pueden beneficiar a una amplia gama de usuarios. Aquí están algunas de las principales bondades de ChatGPT:  
Acceso a información y conocimiento: ChatGPT proporciona información actualizada y responde preguntas acerca de una amplia variedad de temas, desde ciencia y tecnología hasta historia y cultura. Es una herramienta útil para el aprendizaje y la investigación.  
Asistencia en la escritura: puede ayudar a redactar, corregir y mejorar textos, ya sea para escribir ensayos, correos electrónicos, artículos o cualquier otro tipo de documento. También puede sugerir ideas para escritores que buscan inspiración.





en las calles; como todas estas plataformas que aislaron a los menores durante la pandemia. Así, de ese modo que parece un juego, las personas están ante las puertas de otra realidad.

En el mundo del derecho, la aparición del ChatGPT ha despertado el interés acerca de sus posibilidades, el umbral en que coloca a los practicantes del derecho y el hecho que una máquina resuelva problemas intrincados derivados de las acciones humanas. Esa probabilidad aterradora desde la Revolución Industrial, cuando la humanidad conoció la forma en que las personas eran sustituidas por las máquinas. (Uribe, 2023, p. 63.)<sup>7</sup>

---

Traducción y multilingüismo: ChatGPT traduce textos entre múltiples idiomas, lo que facilita la comunicación y la comprensión en un contexto globalizado.

Resolución de problemas: ayudar a resolver problemas técnicos, matemáticos y científicos, proporcionando explicaciones detalladas y paso a paso.

Desarrollo de ideas y creatividad: es útil para generar ideas creativas y ayudar en la lluvia de ideas, ya sea para proyectos artísticos, campañas de *marketing* o soluciones innovadoras a problemas.

Asistencia personalizada: ChatGPT se adapta a las necesidades de los usuarios para ofrecer asesoramiento personalizado en áreas como la planificación de proyectos, administración del tiempo y el aprendizaje de nuevas habilidades.

Accesibilidad: está disponible en múltiples plataformas y dispositivos, lo que permite a los usuarios acceder a sus funciones en cualquier momento y lugar.

Apoyo educativo: los estudiantes pueden beneficiarse de ChatGPT para entender conceptos complejos, preparar exámenes y realizar tareas escolares.

Asistencia en la programación: proporciona ayuda en la codificación, resolución de errores y explicación de conceptos de programación.

Interacción natural: la capacidad de ChatGPT para mantener conversaciones naturales y contextualmente relevantes hace que la interacción sea intuitiva y fácil, incluso para aquellos que no están familiarizados con la tecnología avanzada.

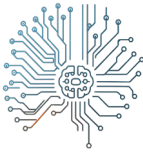
Atención al cliente y soporte: puede utilizarse como un asistente virtual para empresas, ya que es capaz de brindar respuestas rápidas y eficaces a las consultas de los clientes y mejorar la experiencia del usuario.

Actualización y mejora continua: OpenAI continúa desarrollando y mejorando el modelo, lo que significa que las capacidades de ChatGPT seguirán evolucionando con el tiempo.

Estas bondades hacen de ChatGPT una herramienta versátil y poderosa a la que es posible recurrir en una variedad de contextos; mejora la productividad, la comunicación y la resolución de problemas de manera eficiente y efectiva”.

<sup>7</sup> Uribe Rodríguez (2023, p. 63) refiere la naturaleza de GPT: “Según lo explica Shin Suzuki, en un artículo publicado en enero de 2023 en BBC NEWS Brasil, ChatGPT entra dentro de la categoría de LLM con el plus de contar con la arquitectura Generative Pre-trained Transformer (de ahí el significado de las siglas GPT), que puede ser traducido como ‘Transformador Pre-entrenado Generativo’, esto debido a que su creación fue basada en lo que actualmente se conoce como machine learning, en el que un ser humano ‘supervisa’ y ‘entrena’ al modelo de lenguaje afinando sus parámetros y corrigiendo errores por medio del aprendizaje por reforzamiento a partir de retroalimentación humana (RLHF, por sus siglas en inglés), buscando que en algún momento el sistema pueda ‘aprender’, autocorregirse y funcionar sin supervisión humana (de ahí el término machine learning, que en español se podría traducir como ‘máquina de aprendizaje’ o ‘máquina que aprende’. Con lo anterior, podríamos pensar que no es algo novedoso, ya que actualmente muchas empresas utilizan chatbots en calidad de atención al cliente, con el propósito de resolver algunos problemas o solicitudes de sus usuarios; incluso ya hemos estado conviviendo algunos años con Alexa, Siri y otros asistentes virtuales; sin embargo, es fácil distinguir que estamos interactuando con un chatbot o un asistente de voz, pues estos están hechos sólo para ofrecer respuestas prefabricadas y automáticas y, por tanto, no son capaces de entablar una





Ahora toca el turno de poner a prueba muchos de esos procesos que se pueden aprender y realizar de manera exitosa. Y me refiero a los trámites administrativos, las solicitudes de divorcios sin causa, registros y peticiones de licencias o reconocimiento de derechos o las jurisdicciones que no revisten mayor conflicto en su tramitación.

En la actualidad, con estas nuevas herramientas, se obtienen resultados aceptables en tiempos de espera que antes no pudiéramos haber imaginado, mientras hacíamos largas filas ante la ventanilla de un burócrata agotado por la cotidianidad.

Sin embargo, estos umbrales que amenazan con la obsolescencia de muchas de las actividades que se realizan en el ámbito jurídico también ponen a prueba la creatividad de quienes deben resolver actos complejos, como lo es dictar una sentencia justa en un juicio penal o distinguir la propiedad intelectual cuando se han incorporado las habilidades de estas máquinas.

La relación entre derecho y tecnología resulta de gran importancia en estos tiempos. Es necesario plantear marcos jurídicos transversales ante la inminente injerencia de la inteligencia artificial en la mayoría de las actividades de los individuos.

Y es que la inteligencia artificial implica, entre otras cuestiones, la automatización y emulación de tareas intelectuales y mecánicas de cualquier contexto humano; por esta razón existe una encomienda mundial de elaborar reglamentaciones distintas que normen su utilización, pues se desconocen a cabalidad las consecuencias que acarrearía en las relaciones interpersonales y sociales.

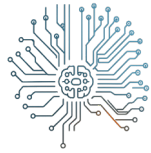
Alejandra Morán destaca algunas de las clasificaciones que bien ofrecen un adelanto del potencial de la inteligencia artificial:

---

conversación 'natural' con un ser humano.

En cambio, ChatGPT tiene un nivel de comprensión y contextualización tan avanzado que se puede interactuar con él de forma natural; es decir, puede entender fácilmente una solicitud sin importar si esta fue hecha utilizando un lenguaje formal (tecnicismos) o un lenguaje coloquial, proporcionando en cambio una respuesta bastante clara y coherente, al grado que podría pensarse que las respuestas provienen de un ser humano. Claro, todo esto a un nivel de texto, pero no dudemos que en breve se traslade a la voz”.





En ese orden de ideas y conscientes de la incuestionable existencia de la IA, se identificaron diversas clasificaciones:

La IA es fuerte o débil.

Se integra por cuatro tipos fundamentales: reactiva, limitada, de teorías mentales y de autoconciencia.

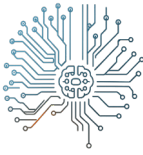
Existen otros, como los cuatro señalados por Daniel Martínez, que indica son formas particulares de expresión, que de no cumplir con alguno de los criterios, no puede considerarse como IA; entre estos se encuentran:

- . a) IA Asistida: colabora en las tareas para realizarlas con rapidez.
- . b) IA Automatizada: realiza tareas cotidianas y excepcionales de forma automática, generalmente de apoyo administrativo en el sector empresarial (administración).
- . c) IA Aumentada: facilita la toma de decisiones, aprendiendo de la interacción realizada y los resultados obtenidos (sugerencias no solicitadas de navegadores y redes sociales p.e.)
- . d) IA Autónoma: su capacidad es la toma de decisiones sin intervención humana (p.e. los vehículos autónomos).

En los tipos de IA existen diversas técnicas -no todas relacionadas con el tema de fondo el presente estudio-, entre ellas destacan las siguientes: Aprendizaje automático (-machine learning- analíticas de texto y NLP, siglas en inglés de procesamiento de lenguaje natural, utiliza las analíticas de texto para descifrar la estructura de enunciados, su significado, entonación y hasta la comprensión); Ingeniería del conocimiento (knowledge engineering); Lógica difusa (fuzzy logic); Redes neuronales artificiales (artificial neural networks); Sistemas reactivos (reactive systems); Sistemas multiagente (multi-agent systems); Sistemas basados en reglas (rule-based systems), Razonamiento basado en casos (case-based reasoning); Sistemas expertos (expert systems); Redes bayesianas (bayesian networks); Vida artificial (VA -no es un campo de la IA, sino que la IA es un campo de la VA-) (artificial life); Estrategias y computación evolutiva (evolutionary computation); Algoritmos genéticos (genetic algorithms) y Técnicas de representación de conocimiento y redes semánticas (semantic networks). (Moran, 2021, p. 308.)

En esta nueva Revolución Industrial que se avecina, en la cual la humanidad podría ver afectada su participación en varias áreas productivas, la





ciencia jurídica actual tiene un gran reto: salvaguardar los derechos fundamentales ante la intervención de la tecnología en la esfera de la racionalidad de los sujetos vivos. Recientemente, la Comisión Europea emitió un reglamento para armonizar la normatividad en torno a la inteligencia artificial.

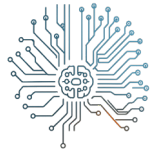
Dicha automatización y decisión nos llevan a reflexionar respecto de la decisión digital que puedan tener estas nuevas máquinas, que no implican necesariamente sustituir al ser humano, pero que partirán de una base de datos que contribuiría a que este último equivoque el diagnóstico o la decisión en el campo del derecho, lo cual afectaría a un tercero y, por ende, sus derechos.

La inteligencia artificial se concibe en procesos múltiples, síntesis de procedimientos, automatización de tareas que reducen el tiempo que normalmente le llevarían a un individuo o a un grupo de varias personas. Tal como lo es, una nueva Revolución Industrial, se estima la reducción de sujetos vivos en distintas áreas, para terminar en la sugerencia de una respuesta.

Esta síntesis conlleva un control de las actividades humanas y, al analizar patrones de conducta, ha demostrado alcanzar predictibilidad sobre ésta, lo que supone un avance y un riesgo a las libertades. Tal como lo verificaremos más adelante, la inteligencia artificial se nutre con la base de datos y su respuesta, atinada o no, carece de la conciencia con que se estiman los casos penales, por ejemplo. Así que, como un primer apuntamiento, podemos tomar en cuenta que el quid de la inteligencia está en la información con que “es alimentada”. Y en el último tramo, la decisión no será de una máquina. Entonces, ¿por qué se debe regular la inteligencia artificial? ¿Son inminentes los riesgos en el ámbito penal?

No son pocos los casos, ni las noticias, por las que nos enteramos del uso, aparentemente inocuo, que se le da a la inteligencia artificial; por lo tanto, tratar de regularla se antoja una actividad tanto irreal como inabarcable, de modo tal que a través de los principios que rigen el derecho y una visión transversal que impida sus abusos se establecerá una protección auténtica para el destinatario de la norma: la persona. De otro modo, no estaremos lejos del reconocimiento limitado de los derechos de las máquinas y su responsabilidad única en las distintas





ramas del derecho. No cabe duda, nos encontramos ante el inicio de una nueva era. (Moran, 2021, p. 291.)<sup>8</sup>

## 4 USO INDEBIDO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El reglamento europeo parte de un punto de vista ético en el desarrollo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Coloca los puntos sobre las íes, así como las bases para que en cada ordenamiento se prevea la sanción para quien pretenda abusar del uso de esta tecnología y sus dispositivos. El artículo 5 del reglamento europeo establece:

### Artículo 5

#### Prácticas de IA prohibidas

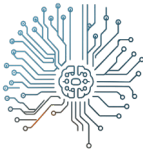
Quedan prohibidas las siguientes prácticas de IA:

la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que se sirva de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objetivo o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona o un colectivo de personas, mermando de manera apreciable su capacidad para tomar una decisión informada y haciendo que tomen una decisión que de otro modo no habrían tomado, de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona, a otra persona o a un colectivo de personas;

la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de un sistema de IA que explote alguna de las vulnerabilidades de una persona física o un determinado colectivo de personas derivadas

<sup>8</sup> Morán (2021, p. 291) vislumbra, en este desarrollo galopante, la posibilidad de imputar a una persona virtual, a la que denomina “persona artificial”. Dicha autora adelanta: “Lo sucedido con el gigante Google y Alphabet que en enero del 2020, su CEO Sundar Pichai admitió que hay preocupación real sobre las potenciales consecuencias negativas de una de sus IA, que van desde los llamados *deep fakes* hasta los usos viles del reconocimiento facial -*identificación biométrica no autorizada, seguimiento oculto, control social, etc.*-, que lo motivó a expresar públicamente la necesidad de una intervención regulatoria formal de ésta. Considerando de quién se trata seguro sabe a qué se refiere, por lo que hay que atender a su recomendación y experiencia para analizar y tipificar sobre las posibles consecuencias y responsabilidades desde el campo jurídico”.





de su edad o discapacidad, o de una situación social o económica específica, con la finalidad o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de dicha persona o de una persona que pertenezca a dicho colectivo de un modo que provoque, o sea razonablemente probable que provoque, perjuicios considerables a esa persona o a otra; la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA para evaluar o clasificar a personas físicas o a colectivos de personas durante un período determinado de tiempo atendiendo a su comportamiento social o a características personales o de su personalidad conocidas, inferidas o predichas, de forma que la puntuación ciudadana resultante provoque una o varias de las situaciones siguientes:

un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o colectivos de personas en contextos sociales que no guarden relación con los contextos donde se generaron o recabaron los datos originalmente,

un trato perjudicial o desfavorable hacia determinadas personas físicas o colectivos de personas que sea injustificado o desproporcionado con respecto a su comportamiento social o la gravedad de este;

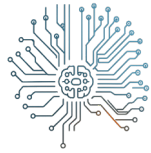
la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de un sistema de IA para realizar evaluaciones de riesgos de personas físicas con el fin de valorar o predecir el riesgo de que una persona física cometa un delito basándose únicamente en la elaboración del perfil de una persona física o en la evaluación de los rasgos y características de su personalidad; esta prohibición no se aplicará a los sistemas de IA utilizados para apoyar la valoración humana de la implicación de una persona en una actividad delictiva que ya se base en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con una actividad delictiva;

la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de IA que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de circuitos cerrados de televisión;

la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de IA para inferir las emociones de una persona física en los lugares de trabajo y en los centros educativos, excepto cuando el sistema de IA esté destinado a ser instalado o introducido en el mercado por motivos médicos o de seguridad;

la introducción en el mercado, la puesta en servicio para este fin específico o el uso de sistemas de categorización biométrica que clasifiquen individualmente a las personas físicas sobre la base de sus





datos biométricos para deducir o inferir su raza, opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual; esta prohibición no incluye el etiquetado o filtrado de conjuntos de datos biométricos adquiridos lícitamente, como imágenes, basado en datos biométricos ni la categorización de datos biométricos en el ámbito de la garantía del cumplimiento del Derecho; el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, salvo y en la medida en que dicho uso sea estrictamente necesario para alcanzar uno o varios de los objetivos siguientes:

la búsqueda selectiva de víctimas concretas de secuestro, trata de seres humanos o explotación sexual de seres humanos, así como la búsqueda de personas desaparecidas, la prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la vida o la seguridad física de las personas físicas o de una amenaza real y actual o real y previsible de un atentado terrorista, la localización o identificación de una persona sospechosa de haber cometido un delito a fin de llevar a cabo una investigación o un enjuiciamiento penales o de ejecutar una sanción penal por alguno de los delitos mencionados en el anexo II que en el Estado miembro de que se trate se castigue con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos cuatro años.<sup>9</sup>

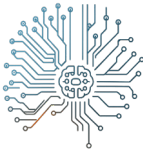
El párrafo primero, letra h), se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 en lo que respecta al tratamiento de datos biométricos con fines distintos de la garantía del cumplimiento del Derecho.

El uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho para cualquiera de los objetivos mencionados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), debe desplegarse para los fines establecidos en dicha letra, únicamente para confirmar la identidad de la persona que constituya el objetivo específico y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

---

<sup>9</sup> Lista de los delitos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra h), inciso iii). Delitos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, letra h), inciso iii): terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de menores y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, homicidio voluntario, agresión con lesiones graves, tráfico ilícito de órganos o tejidos humanos, tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos, secuestro, detención ilegal o toma de rehenes, delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional, secuestro de aeronaves o buques, violación, delitos contra el medio ambiente, robo organizado o a mano armada, sabotaje, participación en una organización delictiva implicada en uno o varios de los delitos enumerados en esta lista.





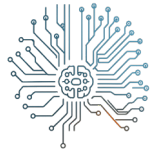
La naturaleza de la situación que dé lugar al posible uso, y en particular la gravedad, probabilidad y magnitud del perjuicio que se produciría de no utilizarse el sistema; las consecuencias que tendría el uso del sistema en los derechos y las libertades de las personas implicadas, y en particular la gravedad, probabilidad y magnitud de dichas consecuencias.

Además, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho para cualquiera de los objetivos mencionados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), del presente artículo deberá cumplir garantías y condiciones necesarias y proporcionadas en relación con el uso de conformidad con el Derecho nacional que autorice dicho uso, en particular en lo que respecta a las limitaciones temporales, geográficas y personales. El uso del sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público solo se autorizará si la autoridad garante del cumplimiento del Derecho ha completado una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales según lo dispuesto en el artículo 27 y ha registrado el sistema en la base de datos de la UE de conformidad con el artículo 49. No obstante, en casos de urgencia debidamente justificados, se podrá empezar a utilizar tales sistemas sin el registro en la base de datos de la UE, siempre que dicho registro se complete sin demora indebida.

A los efectos del apartado 1, párrafo primero, letra h), y el apartado 2, todo uso de un sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho estará supeditado a la concesión de una autorización previa por parte de una autoridad judicial o una autoridad administrativa independiente cuya decisión sea vinculante del Estado miembro en el que vaya a utilizarse dicho sistema, que se expedirá previa solicitud motivada y de conformidad con las normas detalladas del Derecho nacional mencionadas en el apartado 5. No obstante, en una situación de urgencia debidamente justificada, se podrá empezar a utilizar tal sistema sin autorización siempre que se solicite dicha autorización sin demora indebida, a más tardar en un plazo de veinticuatro horas. Si se rechaza dicha autorización, el uso se interrumpirá con efecto inmediato y todos los datos, así como los resultados y la información de salida generados por dicho uso, se desecharán y suprimirán inmediatamente.

La autoridad judicial competente o una autoridad administrativa independiente cuya decisión sea vinculante únicamente concederá la autorización cuando tenga constancia, sobre la base de pruebas





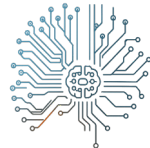
objetivas o de indícios claros que se le aporten, de que el uso del sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» es necesario y proporcionado para alcanzar alguno de los objetivos especificados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), el cual se indicará en la solicitud, y, en particular, se limita a lo estrictamente necesario en lo que se refiere al período de tiempo, así como al ámbito geográfico y personal. Al pronunciarse al respecto, esa autoridad tendrá en cuenta los aspectos mencionados en el apartado 2. Dicha autoridad no podrá adoptar ninguna decisión que produzca efectos jurídicos adversos para una persona exclusivamente sobre la base de los resultados de salida del sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real».

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, todo uso de un sistema de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho se notificará a la autoridad de vigilancia del mercado pertinente y a la autoridad nacional de protección de datos de conformidad con las normas nacionales a que se refiere el apartado 5. La notificación contendrá, como mínimo, la información especificada en el apartado 6 y no incluirá datos operativos sensibles.

Los Estados miembros podrán decidir contemplar la posibilidad de autorizar, ya sea total o parcialmente, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho dentro de los límites y en las condiciones que se indican en el apartado 1, párrafo primero, letra h), y los apartados 2 y 3. Los Estados miembros de que se trate deberán establecer en sus respectivos Derechos nacionales las normas detalladas necesarias aplicables a la solicitud, la concesión y el ejercicio de las autorizaciones a que se refiere el apartado 3, así como a la supervisión y la presentación de informes relacionadas con estas. Dichas normas especificarán también para qué objetivos de los enumerados en el apartado 1, párrafo primero, letra h), y en su caso en relación con qué delitos de los indicados en la letra h), inciso iii), se podrá autorizar a las autoridades competentes para que utilicen esos sistemas con fines de garantía del cumplimiento del Derecho. Los Estados miembros notificarán dichas normas a la Comisión a más tardar treinta días después de su adopción. Los Estados miembros podrán adoptar, de conformidad con el Derecho de la Unión, leyes más restrictivas sobre el uso de sistemas de identificación biométrica remota.

Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y las autoridades nacionales de protección de datos de los Estados miembros a las que se haya notificado el uso de sistemas de identificación biométrica





remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho con arreglo al apartado 4 presentarán a la Comisión informes anuales sobre dicho uso. A tal fin, la Comisión facilitará a los Estados miembros y a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y de protección de datos un modelo que incluya información sobre el número de decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes o una autoridad administrativa independiente cuya decisión sea vinculante en relación con las solicitudes de autorización de conformidad con el apartado 3, así como su resultado.

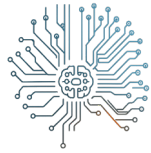
La Comisión publicará informes anuales sobre el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho elaborados basados en datos agregados relativos a los Estados miembros sobre la base de los informes anuales a que se refiere el apartado 6. Dichos informes anuales no incluirán datos operativos sensibles de las actividades de garantía del cumplimiento del Derecho conexas.

El presente artículo no afectará a las prohibiciones aplicables cuando una práctica de IA infrinja otras disposiciones de Derecho de la Unión.

Muchas empresas e instituciones han desarrollado algoritmos para mejorar sus procesos, disminuir tiempos de espera y distribuir cargas de trabajo. Así también para identificar problemas específicos y dar respuesta pronta a requerimientos desde la realización de servicios públicos, de salud, de entretenimiento, redes sociales, identificación de patrones, localización, gustos personales, actividades comerciales, entre muchas otras cuestiones de la más diversa índole. No son pocos los casos ni las noticias por las que nos enteramos del uso, aparentemente inocuo que se le da a la inteligencia artificial.

Al respecto, el reglamento define: “Uso indebido razonablemente previsible»: la utilización de un sistema de IA de un modo que no corresponde a su finalidad prevista, pero que puede derivarse de un comportamiento humano o una interacción con otros sistemas, incluidos otros sistemas de IA, razonablemente previsible.”





## 5 USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ACTOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

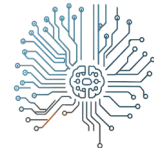
El reglamento europeo establece:

Deben prohibirse las evaluaciones de riesgos realizadas con respecto a personas físicas para evaluar la probabilidad de que cometan un delito o para predecir la comisión de un delito real o potencial basándose únicamente en la elaboración de perfiles de esas personas físicas o la evaluación de los rasgos y características de su personalidad. En cualquier caso, dicha prohibición no se refiere o atañe a los análisis de riesgos que no estén basados en la elaboración de perfiles de personas o en los rasgos y características de la personalidad de las personas, como los sistemas de IA que utilizan los análisis de riesgos para evaluar la probabilidad de fraude financiero por parte de empresas sobre la base de transacciones sospechosas o las herramientas de análisis de riesgo para predecir la probabilidad de localización de estupefacientes y mercancías ilícitas por parte de las autoridades aduaneras, por ejemplo basándose en las rutas de tráfico conocidas.

La introducción en el mercado, la puesta en servicio para ese fin concreto o la utilización de sistemas de IA que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales a partir de internet o de imágenes de circuito cerrado de televisión deben estar prohibidas, pues esas prácticas agravan el sentimiento de vigilancia masiva y pueden dar lugar a graves violaciones de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad.

Existe una gran preocupación respecto a la base científica de los sistemas de IA que procuran detectar o deducir las emociones, especialmente porque la expresión de las emociones varía de forma considerable entre culturas y situaciones, e incluso en una misma persona. Algunas de las deficiencias principales de estos sistemas son la fiabilidad limitada, la falta de especificidad y la limitada posibilidad de generalizar. Por consiguiente, los sistemas de IA que detectan o deducen las emociones o las intenciones de las personas físicas a partir de sus datos biométricos pueden tener resultados discriminatorios y pueden invadir los derechos y las libertades de las personas afectadas. Teniendo en cuenta el desequilibrio de poder en el contexto laboral o educativo, unido al carácter intrusivo de estos sistemas, dichos





sistemas podrían dar lugar a un trato perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas o colectivos enteros.

Por tanto, debe prohibirse la introducción en el mercado, la puesta en servicio y el uso de sistemas de IA destinados a ser utilizados para detectar el estado emocional de las personas en situaciones relacionadas con el lugar de trabajo y el ámbito educativo. Dicha prohibición no debe aplicarse a los sistemas de IA introducidos en el mercado estrictamente con fines médicos o de seguridad, como los sistemas destinados a un uso terapéutico.

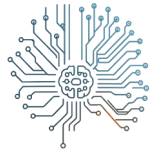
El presente Reglamento no debe afectar a las prácticas prohibidas por el Derecho de la Unión, incluido el Derecho de la Unión en materia de protección de datos, de no discriminación, de protección de los consumidores y sobre competencia.

La introducción en el mercado de la Unión, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de IA de alto riesgo debe supeditarse al cumplimiento por su parte de determinados requisitos obligatorios, los cuales deben garantizar que los sistemas de IA de alto riesgo disponibles en la Unión o cuyos resultados de salida se utilicen en la Unión no planteen riesgos inaceptables para intereses públicos importantes de la Unión, reconocidos y protegidos por el Derecho de la Unión. (Figuroa, 2021, p. )<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Figuroa Castellanos (2021) prevé distintos usos para el combate al crimen partiendo del *Big Data* y, por supuesto, del uso de la inteligencia artificial:

- 1.- Detección de anomalías. El paso final es evaluar los perfiles de comportamiento de los individuos en el contexto de los patrones típicos de comportamiento. Se utiliza un “modelo de normalidad” para detectar automáticamente “desviaciones de los patrones normales previamente reconocidos” (George, Haas, & Pentland, 2014). Las agencias policiales y de inteligencia terrorista utilizan esta técnica de detección de anomalías, al igual que las compañías de tarjetas de crédito, para identificar a los posibles delincuentes.
- 2.- Estadísticas convencionales. Si uno busca en los manuales actuales sobre Minería de Datos, o incluso en el amplio campo de la ciencia de datos, uno se encuentra con métodos estadísticos bien conocidos en las ciencias sociales, desde el cálculo de la correlación y la regresión en el análisis factorial hasta el análisis de diferentes conglomerados.
- 3.- Análisis de redes. También cabe destacar el uso frecuente de métodos de análisis de redes sociales, lo que puede deberse al hecho de que los datos masivos también son datos relacionales. [...] para los comerciantes en línea y los investigadores del terrorismo, estas estructuras latentes son una fuente valiosa de información. Por lo tanto, los análisis de redes son útiles para analizar grandes cantidades de datos en *Big Data*, siempre que puedan representarse e interpretarse a través de relaciones entre nodos.
- 4.- Procesamiento de datos en tiempo real. Lo que es nuevo en la información y la investigación en la criminología es la alta velocidad con la que se recopilan y evalúan los datos y la información resultante, a menudo en tiempo real, en forma de ciclos (Bonomi, Milito, Natarajan, & Zhu, 2014).
- 5.- Minería de datos y aprendizaje automático. La minería de datos es un proceso en gran parte automatizado que se ha establecido en informática y explora patrones y estructuras en bases de datos grandes, a menudo mal estructuradas. Los algoritmos utilizados son regresión, clasificación, agrupamiento, etc. Todos los procedimientos dirigidos a reducir la complejidad (Wu *et al.*, 2014). De manera similar, las técnicas de minería de textos analizan estructuras semánticas, perfiles de contenido de textos que incluyen análisis de sentimientos utilizando lingüística computacional.





Fernando Miró Llinares apunta: “La incontestable capacidad de la IA para gestionar y procesar diferentes formas de datos con una precisión notable ha conducido a preguntarse qué utilidad puede tener la IA en la actualidad para asistir a la justicia penal. En realidad, no cabe duda de que las utilidades potenciales pueden ser muchas, pero podríamos sistematizarlas en los 2 ámbitos esenciales siguientes: (1) IA para la prevención e investigación policial de la delincuencia, e (2) IA aplicada a la determinación judicial del delito”. (Miró, 2020, p. X).

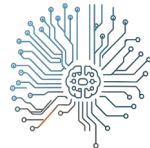
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos fundamentales, entre los que se establece un principio pro persona (en su artículo 1) y el respeto a la presunción de inocencia (artículo 20); de tal modo que, al considerarse a la persona inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria firme, pone límites a la investigación criminal, por lo que si en principio no existe una denuncia previa, no podrán hacerse actos de investigación que invadan los contextos privados e íntimos de las personas; así, se deben respetar, como lo señala el artículo 16 de la carta fundamental citada, la inviolabilidad de sus comunicaciones.

En tal sentido, llamadas, mensajes, la vida en las redes sociales, acceso a cuentas bancarias, actividades comerciales y geolocalización están vedados para la autoridad investigadora, a menos que exista una autorización judicial para revisarlos. Lo anterior se hace extensivo al uso de la inteligencia artificial, la cual debe regularse para ajustarse a estos principios y evitar los abusos de particulares o del Estado.

## 6 PROPUESTAS NORMATIVAS

La inteligencia artificial requiere desarrollarse dentro de la libertad que le permita su propia naturaleza. Es decir, a partir de que ésta atenta contra las personas, su integridad, dignidad y patrimonio, debe existir un medio legal para





detener esa utilización y, en su caso, sancionar el abuso que dañe bienes jurídicos valiosos.

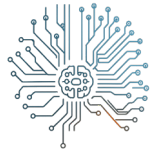
Con el documento denominado “Inteligencia artificial para Europa”, la Comisión Europea constataba que la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo. Desde entonces, es decir, 2018, dicha comisión pretendía fijar en una iniciativa el objetivo claro, que consistía en garantizar el establecimiento de un marco ético y jurídico apropiado basado en los valores de la Unión Europea, y en consonancia con su carta de derechos fundamentales a este respecto, la comisión instaba a las partes interesadas, tanto a las instituciones europeas como a los gobiernos de los Estados miembros, a cooperar en el seno de una alianza europea de inteligencia artificial para elaborar directrices éticas en la materia sobre la base de la labor realizada por el grupo europeo de ética en ciencia y nuevas tecnologías. (Llano, 2021, p. 117 y 118.)

Tomando como base el reglamento europeo, las legislaturas de este lado del mundo tienen un punto de partida para evitar, todavía a tiempo, que las nuevas tecnologías terminen por destruir el patrimonio de los millones de personas potencialmente víctimas.

## 7 CONCLUSIONES

Pareciera que en México es deporte nacional presentar cada año un proyecto de ley de ciberseguridad y delitos informáticos, y con esto crear la apariencia de que se trata de un tema que no desaparece de la agenda nacional; sin embargo, cada año esos proyectos se van a la “congeladora legislativa”, y esto refleja el camino que se ha elegido al respecto. Por consiguiente, todavía estamos muy lejos de lo que la doctora Morán ha propuesto: “La regulación de la IA puede ir desde crear o adicionar definiciones a figuras jurídicas existentes, o la creación de nuevas como las que propongo a continuación: ‘Identidad jurídica electrónica’ *-para personas y personas jurídicas-* ‘Persona artificial’ e ‘identidad artificial’ *-para*





la IA-. Cuya intención es diferenciar el tipo de persona y la regulación, derechos y responsabilidad o consecuencias que pudieran aplicarse, dado el Ciberentorno en que las nuevas tecnologías e identidades coexisten 24 horas los 365 días y donde es muy complicado diferenciar en esa interacción entre personas e IA, es necesario incluir la diferencia de identidades, previo a una regulación en materia penal”. (Morán, 2021, p. 310.)

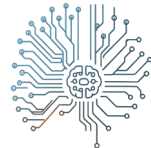
El uso de la inteligencia artificial debe estar apegada a dichos ordenamientos y, tal como se pretende en la Unión Europea, homologarse en las distintas naciones para evitar nichos de impunidad.

Existe la posibilidad de que la inteligencia artificial se utilice con enorme éxito en el combate al crimen (tradicional e informático), pero con el riesgo de que, con ese noble fin, también sea utilizada en detrimento de derechos fundamentales, como lo son la fama pública, la dignidad de la persona y la presunción de inocencia. Entre estos riesgos puede abrirse el debate para encontrar un justo medio.

Lo hemos señalado antes: llamadas telefónicas, mensajes, la vida en las redes sociales, acceso a cuentas bancarias, actividades comerciales, patrones de uso de Internet y geolocalización están vedados para la autoridad investigadora, a menos que exista una autorización judicial para acceder a éstos. Lo anterior es extensivo al uso de la inteligencia artificial, la cual debe regularse para ajustarse a estos principios y evitar los abusos del Estado; de igual manera, sancionar penalmente el actuar indebido de los particulares.

Tomando como punto de partida el reglamento europeo, las legislaturas de este lado del mundo tienen un punto de partida para evitar, todavía a tiempo, que las nuevas tecnologías terminen por destruir el patrimonio de los millones de personas potencialmente víctimas.





## REFERENCIAS

ALONSO, F. H. L. Ética de la inteligencia artificial en el marco jurídico de la Unión Europea, en Justicia algorítmica y neuroderecho. Una mirada multidisciplinar (T. lo Blanch, Ed.). Tirant Lo Blanch, 2021.

CASTELLANOS, J. F. (Ed.). **Criminología y Big Data**: el futuro de la investigación criminológica. INACIPE. 2019.

Espinosa, A. M. **Responsabilidad penal de la Inteligencia Artificial (IA)**. ¿La próxima frontera? REVISTA IUS, 15(310), 2021. <https://doi.org/10.35487/rius.v15i48.2021.706>.

LLANO ALONSO, F. Ética de la inteligencia artificial en el marco jurídico de la Unión Europea. In **Justicia algorítmica y neuroderecho. Una mirada multidisciplinar**, Tirant Lo Blanch, 2021, 117 y 118.

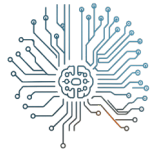
LLINARES, F. M. **El sistema penal ante la inteligencia artificial, Cibercrimen III, Inteligencia artificial, automatización, algoritmos y predicciones en el derecho penal y procesal penal**. Euros Editores S.R.L. 2020.

LOUKILI, G. **Droit du métavers**: chronique de l'avènement d'un nouvel espace-temps, entre disruption et continuité du droit du numérique. LGDJ. 2024.

MORÁN ESPINOSA, A. Responsabilidad penal de la Inteligencia Artificial (IA). ¿La próxima frontera?. **Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla**, 2021, 308.

MIRÓ LLINARES, F. El sistema penal ante la inteligencia artificial, **Cibercrimen III, Inteligencia artificial, automatización, algoritmos y predicciones en el derecho penal y procesal penal**. Buenos Aires, Euros Editores, 2021, S.R.L.

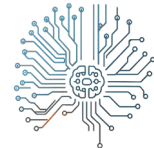




REGLAMENTO EUROPEO. **Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo**, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) de junio de 2024.

RODRÍGUEZ, R. A. U. Neuroderechos, inteligencia artificial y neurotecnologías para las ciencias penales. *Revista Mexicana de Ciencias Penales*, 2023, 63.





# TECNOLOGIAS DIGITAIS, PLATAFORMIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM OLHAR PELA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DE MANGABEIRA UNGER

Lucas Fucci Amato<sup>1</sup>

Rafael A. F. Zanatta<sup>2</sup>

Caio Rezende Missaglia<sup>3</sup>

## INTRODUÇÃO

O objetivo deste ensaio é explorarmos as relações entre direitos fundamentais, tecnologias digitais e plataformação a partir de uma moldura teórica específica no campo do direito: a formulação sobre o “sistema de direitos” em Roberto Mangabeira Unger e os trabalhos contemporâneos, em Teoria do Direito no Brasil, que buscam articular a relevância dessa teoria para uma conceptualização ampla dos direitos fundamentais. Em especial, partimos da discussão lançada por Amato (2018) sobre um modelo de direitos fundamentais que consiste em direitos de desestabilização, direitos de imunidade, direitos de participação e direitos de autonomia ou autorregulação.<sup>4</sup>

Para explorarmos essas relações, procedemos em duas etapas. Primeiro, conduzimos uma brevíssima análise dos conceitos de tecnologias digitais e

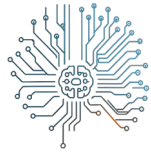
<sup>1</sup> Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Vice-Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito; Foi pesquisador visitante em Cambridge, Oxford e Harvard. E-mail: lucas.amato@usp.br.

<sup>2</sup> Codiretor da Data Privacy Brasil e pós-doutorando na Faculdade de Direito da USP; Doutor pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP; Mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim. E-mail: zanatta@dataprivacybr.org.

<sup>3</sup> Mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP; Graduado em Direito pela USP e pela Université Jean-Monnet Saint-Etienne; Pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. E-mail: caiorm@usp.br.

<sup>4</sup> Para uma exposição completa do modelo de direitos DIPA, ver Amato (2018).





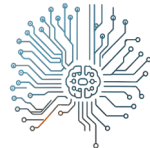
plataformização, com base nos trabalhos de Quintarelli (2020) e Van Dijck (2014; 2022), para que possamos delimitar o fenômeno social explorado, que constitui em uma profunda transformação social pela digitalização da vida (a transformação de átomos em bits) e os sentidos de plataformização como uma reconfiguração das relações de poder e da fruição de direitos em razão do poder infraestrutural e das *affordances* das plataformas (isto é, de sua propriedade de sinalizar determinados usos).

Depois, em um segundo momento, introduzimos a discussão sobre modelos regulatórios da inteligência artificial, apresentando a abordagem baseada em direitos humanos ou fundamentais (típica da União Europeia) como contraponto aos riscos da mercadologização e do autoritarismo, associados aos modelos americano e chinês.

Em um terceiro momento, introduzimos a teoria do sistema de direitos fundamentais de Unger e intérpretes contemporâneos no Brasil (Amato, 2018; Carvalho Junior, 2019; Zanatta, 2019). Apesar de possuir uma vasta obra nos campos da política, filosofia e direito, Unger não possui uma produção específica sobre as relações entre direitos fundamentais e tecnologias digitais. A exceção é seu livro *A economia do conhecimento* (Unger, 2018), que apresenta uma discussão sobre licenciamento de dados e rearranjo dos regimes de propriedade para fomento de uma “vanguarda inclusiva”. No entanto, entendemos que sua moldura de análise desenvolvida na década de 1980 pode ser útil para pensarmos os problemas da datificação e plataformização (Van Dijck, 2022) pelas lentes dos direitos de imunidade, direitos de desestabilização, direitos de participação e direitos de autorregulação.

Na teoria de Unger, “o direito é um lugar privilegiado em que práticas e instituições se encontram com interesses e ideais, com toda a riqueza de uma realidade histórica e singular” (Unger, 2006, p. 36). Sua teoria está menos preocupada com uma justificação racional para o direito, ou a localização de uma ordem moral imanente, e mais na dimensão de arranjos institucionais que





decorrem de interesses e visões, “um instrumento capaz de favorecer processos de transformações sociais” (Carvalho Junior, 2019, p. 379).

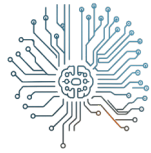
Nosso método não consiste em analisar quais os direitos fundamentais que são afetados ou impactos pelo avanço das tecnologias digitais e os processos de datificação e plataformação. Nosso objetivo é introduzir o modelo de direitos fundamentais de Mangabeira Unger como possível moldura conceitual para problematizações de algumas ambiguidades do direito (Amato, 2018; Carvalho Junior, 2019), como a possibilidade de ele tornar mero instrumento de poder e, em sentido dialético, tornar-se fator de indução de mudanças e transformações sociais.

## 1 TECNOLOGIAS DIGITAIS, DATIFICAÇÃO E PLATAFORMIZAÇÃO: CONTORNOS CONCEITUAIS

Em linhas gerais, podemos afirmar que tecnologias digitais são sistemas computacionais baseados na representação binária da informação (0 e 1), projetados para codificar, armazenar, processar, transmitir e recuperar dados e informações de forma eficiente e automatizada.<sup>5</sup> Esses sistemas envolvem tanto *hardware* (componentes físicos) quanto *software* (instruções lógicas), e operam por meio de algoritmos, estruturas de dados e arquiteturas computacionais (Ziewitz; Brown, 2013; Quintarelli, 2020). De um ponto de vista técnico, os trabalhos de Claude Shannon (1916-2001) foram fundamentais para estabelecer conceitos de

<sup>5</sup> As definições mais basilares de tecnologias digitais envolvem o registro de informações em códigos binários, com combinações dos dígitos 0 e 1, também chamados de bits, que podem representar palavras e diversos tipos de mídia. O bit é a unidade de informação mais basililar na comunicação digital, representando um estado lógico de uma entre duas possíveis variáveis. Por exemplo, o American Standard Code for Information Exchange, elaborado na década de 1960, define que o número 0 é representado pela sequência 00110001, ao passo que o número 2 é representado pela sequência 00110011. A letra L é representada pela sequência 01001101, ao passo que a letra l é representada pela sequência 01101101. O bit é descrito na norma técnica ISO/IEC 80000 da International Organization for Standardization (ISO).





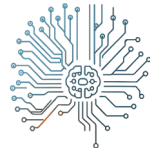
codificação, transmissão, compressão e ruído, habilitando circuitos integrados e a lógica binária que está na base da computação contemporânea.<sup>6</sup>

Alan Turing (1912-1954) também foi fundamental na teorização da computabilidade e na formalização da simulação de algoritmos por máquinas. Em seus trabalhos, estabeleceu os limites fundamentais do que é computável, ao conceber a informação como sequências de símbolos manipuláveis segundo regras formais. A formulação da máquina universal por Turing forneceu a base conceitual que posteriormente inspiraria a arquitetura dos computadores modernos,<sup>7</sup> caracterizada pelo armazenamento conjunto de dados e programas na memória e pela execução sequencial de instruções (Christian, 2013). Os princípios de computação universal desenvolvidos por Turing também estruturam, de maneira indireta, a lógica de funcionamento de interpretadores e compiladores contemporâneos. Como explica a cientista Margaret Boden, para pensarmos em Inteligência Artificial temos que pensar no que os “computadores fazem”, ou seja, “embora a IA necessite de máquinas físicas (isto é, computadores), a melhor maneira de defini-la é pelo uso que ela faz daquilo que os cientistas chamam de máquinas virtuais” (Boden, 2020, p. 16). Para Boden, uma máquina virtual não é uma máquina representada na realidade virtual ou um motor de carro simulado usado para ensinar mecânica, mas “o sistema de processamento de informações que o programador tem em mente quando cria um programa, e que as pessoas têm em mente quando o utilizam” (Boden, 2020, p. 16). Linguagens de programação são máquinas virtuais. Na teoria da computação, elas são compostas de padrões de atividade (processamento de informações) que existem em vários níveis. Elas são “realidade concreta” e “podem fazer as coisas acontecerem, tanto dentro do

<sup>6</sup> No trabalho de mestrado *A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits* (1938), Claude Shannon demonstrou que a álgebra Booleana podia ser usada para simplificar o arranjo de relés eletromecânicos, que formavam a base dos sistemas de comutação da telefonia. Shannon provou que as propriedades binárias dos relés — ligados (*on*) ou desligados (*off*) — podiam representar operações lógicas (verdadeiro/falso), o que abriu caminho para todo o campo do design de circuitos digitais, que sustenta a computação contemporânea.

<sup>7</sup> Sobre a influência do trabalho de Turing para a Inteligência Artificial e seu enfoque sobre como as máquinas poderiam “se comportar de determinada maneira”, ver Russell (2021, pp. 46-50). Na ciência da computação contemporânea, uma máquina é “inteligente” na medida em que o que ela faz tem probabilidade de alcançar o que pretende, a partir do que percebeu. Nesse sentido, um fluxo de inputs perceptivos precisa ser convertido em fluxo de ações.



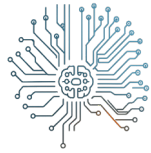


sistema como (se estiverem conectadas a dispositivos físicos como câmeras ou mãos de robôs) no mundo exterior” (Boden, 2020, p. 17).

Uma primeira problematização filosófica sobre controle e os riscos de eliminação da agência humana diante da disseminação das técnicas matemáticas da computação foi formulada por Norbert Wiener (1894–1964), pioneiro da cibernética e professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para Wiener, era necessário desenvolver uma ciência da comunicação que tratasse das relações entre seres vivos e máquinas. Em *Cybernetics*, publicado originalmente em 1948, ele teorizou que sistemas vivos também se organizam por meio da transmissão e recepção de informações, mediadas por processos complexos de retroalimentação (*feedback*), conceito que se tornaria amplamente difundido posteriormente. Trocas eficazes de informação permitem que organismos mantenham estados de homeostase. Tanto os corpos biológicos quanto os autômatos (*automata*, na expressão de Wiener) operam como processadores de informação, dependentes de sinais e mecanismos de regulação contínua.<sup>8</sup> Consequentemente, diante da crescente disseminação de dispositivos automáticos e da computação, Wiener antecipou, já na década de 1940, um problema fundamental: a possível perda da capacidade ética de definir parâmetros adequados para a automatização dos fluxos de informação. Evocando a metáfora do Golem, (Wiener, 2019, p. 59), sua reflexão sugere o risco de criação de entidades automáticas que poderiam escapar ao controle humano e desalinhar-se dos valores éticos originalmente pretendidos. Nesse sentido, a preocupação com a redução da agência e a “perda do controle” revela-se fundacional no próprio campo da cibernética e no pensamento de Wiener.

<sup>8</sup> Em uma passagem muito próxima a Shannon, Wiener explica: “Estamos começando a perceber que elementos tão importantes como os neurônios, os átomos do complexo nervoso do nosso corpo, realizam seu trabalho sob condições muito semelhantes às dos tubos de vácuo, com sua potência relativamente pequena fornecida externamente pela circulação, e que a contabilidade mais essencial para descrever sua função não é a da energia. Em suma, o estudo mais recente dos autômatos, sejam eles metálicos ou físicos, é um ramo da engenharia de comunicações, e suas noções cardinais são as de mensagem, quantidade de perturbação ou “ruído” – um termo adotado da engenharia de telefonia –, quantidade de informação, técnica de codificação e assim por diante. Em tal teoria, lidamos com autômatos efetivamente acoplados ao mundo externo, não apenas por seu fluxo de energia, seu metabolismo, mas também por um fluxo de impressões, de mensagens recebidas e das ações das mensagens enviadas” (Wiener, 2019, p. 60).





Tendo abordado o conceito de tecnologias digitais e seus fundamentos na teoria da computação e da informação, é possível agora avançar para dois conceitos centrais no debate da teoria social contemporânea: a *datificação* e a *plataformização*. Ambos estão diretamente vinculados à disseminação das tecnologias digitais e à crescente capacidade computacional para a coleta, o processamento e a interpretação de dados em larga escala.

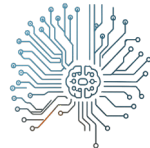
A datificação, conforme definido por Van Dijck (2022), refere-se à transformação da ação social em dados digitais quantificáveis, viabilizando práticas como o monitoramento em tempo real e a análise preditiva. Já a plataformização, em sua formulação posterior (Van Dijck, 2022), diz respeito à relação estrutural entre plataformas digitais e instituições sociais. Trata-se de um processo que, segundo a autora, é comparável à industrialização ou à eletrificação, dado seu potencial de reconfigurar, de maneira multifacetada, diversas dimensões das sociedades globalizadas.

Como observa José Van Dijck (2022), as plataformas digitais são alimentadas por dados e governadas por algoritmos, mas operam em rede como parte de ecossistemas interconectados, mediados por mecanismos específicos de controle e coordenação. Essa estrutura confere às plataformas um papel que vai além de sua dimensão técnica: elas não são meramente ferramentas ou objetos tecnológicos, mas sim aparatos computacionais dotados de uma nova arquitetura de governança.

Seguindo essa perspectiva, o processo de plataformização envolve uma articulação complexa entre atores humanos e não humanos e implica a interpenetração entre tecnologias digitais, dinâmicas econômicas e arranjos regulatórios em diferentes setores sociais. Para Van Dijck, um dos principais problemas das tecnologias digitais contemporâneas reside em seu funcionamento como infraestruturas contínuas de extração de dados, que alimentam novas formas de intermediação e controle sobre a vida social e econômica. Isso conduz, inevitavelmente, a uma reconfiguração das relações de poder.<sup>9</sup> Um

<sup>9</sup> Argumento semelhante é feito por Stefano Quintarelli (2020) em sua obra sobre “capitalismo imaterial” e as





exemplo emblemático é a atuação da empresa Meta, que se posiciona como uma “infraestrutura social” global, concentrando múltiplos serviços digitais — incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. Através do controle dessas plataformas, a empresa ocupa uma posição central na gestão de dados e na modulação de comportamentos sociais, operando por meio de um conjunto sofisticado de tecnologias digitais (Van Dijck, 2022).

Devemos ressaltar que a literatura sobre tecnologias digitais, plataformização e direitos fundamentais é vasta e não temos a pretensão de realizar uma revisão de literatura científica sobre essas intersecções, tão amplas e profícuas. Trata-se de uma discussão que já soma três décadas e que possui diferentes eixos de análise teóricos e conceituais. Apenas para fins de exemplificação, na década de 1990, Rodotà produziu uma série de obras sobre a “tecnopolítica”, chamando atenção para os efeitos da transformação dos dados pessoais (“corpo eletrônico”), o poder corporativo associado à concentração de dados e *softwares* (Rodotà, 1999) e a necessidade de uma ampla agenda democrática centrada na dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, com ênfase nas liberdades informáticas (Rodotà, 1995). Nos Estados Unidos, Lessig inaugurou discussões sobre autonomia, criatividade, inovação<sup>10</sup> e restrições no “ciberespaço” (Lessig, 1995), chamando atenção para o papel das próprias arquiteturas digitais na modificação do comportamento humano (Lessig, 1999).

Para Lessig (1999), no livro *Code and Other Laws of Cyberspace*, uma das complexidades da discussão sobre “o direito do ciberespaço”<sup>11</sup> é a pouca

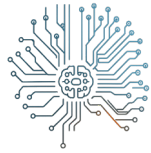
---

novas formas de intermediação na economia digital pelas plataformas. Para Zuboff (2019), essas infraestruturas de extração de dados estão guiadas por um “imperativo preditivo”, uma lógica econômica que intensifica a extensão das operações de extração de dados para todas as dimensões da vida social e aprofunda, extraindo uma “mais-valia comportamental” a partir da sucção “dos padrões íntimos do *self*” (Zuboff, 2019, p. 201).

<sup>10</sup> O trabalho de Lessig é bastante central no campo de direito e tecnologia do final do século XX. Em *The Future of Ideas*, Lessig (2001) alertou contra o risco de a sobre-regulação e o controle excessivo ameaçarem a “arquitetura da liberdade” da Internet – camadas abertas que impulsionam a inovação e a livre troca de informações. Em *Free Culture* (Lessig, 2004), defendeu a flexibilização das leis de propriedade intelectual, argumentando que licenças abertas (como o *Creative Commons*) são necessárias para equilibrar o Estado de Direito e a criatividade.

<sup>11</sup> A expressão caiu em desuso, mas foi dominante nos meios acadêmicos de Harvard na década de 1990. Ver Wu (1996). Os argumentos mais radicais contra qualquer tipo de regulação foram feitos por John Perry Barlow, David Post e David Johnson, todos associados com a Electronic Frontier Foundation (EFF). Para





utilidade da noção de Estado-nação e soberania estatal para a Internet enquanto uma camada lógica de terminais e computadores interconectados, a centralidade do *software* como norma (por isso a tese de que “o código é a lei”) e a dinâmica específica do ambiente digital, que possui sua própria normatividade. Para este autor, a arquitetura técnica da Internet atua como forma de regulação social. Reidenberg (1997), em sentido semelhante, argumentou que as capacidades técnicas e o design dos sistemas impõem normas aos usuários, formando uma “*lex informatica*” – ou seja, uma ordem regulatória intrínseca à arquitetura da Internet que os formuladores de políticas devem reconhecer.

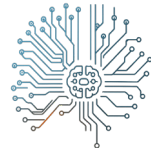
Mais recentemente, autores como Susskind (2018), Zuboff (2019) e Cohen (2019) mostraram como grandes corporações tornaram-se atores centrais para influência das dinâmicas sociais e arranjos geopolíticos. Para Susskind (2018), o poder político está cada vez mais sendo exercido pelas tecnologias digitais — especialmente por quem controla o design, os dados e os algoritmos que regem nossas interações *online* e *offline*. Para Susskind, a tecnologia não é neutra: ela molda as opções disponíveis para as pessoas, define comportamentos e influencia decisões, assumindo um papel político fundamental. Na esteira do que foi argumentado por Lessig (1999), o autor defende que os engenheiros de *softwares* estão se tornando os “novos legisladores”, pois decidem como sistemas funcionam e, em razão das *affordances* desses sistemas, quais as liberdades, direitos e formas de controle podem ser habilitadas para os cidadãos.

Para os fins do nosso estudo, cabe pontuar que tanto Lessig quanto Rodotà já apontavam para uma exaustão dos paradigmas territoriais do direito público diante da expansão da Internet e os novos modos de autorregulação, como os mecanismos de criação de protocolos do *Internet Engineering Task Force* (IETF) e a estruturação dos arranjos globais de atribuição de nomes de domínio, por organizações como a *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Nesse sentido, eles empurraram a discussão da teoria

---

uma visão moderada sobre as possibilidades de regulação e a concepção das normas sobre Internet como uma combinação de regras informais de um regime transnacional, ver Wu (1996).





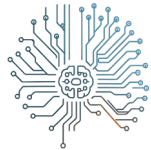
do direito para além da normatividade da norma jurídica estatal. Além disso, atuaram politicamente para criação de novas estruturas para reivindicações civis de direitos. Uma importante contribuição dada por esses intelectuais foi a agenda de criação do *Internet Governance Forum* (IGF) em 2005, após consensos multissetoriais construídos no *World Summit on Information Society* (WSIS). No sistema de governança da Internet, os agentes são privados e o interesse é de uma autorregulação participativa e inclusiva, chamada de *multistakeholder* (De Minico, 2015; Teruel Lozano, 2019).

Para os autores de orientação crítica (Susskind, 2018; Zuboff, 2019; Cohen, 2019), a expansão das tecnologias digitais e da plataformização tem levado a uma (i) erosão da autonomia e agência humana, (ii) limitação da liberdade de expressão e capacidade de livre associação, (iii) violação sistemática dos direitos de privacidade e proteção de dados pessoais pelas técnicas de *profiling* e análise inferencial,<sup>12</sup> (iv) degradação das condições de trabalho plataformizado, (v) acirramentos das posições ideológicas pelos efeitos “filtro bolha” e diminuição da capacidade de debates pluralistas, em respeito à diversidade de crenças e valores, (vi) aceleração dos tempos de acusação e “cancelamentos”, em violação aos direitos de devido processo e condenação após julgamento justo, (vii) inexistência de devido processo diante do poder exercido pelas empresas e plataformas, que operam com funções *quasi*-estatais, entre outras violações de direitos fundamentais.

Em síntese, a compreensão das tecnologias digitais, da datificação e da plataformização revela um percurso conceitual que vai da infraestrutura técnica à reconfiguração social. As tecnologias digitais, fundamentadas nos

<sup>12</sup> Ao analisar a lógica de Hal Varian, influente economista da Google, Zuboff argumenta que a lógica de extração de todos os dados comportamentais não é um novo contrato social, mas sim um “não contrato” (*uncontract*). Não há consentimento e não somos consultados sobre a transformação de nossa vida cotidiana em material passível de extração e mensuração pela datificação. Diz a autora: “O não-contrato não é um lugar de relações contratuais, mas sim uma execução unilateral que torna essas relações desnecessárias. O não-contrato dessocializa o contrato, fabricando certeza por meio da substituição de promessas, diálogo, significado compartilhado, resolução de problemas, resolução de disputas e confiança por procedimentos automatizados: as expressões de solidariedade e agência humana que foram gradualmente institucionalizadas na noção de contrato ao longo de milênios. O não-contrato ignora todo esse trabalho social em favor da compulsão, e o faz em prol de produtos de previsão mais lucrativos que se aproximam da observação e, portanto, garantem resultados” (Zuboff, 2019, p. 221).





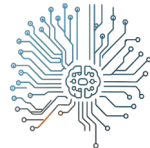
princípios da computação e da teoria da informação, constituem os sistemas que possibilitam o armazenamento, processamento e transmissão automatizada de dados. A datificação emerge como o processo social de transformação de ações e relações humanas em dados digitais quantificáveis, viabilizando práticas de monitoramento, análise e predição. Já a plataformização refere-se à incorporação estrutural das plataformas digitais como infraestruturas centrais na organização econômica, política e social contemporânea, marcando a interpenetração entre tecnologias, dinâmicas de mercado e formas de governança. Ao integrar essas dimensões, evidencia-se que as tecnologias digitais não apenas suportam operações técnicas, mas sustentam processos profundos de transformação social, reorganizando fluxos de informação, modos de controle e relações de poder em escala global (Zuboff, 2019; Van Dijck, 2022). Em razão desses efeitos políticos, devemos agora analisar as relações com a teoria dos direitos fundamentais.

## 2 OS MODELOS REGULATÓRIOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E OS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS

Nos últimos anos, a abundância de dados disponíveis na internet – acelerada com a propagação dos serviços digitais e das redes sociais –, a evolução da capacidade de processamento computacional e o desenvolvimento de novos algoritmos viabilizaram grandes avanços na técnica de aprendizado de máquina (*machine learning*) (Cortiz, 2021, p. 47). Entretanto, a crescente tomada de consciência, tanto de parte da sociedade civil quanto dos governos, acerca dos riscos trazidos pela tecnologia – incluindo riscos a direitos fundamentais<sup>13</sup> – fez com que a “corrida pela IA” provocasse também uma “corrida pela regulação da IA” (Smuha, 2021).

<sup>13</sup> A título de exemplo, conforme Kaufman, Junquilho e Reis (2023), determinadas características e imperfeições intrínsecas à IA – quais sejam, o problema da interpretabilidade ou não explicabilidade; a discriminação nos resultados enviesados; e a ameaça à privacidade – geram riscos aos direitos fundamentais à explicabilidade; à não discriminação; e à privacidade.



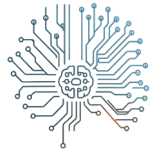


Nessa conjuntura, alguns modelos regulatórios se destacam no cenário internacional, influenciando governos de todo o mundo na forma como lidam com a economia digital. Em *Digital empires* (2023), Anu Bradford argumenta que Estados Unidos (EUA), China e União Europeia (UE) são as três potências da economia digital global, atuando como “impérios digitais” que competem por influência global mediante a exportação de seus respectivos modelos regulatórios: o modelo pró-mercado estadunidense; o modelo pró-Estado chinês; e o modelo pró-direitos europeu (Bradford, 2023, p. 17-21). Para nossos fins, cabe notar que cada um desses grandes modelos regulatórios digitais tem distintas implicações para os direitos fundamentais.

A abordagem estadunidense pró-mercado deriva de uma ideologia tecnolibertária que valoriza a liberdade de expressão irrestrita e a inovação tecnológica desenfreada, enxergando a internet como um espaço destacado do mundo real e, portanto, imune à intervenção estatal. Nesse modelo regulatório *laissez-faire*, a (auto)regulação da economia digital é deixada para as próprias empresas e forças de mercado, limitando-se ao máximo o papel do Estado, o qual só deve intervir em casos específicos, como questões de “segurança nacional” (Bradford, 2023, p. 7).

Não se pode negar que o modelo estadunidense tem sido bem-sucedido em seu objetivo de fomentar a inovação, visto que a maioria das empresas de tecnologia mundialmente relevantes vêm dos EUA (em especial do Vale do Silício, na Califórnia). Mas hoje se vê que a sociedade estadunidense paga um oneroso preço por essa abordagem antirregulatória: falta proteção aos direitos dos usuários da internet (Cohen, 2019), os quais são alvo de vigilância constante (privada e pública), manipulação e corrosão de sua autonomia individual, comprometendo-se as próprias instituições democráticas e liberdades políticas que o modelo americano originalmente pretendia proteger (Zuboff, 2019; Bradford, 2023, p. 7-8). Nesse contexto, é memorável o escândalo da Cambridge Analytica, empresa de análise de dados que, trabalhando com a equipe de campanha de Donald Trump em 2016, coletou dados de mais de 50 milhões de perfis de eleitores





americanos no Facebook, usando tais informações para, sem o consentimento dos usuários, influenciar suas escolhas nas urnas (Cadwalladr; Graham-Harrison, 2018).

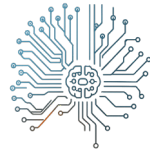
Em relação à regulação da IA, conforme Roberts *et al.* (2021a, p. 12-13), na abordagem dos EUA, um desenvolvimento virtuoso da tecnologia requer que se limite a regulação estatal, privilegiando-se a autorregulação privada. Diferentemente da UE, a estratégia dos EUA foca não em proteger liberdades individuais, mas sim em empoderar cidadãos e empresas para aproveitarem os benefícios da tecnologia. Todavia, em linha com os referidos autores, embora esse modelo possa fazer sentido da perspectiva econômica, do ponto de vista ético ele é problemático. Na prática, essa abordagem *laissez-faire* – intensificada no atual governo de Donald Trump<sup>14</sup> – favorece a ocorrência de graves riscos aos direitos fundamentais dos indivíduos, incluindo vieses em tecnologias de reconhecimento facial e violação da privacidade dos usuários da internet.

Já o modelo regulatório pró-Estado da China, embora também valorize o avanço tecnológico, opõe-se às abordagens liberais-democráticas dos EUA e da UE na medida em que a internet e as tecnologias digitais são vistas não como meios para incrementar as liberdades dos indivíduos, mas sim como o contrário disso: instrumentos do Estado para manter a harmonia social e controlar as comunicações dos cidadãos, inclusive mediante a censura de publicações incompatíveis com os valores do Partido Comunista. O modelo chinês, assim, mostra que, ao contrário do que prega o tecnolibertarianismo do Vale do Silício, a liberdade não é inerente à internet, a qual pode ser moldada de acordo com diferentes visões políticas (Bradford, 2023, p. 8-9).

A abordagem regulatória chinesa para a IA tem por fundamentos a soberania estatal e a segurança nacional, não dando destaque para valores democráticos, como ocorre no discurso ocidental predominante (Hung, 2025, p.

<sup>14</sup> Logo no primeiro dia de seu segundo mandato, em 20 de janeiro de 2025, Trump revogou a *Executive Order* 14110, assinada por Biden em 30 de outubro de 2023, a qual pregava o desenvolvimento ético e responsável da IA, visando reduzir seus riscos perante consumidores, trabalhadores e a segurança nacional – o que aproximava os EUA da abordagem pró-direitos da UE (Shepardson, 2025).





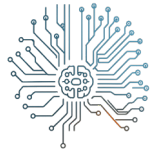
23-24). Configura-se, segundo Bradford (2023), um opressivo sistema de vigilância e controle do Estado sobre o comportamento dos cidadãos. Notadamente, a IA é usada no sistema de segurança e policiamento, sobretudo por meio das mais de 700 milhões de câmeras de segurança com reconhecimento facial espalhadas em espaços públicos (Sharma, 2023), as quais, inclusive, detectam em tempo real a identidade dos indivíduos, monitorando potenciais comportamentos subversivos. A vigilância estatal chega ao extremo na região de Xinjiang, em que as câmeras são usadas para monitoramento constante de uma etnia específica, a minoria Uyghur, considerada potencialmente rebelde (Roberts *et al.*, 2021b, p. 66-68).

Nota-se, assim, em linha com a análise de Anu Bradford (2023), que, enquanto a abordagem regulatória pró-mercado associada aos EUA favorece a violação de direitos fundamentais pelas empresas (as grandes plataformas digitais), a abordagem pró-Estado tipicamente chinesa favorece a violação de tais direitos pelo próprio Estado. Em vez de privilegiar os interesses das grandes empresas ou do Estado, a regulação das tecnologias digitais deve ter como objetivo central a proteção dos direitos individuais fundamentais.

Essa é, segundo Bradford (2023, p. 9-10), a característica do modelo regulatório pró-direitos da UE, o qual incorpora um *ethos* humanista, focado na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, além de buscar preservar as estruturas democráticas da sociedade e criar uma economia digital justa. Diferentemente do modelo estadunidense, que eleva a liberdade de expressão como direito fundamental supremo, na UE tal direito pode ser relativizado quando sopesado com outros, como a privacidade e a dignidade humana, justificando, por exemplo, a remoção de discursos de ódio nas redes sociais. E, em contraste com o modelo chinês, a abordagem da UE visa proteger os cidadãos não só contra o poder das grandes empresas, mas também contra abusos cometidos pelo Estado.

No âmbito da regulação da IA, a UE foi pioneira ao editar o Regulamento (UE) 2024/1689, mais conhecido como *AI Act*. Em seu Considerando 1, o Regulamento estabelece como objetivo “a adoção de uma IA centrada no ser



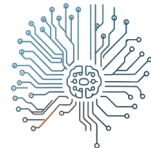


humano e de confiança, assegurando simultaneamente um elevado nível de proteção da saúde, da segurança [e] dos direitos fundamentais” (União Europeia, 2024). Com o *AI Act*, a UE afastou-se de uma abordagem autorregulatória baseada em ética e códigos de conduta – insuficiente para lidar com os riscos sistêmicos da IA (Black; Murray, 2019, p. 14-16) –, em favor de um modelo centrado na regulação jurídica estatal. No caso, o Regulamento estabelece um modelo de regulação baseada em riscos, buscando o duplo objetivo de proteger direitos fundamentais sem prejudicar o avanço tecnológico.

A UE tem influenciado outras jurisdições a seguirem um modelo regulatório para IA centrado na proteção dos direitos individuais fundamentais, configurando-se, em algum grau, o fenômeno denominado “efeito Bruxelas”<sup>15</sup>. No Brasil, o PL 2.338/2023, aprovado no Senado em dezembro de 2024 e atualmente debatido na Câmara dos Deputados, em boa medida se inspira no *AI Act*, prevendo em seu Capítulo III uma abordagem regulatória baseada em riscos. Mas o PL 2.338 ainda vai além do *AI Act*, estabelecendo também, em seu Capítulo II, uma abordagem regulatória baseada em direitos – tais como os direitos à informação, à privacidade e à não-discriminação –, os quais são atribuídos às pessoas e grupos afetados por sistemas de IA. Além disso, o modelo brasileiro de regulação de IA se diferencia da regulação do risco europeia cristalizada no *AI Act* por ao menos três elementos que merecem análise aprofunda pela comunidade jurídica: (i) a não utilização de uma estrutura administrativa centralizada (*AI Office*), optando pela cooperação entre agências reguladoras no Sistema de Inteligência Artificial, (ii) a preocupação com a cultura brasileira e os tensionamentos postos pelo capítulo de direitos autorais e a possibilidade de que artistas e criadores possam exercer direitos de oposição em razão da extração de valor econômico de suas obras, (iii) o enfoque em sustentabilidade de datacenters e direitos coletivos à informação

<sup>15</sup> Segundo a criadora da expressão, Anu Bradford (2023, p. 326), o efeito Bruxelas é a manifestação do poder regulatório global exercido pela UE, consistindo em “uma forma de influência regulatória que resulta da combinação do grande mercado consumidor da UE, das suas poderosas instituições regulatórias que adotam regulações rigorosas e de forças de mercado que conduzem as empresas de tecnologia em direção a regras uniformes emitidas pela UE enquanto principal jurisdição regulatória” (tradução nossa).





que podem ser exercidos diante dos investimentos em infraestruturas de dados que viabilizam sistemas de IA.

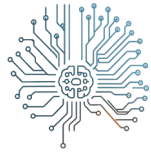
Diante da necessidade de se conceber a regulação das tecnologias digitais – incluindo a IA – com foco nos direitos fundamentais dos indivíduos e grupos afetados, é necessário refletir sobre os diferentes tipos de direitos fundamentais que seriam instituídos no âmbito da regulação digital. É nesse sentido que a classificação ora proposta pode contribuir para a construção da regulação da IA, inclusive no debate brasileiro.

### **3 O SISTEMA DE DIREITOS UM UNGER, OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA APLICAÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS**

A ideia das três gerações de direitos (civis, políticos e sociais) é uma esquematização histórica do desenvolvimento jurídico e político-econômico da “cidadania” na sociedade industrial (Marshall, 1973 [1949]): descreve as transformações políticas do liberalismo oligárquico para a democracia de massas e o Estado de bem-estar social – embora, vale registrar, tais etapas não sejam nem lineares nem irreversíveis em cada experiência nacional. No Brasil, por exemplo, José Murilo de Carvalho (2002) argumenta que nossa concepção de cidadania tem grandes dificuldades de adotar uma concepção de direitos civis, em razão das características do varguismo e a introdução de direitos sociais em ambientes não democráticos.

A bipartição entre direitos civis e políticos, por um lado, e direitos sociais, econômicos e culturais, por outro, é um produto da Guerra Fria. Os primeiros são vistos como direitos humanos universais, vinculativos e judicialmente aplicáveis; os segundos como promessas políticas de realização a longo prazo (Amato, 2016).



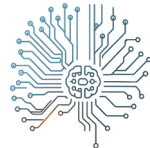


Apesar destas considerações históricas, é evidente que todos os direitos implicam custos e exigem políticas públicas para a sua realização e efetiva fruição: não apenas os direitos sociais consomem orçamento público para os respectivos serviços públicos ou transferências fiscais; pense-se no custo do aparelho burocrático judicial e policial, mais diretamente ligado aos direitos civis.

Tendo em conta esses pressupostos, pode-se propor uma classificação alternativa, que considera quatro funções ou papéis dos direitos fundamentais (Amato, 2018; 2024): 1) a proteção individual e coletiva contra a exclusão, a privação e a opressão remete para os “direitos de imunidade”, que englobam basicamente os chamados direitos civis e políticos, lado a lado; 2) ao mesmo tempo, cada um destes direitos em espécie (direito à vida, à saúde, à liberdade de expressão) pode ser mobilizado para uma outra função: não como “escudo”, a partir de uma posição defensiva para reclamar proteção ou acesso a recursos políticos, econômicos, jurídicos ou culturais, mas como “espada”, para combater injustiças estruturais mas localizadas; isto é, para intervir em procedimentos e rotinas organizacionais que produzem repetidamente discriminação, exclusão, violência ou carência. Neste papel, os direitos funcionam como “direitos de desestabilização” (para ambas as categorias de direitos, ver Unger, 2001 [1987]). Há também a função mais específica de acesso ao sistema político, e aqui temos os “direitos de participação”. Por fim, num contexto em que já não é crível a reivindicação do monopólio estatal do direito, o próprio constitucionalismo precisa de interiorizar e impor normas que regulem a autorregulação privada, o que é o caso dos “direitos de autonomia”.

Tal matriz de direitos humanos e/ou fundamentais permite associá-los a conflitos emergentes nas diversas ordens jurídicas a partir dos usos e abusos das tecnologias de inteligência artificial. Esses conflitos podem ser vistos como verdadeiros problemas transconstitucionais, no sentido de Neves (2009): estão em jogo os temas clássicos do constitucionalismo moderno – direitos básicos dos afetados, de um lado; organização e autorrestrrição dos centros de poder, de outro –, os quais ultrapassam as ordens jurídicas nacionais, transbordando para ordens





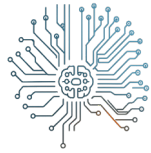
internacionais (como os sistemas regionais de direitos humanos), supranacionais (como a União Europeia) e transnacionais (autorregulação privada das plataformas digitais).

Partindo desse enquadramento teórico, podemos argumentar que a discussão sobre a regulação da inteligência artificial se intersecciona com a bloqueios e alternativas institucionais para a proteção e promoção dos direitos fundamentais em diversas ordens jurídicas, dando destaque a discussões judiciais contemporâneas no Brasil. Partindo do sistema de direitos em Unger, podemos discutir os direitos fundamentais diante de sistemas de IA na legislação brasileira a partir de uma outra moldura, distinta de uma concepção clássica que buscava enxergar apenas direitos políticos de participação nos processos eleitorais e democráticos, direitos sociais e trabalhistas e direitos civis de expressão e privacidade.

Nos termos da classificação proposta (Amato, 2018; 2024), direitos de imunidade contemplam novas titularidades civis e sociais de proteção contra os riscos de violência e necessidade. De um lado, é preciso “digitalizar” categorias clássicas de direitos individuais e liberdades públicas, convertendo-as da era analógica para a era digital: por exemplo, liberdade de expressão, proteção de dados e privacidade. Agora é necessário delinear o seu âmbito de proteção nas plataformas digitais, que alteram drasticamente as fronteiras entre a comunicação privada e a repercussão pública, uma vez que estas plataformas permitem não só o consumo massivo de informação (como a rádio e a televisão), mas também a produção massiva, anárquica e descentralizada de informação e desinformação, transbordando para a esfera pública a partir de interações pessoais em aplicativos de mensagens ou postagens em perfis de redes sociais com diferente visibilidade e poder de pauta.

No Brasil, desde 2018 o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm dificuldades em consolidar a jurisprudência sobre notícias falsas e discurso de ódio, especialmente na esfera política (Saba *et al.*, 2021). O advento das tecnologias de inteligência artificial apenas exponenciou o desafio, com





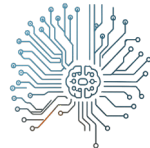
proibição de *deepfakes* e a exigência de sinalização do conteúdo gerado por IA nas campanhas eleitorais, como dispôs a Resolução nº 23.732/2024, do Tribunal Superior Eleitoral.

Por outro lado, estão em jogo as proteções sociais e trabalhistas na era da autonomização tecnológica e do desemprego estrutural. Assim como a sociedade industrial criou institutos como o seguro-desemprego, as férias remuneradas ou o fundo de garantia, agora seria necessário instituir proteções trabalhistas universalmente portáteis e novos direitos de inclusão no mercado (Amato, 2022), como renda básica e herança social – tudo isso considerando um cenário em que a instabilidade no emprego, a mudança de empresa e mesmo de profissão e setor são mais a regra do que a exceção.

Tecnologias como a inteligência artificial não só automatizam os processos de produção, poupando trabalho manual, como também autonomizam processos decisórios, entrando no campo de como a gestão e o direito operam (Almada; Zanatta, 2024). Os algoritmos permitem a adaptação dos sistemas decisórios tracionados pela inteligência artificial, que revisam suas decisões pela coleta contínua de dados (Russell, 2021).

Observa-se uma das facetas do problema na discussão a respeito do enquadramento do trabalho vinculado a aplicativos. No Brasil, uma parte da Justiça do Trabalho tende a equiparar tal trabalho à relação de emprego protegida pela CLT (considerando a “subordinação algorítmica” dos motoristas e entregadores, com controles de tempo, prêmios e punições por seu desempenho) e o restante do Judiciário, o STF inclusive, tende a considerar que faltam nesse vínculo contratual elementos típicos da relação de emprego (como subordinação jurídica e não eventualidade) (Jota, 2024). Já em Portugal, por exemplo, a Lei n.º 13/2023 (“Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho”), no artigo 12º-A, passou a fixar uma série de indicadores para a presunção de contrato de trabalho em funções mediadas por plataformas digitais, como (alternativamente) o exercício de poder disciplinar (com a imposição de sanções como a exclusão da plataforma), a fixação de limites mínimos ou





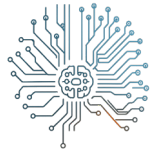
máximos de pagamento ou a supervisão e orientação quanto à forma de prestação de serviço.

A outra categoria proposta é a dos “direitos de desestabilização”, que se destinam à provocação de intervenções estruturais, porém localizadas, em rotinas, procedimentos e organizações públicas ou privadas que desrespeitem parâmetros constitucionais mínimos. O modelo básico de funcionamento destes direitos são as injunções estruturais criadas pelo poder judicial dos EUA desde os casos *Brown* na década de 1950. Mas, desde então, tem havido uma controvérsia sobre as oportunidades e as formas de intervenção judicial para combater a opressão e a discriminação localizadas em organizações públicas e privadas, como escolas, hospitais, sistemas eleitorais, prisões, empresas ou bancos. Assim, o instituto teve o seu apogeu e declínio nos Estados Unidos, ligado a críticas sobre a falta de legitimidade política e incapacidade gerencial do Poder Judiciário para realizar tais intervenções (Weaver, 2004), que funcionam como uma espécie de recuperação judicial das empresas, como existe no direito privado.

O poder das grandes plataformas digitais (*big techs*) se, por um lado, pode reabilitar a legitimidade da intervenção judicial como instrumento de defesa da democracia e do interesse público, por outro impõe dificuldades práticas e políticas de grande monta, dado o hiato entre a jurisdição estatal e o domínio transnacional das plataformas.

Há apenas dez anos, desde 2015, o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem sido provocado a decidir, por meio do controle abstrato, sobre temas como o sistema penitenciário, a criação de novas faculdades de Direito, o desmatamento na Amazônia, o sistema tributário, a política de saúde durante a pandemia de Covid-19, o custo do sistema de saúde, a violência policial contra a população negra e a situação da população de rua. A tendência inicial foi enquadrar essas situações como “estados de coisas inconstitucionais”, seguindo a doutrina colombiana. Mas só agora estão em discussão critérios mais claros para o “processo estrutural” ou “ações estruturais”, ou seja, para determinar quando e como o Judiciário pode intervir nessas situações. De fato, tais direitos desafiam os limites da jurisdição



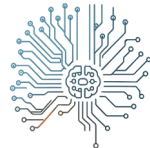


constitucional e ativam uma rede de funções judiciais e parajudiciais – podemos pensar, no caso brasileiro, nos papéis combinados do Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e de órgãos do Executivo, como o Ministério do Trabalho (Amato, 2025).

Sobre os direitos de participação política e sua associação às tecnologias digitais, até aos anos 2000, predominava uma visão utópica ou otimista do potencial das tecnologias digitais para a transição da democracia representativa e parlamentar para uma democracia verdadeiramente participativa – pensava-se que todos poderiam votar diariamente, através do seu celular, sobre questões de interesse público. Hoje em dia, existe um pressuposto claramente conservador ou pessimista sobre os usos e abusos das tecnologias digitais no contexto político: adulteraram os mandatos representativos, tornando-os quase mandatos imperativos, transformaram o debate parlamentar em uma espécie de *reality show* e fizeram com que cada campanha eleitoral seja uma tempestade de desinformação. A conclusão implícita é que, se a democracia liberal está em crise, as perspectivas de alargamento da participação política direta são ainda piores.

Ao mesmo tempo, os nossos sistemas políticos, como o presidencialismo típico dos Estados Unidos e importado para a América Latina, continuam a gerar impasses entre os poderes. Esses impasses desaguam na judicialização ou mesmo em ameaças de intervenção militar, como vimos no Brasil. Mecanismos como eleições antecipadas ou plebiscitos e referendos seriam alternativas para a arbitragem popular desses impasses na tomada de decisões. Mas então temos que enfrentar uma questão: mais oportunidades de participação política (mais eleições, consultas populares, plebiscitos) seriam mais ocasiões para tempestades de desinformação ou mais oportunidades para tentar esclarecer a opinião pública sobre temas relevantes, filtrando e combatendo a desinformação que circula todos os dias nas plataformas digitais? Mais do que responder empiricamente a esta questão, é preciso pensar em mecanismos institucionais para que o segundo, o potencial de mobilização e esclarecimento da opinião pública, prevaleça sobre o primeiro, a sua intoxicação pelo lixo digital.





Por exemplo (Lara, 2024): a inteligência artificial generativa pode ser uma ferramenta para agregar e distribuir informação, reforçar o debate público e, ao mesmo tempo, facilitar plebiscitos e consultas virtuais; poderíamos ter um núcleo mais diretamente gerencial e participativo, especialmente na política local, mas também envolver um maior número de pessoas, exigindo menos tempo e trabalho, com a utilização de ferramentas digitais de informação e consulta.

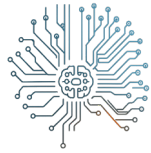
Finalmente, propomos a categoria dos direitos de autonomia como reconhecimento e limitação constitucional da autorregulação. O direito digital não se constitui como uma ordem jurídica transnacional unificada, mas sim como uma rede de autorregulações, por isso de difícil abordagem e observação por outras ordens jurídicas (Negócio, 2023). Desde 2019, o Congresso Nacional do Brasil discute um projeto de lei sobre o combate às *fake news*, e agora há também uma proposta de regulamentação da Inteligência Artificial, nos moldes do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial de 2024<sup>16</sup>.

Essa pauta levanta três conjuntos de problemas: trata de tecnologias transversais, que têm impacto em vários setores (política, saúde, educação, economia etc.); a mudança tecnológica pode ser mais rápida do que o processo de decisão legislativa ou administrativa para a regular; são tecnologias sob o domínio das *big techs* globais, enquanto o constitucionalismo continua baseado nos Estados nacionais e os mecanismos regionais de direitos humanos continuam sendo orientados a violações estatais.

É aqui que se coloca a questão daquilo a que David Sciulli (1992; 2001) e, mais tarde, Gunther Teubner (2012) chamaram “constitucionalismo societal”: a imposição de normas mínimas de um Estado de direito à autorregulação, ao direito criado fora do Estado. Se a imposição unilateral do direito estatal pode ser

<sup>16</sup> O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia (2024/1689) tem uma abordagem baseada em riscos (de danos físicos, psicológicos, sociais ou econômicos, a direitos fundamentais e a interesses públicos, como como a privacidade de dados pessoais, saúde e segurança). A graduação abrange sistemas de risco mínimo ou nulo (deixados basicamente à autorregulação pelo mercado e pelos provedores), de risco limitado (aos quais se impõem obrigações de transparência e confiança, como no caso de deepfakes) e de risco elevado (como identificação biométrica ou robôs para transporte, ensino ou tratamento médico, sistemas aos quais se impõem exigências estritas para autorização e monitoramento).





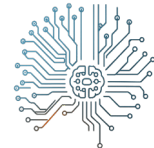
impossível ou inofensiva, e se deixar os poderes privados entregues a si próprios é muito perigoso, a solução que tem vindo a ser delineada é a regulação da autorregulação, uma espécie de “metarregulação” (Amato, 2021), co-regulação ou autorregulação regulada. Impor um limite mínimo de devido processo, legalidade e direitos substantivos para que as plataformas continuem a operar no país. Só acima desse piso é que elas poderiam instituir mais direitos e garantias para seus usuários, nunca menos. O Estado precisa criar agências que atuem como articuladoras de uma rede de órgãos públicos, empresas privadas e representantes da sociedade civil, tentando criar uma espécie de arranjo de freios e contrapesos que integre agências reguladoras setoriais e antitruste, acadêmicos e movimentos de direitos digitais e representantes das *big techs* e de empresas emergentes de tecnologia. Por essa saída, se evitariam os problemas extremos da subregulação (com a geração de riscos tecnológicos sem as devidas medidas de precaução e proteção de direitos) e da sobreregulação (com a geração de custos e barreiras impeditivos da inovação).

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que os riscos associados à plataformização e datificação (mapeados no primeiro tópico) podem ser mais adequadamente endereçados por um modelo regulatório das tecnologias digitais (como a inteligência artificial) baseado em direitos humanos ou fundamentais (como o modelo europeu, situado entre seus concorrentes no segundo tópico). Entretanto, para apreendermos a variedade de funções que tais direitos precisam cumprir para dar conta dos riscos associados às tecnologias digitais, precisamos de uma nova categorização, para além da clássica divisão entre direitos civis e políticos e direitos sociais, econômicos e culturais.

O modelo aqui proposto e aplicado (terceiro tópico) visa a dar conta dessa complexidade. Seu ponto de chegada é combinar proteções individuais e





coletivas (direitos de imunidade) com possibilidades ampliadas de participação política e ferramentas para a intervenção corretiva nas rotinas e estruturas plataformas digitais. Tudo isso precisa ser coordenado a um piso de direitos substantivos e procedimentais a ser exigido das formas de autorregulação. Nessa moldura estatal da autorregulação privada, há dois problemas que devem ser abordados. O primeiro é o de contrabalançar os interesses parciais dos diferentes atores (Estado, plataformas e utilizadores) e evitar o abuso dos seus poderes através de uma contenção baseada nos vetos que cada um pode impor ao outro no desenho da regulação que se desenvolve e aprofunda a partir deste regime jurídico. Trata-se de procurar uma distribuição de direitos, deveres, poderes e responsabilidades que responda a uma interseção identificável com o “interesse público”. O segundo problema é lidar com a falibilidade dos vários atores e da sua produção normativa. Para o efeito, a coordenação deve facilitar a correção, catalisando respostas jurídicas experimentais, baseadas em evidências e passíveis de revisão. Uma autoridade coordenadora desta rede de atores pode atuar como mediadora de soluções para os impasses na negociação entre os diferentes agentes para a criação e revisão de normas.

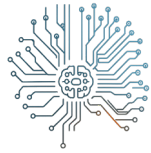
## REFERÊNCIAS

ALMADA, Marco Antonio; ZANATTA, Rafael A. F. Inteligência artificial, direito e pesquisa jurídica. **Revista USP**, n. 141, p. 51-64, 2024.

AMATO, Lucas Fucci. Economia e política dos direitos culturais na ordem internacional. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR)**, v. 61, n. 1, p. 165-192, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/39558>. Acesso em: 26 fev. 2025.

AMATO, Lucas Fucci. **Inovações Constitucionais: direitos e poderes**. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2018.





AMATO, Lucas Fucci. Fake News: regulação ou metarregulação? **Revista de Informação Legislativa**, v. 58, n. 230, p. 29-53, 2021.

AMATO, Lucas Fucci. **Propriedade Desagregada e Empreendedorismo Democrático**: instituições da economia de mercado e formas jurídicas do capital. Porto Alegre: Fi, 2022. Disponível em: <https://www.editorafi.org/436propriedade>. Acesso em: 22 set. 2024.

AMATO, Lucas Fucci. Inovações constitucionais na era da inteligência artificial: separação de poderes e direitos fundamentais digitais. In: AMATO, Lucas Fucci (org.). **Sociologia do Direito Digital**: inteligência jurídica na era da inteligência artificial. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo [Portal de Livros Abertos da USP], p. 13-35, 2024. Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1485>. Acesso em: 26 fev. 2025.

AMATO, Lucas Fucci. Structural litigation, destabilization rights and trans-judicial cooperation networks: lessons from comparative constitutional law. **Suprema, Revista de Estudos Constitucionais**, 2025.

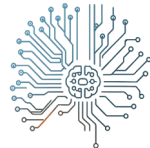
BLACK, Julia; MURRAY, Andrew. Regulating AI and machine learning: setting the regulatory agenda. **European Journal of Law and Technology**, v. 10, n. 3, 2019.

BODEN, Margaret. **Inteligência Artificial**: uma brevíssima introdução. São Paulo: Editora Unesp, 2020.

BRADFORD, Anu. **Digital empires**: the global battle to regulate technology. New York: Oxford University Press, 2023.

CADWALLADR, Carole; GRAHAM-HARRISON, Emma. Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. **The Guardian**, 17 mar. 2018. Disponível em: <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>. Acesso em: 22 abr. 2025.





CARVALHO, José Murilo. **Cidadania no Brasil: o longo Caminho**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

CARVALHO JUNIOR, Paulo Lino. Os direitos humanos em Unger, *In*: TEIXEIRA, Carlos Sávio (org.), **Rebeldia Imaginada: instituições e alternativas no pensamento de Roberto Mangabeira Unger**. São Paulo: Autonomia Literária, p. 364-393, 2019.

CHRISTIAN, Brian. **O humano mais humano: o que a Inteligência Artificial nos ensina sobre a vida**. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

COHEN, Julie. **Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism**. Oxford: Oxford University Press, 2019.

CORTIZ, Diogo. Inteligência artificial: conceitos fundamentais. *In*: VAINZOF, Rony; GUTIERREZ, Andriei (coord.). **Inteligência artificial: sociedade, economia e Estado**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p. 45-59, 2021.

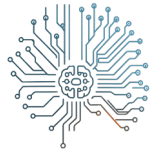
DE MINICO, Giovanna. Towards an Internet Bill of Rights. **Loyola International & Comparative Law Review**, v. 37, p. 1, 2015.

HUNG, Ho Ting. Exploring China's cyber sovereignty concept and artificial intelligence governance model: a machine learning approach. **Journal of Computational Social Science**, v. 8, n. 24, 2025.

JOTA. **Relatório JOTA PRO detalha cenário sobre uberização e vínculo empregatício no TST**. Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/relatorio-jota-pro-detalha-cenario-sobre-uberizacao-e-vinculo-empregaticio-no-tst>. Acesso em: 26 fev. 2025.

KAUFMAN, Dora; JUNQUILHO, Tainá; REIS, Priscila. Externalidades negativas da inteligência artificial: conflitos entre limites da técnica e dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 24, n. 3, p. 43-71, set./dez. 2023.





LARA, Gustavo Dalpupo de. **Institutional alternatives for a high-energy democracy and experimentalist constitutionalism in Brazil**. 2024. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

LESSIG, Lawrence. The zones of cyberspace. **Stanford Law Review**, v. 48, p. 1403, 1995.

LESSIG, Lawrence. **Code and Other Laws of Cyberspace**. New York: Basic Books, 1999.

LESSIG, Lawrence. **The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World**. New York: Vintage, 2001.

LESSIG, Lawrence. **Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity**. New York: Penguin, 2004.

MARSHALL, Thomas Humphrey. Citizenship and social class. *In*: MARSHALL, Thomas Humphrey. **Class, citizenship, and social development**. Westport: Greenwood, 1973 [1949]. p. 65-122.

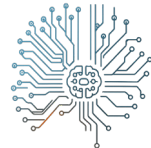
NEGÓCIO, Ramon. Dos problemas constitucionais diluídos na rede à construção de uma *lex meta*. **Revista Direito Mackenzie**, v. 17, n. 1, p. 1-22, 2023. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmd/article/download/15791/12366/77214> . Acesso em: 22 set. 2024.

NEVES, Marcelo. **Transconstitucionalismo**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

PORTUGAL. Lei n. 13, de 3 de abril de 2023. Assembleia da República. **Diário da República** n. 66/2023, Série I, p. 2-85, 2023-04-03.

QUINTARELLI, Stefano. **Instruções para um futuro imaterial**. São Paulo: Editora Elefante, 2020.





REIDENBERG, Joel R. *Lex informatica: The formulation of information policy rules through technology.* **Texas Law Review**, v. 76, p. 553, 1997.

ROBERTS, Huw *et al.* Achieving a ‘good AI society’: comparing the aims and progress of the EU and the US. **Science and Engineering Ethics**, v. 27, n. 68, 2021a.

ROBERTS, Huw *et al.* The Chinese approach to artificial intelligence: an analysis of policy, ethics, and regulation. **AI & Society**, v. 36, p. 59-77, 2021b.

RODOTÀ, Stefano. **Il corpo tra norma giuridica e norma sociale.** Nuove geometrie della mente: psicoanalisi e bioetica.-(Percorsi; 5), p. 1000-1019, 1999.

RODOTÀ, Stefano. **Tecnologie e Diritti.** Bologna. Il Mulino, 1995.

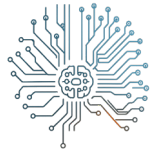
RUSSELL, Stuart. **Inteligência Artificial a nosso favor.** São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

SABA, Diana; AMATO, Lucas Fucci; BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de; PONCE, Paula Pedigoni. **Fake news e eleições:** estudo sociojurídico sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil. Porto Alegre: Editora Fi, 2021. Disponível em: <https://www.editorafi.org/2023fakenews>. Acesso em: 13 abr. 2024.

SHANNON, Claude Elwood. **A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits.** The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., New York, 1938.

SHARMA, Umang. Big Brother is watching: China has one surveillance camera for every 2 citizens! **Firstpost**, 30 mar. 2023. Disponível em: <https://www.firstpost.com/world/big-brother-is-watching-china-has-one-surveillance-camera-for-every-2-citizens-12380062.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.





SHEPARDSON, David. Trump revokes Biden executive order on addressing AI risks. **Reuters**, Washington, 21 jan. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/trump-revokes-biden-executive-order-addressing-ai-risks-2025-01-21/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

SMUHA, Nathalie A. From a “race to AI” to a “race to AI regulation”: regulatory competition for artificial intelligence. **Law, Innovation and Technology**, v. 13, n. 1, 2021.

SUSSKIND, Jamie. **Future Politics**: Living together in a world transformed by tech. Oxford: Oxford University Press, 2018.

SCIULLI, David. **Theory of societal constitutionalism**: foundations of a non-Marxist critical theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

SCIULLI, David. **Corporate power in civil society**: an application of societal constitutionalism. New York: New York University Press, 2001.

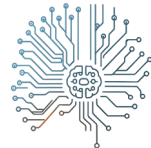
TERUEL LOZANO, German M. Fundamental rights in the digital society: towards a constitution for the cyberspace. **Revista Chilena de Derecho**, v. 46, p. 301, 2019.

TEUBNER, Gunther. **Constitutional fragments**: societal constitutionalism and globalization. Oxford: Oxford University Press, 2012.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento (UE) 2024/1689** do Parlamento Europeu e do Conselho que cria regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e que altera os Regulamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e as Diretivas 2014/90/EU, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regulamento da Inteligência Artificial), 13 jun. 2024. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202401689](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689). Acesso em: 22 abr. 2025.

UNGER, Roberto Mangabeira. **Política**: os textos centrais. Edição de Zhiyuh Cui. Tradução de Paulo César Castanheira. São Paulo: Boitempo; Chapecó: Argos, 2001 [1987].





UNGER, Roberto Mangabeira. **A economia do conhecimento**. Tradução de Leonardo Castro. São Paulo: Autonomia Literária, 2018.

UNGER, Roberto Mangabeira. **What Should the Left Propose?** London: Verso Books, 2006.

VAN DIJCK, José. Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. **Surveillance & Society**, v. 12, n. 2, p. 197-208, 2014.

VAN DIJCK, José. Ver a floresta por suas árvores: visualizando plataformação e sua governança. **Matrizes**, v. 16, n. 2, p. 21-44, 2022.

WIENER, Norbert. **Cybernetics: Control and Communication in the animal and the machine**. Second Edition. Cambridge: the MIT Press, 2019.

WEAVER, Russell L. The rise and decline of structural remedies. **The San Diego Law Review**, San Diego, vol. 41, n. 4, p. 1617-1632, 2004.

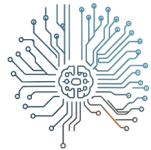
WU, Timothy S. Cyberspace sovereignty--the Internet and the international system. **Harvard Journal of Law & Technology**, v. 10, p. 647, 1996.

ZANATTA, Rafael A. F. Imunidade, desestabilização e propriedade: o sistema de direitos em Unger, *In*: TEIXEIRA, Carlos Sávio (org.), **Rebeldia Imaginada: instituições e alternativas no pensamento de Roberto Mangabeira Unger**. São Paulo: Autonomia Literária, p. 241-287, 2019.

ZIEWITZ, Malte; BROWN, Ian. A prehistory of Internet Governance, *In*: BROWN Ian (ed.), **Research Handbook on Governance of the Internet**. London: Elgar Publishing, 2013.

ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power**. New York: Public Affairs, 2019.





# COLONIALISMO DIGITAL: REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RECONHECIMENTO FACIAL PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA BRASILEIROS

Bianca Muterlle de Farias<sup>1</sup>

Thaís Janáina Wenczenovicz<sup>2</sup>

## INTRODUÇÃO

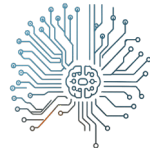
O colonialismo digital é um fenômeno de poder responsável pela expansão tecnológica a níveis globais, por modificar estruturalmente a sociedade por meio da automatização de serviços, criação de aplicativos de mensagens, aplicativos de mobilidade urbana, pela exploração e comércio de dados, criação de programas de inteligência artificial, câmeras de videomonitoramento com programas de reconhecimento facial entre outras tecnologias que surgem no decorrer dos anos.

Além da ascensão dos meios tecnológicos a revolução tecnológica vem modificando a maneira de promover a segurança pública pelos estados brasileiros. Algumas das tecnologias utilizadas pelos órgãos de segurança pública são as câmeras corporais acopladas nos coletes dos policiais militares, armas não letais e programas de reconhecimento facial. Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo investigar se os programas de reconhecimento facial são aliados eficazes para promover a segurança pública no país. Para atingir o objetivo deste artigo, utilizar-se-á o método bibliográfico-investigativo, a estratégia metodológica

<sup>1</sup> Graduação em Direito pela Universidade Regional Integrada, *Campus* de Erechim; Especialista em Direito penal pela Faculdade Damásio Educacional de São Paulo; Mestranda do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul, *Campus* de Erechim; Advogada. E-mail: bimfarias@hotmail.com.

<sup>2</sup> Docente Titular na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina. E-mail: t.wencze@terra.com.br.





de coleta de dados será realizada por meio de livros e artigos disponíveis nas plataformas de publicações, como a Plataforma de Periódicos da CAPES, o *Scielo*, banco de teses e dissertações da CAPES, com pesquisas conduzidas em português, espanhol e inglês.

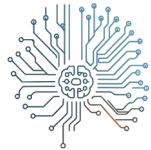
No contexto brasileiro, políticas públicas relacionadas a combater a criminalidade devem partir da análise de estudos aprofundados sobre a criminalidade em cada região do país. Do contrário, poderão não ter eficácia desejada por não atender as necessidades de cada região. Por isso, estudos relacionados a outras áreas do conhecimento, como a criminologia e sociologia, podem contribuir para a melhor compreensão do fenômeno criminal e, a partir disso, traçar parâmetros para a implementação de políticas públicas mais eficientes e que respeitem os direitos e garantias fundamentais das pessoas.

Em contrapartida, políticas públicas implementadas sem o respaldo científico e com intuito de agradar uma parcela de eleitores, podem contribuir para o aumento da letalidade policial, prisões injustificadas e, conseqüentemente, lesões a direito e garantias fundamentais de grupos marginalizados. No Brasil, há inúmeros casos de políticas públicas que não diminuíram os índices de violência, destaca-se o Decreto nº 9.845/2019 que flexibilizou as regras do Estatuto do Desarmamento possibilitando que a população tivesse acesso a armas de fogo e permitir autodefesa em casos de violência. Entretanto, os relatórios disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, verificou que a flexibilização das regras do Estatuto do Desarmamento contribuiu para o aumento de mortes violentas por arma de fogo no período de 2020 a 2024<sup>3</sup>.

A partir desses resultados, constata-se que discursos populistas não tem efeitos para reduzir a criminalidade, e muitas vezes, podem contribuir para a escalada da violência. As pesquisas sobre segurança pública também são importantes para se verificar quais crimes estão em ascensão. No 18º Anuário

<sup>3</sup> Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes/287/atlas-da-violencia-2024>. Acesso em: 10 de maio de 2025.





Brasileiro de Segurança Pública publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2024<sup>4</sup>, constatou-se a redução de crimes patrimoniais cometidos na rua, no comércio, em residências, em contrapartida aumentou as ocorrências de crimes praticados por meio virtual como estelionatos (golpes). A explicação dos pesquisadores para a mudança no cometimento de crimes patrimoniais está relacionada a maior abrangência de golpes por meio virtual proporcionando maior vantagem econômica aos criminosos. A mudança constatada pelos pesquisadores também é reflexo da transformação social promovida revolução tecnológica que permite “maior produtividade criminosa” e sem violência física.

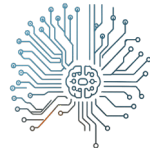
Nesse contexto, a revolução tecnológica promovida pela ascensão de meios tecnológicos, vem modificando as formas de promover a segurança pública no país. A modernidade das operações policiais é fundamental para acompanhar as mudanças sociais que exigem maior expertise dos agentes do estado. Porém, a modernidade tecnológica “vendida” pelos programas de inteligência artificial pode contribuir com o aumento de prisões injustas, da discriminação de grupos minorizados, de casos de racismo e discriminação gênero e violação de dados pessoais. A explicação é motivada por pesquisas que constataram vieses discriminatórios no desenvolvimento dos programas de reconhecimento facial, tornando-se uma tecnologia pouco confiável para ser utilizada na segurança pública.

Apesar dos vieses discriminatórios, os programas de reconhecimento facial estão sendo utilizados em vários estados brasileiros. Conforme levantamento realizado pelo Projeto Panóptico, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, estão em vigor 391 projeto que utilizam programas de reconhecimento facial no Brasil (dado atualizado em 13/05/2025)<sup>5</sup>. Nesse cenário de vigilância constante

<sup>4</sup> Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/f62c4196-561d-452d-a2a8-9d33d1163af0>. Acesso em: 10 de maio de 2025.

<sup>5</sup> Disponível em: <https://www.opanoptico.com.br/#publicacoes>. Acesso em 13 de maio de 2025.





da população e acrescido de programas com vieses discriminatórios, temos o resultado catastrófico da seletividade criminal causado por prisões injustas.

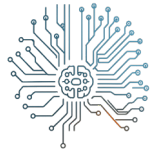
## 1 COLONIALISMO DIGITAL

O colonialismo digital é um fenômeno de poder responsável pela expansão da tecnologia a nível global, modificando estruturalmente a sociedade contemporânea, por meio da automatização de serviços na indústria, da ampliação de aplicativos de mobilidade urbana, do aumento de trabalhadores informais ligados à uberização, da hiperinformação promovida pelos aplicativos de redes sociais, da disseminação de informações falsas, do monitoramento e vigilância social, da exploração e comércio de dados pessoais e do uso indiscriminado de programas de inteligência artificial generativa na aprendizagem e produção do conhecimento.

Nesse contexto, a vida cotidiana outrora protegida pela discrição e privacidade, acessível apenas ao grupo familiar do indivíduo, tornou-se objeto de cobiça das empresas multinacionais de tecnologia, as quais transformam as informações produzidas pelos usuários em dados a serem comercializados. Esse contexto de hiper comunicação e ausência do privado promovidos pela ascensão das tecnologias são analisados por Han (2018, p. 9):

O respeito é o alicerce da esfera pública. Onde ele desaparece, ela desmorona. A decadência da esfera pública e a crescente ausência de respeito se condicionam reciprocamente. A esfera pública pressupõe, entre outras coisas, um não olhar para a vida privada. A tomada de distância é constitutiva para o espaço público. Hoje, em contrapartida, domina uma falta total de distância, na qual a intimidades é exposta publicamente e o privado se torna público. Sem afastamento [*Ab-Stand*] não é possível também nenhum bom comportamento [*An-Stand*]. Também o entendimento [*Ver-Stand*] pressupõe um olhar distanciado. A comunicação digital desconstrói a distância de modo





generalizado. A desconstrução da distância espacial acompanha a erosão da distância mental.

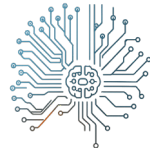
Como bem observado por Han, na citação anterior, o colonialismo digital transformou a maneira de nos comunicarmos, antes as conversas necessitavam da presença física. Hoje, a tecnologia permite diminuir a distância física, mas em contrapartida perde-se o “filtro”. Ao perde-se o filtro, as pessoas podem escrever e falar o que quiserem nas redes sociais sem se importarem com os danos de suas palavras na vida de outras pessoas.

Nesse contexto de informalidade e de “liberdade” do ambiente virtual promovido pelas multinacionais de tecnologia, temos um ambiente social hostil, preconceituoso e violento. Esse ambiente hostil é alimentado pelas políticas internas das multinacionais de tecnologia que não filtram os conteúdos dos usuários, mesmo sendo conteúdos direcionados ao ódio e a desinformação. As políticas internas adotadas pelas *Big Tech's* seguem a lógica capitalista da mercantilização de dados. A era da mercantilização de dados é muito bem descrita por Faustino (2022, p. 63):

Trata-se de uma verdadeira *acumulação primitiva digital*. Uma tendência à colonização, ou melhor, subsunção, da vida cotidiana e de seus processos cognitivos ao universo digital. Um largo passo, aparentemente sem volta, em direção à uma ciborguização cada vez mais profunda da nossa experiência e senso de realidade de forma que a objetificação e mercantilização das relações, das mais simples às mais complexas. Esse violento extrativismo, no entanto, não é um mero discurso de poder, mas o reflexo de uma disputa pelas novas matérias primas indispensáveis à ampliação e expropriação das frações de mais valor: os dados.

A mercantilização de dados dos usuários é o que mantém a hegemonia das empresas de tecnologia que lucram com a venda desses dados criando uma nova forma de capitalismo, capitalismo de dados. Assim como as fases anteriores, o colonialismo digital é sustentado pelo capitalismo envolto do meio tecnológico





o qual transformou pequenas empresas em multinacionais que dominam o mercado.

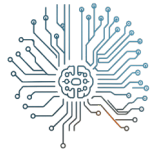
Apesar da falsa sensação de modernidade causada pelas tecnologias, o colonialismo digital possui a mesma estrutura de dominação e exploração de recursos, de trabalho e classificação de pessoas, semelhante às suas fases anteriores.

Para melhor compreensão do fenômeno colonialismo digital, é necessário retomar a discussão sobre as opressões causadas pelas fases anteriores e que se mantêm no cenário atual. Pode-se afirmar que a globalização é o resultado de um processo que começou com a constituição da América e do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado, cujo eixo fundamental é a classificação social da população mundial por meio da ideia de raça (Quijano, 2005).

Como bem descrito por Quijano, o processo de globalização do colonialismo digital não se origina a partir deste, mas origina-se dos processos de exploração e dominação dos povos das américas. A colonização dos povos do sul global se deu através do domínio pela força, das terras e riquezas dos países latino-americanos e da classificação social dos povos. Dessa forma os colonizadores moldaram as relações sociais com base na ideia de raça, como bem descrito por Quijano (2005, p. 117):

A ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da América. Talvez se tenha originado como referência às diferenças fenotípicas entre conquistadores e conquistados, mas o que importa é que desde muito cedo foi construída como referência a supostas estruturas biológicas diferenciais entre esses grupos. A formação de relações sociais fundadas nessa ideia, produziu na América identidades sociais historicamente novas: *índios*, *negros* e *mestiços*, e redefiniu outras. Assim, termos como *espanhol* e *português*, e mais tarde *européu*, que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de origem, desde então adquiriram também, em relação às novas identidades, uma conotação racial.





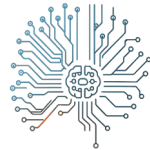
Em complemento a citação anterior, a colonização também se estendeu a opressão de gênero e sexual como descrita por Lugones (2008, p. 79):

Desde então, há permeado todas e cada uma das áreas da existência social, constituindo a forma mais efetiva da dominação social tanto material como intersubjetiva. Por outro lado, “colonialidade” não se refere somente a classificação racial. É um fenômeno abarcador, já que se trata de um dos eixos do sistema de poder e, como tal, permeia todo controle do acesso sexual, a autoridade coletiva, o trabalho, a subjetividade/intersubjetividade, e a produção do conhecimento desde o interior dessas relações intersubjetivas. Para colocar de outro modo, todo o controle do sexo, a subjetividade, a autoridade, e o trabalho, estão expressos em conexão com a colonialidade.

A categorização social, que inferiorizou os povos nativos da América Latina, não se restringiu ao fenótipo, mas se estendeu à cultura e às crenças desses povos, submetidos ao processo de “esquecimento” de seus costumes. Ao impor a classificação social da população, os colonizadores impuseram aos povos colonizados o culto a cultura europeia (vestimentas, modo de agir, religião), proibindo qualquer manifestação de outra cultura. Fanon (1961) descreve a classificação social do colonialismo como “um mundo dividido em compartimentos, habitado por espécies diferentes, com realidades econômicas diferentes e modos de vida que não logram mascarar as realidades humanas”. No processo colonial opressor, a categorização social, esse distanciamento das pessoas é promovido pela hierarquização entre os próprios colonizadores relevando outras formas de classificações, como bem descrito por Lugones (2011, p. 2):

O homem moderno europeu, burguês, colonial, se converteu em sujeito/agente, apto para governar, para a vida pública, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, senão como alguém que reproduzia a raça e o capital mediante sua pureza sexual, sua passividade, e seu apego ao lar a serviço do homem branco europeu burguês. A imposição destas categorias dicotômicas ficou





entrelaçada com a historicidade das relações, incluindo as relações íntimas.

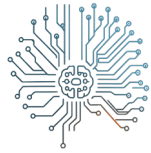
A classificação hierárquica entre os gêneros é o marcador essencial para investigar-se os reflexos do colonialismo nos direitos e liberdades voltados à igualdade das mulheres perante os homens, das mulheres brancas perante as mulheres negras e a atual violência de gênero/feminicídio.

Nesse contexto, nota-se que o colonialismo é um fenômeno muito complexo, do qual se originam inúmeros problemas sociais atuais, como o genocídio da população negra periférica, a opressão aos direitos das mulheres, o feminicídio, a exploração do trabalho, a manipulação da opinião pública, a ascensão de políticas liberais, discriminação e violência a população LGBTQIAP+. Dessa forma, pode-se afirmar que as sociedades atuais permanecem capitalistas, coloniais e patriarcais, conforme os três principais modos de dominação da era moderna: capitalismo, colonialismo e patriarcado ou, mais precisamente, heteropatriarcado (Santos, 2018).

Percebe-se que o método de dominar, explorar e impor o padrão eurocentrado como ideal a ser seguido deriva da negação do outro. Nesse contexto, define-se o outro como os latino-americanos e/ou africanos, negros, mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIAP+, ou seja, são considerados *outros* os indivíduos que divergem do padrão do homem branco, europeu e heterossexual. Ao negar a existência do outro nega-se também os problemas originados dessa negação, afirmando-se que tais realidade não possuem valor ou sequer existem (Zaffaroni, 2015).

A negação da existência do outro ou a hierarquização social, como bem descrito pelos autores citados anteriormente, não se relaciona apenas ao convívio interpessoal ou ao ambiente das redes sociais. Pelo contrário, transforma-se em política pública que seleciona grupos a serem criminalizados, que oprime direitos fundamentais em prol da “segurança” da coletividade, que promove o genocídio de negros e periféricos. No próximo tópico iremos investigar os reflexos do





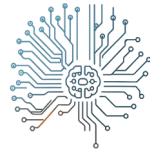
colonialismo digital nas políticas públicas voltadas à segurança pública e como o padrão de classificação social está presente.

## 2 SEGURANÇA PÚBLICA

Promover a segurança pública que atenda aos anseios da sociedade, diminuindo a incidência de crimes violentos e, ao mesmo tempo, respeitando os direitos fundamentais coletivos e individuais da sociedade, é o maior desafio do Estado. Diminuir os índices de violência, envolve investir em direitos básicos da sociedade, como o acesso à educação pública de qualidade, acesso à moradia digna, ao trabalho, ao esporte e ao lazer. Direitos básicos, previstos na Constituição Federal que são esquecidos pelos agentes do estado que buscam soluções rápidas para problemas complexos, como o caso da segurança pública. Partindo dessa lógica, os agentes do estado costumam ignorar as pesquisas sobre a criminalidade e elaboram medidas que atendem aos anseios de seus eleitores, como o caso do Decreto nº 9.845/2019 citado anteriormente. Da mesma forma, o Estado busca modernizar a segurança pública por meio de ferramentas tecnológicas pouco confiáveis, como os programas de reconhecimento facial.

No contexto contemporâneo da criminalidade no Brasil, os recentes estudos publicados pelo Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada (IPEA) traçam o panorama da violência no país e acabam demonstrando a mudança dos tipos de crimes cometidos no Brasil. Conforme citado no tópico introdutório, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública apresentou a mudança no cometimento de crimes patrimoniais, informalmente chamados de “crimes de rua”. Com a mudança promovida pela ascensão da tecnologia, mudou-se a maneira de praticar crimes patrimoniais. Antes, os crimes patrimoniais eram praticados na rua, contra pedestres, agências bancárias, meios de transporte. Hoje, esses crimes são praticados virtualmente com aplicação de golpes em larga escala.





Da mesma forma que as tecnologias possibilitaram a modernização dos crimes patrimoniais, possibilitou a criação de grupos criminosos que incitam e planejam a prática de crimes violentos, como estupro de vulnerável, induzimento ao suicídio de menores de idade, atentados a população LGBTQIAP+. Além disso, crescem os conteúdos de ódio e desinformação nas redes sociais, principalmente após a revogação dos filtros de conteúdo das operadoras das redes sociais. O contexto da criminalidade promovidas pelas novas tecnologias exige dos agentes do estado a modernização dos mecanismos legais que responsabilizam as Big Tech's pelos conteúdos divulgados nas redes sociais. A responsabilização e regulamentação das redes sociais e novas tecnologias, como inteligência artificial, são matérias que estão em discussão no Congresso Nacional (projeto lei nº 2.338/2023<sup>6</sup>) e em ações judiciais<sup>7</sup> em trâmite no Superior Tribunal Federal.

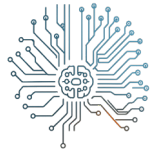
Por outro viés, estudos comprovam que a utilização de meios tecnológicos pode contribuir para a diminuição de mortes violentas, como é o caso das câmeras corporais acopladas nos policiais militares. A letalidade policial também é um dos fatores que aumentam a incidência de mortes violentas pelo país, principalmente em virtude de operações policiais desacompanhadas de estratégias operacionais. A discussão sobre a letalidade das operações policiais é matéria de discussão na ADPF n. 635 no Supremo Tribunal Federal e analisada por Cerqueira em (2025, p. 9):

A despeito das críticas feitas por policiais e por setores conservadores, que acusam a ADPF de imobilizar as polícias cariocas, ao contrário, como demonstrou FBSP (2024), no período após a implementação da ADPF, não apenas houve reversão da trajetória, como queda significativa de mortes por intervenção policial, que foram reduzidas de 1.814 registros em 2019 para 699 em 2024, como houve simultaneamente uma redução de homicídios dolosos, roubos de veículos, roubo de carga e roubo de rua.

<sup>6</sup> Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233>. Acesso em: 10 de maio de 2025.

<sup>7</sup> Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5160549>. Acesso em: 09 de jun. de 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5217273>. Acesso em: 09 de jun. de 2025.





Como demonstrado por Cerqueira, comprovou-se que a utilização de câmeras corporais, acopladas aos coletes dos policiais militares, contribuíram para a diminuição de ocorrências de mortes violentas causadas por policiais.

No contexto nacional, verifica-se uma tendência de investimentos em equipamentos de vigilância somado ao uso de programas de reconhecimento facial. No Brasil, levantamento realizado pelo Projeto Panóptico, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, estão em vigor 391 projetos que utilizam a técnica de reconhecimento facial no país (dado atualizado em 13/05/2025)<sup>8</sup>.

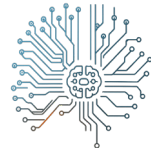
O programa de reconhecimento facial é uma ferramenta utilizada tanto pelas instituições de segurança pública quanto por empresas privadas, a fim de garantir aos usuários maior proteção contra a criminalidade. Porém, conforme crescem as aplicações dos programas de reconhecimento facial pelo país, problemas começaram a surgir, como proteção aos dados biométricos, falsos positivos e prisões injustas.

Em reportagem veiculada pelo Intercept Brasil em 2018, foi divulgado o resultado do monitoramento de programas de reconhecimento facial realizado pela Rede de Observatórios da Segurança, no mesmo ano, em cinco estados brasileiros: Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba e Ceará. O resultado das prisões e abordagens com uso de reconhecimento facial revelou que 90,5% das pessoas presas eram negras. A percentagem de prisões e abordagens realizadas por meio de reconhecimento facial distribuiu-se da seguinte forma em cada estado: Bahia 51,7%, Rio de Janeiro 37,1%, Santa Catarina 7,3%, Paraíba 3,3% e Ceará 0,7% (Nunes, 2019).

Apesar das tentativas dos pesquisadores e jornalistas em obter informações sobre as circunstâncias das prisões, não foi possível ter acesso a esses dados. Dessa forma, não há números disponíveis sobre os erros cometidos pelo uso de

<sup>8</sup> Disponível em: <https://www.opanoptico.com.br/#mapa>. Acesso em: 10 set. 2024.





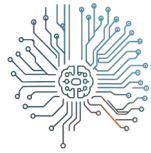
reconhecimento facial pelos órgãos de segurança pública no Brasil. A ausência de transparência acerca de erros cometidos pelo programa de reconhecimento facial dificulta a avaliação do grau de confiabilidade do programa.

Sob a perspectiva criminológica o uso de programas de inteligência artificial com vieses discriminatórios contribui para o etiquetamento social de grupos minorizados, viola os direitos fundamentais das pessoas, amplia o poder do estado sobre a sociedade e impõe a classificação social do colonialismo como regra a ser seguida. Além do mais, a implementação de programas de reconhecimento facial exige investimento em compra de equipamento, câmeras de alta resolução, treinamento de operadores. Os valores investidos em vigilância social e compra de programas de reconhecimento facial, poderiam ser melhor empregados em políticas públicas voltadas a inteligência policial e, principalmente com investimentos em educação, lazer e esporte.

### **3 RECONHECIMENTO FACIAL**

A biometria abrange o uso de uma variedade de técnicas e tecnologias para identificar indivíduos por meio de suas características fisiológicas, tais como impressão digital, face, íris, geometria e vascularização da mão, DNA e voz, ou comportamentais, como voz, expressão facial, assinatura, modo de andar (ODCE, 2020, *apud* Lapin, 2021). O reconhecimento facial constitui um procedimento complexo no qual o sistema captura a imagem do rosto (em foto e/ou vídeo), converte-a em uma impressão facial e a compara com outras já existentes na galeria (Buolawini, 2020). Essa galeria, base de dados utilizada pelo programa, é composta por impressões faciais de pessoas (imagens e/ou vídeos) a serem reconhecidas. Por exemplo, nos casos de uso de reconhecimento facial pelos órgãos de segurança pública, a base consultada é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, sistema eletrônico que monitora a realidade carcerária brasileira.





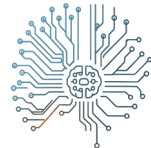
De acordo com as informações do Conselho Nacional de Justiça, o BNMP é um sistema que visa monitorar a realidade carcerária brasileira para dinamizar a comunicação entre justiça criminal, segurança pública e administração prisional. O sistema possibilita que policiais em patrulha acessem em tempo real os mandados de prisão em aberto, permitindo a identificação de pessoas procuradas ou custodiadas nas diversas categorias de prisão (civil ou penal), estejam elas em situação de prisão provisória, definitiva ou em cumprimento de medida de segurança na modalidade internação.

A integração dos sistemas permite que os operadores (policiais) do programa de reconhecimento facial identifiquem pessoas procuradas pela justiça criminal. Contudo, a tecnologia pode cometer erros, como no caso em que o BNMP não estava totalmente atualizado. Isso ocorreu com uma mulher no Rio de Janeiro, identificada pelo programa e levada à delegacia, onde os agentes verificaram que o mandado de prisão já havia sido cumprido (Coelho, 2024). Nesse incidente, a falha originou-se na base de dados (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões), não do sistema de reconhecimento facial.

No Brasil, o avanço indiscriminado de programas de vigilância social com programas de reconhecimento facial tem gerado debates no meio científico devido à baixa confiabilidade dessas tecnologias que apresentam vieses racistas, misóginos e etários. Tais características podem causar lesões a direitos e liberdades individuais, acentuar as desigualdades sociais e expandir a comercialização de dados biométricos.

Outro problema encontrado pelos pesquisadores dessas ferramentas (inteligência artificial, programas de reconhecimento facial) refere-se às falhas dos sistemas ao não detectarem um rosto como humano, seja por questões de gênero ou idade, ou por identificarem alguém de forma incorreta. Esses erros podem estar relacionados ao tipo de imagens dos indivíduos a serem analisados, como, por exemplo, fotos de baixa resolução, com iluminação insuficiente, ou às particularidades das características dos indivíduos na cidade onde essa tecnologia é aplicada.

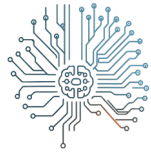




Segundo os estudos de Buolamwini (2020), o equívoco mais comum ao avaliar o desempenho dos programas de reconhecimento facial consiste em presumir que as estatísticas obtidas em um índice de referência corresponderão ao desempenho do sistema em situações do mundo real. Por exemplo, ao utilizar o programa com o perfil de homem, branco, de 20 anos, a taxa de desempenho do programa será relevante apenas para essas características. Ao empregar o mesmo programa com o perfil de mulher, branca e preta, de 20 anos, o nível de eficácia do sistema será modificado.

Nesse contexto citamos algumas notícias mapeadas pelo Projeto Desvelar entre 2010 e 2024. Com base na linha do tempo desenvolvida por Silva (2023) destacam-se os seguintes eventos: **a) out. 2013:** Busca por “Garotas Negras” resulta em conteúdo pornográfico; **b) jul. 2015:** *Google Photos* taggeou pessoas negras como “gorilas”; **c) mar. 2016:** *ChatBot* da Microsoft torna-se racista em menos de um dia; **d) maio 2016:** *Software* de análise de reincidência prejudica réus negros e favorece réus brancos; **e) nov. 2016:** Estudante do MIT denuncia vieses no reconhecimento facial; **f) fev. 2018:** APIS de sistemas de reconhecimento facial não entendem gênero/raça de mulheres negras; **g) jan. 2019:** Análise facial de emoções associa categorias negativas a atletas negros; **h) abr. 2019:** *Twitter* não vai banir nazistas algorítmicamente; **i) set. 2019:** Algoritmo de identificação de discurso de ódio discrimina linguagem afro-americana; **j) nov. 2019:** Erros de reconhecimento facial da polícia baiana traumatizam jovens negros; **l) nov. 2019:** 90,5% dos presos por reconhecimento facial no Brasil são negros; **m) jul. 2020:** *Facebook* ignorou e impediu estudos internos sobre vieses raciais; **n) jul. 2020:** Usuários negros têm 50% mais chance de serem banidos no *Instagram*; **o) out. 2021:** Uber exclui erroneamente motoristas com reconhecimento facial falho; **p) dez. 2021:** Aplicativo transfóbico também não reconhece mulheres cis negras; **q) jan. 2022:** Sistema do C6bank não reconhece correntista negro; **r) nov. 2022:** Prefeitura de SP lança edital racista para reconhecimento facial; **s) nov. 2022:** *Youtube* privilegiou Jovem Pan durante eleições; **t) maio 2023:** *Google* distribui jogo que simula escravidão para racismo recreativo; **u) jan. 2024:**





Pessoas presas no Rio com reconhecimento facial não tinham mandados; **v) jul. 2024:** Recurso do *Canvas* inclui cocaína em foto de intelectual negra; **w) set. 2024:** *Instagram* associa termos relacionados a drogas com mulheres negras; **x) set. 2024:** Estudantes negros são mais acusados de usar IA generativa; **y) out. 2024:** *Google*, *Microsoft* e *Perplexity* promovem racismo científico.

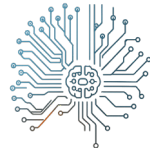
O uso dessas tecnologias pouco confiáveis pelos setores de segurança pública causa prejuízos aos direitos e liberdades individuais, devido à ausência de proteção de dados biométricos e ocorrências de prisões ilegais decorrentes de erros no reconhecimento facial. Em janeiro de 2024, duas pessoas foram reconhecidas erroneamente pelo sistema de vigilância utilizado pela cidade do Rio de Janeiro. Conforme noticiado pelo Portal de Notícias O São Gonçalo, os registros no sistema de procurados que justificaram essas detenções eram inválidos. Esses incidentes foram causados por falhas no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o qual mantém mandados de prisão expirados.

Esses casos são importantes para se discutir o uso das novas tecnologias no combate à criminalidade e na garantia de segurança em espaços públicos e privados. Além disso, é essencial avaliar o uso da inteligência artificial como ferramenta de repressão ao crime, assim como analisar os impactos sobre os direitos e liberdades individuais, já que esses sistemas operam sem exigir autorização para mapear o rosto de uma pessoa.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os programas de reconhecimento facial utilizados como ferramenta para diminuir os índices de violência nas cidades brasileiras não é uma tecnologia confiável, trazendo riscos aos direitos fundamentais individuais e coletivos. Além disso, a aplicação dessa tecnologia nas cidades brasileiras demonstra ser um desperdício de dinheiro público, que geram danos a grupos de pessoas marginalizados e não resolvem o problema da criminalidade. Sabemos que a





criminalidade é um problema complexo que é originado de vários contextos sociais. Por isso, faz-se necessário que o Poder público atue de forma estratégica, qualificando os policiais, criando programas sociais de prevenção a violência, investindo em educação pública de qualidade, promovendo a assistência básica a grupos vulneráveis, garantindo o direito à moradia digna.

## REFERÊNCIAS

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2024. São Paulo: **Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, ano 18, 2024. ISSN 1983-7364.

BUOLAMWINI, Joy *et al.* **Facial Recognition Technologies: A Primer**, 2020. Disponível em: <https://www.ajl.org/federal-office-call>. Acesso em: 20 nov. 2024.

BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. **Gender Sahdes: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification**. *In*. Conference on fairness, accountability and transparency. PMLR, p. 77-91, 2018.

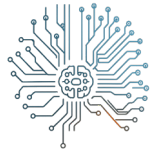
CERQUEIRA, Daniel Ricardo de Castro Coordenador, *et al.* **Atlas da violência 2025**. 2025.

COELHO, Henrique *et al.* **Mulher presa após reconhecimento facial é solta; mandado de prisão já tinha sido cumprido**. G1 – Portal de Notícias Globo, Rio de Janeiro, 4 jan. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2024/01/04/mulher-presa-apos-reconhecimento-facial-e-solta-manda-do-de-prisao-ja-tinha-sido-cumprido.ghtml>. Acesso em: 20 out. 2024.

FANON, Franz. **Os Condenados da terra**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, p. 27, 1968.

FAUSTINO, Deivison; LIPPOLD, Walter. **Colonialismo Digital, Racismo e a Acumulação Primitiva de Dados**. *Germinal: marxismo e educação em debate*, Salvador, v.14, n. 2, p. 56-78. ago. 2022. ISSN: 2175-5604.





HAN, Byung-Chul. **No exame**: perspectivas do digital. Tradução de Lucas Machado. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2018. Edição digital.

LAPIN, Laboratório de Políticas Públicas e Internet. **Noções gerais de Inteligência Artificial**. 2021. Disponível em: <https://lapin.org.br/2021/02/10/cartilha-nocoes-gerais-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 20 set. 2024.

LUGONES, María. **Colonialidad y género**. Tabula rasa, v. 9, p. 73-102, 2008.

LUGONES, María. **Hacia un feminismo descolonial**. La manzana de la discordia, v. 6, n. 2., p. 105-119, 2011.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina**. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 117- 142, 2005.

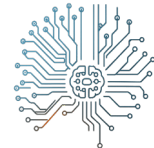
SANTOS, Boaventura de Souza. **O Colonialismo insidioso**. Espaço público. 2018.

SILVA, Tarcízio. **Mapeamento de Danos e Discriminação Algorítmica**. Desvelar, 2023. Disponível em: <https://desvelar.org/casos-de-discriminacao-algoritmica/>. Acesso em: 10 nov. 2024.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; SOUZA, Joyce; CASSINO, Jorge Francisco (org.). **Colonialismo de dados**: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

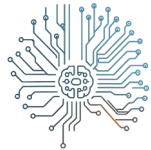
SOUZA, Joyce. Inteligência artificial, algoritmos preditivos e o avanço do colonialismo de dados na saúde pública brasileira. *In*: SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; SOUZA, Joyce; CASSINO, Jorge Francisco (org.). **Colonialismo de dados**: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. São Paulo: Autonomia Literária, p. 109-127, 2021.





ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo.** Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, vol. 7, n. 2, p. 182-243, 2015. [Universidade Federal Fluminense. Niterói, Brasil.]





## EXPECTATIVAS ALGONORMATIVAS: OPACIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS IAs GENERATIVAS

Germano Schwartz<sup>1</sup>

### INTRODUÇÃO

Torna-se lugar comum referir que algoritmos fazem parte do cotidiano da sociedade contemporânea e dos sistemas psíquicos também. Ballock (2025, p. 45) afirma que eles são “os motores invisíveis que impulsionam grande parte das nossas experiências”. A comunicação é influenciada – e selecionada – por algoritmos. A aquisição evolutiva da sociedade fez com que esses parceiros virtuais, partícipes de uma comunicação digital (Ocampo, 2024a), produtores de comunicações igualmente artificiais, tornem-se necessários mecanismos de redução de complexidade.

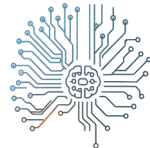
A presença constante dos algoritmos, fato que, por si só, já se constitui em complexidade, ganha um acréscimo a respeito pelo crescimento do uso das Inteligências Artificiais Generativas, e, também, de seu desenvolvimento extremamente veloz. Assim, algoritmos que se utilizam de IAs generativas passaram a ser uma constante necessária de sociedades complexas.

Esposito (2022, p. 2) revela que perto de 50% do tráfego da comunicação on-line é realizado por bots. O X, de Elon Musk, admite ter vários milhões de usuários que são bots. Nesse sentido, ainda de acordo com a autora, setenta por cento do que Wall Street negocia utiliza programas automatizados. São pequenos exemplos. Há muitos outros.

Naturalmente, o sistema do Direito não restaria deslocado dessa nova lógica, uma vez que o Direito é um Direito da Sociedade (Luhmann, 1997). De

<sup>1</sup> CEO da Fundação Universidade Caxias do Sul. Professor do PPGD (Mestrado e Doutorado) da Universidade La Salle. Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq (Nível 2). E-mail: germano.schwartz@me.com.





fato, sua função é a de manter as expectativas normativas, que, no caso presente, e como adiante se verá, são entendidas como expectativas algonormativas.

Algoritmos e IAs generativas, no entanto, possuem uma lógica paradoxal de transparência e de opacidade que os tornam fatores relevantes para o cumprimento da referida função do Direito. De que forma esse (re)processamento acontece é, portanto, o objetivo deste capítulo. Para tanto, é preciso, antes, delimitar os conceitos operacionais a serem utilizados em sua argumentação.

## **1 CONCEITOS OPERACIONAIS**

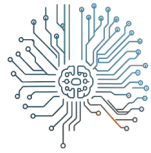
Observar a questão da Inteligência Artificial generativa agregada ao conceito de expectativas algonormativas pode ser um exercício a ser realizado sob vários aspectos. A presente proposta utiliza a Teoria dos Sistemas Sociais Aplicada ao Direito (TSAD) para apresentar como a opacidade e a invisibilidade dos algoritmos como condição paradoxal de sua transparência.

Como um necessário enfrentamento conceitual, é preciso, pois, referir de que modo os principais conceitos-chave deste ensaio são por ele compreendidos para que se possam articular seus propósitos. São os denominados conceitos operacionais defendidos por Pasold (2005). Para o presente artigo são: IAs generativas e expectativas algonormativas.

Entretanto, ambos os conceitos operacionais citados são observados a partir da teoria dos sistemas sociais de Luhmann (2012), especificamente quando aplicada ao Direito (Schwartz, 2007) Sistemas sociais são e sempre serão uma teoria de um mundo complexo em que a incerteza é condição de possibilidade (Seidl, 2013, p. 42), inclusive a que diz respeito às comunicações jurídicas (Stamford, 2021).

A teoria luhmanniana observa a sociedade como um sistema (Luhmann, 1998) e essa é uma definição gnosiológica (Luhmann, 1990). O sistema da sociedade possui como característica a comunicação (Schwartz, 2009) e é





composto por sistemas parciais que são um o ambiente do outro, e, em assim sendo, reduzem a complexidade a partir do seu entorno. Tais sistemas são autorreferentes e diferenciados funcionalmente, formando o mundo (Luhmann, 1994). Os sistemas se adaptam e evoluem a partir da autorreferência (Schwartz, 2007). E assim o fazem na medida que absorvam complexidade (IA generativa, por exemplo), resultando em aquisição evolutiva.

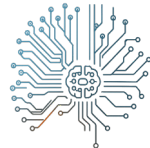
Dessa forma, não é errado asseverar que a teoria dos sistemas é uma teoria de distinções e de contraposições que se inicia desde seu ponto básico, isto é, a diferença entre sistema x entorno (Silva, 2016). Nesse sentido, os sistemas são menos complexos do que o entorno. Tais distinções proporcionam a capacidade de comunicação e a complexidade passa a ser uma questão de distinção entre elementos dos sistemas e suas relações internas e externas representadas por um código único e por uma programação idem.

Com isso em mente, uma IA generativa opera com base em modelos complexos ligados ao aprendizado de máquina, o chamado *deep learning*. Essas inteligências artificiais utilizam algoritmos que simulam processos de aprendizado, e, também, de tomada de decisões em padrões cerebrais humanos. Com base em tais modelos, padrões são identificados e se conectam a uma base de dados para responder aos *inputs* com “novos” *outputs* (Banh; Strobel, 2023). Dessa maneira, a inteligência artificial é um conceito amplo do qual o *deep learning* deriva. Tanto um quanto outro têm na IA generativa seu “estado da arte”.

Exemplos de IAs generativas presentes de forma massiva no mundo moderno são o Chat GPT, que utiliza modelos de linguagem a fim de gerar respostas e perguntas, com inúmeras outras facilidades, tais como, no caso do Direito, escolha de jurisprudência, geração de petições, interpretação de textos jurídicos, entre outros. O *Deep Seek* é seu rival, assim como o *Gemini*, da Google, o *CoPilot*, da Microsoft, entre outros.

Expectativas algonormativas (Schwartz; Costa, 2024), por outro lado, significam uma dupla contingência que derivam da necessidade de uma comunicação virtual baseada em algoritmos e que dependem de um colaborador





não humano e um sistema psíquico. O resultado é elas influírem na forma pela qual esses agentes condicionam suas expectativas em relação ao sistema do Direito, e, também, como tais decisões podem ser aceitas em determinado contexto social.

Como se vê, os dois conceitos operacionais são utilizados com base na teoria dos sistemas sociais e possuem evidentes entrelaçamentos entre si. As conexões serão abordadas a seguir para enfrentar como a opacidade e a transparência das IAs generativas se correlacionam com as expectativas algonormativas.

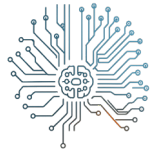
## **2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, ALGORITMOS E SISTEMA DO DIREITO**

A relação entre Inteligência Artificial e algoritmos é complexa. Recorde-se: complexidade é falta de informação na medida em que, forçosamente, faz visível a indeterminação ausente em um sistema (Direito) para que ele possa observar plenamente seu ambiente ou a si mesmo. Como a complexidade é inacessível ao ser humano, os sistemas cumprem a função de reduzi-la. Assim, uma maior complexidade tem como consectário uma menor disponibilidade de informações para os sistemas. É impossível que um sistema observe a si mesmo ou ao seu ambiente em sua totalidade. Daí a necessidade de diferenciações funcionais.

Existem algumas formas pelas quais a TSAD procura lidar com a indeterminação, e, portanto, a falta de informação. A comunicação (Luhmann, 1993) é uma delas e a confiança (Luhmann, 2000) é exemplo de outra. Entretanto, no que diz respeito ao presente capítulo, é a automação que assume relevo como mecanismo de redução da indeterminação.

Algoritmos, por definição, constituem-se em uma ordem finita de instruções para resolver um problema ou uma tarefa que sejam singulares (Hedler, 2024). Logo, sob outra ótica, sua tarefa principal é a redução da complexidade. E, dada a incompletude das informações com as quais eles lidam, também é fato que





a complexidade dos algoritmos reside tanto em sua programação interna quanto sua relação com os sistemas sociais.

A inteligência artificial generativa, por seu lado, é observada como uma aquisição evolutiva da sociedade, isto é, ao utilizar algoritmos para suas funções, ela, de fato, apresenta-se como uma “criadora” de novas imagens, novos textos, novos conteúdos, dentre outros. O aprendizado de máquina que a caracteriza é uma sobreposição de preceitos já existentes que buscam gerar outros inexistentes.

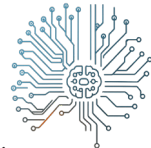
A racionalização de como a segurança e a certeza jurídica são pressupostos da estabilização do Direito é uma negativa na TSAD. A incerteza – e o risco (Schwartz, 2004) – constituem-se como elementos essenciais para se observar o Direito. De fato, a indeterminação é condição necessária para a operação do sistema do Direito.

Dessa forma, as IAs generativas que utilizam *deep learning* por meio de algoritmos, sim, reduzem complexidade, pois, em tese, suprem a falta de informação. Contudo, ao mesmo tempo, geram uma complexidade ainda maior porque ao criarem conteúdos baseados em uma indeterminação anterior, autorreproduzem a incerteza de maneira consecutiva. Em outras palavras: o sistema do Direito observa uma IA generativa como redutora e criadora de complexidade de maneira simultânea.

A utilização massiva dessas IAs generativas faz com que seja defendido estar-se, nesse momento, em uma transição de uma sociedade da informação (Castells, 2000) para uma sociedade algorítmica, cuja maior característica é o pretenso do domínio da informação por meio das IAs generativas. Poder-se-ia dizer que se está perante a um caos comunicativo. E caos necessita de ordem (Teubner, 2006). Uma “overdose” de comunicações jurídicas poderia causar o bloqueio (Neves, 2007) das correlações dos sistemas parciais da sociedade, provocando desdiferenciação (Mascareño, 2012).

No entanto, a partir da TSAD, é incorreto afirmar que o presente se caracteriza por uma sociedade algorítmica. A dimensão temporal da teoria de Luhmann é facilmente aplicável ao Direito e seu desejo de controlar o futuro





(Luhmann, 1976). O presente é o ponto distintivo entre o passado e o futuro. É instantâneo e se esvai no exato momento em que se distingue o antes do depois.

Significa dizer, portanto, que para se ter uma definição precisa do que vem antes ou depois é necessário um advento modificante das condições estruturais da sociedade, fazendo surgir um futuro imprevisto. É o caso, por exemplo, da Revolução Francesa. Não é, ainda, o caso dos algoritmos, mesmo que a possibilidade de um advogado peticionar por meio de IA generativa seja algo outrora impensável.

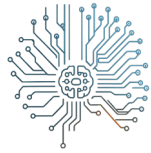
A questão é saber se os algoritmos e as IAs generativas fazem parte de sociedades complexas. Como já dito anteriormente, a ideia de complexidade reside na gestão de riscos. Logo, os algoritmos, com sua antiga origem (He, 2024), estão ligados à ideia de redução de complexidade, assim como as IAs generativas. Muito embora não sejam eles a razão de uma sociedade complexa, fato é que delas fazem parte.

No sistema do Direito, algoritmos e IAs generativas são uma realidade e cumprem várias tarefas, como, por exemplo, analisar documentos e contratos, redigir peças jurídicas, realizar pesquisas, monitorar atividades legislativas, dentre outros. E estão a desempenhar tais tarefas de modo silencioso, porém silenciar (Luhmann, 1994) é, também, comunicar e essa comunicação é o que torna o silêncio importante. Lidar, pois, com a opacidade e com a transparência das IAs generativas é essencial para observar como as expectativas algonormativas com elas se correlacionam.

### **3 OPACIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS IAS GENERATIVAS NO SISTEMA DO DIREITO**

A TSAD é uma teoria que lida com paradoxos de maneira rotineira no âmbito do Direito (Teubner, 2006), uma vez que sua ideia de autopoiese do Direito





o observa como um sistema autorreferente, isto é, capaz e se autorreproduzir por meio de suas próprias operações, na maioria das vezes aquelas decisões baseadas em seu código específico (*Recht/UnRecht*) e em sua programação específica.

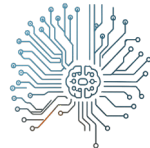
Nesse sentido, o paradoxo fundante do sistema do Direito é o de que ele, o Direito, é válido unicamente porque somente ele é capaz de afirmar sua validade (Luhmann, 2004). Trata-se de um fundamento que não possui fundamento, tal como o zero na matemática. Acaso esse ciclo seja explicitado ocorre o risco de paralização do sistema. O direito “esconde” esse paradoxo por meio de elementos tais coma a Constituição, a jurisprudência, a doutrina, dentre outros (Luhmann, 1995). Eles ofertam a sensação de que existe um fundamento, objetivo, “externo” ao Direito.

A desaparadoxização (Clam, 2006), no Direito, não é resolução de paradoxos. Trata-se de gerenciamento. Uma complexidade observável é seu objetivo. Há, pois, operações que assim se orientam. Um exemplo é o fato de que normas inferiores devem buscar validade em normas superiores (decretos em leis ordinárias, por exemplo). Outro exemplo de como se lidar com paradoxos é a existência de exceções e de contra exceções, como é o caso da necessidade de se decidir podendo adiar a decisão.

Com isso, o sistema do Direito necessita, também exemplificando – vide casos de judicialização da saúde (Schwartz, 2023) - decidir entre seguir de modo estrito a determinada norma (Lei dos Planos de Saúde) ou aplicar princípios tais como a dignidade humana ou a razoabilidade. Quando isso ocorrer, haverá um contorno ao paradoxo, porém sua existência não será eliminada. Logo, não se trata de coerência interna do sistema do Direito e sim, estabilidade de suas operações frente a uma sociedade complexa.

A mesma lógica se aplica aos algoritmos e à Inteligência Artificial Generativa. Eles operam de modo paradoxal, entre a opacidade e a transparência. Por ter falecido em 1998, antes do advento das IAs generativas, era previsível que Luhmann não abordasse o tema e nem mesmo o correlacionasse com a função do Direito (manutenção de expectativas normativas).





De forma bastante preliminar, todavia, Luhmann (2007, p. 235-237) enfrenta o paradoxo das Inteligências Artificiais – sem falar, ainda, das IAs generativas. O ponto central de seu argumento está em procurar saber se uma IA está predisposta a produzir uma equivalência – ou superioridade – em relação às consciências (sistemas psíquicos). Na hipótese de isso ocorrer, outra questão surgiria: de que forma essas (as)simetrias seriam (re)processadas pelos diferentes sistemas da sociedade? O Direito, por exemplo, seria influenciado por tal relação? O argumento do presente capítulo é o de que o conceito de expectativas algorítmicas é capaz de responder à questão.

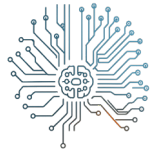
Nessa linha de raciocínio, tome-se em consideração que a Inteligência artificial é algo relativamente antigo, uma vez que existem discussões a seu respeito em congressos desde o ano cinquenta do século passado (Luhmann, 2007, p. 235). Ocampo (2024b, p. 11) recorda:

Apesar de sua barulhenta atualidade, a inteligência artificial não é um tema novo. Sua história remonta há pelo menos um século, com as invenções de Alain Turing. Seu nome, por sua vez, foi concebido por John McCarthy no período pós-Segunda Guerra Mundial. Os avanços no processamento de big data, algoritmos de decisão de programação, aprendizado de máquina, entre outros desenvolvimentos vêm se acumulando há quase duas décadas. Até mesmo os chatbots já existem há vários anos.

De qualquer sorte, o paradoxo, para Luhmann (2007, p. 236), reside em como se dá a conexão entre a profundidade e a superfície. As telas – e no mundo atual elas são inúmeras – correspondem à superfície. Seus comandos são limitados quando contrapostos aos sentidos humanos. A Internet, por exemplo, possui uma surface web e uma outra, a deep web (Wendt, 2016). Esta é menos acessível do que aquela.

Já a profundidade, em si, é o hard, a máquina, ou, em outras palavras os algoritmos que impulsionam as IAs generativas. Eles são capazes de se autoconstituírem de modo contínuo e incessantes. Por isso é que o elo entre a





superfície e a profundidade ocorre por comandos que reduzem complexidade por meio de algoritmos. A tela diz que a IA generativa deve fazer, mesmo que esta seja invisível justamente para que aquela reste visível.

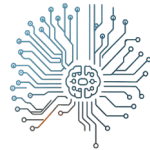
O paradoxo da invisibilidade da fundamentação do Direito é o mesmo que fundamenta a relação paradoxal entre superfície e profundidade nas IAs generativas: é preciso compreender que as decisões de ambos, antes de eventuais acoplamentos estruturais (Mascareño, 2025), requerem a observação de como as expectativas algonormativas atuam como elementos de manutenção da função do Direito perante essa nova realidade, e, também, como desaparadoxização da presença daquilo que se chama de comunicação artificial (Esposito, 2022) ou de comunicação digital mediante “parceiros virtuais” atuantes na estabilização das expectativas (algo)normativas.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente capítulo teve como objetivo observar o uso crescente das Inteligências Artificiais Generativas no sistema do Direito e com base na Teoria dos Sistemas Sociais Aplicada ao Direito (TSAD). Também procurou verificar como as expectativas algonormativas podem ser visualizadas como elementos de auxílio à desaparadoxização fundante do Direito e dos algoritmos a fim de manter a função do primeiro.

Nesse sentido, as expectativas algonormativas exsurtem como uma maneira de estruturação da dupla contingência nas comunicações (jurídicas) mediadas por algoritmos. Trata-se de expectativas cujo fundamento reside nas interações entre os sistemas psíquicos (humanos) e os algoritmos, não humanos participantes ativos da produção de sentido do Direito na sociedade contemporânea. As Inteligências Artificiais Generativas não somente influenciam, como, também fazem parte de operação interna dos sistemas do Direito, quando,





por exemplo, são utilizadas para julgar. É o caso típico da operação em um plano híbrido entre a opacidade e a transparência.

O paradoxo da opacidade/transparência das IAs Generativas, como dito, assemelha-se ao do sistema do Direito: autovalidação. Dessa maneira, tanto quanto o Direito se apoia em uma autorreferência desprovida de fundamento externo (a validade se dá unicamente porque o Direito a reconhece), os algoritmos dessa modalidade de Inteligência Artificial operam baseados em mecanismos internos que são invisíveis para o observador externo. A eficácia é manifesta na superfície, porém a lógica interna segue opaca.

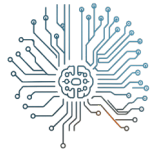
É por essa razão que as IAs Generativas apresentam-se como aquisições evolutivas da sociedade. Não se pode falar que se constituem unicamente em avanço técnico. Elas provocam mudanças estruturais no modo pelo qual o sistema do Direito observa e (re)processa seu ambiente. Por serem geradoras de “novos conteúdos” a partir de dados prévios, as IAs Generativas ampliam a contingência e a incerteza. O Direito, portanto, necessita de novas formas de estabilização das expectativas: as expectativas algonormativas.

Por fim, o papel das IAs Generativas, no sistema do Direito, impacta mais do que o modo de produção jurídica. Elas se integram à própria operação de tal sistema quando selecionadas – por seu código - e (re)processadas – por suas estruturas, por suas operações e por sua programação. Assim, ao se observar as expectativas normativas como mediadoras entre a opacidade e a transparência dos algoritmos das IAs Generativas, torna-se auto evidente a existência para possibilidades outras derivadas da correlação entre ditos algoritmos e o sistema do Direito.

## REFERÊNCIAS

BALLOCK, J. **Oligarquia Digital**. Como as Big Techs Estão Redefinindo o Poder Global. Orlando: Ballock, 2025.





BANH, L.; STROBEL, G. General Artificial Intelligence. **Electronic Markets**, 33-63, 2023.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

CLAM, J. **Questões Fundamentais de uma Teoria da Sociedade**: contingência, paradoxo, só-efetuação. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2006.

ESPOSITO, E. Comunicação Artificial? A Produção de Contingência por Algoritmos. **Revista Brasileiro de Sociologia do Direito**, v.9, n.1, 4-41, 2022.

ESPOSITO, E. Transparência Versus Explicação: o papel da ambiguidade na IA Jurídica. **Revista Direito Mackenzie**, v. 16, n.3, 1-22, 2022.

HE, J.-H. An Old Babylonian Algorithm and Its Modern Applications. **Symmetry**, v.16, 1467-1479, 2024.

HEDLER, L. Risk and DAnger in the Introduction of Algorithms to Courts: a comparative framework between EU and Brazil. **Oñati Socio-Legal Series**, v.14, Issue 5, 1315-1336, 2024.

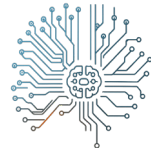
LUHMANN, N. The Future Cannot Begin: Temporal Structures in Modern Society. **Social Research**, vol. 42, n.1, 130-152, 1976.

LUHMANN, N. **Sociedad y Sistema**. La ambición de la teoría. Buenos Aires: Ciudad de México: Paidós: Barcelo: Paidós: ICE de la Universidade Autónoma de México, 1990.

LUHMANN, N. **A Improbabilidade da Comunicação**. Lisboa: Vega, 1993.

LUHMANN, N. Speaking and Silence. **New German Critique** - Winter, Issue 61, 25-39, 1994.





LUHMANN, N. Legal Argumentation: an analysis of its form. **The Modern Law Review**, 58, May, n.3, 285-298, 1995.

LUHMANN, N. **Das Recht der Gessellschaft**. Frankfurt: Suhrkamp, 1997.

LUHMANN, N. **Die Gesellschaft der Gesellschaft**. Frankfurt: Surhkampf, 1998.

LUHMANN, N. **Vertrauen**. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart: Lucius & Lucius, 2000.

LUHMANN, N. A Restituição do Décimo Segundo Camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito. *In*: ARNAUD, A. -J.; LOPES JR., D. **Niklas Luhmann**: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 33-107, 2004

LUHMANN, N. **La Sociedad de la Sociedad**. México: Herder 2007.

LUHMANN, N. **Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie**. Frankfurt: Suhrkamp, 2012.

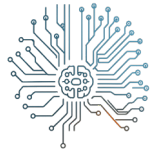
MASCAREÑO, A. Self-Chaotization in World Society: an outline for a Theory of Contextual Differentiation. **Cinta de Moebio**, v. 44, 61-105, 2012.

MASCAREÑO, A. Law and Artificial Intelligence: a matter ou couplings. *In*: ROGOWSKI, R. **Handbook on Social Systems Theory**. Draft Chapter: Forthcoming, 2025.

NEVES, M. **Constitucionalização Simbólica**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

OCAMPO, S. Como a Comunicação Artificial é Possível? *In*: SILVA, A. S.; CABRAL, A.; LIMA, A. P. **Direito Digital, Tecnologia e Sociedade**. Mapeando Temas, Práticas e Pesquisas. São Paulo: Tirant lo Blanch, p. 11-18, 2024a.





OCAMPO, S. Comunicação Digital e Participação dos Dispositivos no Mundo Social. **Revista da Brasileira de Sociologia do Direito**, v11, n.2, mai/ago, 1-21, 2024b.

PASOLD, C. L. Novos Direitos: conceitos operacionais de cinco categorias que lhe são conexas. **Revista Sequencia**, n. 50, jul., 225-236, 2005.

SCHWARTZ, G. **O Tratamento Jurídico do Risco no Direito à Saúde**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

SCHWARTZ, G. A Autopoiese dos Direitos Fundamentais. *In*: MACEDO, E. H.; STEINMETZ, W.; OHLWEILER, L. **Direitos Fundamentais**, Canoas: Editora da Ulbra, p. 41-56, 2007.

SCHWARTZ, G. Autopoiese e Direito: auto-observações e observações de segundo grau. *In*: ROCHA, L. S.; KING, M.; SCHWARTZ, G. **A Verdade sobre a Autopoiese no Direito**, Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 99-144, 2009.

SCHWARTZ, G. Os perigos da desdiferenciação e a pandemia de covid-19: o caso da hidroxicloroquina no Brasil. **Revista de Direito Sanitário**, v.23, n.1, 1-16, 2023.

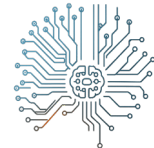
SCHWARTZ, G.; COSTA, R. A. Algonormative Expectations. **Oñati Socio-Legal Series**, v.14, Issue 5, 1337-1358, 2024.

SEIDL, D. **The Basic Concepts of Luhmann's Theory of Social Systems**. Em D. Seidl, & K. H. Becker, Niklas Luhmann and Organization Studies, Frederiksberg: CBsPress, pp. 21-53, 2013.

SILVA, A. S. La moral de la sociedad (edição Detlef Horster). Madrid; Trotta. Traduzido do original alemão: Die moral der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp Verlag [2008]. **Revista Eletrônica Direito e Sociedade - REDES** -, v.4, n.1, 229-236, 2016.

STAMFORD, A. **Decisão Jurídica na Comunicação**. São Paulo: Almedina Brasil, 2021.

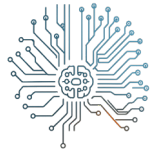




TEUBNER, G. **Dealing with Paradoxes of Law**: Derrida, Luhmann, Wiethölter. Em O. Perez, & G. Teubner, *Paradoxes and Inconsistencies in the Law*, Oxford: Hart, pp. 49-65), 2006.

WENDT, E. **Internet & Direito Penal**. Risco e Cultura do Medo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016.





# AMERICAN WAY OF LIFE DO SÉCULO XXI: OS ALGORITMOS COMO FERRAMENTA DE CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO

Julia Reinicke Job<sup>1</sup>

Fernanda Nunes Barbosa<sup>2</sup>

## INTRODUÇÃO

Os algoritmos, que antes faziam parte apenas da vida dos matemáticos, na atualidade encontram-se presentes no cotidiano de todas as pessoas ao redor do planeta, ainda que a maioria sequer saiba que eles existem ou como eles funcionam.

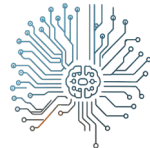
Atualmente, os algoritmos são utilizados como uma sequência de instruções computacionais precisas, capazes de solucionar um problema ou realizar uma tarefa, o que possibilita que máquinas e *softwares* processem dados e, inclusive, tomem decisões automatizadas, o que começou a ser usufruído pelo capitalismo de vigilância (Zuboff, 2020) como forma de dominação e controle da população (e do próprio mercado), que, em certa medida, ainda acredita estar agindo de forma livre<sup>3</sup>. Aliás, uma peculiaridade da indústria de tecnologia é

<sup>1</sup> Pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e pela Faculdade Dom Alberto; Graduada em Direito pela Faculdade Dom Alberto, em Santa Cruz do Sul/RS. E-mail: juliarjob@gmail.com.

<sup>2</sup> Pós-doutora em Direito pela Universidade de Sevilla; Doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Professora da Graduação e da Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPq em Direito do Consumidor da PUCRS; Advogada. E-mail: fernanda.barbosa@puers.br.

<sup>3</sup> No âmbito do direito do consumidor, o art. 3º, inc. c., da Resolução nº 39/248, de 10 de abril de 1985, da Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece como um dos “princípios gerais” da proteção do consumidor o acesso à adequada informação, a fim de capacitá-lo à **tomada de decisões informadas e de acordo com suas aspirações individuais e suas necessidades** (g.n.). Passados mais de 30 anos desde a paradigmática Resolução, o mundo da comunicação sofreu profundas transformações e a liberdade no processo





justamente a sua capacidade de esvaziar as palavras de seu significado, como ocorre, significativamente, com a palavra “engajamento” (Williams, 2021, p. 31). Portanto, na realidade, a população, o mercado e a própria democracia estão sendo influenciados e direcionados pelos agentes dos sistemas, tendo em vista a capacidade destes de armazenarem e analisarem uma quantidade incontável de dados (inclusive e especialmente, dados pessoais, reconhecidos como direito fundamental pela Constituição Federal brasileira<sup>4</sup>).

Logo, a pertinência social da pesquisa evidencia-se na medida em que se trata de tema em pauta em todas as sociedades democráticas e com algum grau de tecnologia computacional associada. Mesmo naquelas em que o grau de democracia e de desenvolvimento tecnológico experimentado é menor, é possível afirmar-se que ainda assim são afetadas, ainda que indiretamente ou em menor medida, pelos algoritmos.

No âmbito acadêmico, o trabalho também se mostra relevante, dado que os algoritmos estão em constante evolução, assim como todos os sistemas computacionais, redes sociais e mecanismos de controle e manipulação dos indivíduos, inseridos que estamos no auge da Revolução 4.0 (Magrani, 2019). Embora a temática esteja em evidência nos diversos meios técnicos impactados pela tecnologia dos algoritmos e no noticiário cotidiano, a abordagem jurídico-legislativa ainda se mostra tímida e ineficiente para acompanhar o desenvolvimento acelerado das tecnologias e seus reflexos negativos (para além dos inúmeros reflexos positivos os quais não se questiona) na vida das pessoas.

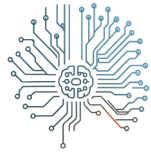
Nesse sentido, o presente artigo científico tem o propósito de analisar de que forma os algoritmos são usufruídos como ferramenta de construção e consolidação da sociedade do hiperconsumo. Para tanto, serão desenvolvidas três seções, cada uma relativa a um objetivo específico, quais sejam: (1) explicar o

---

de tomada de decisão não passa de uma falácia. No original, leia-se: “GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION: I. Objectives. 1. (...). II. General principles. 2. (...).3. The legitimate needs which the guidelines are intended to meet are the following:(...).(c) Access of consumers to adequate information to enable them to make informed choices according to individual wishes and needs; (...). Disponível em: [http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r24\\_8.htm](http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r24_8.htm). Acesso em: 10 jan. 2019.

<sup>4</sup> “Art. 5º - LXXIX, da CF/88: é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022), (Brasil, 1988).





conceito e a utilização dos algoritmos; (2) examinar a relação entre o período do *American Way of Life* com a sociedade de hiperconsumo atual; e, por fim, (3) investigar a utilização dos algoritmos de recomendação como ferramenta de solidificação da sociedade do hiperconsumo.

Com o fito de responder à problemática da pesquisa, utilizar-se-á o método de abordagem dedutivo. Em um primeiro momento serão analisadas categorias e conceitos gerais para, após, concluir-se de que forma os algoritmos são usados como ferramenta de construção da sociedade de consumo em massa, que utiliza do hiperconsumo como forma de alcançar a realização pessoal e a felicidade. “*Consumo pela emoção e compensação das frustrações da vida*: esta é a sinopse do espetáculo individualista da *hipermodernidade* e sua sociedade de (hiper)consumo” (Fachin, 2012).

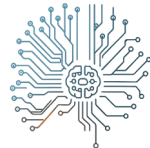
Evidencia-se que o método de procedimento será o monográfico, sendo examinado o tema escolhido em conjunto com as condições que exercem influência sobre ele, para, ao final, responder-se ao problema de pesquisa assim delineado: de que forma os algoritmos são usados como ferramenta de construção e consolidação da sociedade do hiperconsumo?

## 1 A CONCEITUAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ALGORITMOS

Os algoritmos estão presentes na civilização desde 300 a.C. e, originalmente, eram descritos no idioma árabe, sendo provenientes da matemática. Constituem um conjunto de seqüências, na tentativa de encontrar o maior divisor comum entre determinados números inteiros (Cassiani; Marchetto, 2024).

No mundo contemporâneo eles fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, estando inseridos nas redes sociais, em *sites* de busca da *Internet*, como Google, Safari e Bing, nos computadores de bordo dos automóveis, nos GPS e em diversos outros sistemas que integram o dia a dia da população, a qual é





constituída pelos usuários finais dos algoritmos (Cormen, 2014)<sup>5</sup>. Os algoritmos são espécies de máquinas inertes e sem sentido até que sejam devidamente combinadas com bancos de dados (Gillespie, 2018, p. 98), oportunidade em que passam a desempenhar papel essencial no âmbito da ciência da computação, já que são imprescindíveis para o funcionamento dos sistemas computacionais (Cassiani; Marchetto, 2024).

Destaca-se que um algoritmo é, na verdade, um conjunto de etapas elaboradas para produzir uma tarefa descrita precisamente, a fim de que um computador possa cumpri-la e apresentar, portanto, uma resolução correta para o problema com os recursos computacionais (Cormen, 2014). Além disso, eles podem ser observados em diversas aplicações, como no processamento de dados, na criação de sistemas e no aprendizado de máquinas e inteligência artificial, permitindo que estas sejam capazes de lidar com volumes grandes de dados e, inclusive, de tomar decisões automatizadas, de forma adaptável e sofisticada para cada situação específica (Cassiani; Marchetto, 2024).

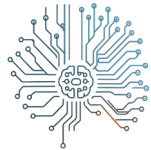
De acordo com Figueiredo (2019), os algoritmos podem ser comparados com receitas em que as máquinas acatam os passos fixados pelo programador com o propósito de gerar determinado resultado, como, por exemplo, a coleta de informações, a elaboração e a resolução de cálculos e demais atividades que, antes, apenas eram efetuadas por seres humanos.

Frisa-se que estes mecanismos atuam através da obtenção de informações proporcionadas de forma voluntária pelos usuários, quando estes criam contas virtuais, compartilham e publicam conteúdos, bem como agem por meio dos dados implícitos alcançados pelos rastros digitais dos indivíduos, como *sites* acessados, interações em redes sociais, pesquisas e compras feitas (Nunes, 2025). De acordo com Klaus Schwab (2016), os algoritmos aprendem com os rastros de dados que são deixados pelos indivíduos nos meios digitais, o que gera uma

---

<sup>5</sup> Veja-se a interessante dissertação de mestrado de Keila Comelli Alberton sobre os dispositivos vestíveis, repleta de exemplos como relógios, roupas e óculos. Os dispositivos vestíveis são tecnologias que coletam dados em tempo real enquanto são utilizadas pelas pessoas. ALBERTON, Keila Comelli. *Wearables: dados e privacidade na sociedade em rede*. 2023. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro Universitário Ritter dos Reis.





espécie de aprendizado da máquina, capaz de fazer com que os computadores e os robôs se programem de forma automatizada e encontrem resoluções impecáveis com base em princípios básicos.

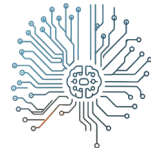
Isso posto, evidencia-se que os algoritmos, assim como os *softwares* utilizados, são invisíveis para a maioria das pessoas, que são apenas indivíduos comuns e distantes da engenharia computacional, sendo que o mercado apresenta tais códigos como um assunto que a sociedade não precisa ter conhecimento de como funciona (Silveira, 2017), já que o regime de informação, o qual constitui a maneira de dominação por meio de informações e seu processamento por inteligência artificial e algoritmos, é responsável por determinar processos políticos, sociais e econômicos, através da posse de dados usufruídos para vigilância, prognóstico de comportamento e controle, degradando “os seres humanos em gado, em animais de consumo e dados” (Han, 2022). Nessa perspectiva, surge o conceito de datificação, que significa, resumidamente, a assimilação de todos os comportamentos e aspectos da existência humana em dados<sup>6</sup>.

Dessa forma, *softwares* e algoritmos não podem ser considerados neutros, porquanto foram desenvolvidos para finalidades específicas por criadores que, na condição de pessoas humanas, são dotados de intenções, mesmo que inconscientes, normalmente voltadas para o benefício do mercado e a obtenção de lucros (Silveira, 2017). Estes mecanismos são criados para captar o maior número possível de informações a respeito dos indivíduos que os usam, originando uma rede mercadológica em que as tecnologias são mantidas pelos interesses de determinados grupos, sendo nítido que os algoritmos, constituídos por conjuntos de instruções dadas por seres humanos, não podem, então, ser considerados neutros e, nem mesmo, aleatórios (Santos, 2022).

---

<sup>6</sup> “Precisamos de novas palavras para descrever como queremos nos relacionar com nossos novos impérios da mente. Um vasto projeto de persuasão industrializada surgiu sob nossos pés. Nele, compete-se para capturar e explorar nossa atenção, e queremos dar conta das maneiras pelas quais isso representa uma ameaça a que nossas vidas pessoais e políticas sejam bem-sucedidas. O que precisamos, então, é de uma linguagem mais rica e abrangente para falar sobre a atenção. Conforme escreve Tony Judt em *O mal ronda a terra*, ‘a gente deve ser capaz de nomear um problema, se quiser resolvê-lo.’” (Williams, 2021, p. 68).



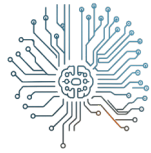


Assim, os algoritmos, que antes constituíam apenas um mecanismo rudimentar e de uso delimitado, com a criação da *internet* e das redes sociais passaram a integrar a rotina de todos os internautas, intencionalmente conectados ou não (Cassiani; Marchetto, 2024, p. 145), e são cada vez mais aprimorados - e de modo cada vez mais veloz -, conforme a interação dos usuários com a rede se intensifica. Os dados obtidos são transformados em estratégias para direcionar conteúdos, estimular e controlar comportamentos, ultrapassando o objetivo inicial de criação e funcionamento de sistemas, de modo que, quanto mais estes mecanismos avançam, mais capazes os algoritmos ficam de substituir os seres humanos (Schwab, 2016).

Para o professor Tarleton Gillespie (2018), os algoritmos possuem seis dimensões de relevância pública com valor político, cabíveis de apreciação e estudo. São elas: 1. padrões de inclusão; 2. ciclos de antecipação; 3. avaliação de relevância, que simbolizam os critérios pelos quais os algoritmos avaliam o que é relevante para o usuário; 4. promessa da objetividade algorítmica; 5. entrelaçamento com a prática; e 6. produção de públicos calculados, ressaltando-se, contudo, que nem mesmo os desenvolvedores dos referidos códigos têm conhecimento de como os algoritmos funcionarão após decorrido certo período de tempo, já que eles são capazes de aprender com os dados que coletam, resultando na autonomia decisória destes mecanismos (Silveira, 2017) e, por conseguinte, em uma imprevisibilidade.

Além disso, os algoritmos, ao analisarem os dados obtidos, definindo os perfis dos usuários e fornecendo conteúdo personalizado para cada indivíduo, com ofertas persuasivas e conteúdos que estimulam comportamentos repetitivos e criam dependência, aumentam seu tempo de rede. Diferentemente de outros períodos da humanidade, na atualidade, “a máquina matemática algorítmica promove mudanças não apenas nas relações laborais, mas também nas relações políticas e humanas, no convívio entre dois ou mais indivíduos” (Santos, 2022), na medida em que influencia, controla e explora a liberdade e comunicação da população, sendo que o sentimento de liberdade é o que, paradoxalmente, garante a dominação da sociedade (Han, 2022).





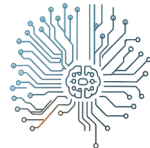
Isso ocorre porque os algoritmos de recomendação, a título exemplificativo, são capazes de assegurar que cada conteúdo ou produto exibido tenha afinidade com os usuários, o que retira a livre determinação do indivíduo, gerando, inclusive, inúmeros outros problemas éticos. Conforme alerta Shoshana Zuboff, o suposto empoderamento do indivíduo, que se imaginou que nos levaria a uma vida mais feliz com o instrumental tecnológico a nosso dispor (a exemplo da IoT), se transformou em sombra, um obscurecimento do sonho digital, que minou, fundamentalmente, a *privacidade* e a *liberdade* do ser humano. Nesse contexto, o desafio presente seria o de fazermos frente a este estado de coisas, lutando pelo nosso *direito elementar ao tempo futuro*, que é responsável pela capacidade do indivíduo de imaginar, desejar, prometer e construir um futuro. “Essa é uma condição essencial do livre-arbítrio e, de modo mais comovente, dos recursos internos dos quais extraímos a *vontade de ter vontade*.” (Zuboff, 2020, p. 32) Hoje, mais do que captar nossas informações, o que o capitalismo faz é *automatizar* nossas ações e comportamentos, modificando-os. Em sua essência, afirma Zuboff, o capitalismo de vigilância é parasítico e autorreferente. “Ele revive a velha imagem que Karl Marx desenhou do capitalismo como um vampiro que se alimenta do trabalho, mas agora com uma reviravolta. Em vez do trabalho, o capitalismo de vigilância se alimenta de todo aspecto da experiência humana” (Zuboff, 2020, p. 21).

Nesse contexto, cumpre examinar a relação que se pode verificar entre o período do Estilo de Vida Americano (*American Way of Life*) com a sociedade do hiperconsumo atual.

## 2 O AMERICAN WAY OF LIFE E A SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO ATUAL

Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa estava devastada e buscando soluções para lidar com o extermínio de parte significativa de sua



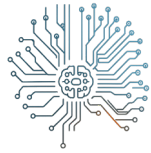


população, a destruição do território, a economia prejudicada e a vergonha diante da comunidade internacional, os Estados Unidos se erguia como potência mundial, com crescimento econômico e estratégias de comportamento interno, como o *American Way of Life* (Estilo de Vida Americano), intensificado durante o período da chamada Guerra Fria. Houve a propagação da ideologia, da cultura e do comportamento americanos, e seu padrão de vida era amplamente comparado pela mídia com a realidade adversa vivenciada pelos países do bloco comunista, liderados pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, 1922-1991). O estilo de vida da população estadunidense era baseado no incentivo à vida, à liberdade e à busca da felicidade (Afonso, 2015). Nos trinta anos gloriosos do pós-guerra, “os capitalistas se apropriaram da glória do sucesso, proclamando o livre-mercado, a propriedade privada e a livre-iniciativa como soluções definitivas para a humanidade” (Dowbor, 2022, p. 32).

Portanto, revela-se que o contexto social, econômico e tecnológico da época permitiu a ascensão do dito *American Way of Life*, com a expansão da influência dos EUA sobre todo o Ocidente, muito em razão do desenvolvimento da comunicação, como, por exemplo, a televisão, o rádio, o auge das produções cinematográficas e, conseqüentemente, o espelhamento, através dessas mídias, da proposta de estilo de vida dos americanos (Cunha, 2017), que se transformou em objeto de desejo da população europeia, amplamente impactada no pós-guerra. Inclusive quando iniciada a estabilização do capitalismo europeu, já que houve um forte encorajamento para o consumo, e a previsão da indústria estadunidense para além da obsolescência programada<sup>7</sup>, a qual incentivaria a produção destinada ao consumismo (Afonso, 2015).

<sup>7</sup> A obsolescência programada é uma estratégia utilizada pelos fornecedores e que se trata da produção de bens de consumo com uma vida útil previamente planejada para durarem menos do que poderiam durar e com isso diminuir a periodicidade do consumo, o que resulta em nítidos benefícios para o sistema capitalista e enormes prejuízos para os consumidores e para o meio ambiente. A este tema conecta-se o do chamado “direito ao reparo” (*Right to Repair*), que se caracterizaria pelo reconhecimento do direito do consumidor à obtenção das condições de reparar um bem adquirido, evitando situações em que o conserto, seja por sua onerosidade, seja por sua impraticabilidade (material; por envolver deslocamento do consumidor etc.), conduza à obsolescência do produto (Andrade, 2021).





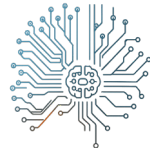
Ressalta-se que nesse período os Estados Unidos passaram a vivenciar uma revolução da tecnologia da informação, que dependeu cultural e historicamente de uma série de condições que “determinaram sua futura evolução” (Castells, 2002, p. 99). Atualmente, ela é marcada pela Revolução 4.0<sup>8</sup>, que implica na interação das tecnologias com os domínios físico, digital e biológico, visto que a inovação de base e as tecnologias emergentes difundiram-se amplamente e com alta velocidade, especialmente a partir do início do século XX (Schwab, 2016).

Desse modo, o regime de acumulação intensa, voltado para o consumo em massa, como reflexo do padrão de vida norte-americano, disseminou-se rapidamente por todo o Ocidente. Isso ocorreu porque o *American Way of Life*, por meio da propaganda intensa em todas as mídias, associava a ideia de produtos e bens à segurança, bem-estar e a preservação de um futuro próspero, em que a fartura proporcionada pelo consumo se fazia necessária (Cunha, 2017) e, assim, a sociedade europeia foi atraída para a imagem criada e disseminada de um povo com conforto e modernidade. Os europeus “viam nos objetos, nas artes, no cinema, enfim, nas projeções vindas dos Estados Unidos, um sinal de que suas vidas, que passaram pelos horrores da guerra, poderiam ser refeitas” (Afonso, 2015).

O modelo do *American Way of Life* era capaz de educar os norte-americanos, a fim de que estes honrassem o sentimento de patriotismo e, ao mesmo tempo, de conquistar novos povos, considerando a noção de que os EUA era uma potência em crescimento, com promessas de progresso, aquisição de bens de consumo, entretenimento e conforto. No contexto em questão, a posse de objetos indicava um estilo de vida feliz, promissor e vitorioso, e a felicidade apenas poderia ser alcançada se seguida a forma de vida baseada no consumismo, tão propagada pelos americanos em todas as mídias e produções culturais (Cunha, 2017, p. 67).

<sup>8</sup> Também chamada de “Quarta Revolução Industrial” ou “Indústria 4.0” e que não inclui somente máquinas e sistemas, mas, de acordo com Schwab (2016), apresenta um escopo muito maior, já que é responsável por inovações que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia e das energias renováveis à computação quântica.





O sentimento de felicidade passa a ser um produto à venda no mercado de consumo, e a sociedade busca conquistá-lo; a satisfação dos desejos e a realização pessoal passam pela aquisição de bens de consumo (Lipovetsky, 2007). O hedonismo como doutrina moral e filosófica ganha destaque à medida que encontra um mercado instrumentalizado para vender tudo que se relacione à negação das dores da existência humana.

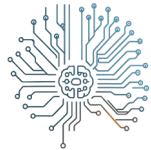
No mesmo viés, destaca-se que a sociedade de consumo é exposta a diversos significados, formação de identidades e estilos de vida, por meio da sobrecarga de imagens oferecidas a respeito do que seria uma existência ideal (Albieri; Toniol, 2020). Hoje isso ocorre especialmente por intermédio dos influenciadores digitais, que apresentam bens de consumo como ferramentas de autorrealização e de identidade, transformando a própria ideia de identidade em uma mercadoria (Han, 2022, p. 19), assim como ocorria durante o período do *American Way of Life*. Atualmente, a expressão que bem identifica esse fenômeno é a da *sociedade do hiperconsumo*, conceituada por Gilles Lipovetsky (2007) como uma coletividade em que tudo deve ser desejável e, por consequência, descartável, já que a realidade líquido-moderna, estudada e apresentada por Zygmunt Bauman (2009), é frágil e mutável, sendo tudo temporário.

Com efeito, o mercado classifica e organiza os consumidores, tidos também como produtos, com o intuito de padronizá-los, sendo que cada indivíduo deve se portar de acordo com o seu nível, a fim de se dirigir para o consumo da categoria de produtos de massa voltados para sua classificação, indicando que a indústria cultural<sup>9</sup> priva os consumidores daquilo que lhes promete, incitando ainda mais o desejo (Adorno, 2023, p. 11) e assegurando que os indivíduos sejam incapazes de eliminar os desejos de consumo por produtos (Gonçalves, 2021).

Assim, subsiste um impulso por abundância, em que a qualidade e os prazeres da vida dependem do supérfluo e da não privação de produtos, de tal forma que “quanto mais se consome, mais se quer consumir” (Lipovetsky, 2007,

<sup>9</sup> Termo utilizado por Theodor W. Adorno como uma atualização de “cultura de massa” e que representa a ideia de dominação, difusão e velocidade proporcionada pelo capitalismo.





p. 38), a fim de atingir a satisfação pessoal e a felicidade plena. Para Gonçalves (2021), o hiperconsumo é responsável por potencializar a dependência dos indivíduos pelo mercado, o que os deixa submissos e dissipa as relações sociais existentes, tudo com o propósito de fomentar ainda mais o sistema capitalista, que depende da dominação dos consumidores (assim como a dos trabalhadores<sup>10</sup>) para subsistir.

Logo, cumpre investigar o papel dos algoritmos de recomendação nos dias de hoje na condição de ferramentas de solidificação/consolidação da sociedade do hiperconsumo supracitada, com a finalidade de esclarecer o tema de pesquisa.

### 3 OS ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO COMO FERRAMENTAS DE SOLIDIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO

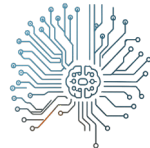
Consoante já desenvolvido, os algoritmos, em suma, atuam por meio dos dados obtidos ou indicados, definindo um perfil para cada usuário e disponibilizando, dessa forma, conteúdos e produtos personalizados de acordo com os interesses percebidos de cada indivíduo e, inclusive, conforme suas futuras decisões. Há inúmeras formas de utilização destes mecanismos, como é o caso dos algoritmos voltados para a recomendação, os quais mapeiam as preferências de cada ser humano, gerenciando as interações destes, especialmente em redes sociais e *sites* de busca (Gillespie, 2018), visto que, na era da informação, os processos dominantes giram em torno das redes, que representam a nova estrutura social dos povos (Castells, 2002).

Referidos algoritmos são capazes de garantir que os bens de consumo exibidos atendam aos interesses dos usuários, o que, indiretamente, exclui sua livre

---

<sup>10</sup> A esse respeito veja-se, dentre outros, Noam Chomsky, em obras como **Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power** (2017), quando argumenta a respeito do descrédito dos sindicatos como instrumento de controle e de poder sobre os trabalhadores.



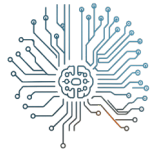


determinação diante da constante indução ao consumo pela manipulação do que lhes é mostrado. Alimentar atitudes por meio de sugestões (*nudges*), embora num primeiro momento possa parecer positivo pela economia de tempo de pesquisa que gera para o usuário, logo se mostra prejudicial pelo incentivo ao consumismo e geração de um ambiente limitado de possibilidades. Os *nudges* ou *empurrões* são “intervenções com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões, atuando como mecanismos que direcionam as pessoas para determinados caminhos”, mas “é preciso chamar a atenção para o uso prejudicial desses ‘empurrões’ na autodeterminação do consumidor no ambiente digital, como mais uma das estratégias de poder e dominação das plataformas eletrônicas no espectro do Capitalismo de Vigilância” (Verbicaro, 2023, p. 146-147).

Todas estas ferramentas tecnológicas sobrecarregam a população e, no lugar da comunicação, as programações algorítmicas averiguam a vontade geral, de modo que, segundo Byung-Chul Han (2022), a inteligência artificial acaba se tornando melhor e mais atenta ouvinte do que os próprios seres humanos. Frisa-se, em vista disso, que os algoritmos retiram da sociedade a capacidade de emancipação e autonomia, assim como impossibilitam a efetiva cidadania e transformam os usuários em meros espectadores de suas próprias vidas, representando um significativo instrumento de controle social, em que os perfis dos usuários se tornam, além disso, objetos de troca e comercialização, possuindo valor de mercado, de tal maneira que “a forma como o homem (sic) contemporâneo se apresenta nas redes sociais é, essencialmente, como mercadoria” (Cassiani; Marchetto, 2024, p. 149).

Verifica-se, pois, que o consumo se tornou o centro da vida das pessoas na era das redes sociais. O mercado passou a buscar maneiras de monitorar e analisar as preferências dos consumidores, com o fito de intensificar suas estratégias de atuação. Não se está, com isso, deslegitimando o marketing como estratégia comercial, senão que apontando a indispensabilidade de impor-lhe limites. Se por um lado o marketing (por meio de suas ferramentas de promoção) busca facilitar o conhecimento pelo consumidor tanto dos fornecedores que atuam





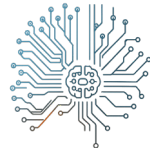
nos mercados como dos produtos e serviços à sua disposição, por outro, com a utilização dos algoritmos, os danos ocasionados são potencializados. O primordial *cyberspace* da *Internet* deu lugar a um verdadeiro *marketspace* (espaço de mercado), em que a venda, o lucro e o consumo são essenciais para a manutenção do sistema (Figueiredo, 2019), já que, pela primeira vez na história da humanidade, o regime capitalista de produção é responsável por moldar as relações sociais em todo o globo (Castells, 2002).

Enfatiza-se que o consumo hoje está presente no cotidiano de todos os indivíduos e, portanto, possui um papel relevante na estruturação de valores de construção da sociedade, dado que é capaz de moldar identidades e relações sociais, assim como delimitar mapas culturais, de tal forma que as decisões de consumo representam uma fonte imprescindível para a definição da população (Albieri; Toniol, 2020), marcada pelo aumento das desigualdades socioeconômicas que, com a continuidade do desenvolvimento da Quarta Revolução Industrial, podem ser ainda mais exacerbadas (Schwab, 2016).

Isso posto, verifica-se que, como já explicitado ao longo do texto, o internauta está inserido em uma realidade ilusória, em que não possui verdadeira autonomia, porquanto os algoritmos e a inteligência artificial influenciam suas preferências, escolhas e consumo (Cassiani; Marchetto, 2024, p. 147). Analogicamente - mas muito mais severo agora - ao que ocorrera durante o auge do período do *American Way of Life*, em que a mídia e a propaganda conduziam a população para o hiperconsumo, apresentado como necessidade primordial (Afonso, 2015) e como instrumento imprescindível para a satisfação de desejos e autorrealização, já que estes sentimentos são incutidos aos seres humanos (Lipovetsky, 2007).

Destaca-se a capacidade dos algoritmos de aprimorar as estratégias de vigilância e de controle, imprescindíveis para o capital, o que faz com que a programação algorítmica seja elaborada em conformidade com os valores e vontades das corporações que as possuem, constituem e implementam (Figueiredo, 2019). A sociedade atual está inserida em um ambiente que busca





acolher os interesses dos consumidores, de sorte que o mercado constantemente incita desejos nas pessoas para, na sequência, vender a eles o que esperam, com oferta exacerbada e imoral de produtos e serviços, adaptando os bens de consumo às tendências do momento, usufruídos pela indústria e pela publicidade para que se obtenha um alcance global (Bauman, 2009, p. 64). Alcance que nitidamente é possibilitado pelos mecanismos algorítmicos, posto que as redes, bem como seus mecanismos de formação, constituem ferramentas plenamente adequadas para o capitalismo baseado na globalização, inovação e concentração descentralizada (Castells, 2002).

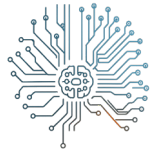
Todo esse cenário nos leva a defender a urgente necessidade de elaboração de políticas regulatórias para o setor, que prezem pela transparência e pelo respeito à dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar a liberdade de escolha dos usuários, garantir a interação mais ética nas redes e proteger os direitos fundamentais das pessoas e os interesses econômicos dos consumidores nesta ainda fragilmente compreendida realidade digital que, cada vez mais, torna-se demasiadamente intrusiva.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O presente artigo buscou analisar, de modo breve, de que forma os algoritmos vêm sendo operados como ferramenta de consolidação da sociedade do hiperconsumo, na medida em que referidas programações computacionais estão presentes no cotidiano de todos os indivíduos e se mostram cada dia mais invasivas.

Com o fito de alcançar o supracitado objetivo geral foi, primeiramente, abordado o aspecto conceitual dos algoritmos e explicitada a sua utilização, ultrapassada a fase do desenvolvimento da humanidade em que apenas representavam um termo matemático. Na atualidade, os algoritmos são verdadeiros mecanismos de transformação de toda a experiência social (inclusive





de aspectos mais elementares da sociedade, como aqueles ligados à “vida na polis”), utilizados amplamente e sem regulamentação pelo capitalismo de vigilância, notadamente em países como o Brasil, em que a realidade das instituições política e a implementação regulatória ainda necessitam de fortalecimento.

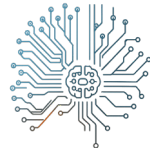
Examinou-se, posteriormente, a relação entre o período do *American Way of Life* com a sociedade do hiperconsumo atual, uma vez que o “Estilo de Vida Americano” permeou a realidade do Ocidente, especialmente durante a Guerra Fria, e transformou a cultura norte-americana, encaminhando os indivíduos para o que seria o grande momento do capitalismo e do consumismo, o que, depois, deu espaço para o surgimento da nova sociedade do hiperconsumo, agora consolidada com o uso dos algoritmos para determinação de comportamentos de consumo em escala global.

Por fim, investigou-se a utilização dos algoritmos de recomendação como ferramenta de consolidação desta sociedade do hiperconsumo, haja vista que esta modalidade de programação algorítmica é capaz de influenciar e conduzir as preferências e decisões dos consumidores, o que resulta em um artifício de dominação social impecável, dado que a grande maioria dos usuários acreditam estar agindo, de fato, com livre-arbítrio, de acordo com suas próprias ideologias e gostos, o que não condiz com a realidade.

Os objetivos específicos desenvolvidos nesta abordagem possibilitaram atingir a resposta ao problema de pesquisa previamente estabelecido. A conclusão foi que os algoritmos, em especial aqueles voltados para recomendação, são capazes de conduzir as decisões dos consumidores, os quais acreditam estar agindo segundo suas próprias vontades, bem como de influenciar a intensidade do consumo dos usuários, de forma que o mercado, regido pelo capitalismo e que possui o lucro como principal valor, induz os indivíduos à aquisição de cada vez mais bens, programados para atingir a obsolescência, com o fito de alimentar o sistema do capital.

Note-se, ainda, que embora o presente trabalho tenha se fundamentado nas pesquisas e nos trabalhos de inúmeros autores e autoras, ainda há um longo





caminho pela frente, inclusive no âmbito da regulação legal e de políticas públicas, especialmente no Brasil, país que se tomou como parâmetro para este estudo. Problemas específicos que ultrapassam o do uso indiscriminado e antiético dos algoritmos e dos dados dos usuários somam-se a outros como o da discriminação algorítmica e do uso dos algoritmos para fins antidemocráticos.

Embora algum percurso já tenha sido percorrido com grande sucesso, a exemplo de leis como o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), o Brasil ainda necessita de uma solução que dê conta dos problemas mais atuais ligados à forma de operar de plataformas digitais e sistemas de IA.

## REFERÊNCIAS

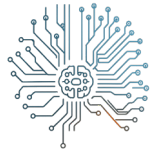
ADORNO, Theodor W. **Indústria cultural e sociedade**. 16<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.

AFONSO, Jaqueline Ganzert. O American Way of Life na reconstrução da Europa no Pós-Guerra. **Relações Internacionais no Mundo Atual**. Curitiba, n. 20, v. 1, p. 218-252, 2015. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/1183/371373022>. Acesso em: 18 abr. 2025.

ALBERTON, Keila Comelli. **Wearables**: dados e privacidade na sociedade em rede. 2023. Dissertação (Mestrado em Direito). Porto Alegre - Centro Universitário Ritter dos Reis.

ALBIERI, Sara; TONIOL, Ana Paula Nobile. O fast-fashion como fenômeno econômico cultural: moda e globalização. **Brazilian Journals of Business**. Curitiba, v. 2, ed. 3<sup>a</sup>, p. 2316-2327, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJB/article/view/13697>. Acesso em: 22 abr. 2025.





ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. Perspectivas sobre o direito à reparação: um novo direito subjetivo do consumidor. **Revista de Direito do Consumidor**, vol. 136, p. 423 - 440, Jul-Ago/2021.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida Líquida**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html).

CASSIANI, Arthur Gonçalves; MARCHETTO, Patrícia Borba. Os algoritmos e as redes sociais: análise crítica acerca do processo de reificação do usuário. **Revista de Estudos Jurídicos da UNESP**, v. 28, n. 47, p. 137-153, 2024. Disponível em: <https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/4325/3583>. Acesso em: 30 mar. 2025.

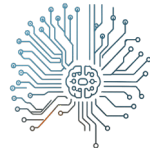
CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 6ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

CHOMSKY, Noam. **Réquiem para o Sonho Americano**: os 10 princípios de concentração de riqueza & poder. Trad. Milton Chaves de Almeida. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017.

CORMEN, Thomas H. **Desmistificando Algoritmos**. Trad. Arlete Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CUNHA, Paulo Roberto Ferreira da. **American way of life**: representação e consumo de um estilo de vida modelar no cinema norteamericano dos anos 1950. 2017. 249 f. Tese (Doutorado em Comunicação e Práticas de Consumo) — Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://tede2.espm.br/handle/tede/277#preview-link0>. Acesso em: 30 mar. 2025.





DOWBOR, Ladislau. **Resgatar a Função Social da Economia**. Uma questão de dignidade humana. São Paulo: editora Elefante, 2022.

FACHIN, Luiz Edson. Pessoa, sujeito e objetos: reflexões sobre responsabilidade, risco e hiperconsumo. *In*: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. **Diálogos sobre Direito Civil**. V. 3. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.

FIGUEIREDO, Carlos. Algoritmos, subsunção do trabalho, vigilância e controle: novas estratégias de precarização do trabalho e colonização do mundo da vida. **Revista Eptic**, Aracaju/SE, vol. 21, n. 1, p. 157-172, abril. 2019. Disponível em: <https://ufs.emnuvens.com.br/eptic/article/download/10921/8469>. Acesso em: 21 abr. 2025.

GILLESPIE, Tarleton. A relevância dos algoritmos. **Revista Parágrafo**, v. 6, n. 1, p. 95-121, jan./abr. 2018. Disponível em: <https://revistaseletronicas.fiamfam.br/index.php/recicofi/article/view/722/563>. Acesso em: 13 abr. 2025.

GONÇALVES, Antonio Baptista. Desejo na sociedade líquida de hiperconsumo. Rio de Janeiro: **Revista de Direito Público Contemporâneo**, v. 1. Jan. - Jun. 2021. Disponível em: <http://www.rdp.com.br/index.php/rdpc/article/view/125>. Acesso em: 21 abr. 2023.

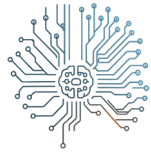
HAN, Byung-Chul. **Infocracia**: Digitalização e a crise da democracia. 5ª ed. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 2022.

LIPOVETSKY, Gilles. **A Felicidade Paradoxal**: Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

MAGRANI, Eduardo. **Entre dados e robôs**: ética e privacidade na era da hiperconectividade. 2ª ed. Porto Alegre: Arquipelago, 2019.

NUNES, Luana Esteche. **Controle Algorítmico e Liberdade de Escolha no Capitalismo de Vigilância**. Disponível em: <https://gedai.ufpr.br/controle-algoritmico-e-liberdade-de-escolha-no-capitalismo-de-vigilancia/>. Acesso em: 17 abr. 2025.





SANTOS, Rodrigo Otávio. Algoritmos, engajamento, redes sociais e educação. **Acta Scientiarum. Education**, v. 44, e52730, 2022. Disponível em: [http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S2178-52012022000100208&script=sci\\_arttext](http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S2178-52012022000100208&script=sci_arttext). Acesso em: 16 abr. 2025.

SCHWAB, Klaus. **The Fourth Industrial Revolution**. Disponível em: [https://law.unimelb.edu.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0005/3385454/Schwab-The\\_Fourth\\_Industrial\\_Revolution\\_Klaus\\_S.pdf](https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf). Acesso em: 24 abr. 2025.

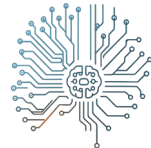
SILVEIRA, Sergio Amadeu. Governo dos Algoritmos. **Revista de Políticas Públicas**, vol. 21, núm. 1, p. 267-281, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3211/321152454013/>. Acesso em: 13 abr. 2025.

VERBICARO, Dennis. **Algoritmos de Consumo: discriminação, determinismo e solução de conflitos na era da inteligência artificial**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

WILLIAMS, James. **Liberdade e resistência na economia da atenção: como evitar que as tecnologias digitais nos distraiam dos nossos verdadeiros propósitos**. Trad. Christian Schwartz. Porto Alegre: Arquipélago, 2021.

ZUBOFF, Shoshana. **A Era do Capitalismo de Vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.





## REFLEXÕES SOBRE OS IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SOCIEDADE

Luciano Andreatta Carvalho da Costa<sup>1</sup>

### INTRODUÇÃO

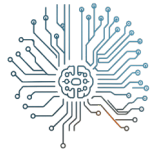
As redes sociais, para além de sua influência crescente sobre diferentes espectros da sociedade, têm exercido um impacto cada vez mais preocupante sobre os jovens, uma realidade que vem sendo objeto de estudo de autores oriundos de diferentes áreas acadêmicas (Kandaras, 2023; Desmurget, 2020; Twenge, 2018). A exposição precoce e intensa às telas digitais, especialmente às redes sociais, pode ser compatível com outras formas de dependência, até mesmo de natureza química (Kandaras, 2016). Segundo o autor, a dependência dos jovens em relação às redes sociais gera uma “estimulação excessiva do sistema de dopamina” (p. 31), responsável pelo ciclo viciante de recompensa. Essa dinâmica leva ao surgimento de sintomas como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração e isolamento social, comprometendo o bem-estar emocional e o desenvolvimento cognitivo dos jovens.

Além disso, a virtualização das relações sociais reduz drasticamente a qualidade das interações humanas. Jovens passam a preferir o ambiente virtual ao contato real, tornando-se menos empáticos e com dificuldades de interpretar emoções alheias (Kandaras, 2016; Twenge, 2018). Segundo Kandaras (2016), “nossos cérebros foram projetados para interações humanas reais, não para o estímulo superficial das redes sociais” (p. 65). Essa substituição empobrece o repertório emocional dos adolescentes e prejudica o amadurecimento afetivo,

---

<sup>1</sup> Docente Titular no Programa de Pós-Graduação em educação na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e na Fundação Liberato. E-mail: andreatta.luciano@gmail.com.





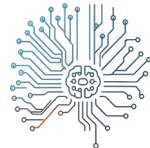
afetando inclusive a maneira como desenvolvem vínculos e lidam com frustrações cotidianas.

Em suas obras, Nicholas Kardaras constrói uma análise contundente sobre os efeitos deletérios da era digital na saúde mental, especialmente entre os jovens. O autor estabelece um paralelo entre a realidade contemporânea e os cenários de Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley (2006), e 1984, de George Orwell (1984). Kardaras cita a famosa entrevista de Huxley, em 1958, na qual o autor adverte sobre a ameaça de um novo tipo de ditadura, que se instalaria sem violência, mas por meio do prazer e da conformidade induzida: “as pessoas podem ser, de certa forma, felizes sob o novo regime, mas ficarão felizes com situações que não deveriam ficar”. Para Kardaras, essa previsão se materializa nas novas gerações, viciadas em telas e moldadas por estímulos digitais que amortecem o pensamento crítico e promovem uma felicidade artificial.

Kardaras (2016) aponta como o “Big Brother” orwelliano ganhou nova forma nas grandes empresas de tecnologia. Ele alerta: “o Big Brother na forma de Big Tech está definitivamente nos assistindo. E ouvindo. E, o mais importante, coletando dados com avidez”. Essa vigilância constante, ancorada na lógica do capitalismo de dados (Zuboff, 2020), desloca o controle do Estado para o mercado, tornando a privacidade um recurso escasso e o comportamento humano, uma mercadoria. Kardaras (2023) aprofunda o diagnóstico e propõe soluções, mostrando como as redes sociais amplificam transtornos como ansiedade, depressão e TDAH. O autor também propõe estratégias para a “desintoxicação digital”, entre elas o retorno à presença, ao vínculo humano real e ao uso consciente da tecnologia, alertando para uma realidade ainda mais complexa e perigosa: a combinação de distração massiva e manipulação algorítmica.

A interligação entre essas três referências — Kardaras, Huxley e Orwell — traça uma linha clara entre ficção distópica e realidade psíquica. O autor norte-americano une o alerta clássico dos romancistas à sua vivência clínica, criando uma denúncia ética contra o modelo de vida promovido pelas *big techs*. Huxley antecipou o conformismo anestesiado; Orwell, a vigilância opressora. Kardaras mostra que





ambos estavam certos, e que essa fusão está aos poucos adoecendo a sociedade. Ao sugerir caminhos para recuperar a sanidade, ele não apenas critica, mas aponta possibilidades de resistência — uma tarefa que exige consciência, educação crítica e limites claros ao poder das tecnologias na formação das novas gerações.

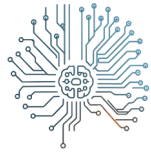
Michel Desmurget aprofunda esse diagnóstico ao apresentar dados concretos sobre os danos cognitivos causados pelo uso excessivo das redes sociais. Ele destaca que “quanto mais tempo as crianças passam diante das telas, piores são seus resultados escolares” (Desmurget, 2020, p. 54) e que o tempo de exposição digital está diretamente relacionado à queda do vocabulário e da capacidade de concentração. Para Desmurget, “o cérebro da criança não é feito para ser bombardeado por estímulos constantes; ele precisa de silêncio, tédio e leitura” (p. 89). Além disso, alerta que os algoritmos dessas plataformas são intencionalmente construídos para promover comportamentos compulsivos e maximizar o tempo de uso, comprometendo a autonomia e o senso crítico dos jovens.

Tanto Kardaras quanto Desmurget alertam que estamos diante de um problema de saúde pública de grandes proporções, que exige atenção urgente de pais, educadores e formuladores de políticas. Eles defendem limites rigorosos ao uso de redes sociais por crianças e adolescentes, além da valorização das experiências reais: brincadeiras, conversas presenciais, leitura e momentos de ócio criativo. Como destaca Desmurget, “o melhor presente que podemos dar às nossas crianças não está em uma tela, mas no tempo que passamos com elas, na escuta, na troca e na presença” (Desmurget, 2020, p. 213). Recuperar a infância como espaço de formação humana plena é essencial para combater os danos que o excesso de redes sociais tem causado ao desenvolvimento das novas gerações.

## **1 AS REDES SOCIAIS E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

A discussão sobre os impactos das redes sociais se intensifica ainda mais quando analisada à luz dos avanços da inteligência artificial. Em A Próxima



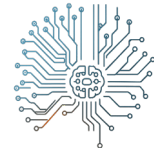


Onda, Mustafa Suleyman argumenta que estamos entrando em uma nova era em que a IA “não apenas interpretará nossas ações, mas também as antecipará e moldará” (Suleyman; Bhaskar, 2024, p. 52). No contexto das redes sociais, isso significa que algoritmos baseados em IA já não se limitam a recomendar conteúdos: eles estão se tornando proativos, manipulando preferências, emoções e comportamentos dos usuários, especialmente dos jovens, de maneira sutil e contínua. A consequência é uma amplificação das dinâmicas de dependência, polarização e superficialidade já denunciadas por Kardaras e Desmurget.

Suleyman destaca que a IA atual está sendo treinada com vastas quantidades de dados extraídos do comportamento humano online, o que inclui os padrões emocionais, os hábitos de consumo e as fragilidades psicológicas dos jovens nas redes. Essa coleta massiva de dados alimenta sistemas de personalização extremamente eficientes — mas também potencialmente predatórios. Como os autores alertam, “os sistemas de IA são projetados para otimizar métricas específicas, mesmo que isso vá contra o interesse do usuário” (Suleyman; Bhaskar, 2024, p. 135). Isso significa que a IA tende a reforçar vícios de atenção e engajamento superficial, em vez de promover bem-estar ou desenvolvimento humano. Em vez de formar cidadãos críticos e informados, as redes sociais, agora impulsionadas por IA, correm o risco de produzir consumidores passivos e emocionalmente vulneráveis.

Nesse cenário, a intersecção entre IA e redes sociais representa um desafio ético e social urgente. Se as advertências de Kardaras e Desmurget sobre os danos cognitivos e emocionais já eram alarmantes, Suleyman amplia o horizonte do problema ao mostrar que esses danos podem ser sistematicamente exacerbados por inteligências artificiais que operam com objetivos alheios ao bem comum. Ele defende a necessidade de uma regulação forte e transparente da IA, com foco na responsabilidade, inclusão e segurança. “A IA é poderosa demais para ser deixada apenas nas mãos de tecnólogos e empresas privadas” (Suleyman; Bhaskar, 2024, p. 278). A educação digital crítica e o desenvolvimento de políticas públicas que protejam os jovens desse ecossistema manipulador se tornam, portanto, essenciais para garantir um futuro mais humano e equilibrado.





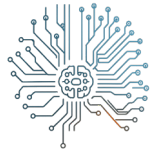
## 2 O CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA COMO MODELO ECONÔMICO

A lógica que sustenta o funcionamento das redes sociais e a crescente presença da inteligência artificial nos ambientes digitais encontra seu alicerce no que Shoshana Zuboff denomina Capitalismo de Vigilância. Segundo a autora, esse novo modelo econômico “reivindica unilateralmente a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais ocultas” (Zuboff, 2020, p. 17). No caso dos jovens, isso se traduz na captura constante de seus dados comportamentais — cliques, curtidas, tempo de permanência, padrões de navegação — que alimentam sistemas algorítmicos voltados não apenas à personalização de conteúdo, mas à modelagem preditiva e, muitas vezes, ao direcionamento de comportamento. Trata-se de um processo que transforma adolescentes em objetos de manipulação comercial e política, sem seu consentimento consciente.

A convergência entre as análises de Zuboff, Suleyman, Kardaras e Desmurget é evidente: todos apontam para o desequilíbrio de poder entre os usuários (especialmente os mais vulneráveis, como os jovens) e as grandes corporações tecnológicas. Para Zuboff, “o imperativo do Capitalismo de Vigilância não é apenas conhecer o comportamento, mas influenciá-lo e moldá-lo para servir a interesses comerciais” (Zuboff, 2020, p. 29). Esse mecanismo, operado por meio da IA e das redes sociais, contribui diretamente para os vícios digitais descritos por Kardaras e para a erosão cognitiva denunciada por Desmurget. A promessa de conexão e informação se transforma, assim, em um sistema de controle e lucro baseado na predição e na modificação automatizada do comportamento humano.

No caso dos jovens, o risco é ainda maior. Como seus cérebros ainda estão em formação, a exposição contínua a sistemas de IA otimizados para maximizar engajamento — com base em dados coletados e processados sem transparência





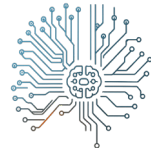
— torna-os alvos fáceis de manipulação emocional e psicológica. Zuboff adverte que estamos diante de uma “invasão epistêmica”, na qual o conhecimento sobre nós está sendo monopolizado e usado contra nós (Zuboff, 2020, p. 347). A consequência é a naturalização da vigilância digital como parte do cotidiano, tornando difícil para os jovens perceberem que estão sendo instrumentalizados por estruturas que priorizam o lucro acima de seu desenvolvimento e bem-estar.

Diante desse cenário, é urgente articular políticas públicas, práticas educativas e regulamentações que enfrentem o poder desproporcional das plataformas digitais. Suleyman, ao lado de Zuboff, sustenta que é preciso estabelecer um novo pacto social e tecnológico que coloque limites claros ao uso da IA e da vigilância comportamental. Isso inclui, por exemplo, a proibição da coleta de dados sensíveis de crianças e adolescentes, o incentivo a plataformas transparentes e éticas e a promoção da alfabetização digital crítica. Como Zuboff conclui, “a luta pela autonomia humana diante do Capitalismo de Vigilância é o grande conflito civilizacional do nosso tempo” (Zuboff, 2020, p. 539). Proteger os jovens significa, nesse contexto, proteger o futuro da democracia, da liberdade e da própria condição humana.

### 3 A LEI BRASILEIRA QUE PROÍBE O USO DE CELULARES

Com base nas discussões anteriores — envolvendo os danos das redes sociais e da inteligência artificial para os jovens, analisados por autores como Kardaras, Desmurget, Suleyman e Zuboff — a recente lei brasileira que proíbe o uso de celulares em sala de aula surge como uma resposta concreta a essa crescente preocupação. A medida reconhece os prejuízos comprovados do excesso de tempo de tela sobre o desenvolvimento infantil e juvenil. A reportagem publicada pelo GZH reforça esse posicionamento, citando Desmurget, que alerta: “o tempo de tela está destruindo os cérebros das crianças”, e que os prejuízos são “irreversíveis quando ocorrem durante os anos de formação” (GZH, 2025).





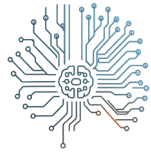
A proibição do uso de celulares em sala de aula vai ao encontro das críticas feitas por Desmurget (2020), na argumentação de que as telas atrapalham o aprendizado e reduzem significativamente a capacidade de concentração e de memória dos jovens. Ao impedir a dispersão digital durante as aulas, a nova legislação visa restaurar o espaço escolar como ambiente de atenção plena, diálogo e aprofundamento intelectual — valores que também foram defendidos por Nicholas Kardaras em sua crítica ao vício em telas. Para ele, as escolas devem funcionar como zonas de decompressão digital, protegendo os alunos da lógica viciante das plataformas.

Essa medida também se relaciona com os alertas de Suleyman e Bhaskar (2024), que analisam como a IA integrada às redes sociais manipula o comportamento dos usuários, principalmente os mais jovens, por meio de algoritmos que exploram suas vulnerabilidades cognitivas. A restrição ao uso de celulares em sala de aula, portanto, pode ser entendida não apenas como uma ação pedagógica, mas como uma forma de resistência à lógica do capitalismo de vigilância. Ao limitar a coleta de dados e a exposição a sistemas de IA predatórios dentro do ambiente escolar, a lei atua na proteção da autonomia dos estudantes.

É evidente que essa proibição, por si só, não resolve o problema mais amplo do uso excessivo das telas, mas representa um passo significativo na tentativa de restaurar o equilíbrio entre tecnologia e saúde mental. A escola, ao se posicionar contra o uso irrestrito de celulares, reafirma seu papel como espaço de formação crítica, reflexiva e humanizadora. Como destaca Desmurget na entrevista citada pela reportagem, “a primeira coisa a fazer é proibir celulares em sala de aula” (GZH, 2025). Essa ação pode e deve ser acompanhada de políticas públicas mais amplas de educação digital, apoio às famílias e regulação das plataformas digitais, com foco especial na proteção das crianças e adolescentes.

A publicação *Saúde mental e uso consciente das tecnologias por crianças e adolescentes* (Brasil, 2023), elaborada pelo Ministério da Educação, oferece importantes diretrizes para a construção de ambientes escolares e familiares que promovam o uso saudável e consciente das tecnologias digitais. Em consonância





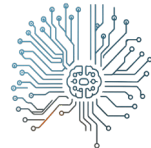
com os alertas de autores como Michel Desmurget, Nicholas Kardaras, Mustafa Suleyman e Shoshana Zuboff, o documento reconhece os impactos negativos do uso excessivo e não mediado de telas sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes. A obra institucional reforça a necessidade de estratégias intersetoriais que articulem políticas educacionais, ações de saúde mental e participação da comunidade escolar.

O ambiente escolar deve ser resguardado como espaço de concentração, diálogo e aprendizagem profunda (Brasil, 2023) — diretriz que ecoa as preocupações de Desmurget quanto à “destruição dos cérebros das crianças” e às consequências irreversíveis da hiperexposição digital durante os anos formativos.

Além de apoiar medidas restritivas no contexto escolar, o texto ainda propõe uma abordagem mais ampla, baseada na educação digital crítica, no fortalecimento das redes de apoio psicossocial e na promoção de práticas saudáveis de convivência com a tecnologia. Essa perspectiva está alinhada com os argumentos de Kardaras, que defende a transformação das escolas em zonas de descompressão digital, e com Suleyman, que denuncia os efeitos da inteligência artificial, integrada às redes sociais, sobre a autonomia dos jovens. Ao alertar para os mecanismos algorítmicos que manipulam emoções, desejos e comportamentos, o autor reforça a importância de políticas públicas que limitem a ação predatória dessas plataformas no cotidiano infantil e juvenil.

O documento também ressalta o papel das famílias e da sociedade civil na regulação do uso das tecnologias, propondo a escuta ativa e o diálogo intergeracional como formas de construir um pacto coletivo em defesa da saúde mental das novas gerações. Essa dimensão comunitária se conecta à crítica de Zuboff ao capitalismo de vigilância, ao propor que a proteção dos dados e da privacidade digital seja incorporada ao currículo escolar como elemento essencial da formação cidadã. A restrição ao uso de celulares nas salas de aula, nesse contexto, deve ser entendida não como censura, mas como parte de uma política ética e educativa de resistência às lógicas de captura de atenção promovidas pelas grandes corporações tecnológicas.





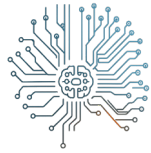
Em síntese, a convergência entre os dados apresentados pelo MEC e as críticas teóricas de autores como Desmurget, Kardaras, Suleyman e Zuboff fortalece o argumento de que o combate ao uso excessivo de telas por crianças e adolescentes deve ser multifacetado. A interdição do celular em sala de aula é uma medida emergencial, necessária e bem fundamentada, mas que precisa ser acompanhada de ações formativas, políticas regulatórias e investimentos em saúde mental. O objetivo final não é o banimento da tecnologia, mas sua reintegração em contextos que respeitem o ritmo de desenvolvimento humano e garantam a construção de sujeitos autônomos, críticos e saudáveis.

### 3.1 ANÁLISE

Diante da análise dos autores estudados, evidencia-se que o impacto das redes sociais e das tecnologias baseadas em inteligência artificial sobre os jovens transcende o plano comportamental, alcançando dimensões cognitivas, afetivas, sociais e políticas. O que se desenha, segundo Kardaras, Desmurget, Suleyman e Zuboff, é uma reconfiguração profunda dos modos de subjetivação na contemporaneidade, orientada por lógicas de estímulo, vigilância e manipulação, operadas por grandes corporações tecnológicas sob o signo do lucro. Tal constatação exige um posicionamento crítico da academia, sobretudo nas áreas da educação, psicologia, comunicação e políticas públicas.

O paradigma digital atual tem promovido, conforme demonstrado, uma substituição paulatina das experiências relacionais presenciais por interações mediadas por dispositivos, acarretando prejuízos significativos ao desenvolvimento neuropsicológico e emocional dos jovens. O sistema de recompensa dopaminérgico, continuamente estimulado por notificações, curtidas e visualizações, cria dinâmicas de dependência digital, cujos efeitos são comparáveis aos vícios químicos. Tal quadro, descrito por Kardaras, é agravado





pela ausência de mediações sociais efetivas que orientem o uso consciente dessas tecnologias.

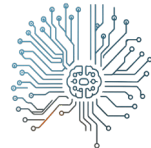
Ao se considerar a crescente sofisticação dos algoritmos de recomendação, alimentados por sistemas de IA, torna-se evidente que a manipulação do comportamento não é acidental, mas estruturante das plataformas digitais. Como argumenta Suleyman, tais sistemas são projetados para antecipar e moldar preferências, agindo sobre a dimensão pré-reflexiva dos usuários. No caso dos jovens, que ainda não consolidaram plenamente suas capacidades críticas e autorregulatórias, os riscos são ainda mais alarmantes, sobretudo no que diz respeito à autonomia, à identidade e à formação cidadã.

Essa realidade está ancorada em um modelo econômico que Zuboff denomina Capitalismo de Vigilância, caracterizado pela apropriação unilateral da experiência humana como fonte de valor comercial. A coleta massiva de dados comportamentais, realizada de forma opaca, sustenta sistemas de predição que, longe de apenas conhecer os usuários, buscam moldar suas ações futuras. A naturalização desse modelo representa um desafio epistemológico e ético à democracia, pois altera silenciosamente as condições de liberdade, privacidade e agência dos sujeitos.

No contexto educacional, a presença ubíqua dos dispositivos móveis e o uso irrestrito de redes sociais têm comprometido a atenção, a memória e a capacidade de aprofundamento intelectual dos estudantes. A legislação brasileira que restringe o uso de celulares em sala de aula deve ser compreendida como um gesto de contenção diante desse cenário. Embora não resolva a complexidade do problema, a medida reitera o papel da escola como espaço de formação crítica e proteção simbólica contra os efeitos deletérios da hiperconectividade.

Contudo, o enfrentamento dessa problemática exige mais do que medidas proibitivas. É necessário articular ações pedagógicas de alfabetização digital crítica que capacitem os jovens a compreender os mecanismos que regem o funcionamento das tecnologias digitais. Formar sujeitos capazes de operar criticamente no ambiente digital implica promover uma cultura de consciência





ética, reflexão e responsabilidade no uso das mídias, o que pressupõe também a formação contínua de educadores e a mobilização das famílias.

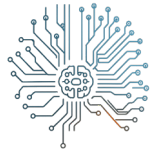
A pesquisa e o debate acadêmico devem, portanto, assumir papel central na construção de alternativas ao modelo hegemônico de interação digital. É preciso tensionar as relações entre tecnologia, subjetividade e poder, produzindo conhecimento comprometido com a emancipação e o bem-estar dos sujeitos. Essa tarefa inclui o desenvolvimento de propostas de regulação pública, modelos de design ético de plataformas e políticas de proteção à infância e juventude no ambiente digital.

Em síntese, o avanço das tecnologias digitais, quando não regulado e criticamente analisado, compromete dimensões essenciais da experiência humana. A escola, a universidade e os espaços de formulação política precisam se unir no enfrentamento dos efeitos nocivos do capitalismo de vigilância, com vistas à construção de um futuro tecnológico orientado por valores democráticos, humanistas e inclusivos. A defesa do desenvolvimento pleno dos jovens, nesse contexto, é também a defesa da liberdade, da democracia e da dignidade humana.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Diante da análise empreendida ao longo deste trabalho, torna-se evidente que o impacto das redes sociais e da inteligência artificial sobre os jovens configura um dos desafios mais urgentes do nosso tempo. As obras de Nicholas Kardaras, Michel Desmurget, Mustafa Suleyman e Shoshana Zuboff convergem em um diagnóstico preocupante: vivemos uma era em que o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das novas gerações está sendo moldado por estruturas tecnológicas que priorizam o lucro, a vigilância e a manipulação comportamental em detrimento do bem-estar humano. As plataformas digitais, especialmente quando aliadas à inteligência artificial, deixaram de ser apenas





meios de comunicação ou entretenimento, passando a exercer influência direta na formação da subjetividade juvenil.

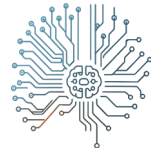
Essa constatação é particularmente grave no que se refere à saúde mental dos adolescentes. Os estudos de Desmurget e Kardaras evidenciam que o uso excessivo de telas está associado à queda no desempenho escolar, à dificuldade de concentração, ao empobrecimento do vocabulário e ao aumento de quadros de ansiedade e depressão. A dependência gerada pelas redes sociais, ancorada em mecanismos de recompensa dopaminérgica, compromete a autonomia e a capacidade crítica dos jovens, tornando-os mais vulneráveis à influência externa e à superficialidade das relações mediadas por dispositivos.

Quando inserimos a inteligência artificial nesse cenário, como fazem Suleyman e Zuboff, o quadro se torna ainda mais alarmante. Os algoritmos não apenas organizam o conteúdo, mas moldam ativamente comportamentos, desejos e emoções, configurando um ambiente digital onde o jovem é constantemente monitorado, analisado e induzido a determinados padrões de consumo e interação. Trata-se de um modelo econômico e tecnológico que transforma a experiência humana — especialmente a dos mais jovens — em mercadoria, submetendo-a a lógicas de otimização algorítmica que ignoram por completo as necessidades do desenvolvimento humano.

A legislação brasileira que restringe o uso de celulares em sala de aula representa, nesse contexto, uma resposta concreta e necessária. Embora não resolva integralmente os desafios colocados pelas tecnologias digitais, essa medida aponta para a urgência de se estabelecer limites claros ao uso das telas em espaços de aprendizagem. Mais do que proibir, trata-se de proteger: proteger o espaço escolar como território de concentração, vínculo e pensamento crítico; proteger os jovens da lógica incessante de distração promovida pelas plataformas; proteger, em última instância, a própria possibilidade de formação plena.

Além disso, como apontado pelas diretrizes do Ministério da Educação, o enfrentamento aos impactos negativos das redes sociais e da inteligência artificial requer uma abordagem intersetorial, que envolva famílias, escolas, profissionais da





saúde, pesquisadores e legisladores. A promoção de uma educação digital crítica, aliada a políticas públicas de proteção de dados, saúde mental e inclusão social, é essencial para reequilibrar a relação entre os jovens e a tecnologia. O desafio não é rejeitar o digital, mas integrá-lo de forma ética, consciente e saudável aos processos de formação humana.

Em suma, as análises aqui discutidas reafirmam que a luta contra os danos causados pelas redes sociais e pela inteligência artificial não se dá apenas no campo da saúde ou da educação, mas no âmbito da própria democracia. Ao moldar o comportamento, a atenção e o desejo das novas gerações, as *big techs* estão redefinindo os contornos da cidadania e da liberdade. Proteger os jovens, portanto, significa proteger o futuro — um futuro em que a tecnologia esteja a serviço do humano, e não o contrário.

## REFERÊNCIAS

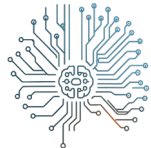
BRASIL. Ministério da Educação. **Saúde mental e uso consciente das tecnologias por crianças e adolescentes**. Brasília: MEC, 2023.

DESMURGET, Michel. **A fábrica de cretinos digitais**: os perigos das telas para nossas crianças. Tradução de Débora Fleck. São Paulo: Vestígio, 2020.

HUXLEY, Aldous. **Admirável mundo novo**. Tradução de Vidal de Oliveira. São Paulo: Globo, 2006.

JORNAL ZERO HORA. “**O tempo de tela está destruindo os cérebros das crianças**”, alerta neurocientista francês. GaúchaZH, Porto Alegre, 7 fev. 2025. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/2025/02/o-tempo-de-tela-esta-destruindo-os-cerebros-das-criancas-alerta-neurocientista-frances-cm6pit50f00bj0176l6iyopz9.html>. Acesso em: 3 maio 2025.





KARDARAS, Nicholas. **Glow kids**: como a dependência de telas está deixando nossos filhos apáticos, distraídos e infelizes. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. São Paulo: Figurati, 2016.

KARDARAS, Nicholas. **Insanidade digital**: como as redes sociais estão afetando nossa saúde e o que fazer para recuperar a sanidade. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. São Paulo: Figurati, 2023.

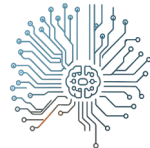
ORWELL, George. **1984**. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SULEYMAN, Mustafa; BHASKAR, Michael. **A próxima onda**: tecnologia, poder e o maior dilema do nosso tempo. Tradução de Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

TWENGE, Jean M. **iGen**: por que os superconectados de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes — e completamente despreparados para a vida adulta. São Paulo: Editora XYZ, 2018.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Tradução de George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.





# EFICIENTISMO NA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA ESFERA PENAL<sup>1</sup>

Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth<sup>2</sup>

Milena Cereser da Rosa<sup>3</sup>

Leonardo Unser Guerra Moletta<sup>4</sup>

## INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico aplicado ao campo da segurança pública, objetivando a garantia de práticas efetivas de proteção da população, mecanismos de vigilância são utilizados com mais frequência, como por exemplo o uso de câmeras de monitoramento, inteligência artificial, integração de banco de dados, *softwares* de reconhecimento facial, entre tantos outros dispositivos tecnológicos existentes para essa finalidade. Nesse contexto, as informações obtidas por esses diversos recursos são convertidas em dados e estes, por sua vez, são armazenados em bancos de dados pessoais que poderão servir de fontes aplicáveis em investigações criminais, bem como na formulação de políticas de segurança pública.

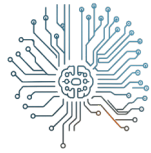
<sup>1</sup> Artigo desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa “Políticas públicas inovadoras para a monitoração eletrônica no Brasil: entre os discursos legitimadores e a percepção dos sujeitos monitorados” (Processo nº 402702/2023-9 - Chamada CNPq/MCTI nº 10/2023 - Faixa B - Grupos consolidados).

<sup>2</sup> Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Pós-Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Mestre em Direito pela UNISINOS; Pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul; ID Lattes: 0354947255136468. E-mail: madwermuth@gmail.com.

<sup>3</sup> Doutoranda em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul; Bolsista do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação - Alteridade na Pós-Graduação (PDPG/CAPES); Mestre em Direito pela UNIJUÍ, com bolsa do Programa de Cooperação Acadêmica em Segurança Pública e Ciências Forenses (PROCAD/CAPES); Especialista em Ensino de Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas; Professora do curso de graduação em Direito da UNIJUÍ; Advogada. ID Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1552482259294228>. E-mail: milenacereser@outlook.com.

<sup>4</sup> Acadêmico do Curso de Graduação em Direito na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul; ID Lattes: 5990602472028026. E-mail: leonardo.unser.moletta@gmail.com.



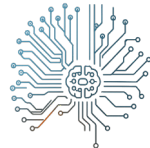


Porém, diante da infinidade de dados pessoais que são produzidos pela sociedade digital, bem como pela captação de dados através dos mecanismos tecnológicos de segurança pública - muitos destes originários da esfera privada do indivíduo - imperioso analisar a ausência de limites e requisitos para o acesso, por parte dos órgãos de segurança pública, a essas informações. Esse contexto de inexistência de limitações ao tratamento de dados pessoais em determinadas situações se dá em razão da atual Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ser inaplicável para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e nos casos de persecução penal (Brasil, 2018). Assim, a depender da especificidade para a qual serão utilizados os dados pessoais, como no caso das exceções de aplicabilidade da LGPD, surgem hipóteses que irão transcender as questões de privacidade e intimidade dos sujeitos.

Sob esse aspecto, em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (2018), foi comparada a evolução da percepção dos brasileiros com a de 124 países acerca dos temas considerados mais sensíveis naquele contexto, estando dentre estes o medo da violência, a descrença no sistema político e a falta de confiança estatal, verificando-se que 68% da população brasileira sente-se insegura ao andar à noite na área de moradia, situação que elenca o Brasil como o segundo maior país com medo de violência. Essa constante insegurança é decorrente dos altos índices de criminalidade observados no país, conforme evidencia o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024).

Além dos altos índices de criminalidade apresentados pelo referido relatório todos os anos, outro fator incentiva a permanência desse cenário de insegurança, através do impulsionamento das situações pela atuação midiática pautada na espetacularização da violência e na amplificação de contextos de constante temor. Com isso, observa-se uma demanda por parte da sociedade para que os dirigentes do país adotem medidas com vistas a coibir a criminalidade, com o intuito de proteger a população das atrocidades cotidianamente veiculadas pelos meios de comunicação. A partir da disseminação dessa cultura do medo, ao Estado é atribuída uma espécie de aval contendo poder ilimitado quando a





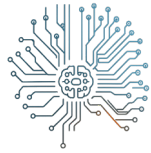
temática gira em torno da efetivação da segurança do corpo social, legitimando as atividades de uma espécie de *Big Brother* – tal como proposta por George Orwell na obra *1984*, na qual, em um mundo distópico, este personagem exerce o controle de todas as informações e comportamentos da sociedade por meio das “teletelas” (Orwell, 2003).

Para tanto, diante do atual contexto em que impera a cultura do medo, além das incertezas que essa expansão tecnológica no âmbito da segurança pública tem apresentado, principalmente no que tange aos limites possíveis frente aos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente e aos direitos humanos, o presente artigo busca analisar o déficit legislativo brasileiro acerca do direito fundamental à proteção de dados pessoais na esfera penal, considerando as práticas voltadas para a eliminação desse “inimigo comum” que fomentam o eficientismo na política de segurança pública. Sendo assim, utilizando-se do método de pesquisa hipotético-dedutivo, mediante o emprego de técnica de pesquisa bibliográfica e documental, inicialmente objetiva-se compreender o direito à proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental para, posteriormente, analisar a (in)efetividade desse direito na esfera penal, em decorrência do eficientismo na política de segurança pública incentivado pela cultura do medo.

## **1 O DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL**

Primordialmente, para compreender a figuração do direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental faz-se necessária uma análise histórica de sua origem e consolidação normativa. Sob este aspecto, há uma inerente conexão entre o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, sendo o primeiro presente nas construções sociais desde a Antiguidade, passando por grandes transformações até ramificar-se no segundo. Fora isso, ambos encontram guarida no princípio da dignidade da pessoa humana, visando garantir, mesmo





na era da *Big Data*<sup>5</sup>, uma forte presença estatal na segurança sob os dados pessoais e de seus subordinados.

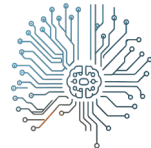
Visando pontuar a fonte originária do direito à proteção dos dados pessoais, é pertinente destacar a noção de privacidade durante toda a construção histórica no decorrer das diversas fases da vivência humana em sociedade até o entendimento de seus múltiplos sentidos na contemporaneidade. Nos primórdios, o conceito de privacidade baseava-se limitadamente ao fato do indivíduo estar só. Em seguida, a ideia de privacidade passou a abranger diferentes questões ligadas ao coletivo e aos interesses estatais, fundamentadas através das novas contemplações sociais, econômicas e políticas originárias da Revolução Industrial, ao final do século XVIII e início do século XIX, com a queda do predominante sistema feudal (Rosa, 2024).

A doutrina moderna do direito à privacidade é marcada por Samuel Warren e Louis Brandeis (2013), com a publicação do prestigiado artigo *The right to privacy*, em 1890, discriminando, através da análise das transformações ocorridas na época, bem como do surgimento da fotografia, a necessidade da proteção da privacidade e intimidade dos indivíduos da sociedade civil graças às inúmeras violações de suas vidas privadas. Assim, partindo de um contexto originário individualista onde a privacidade qualificava-se como direito burguês, o artigo trouxe ao entendimento jurídico a ideia de que em razão dos avanços da sociedade era necessária a intervenção do Estado, visando assegurar segurança pública aos indivíduos (Doneda, 2020).

Apesar das contribuições norte-americanas ao final do século XIX, foi apenas em decorrência das violações às vidas particulares oriundas da Segunda Guerra Mundial que os ordenamentos jurídicos e tratados internacionais de direitos humanos passaram a retratar as garantias mínimas para todas as pessoas. Dessa forma, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através da Declaração

<sup>5</sup> *Big Data* é um termo que faz referência a intensificação da utilização dos recursos tecnológicos na atualidade e a grandiosa produção de dados decorrente dela, sendo esses abundantemente e velozmente produzidos, e utilizados pelas grandes empresas (Rautenberg; Carmo, 2019).





Americana de Direitos e Deveres do Homem<sup>6</sup>, em 1948, inaugurou a normativa sobre a privacidade no cenário internacional. Da mesma forma, a Organização das Nações Unidas, também em 1948, por intermédio da Declaração Universal dos Direitos Humanos<sup>7</sup>, promulgou a garantia desse direito como essencial a todos os indivíduos (Rosa, 2024).

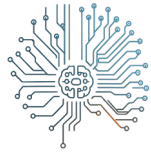
Indubitavelmente, graças às garantias asseguradas pelos órgãos internacionais já citados, o direito à privacidade passou a penetrar nos ordenamentos jurídicos da época. Entretanto, por tratar-se de conjuntos normativos majoritariamente de viés patrimonial, apenas estratos sociais determinados possuíam prerrogativas reservadas a esse direito. Dessa forma, esse típico “elitismo” marcou a adesão da privacidade pelos tribunais até a década de 1960. Por conseguinte, os moldes da privacidade transformaram-se mediante vários fatores, entre eles a mudança da relação entre o cidadão e o Estado e o crescimento do fluxo de informações à medida em que se desdobrava um intenso desenvolvimento tecnológico. Com isso, não apenas os indivíduos de grande relevo social estavam sujeitos a violações de suas privacidades, mas também grande parte da população (Doneda, 2020).

Neste novo contexto, as informações pessoais passaram a ser cada vez mais alvo de interesses tanto estatais quanto de entes privados. Inicialmente o interesse por esse tipo de informação era majoritariamente estatal, justificando-se pela *eficiência* - visto que para uma eficaz administração pública é necessário o conhecimento de seus subordinados - e pelo *controle* - partindo do pressuposto que quanto mais disponibilidade de informações sobre os indivíduos, mais fácil seria controlá-los. Por isso, ele emerge comumente em regimes totalitários. Posteriormente, com o surgimento de tecnologias que possibilitaram a coleta e processamento de informações pessoais de forma rápida, os organismos particulares

<sup>6</sup> “Artigo V: Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar” (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 1948).

<sup>7</sup> “Artigo XII: Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques” (Organização das Nações Unidas, 1948).





passaram a utilizá-los de diversas maneiras e com variados objetivos. Dessa forma, velozmente, o direito à privacidade expandiu suas fronteiras, alcançando novos sujeitos, incorporando diferentes objetos e fazendo-se presente em locais antes incompatíveis (Cancelier, 2017; Doneda, 2020).

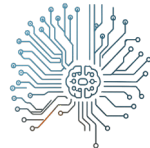
Por essa perspectiva, com as inovações tecnológicas e a valorização da informação decorrente do século XX, tornou-se cada vez mais fácil o acesso aos dados privados e sua divulgação, não permanecendo restrita apenas a determinado grupo, mas sim exposta a toda a coletividade. Em seguida, e de maneira revolucionária, ao final da última década do referido século, surgiu um novo espaço social, que impulsionou a coletivização dos dados e elevou a sua circulação ao mundo virtual: a *internet*. Foi a partir dela que a disponibilização dos dados pessoais intensificou-se de forma extraordinária, modificando a maneira de interação entre a sociedade e oferecendo acesso a uma infinidade de informações (Cancelier, 2017).

Inegavelmente, o surgimento da internet trouxe diversos benefícios e facilidades à vida rotineira das pessoas, entretanto, diversas questões negativas também tomaram protagonismo na era digital. Nesta conjuntura, pontua-se que, no plano físico, o controle em relação aos dados pessoais é muito elevado, e, por mais vigiadas que as pessoas possam ser, o controle às informações pessoais disponíveis no plano virtual é extremamente restrito. Ademais, o alcance dos atos no universo digital é inimaginável e, com isso, a viralização das informações tornou-se ao mesmo tempo um desejo dos usuários e um potencial danoso à vida em sociedade, tendo em vista que aquilo que é divulgado nas redes digitais, dificilmente pode ser completamente excluído. Assim, percebe-se que, com a popularização da internet, além da *invasão* da privacidade, a *evasão* da privacidade tornou-se pauta graças a valorização da exposição acentuada de dados pessoais (Cancelier, 2017).

À vista disso, com os avanços tecnológicos e, consequentemente, ao decorrer da quarta revolução industrial<sup>8</sup>, entende-se que o direito à privacidade

<sup>8</sup> Schwab (2016) refere que a comunidade internacional está vivendo uma nova era industrial, tecnológica e





deixou de restringir-se unicamente à lógica de “estar só”, e passa a abranger diversos outros campos, estando entre eles a fundamental proteção dos dados pessoais, em vista aos interesses estatais e privados. Sendo assim,

[...] a defesa da privacidade deve proteger o homem contra: (a) a interferência em sua vida privada, familiar e doméstica; (b) a ingerência em sua integridade física ou mental, ou em sua liberdade intelectual e moral; (c) os ataques à sua honra e reputação; (d) sua colocação em perspectiva falsa; (e) a comunicação de fatos relevantes e embaraçosos relativos à sua intimidade; (f) o uso de seu nome, identidade e retrato; (g) a espionagem e a espreita; (h) a intervenção na correspondência; (i) a má utilização de informações escritas e orais; (j) a transmissão de informes dados ou recebidos em razão de segredo profissional (Moraes, 2023, p. 97).

Com isso, entende-se a conexão vital entre o direito à privacidade e o direito à proteção dos dados pessoais, e, a partir disso, é possível compreender a importância da garantia do segundo como direito fundamental. Sob essa perspectiva, vislumbra-se o tardio reconhecimento do direito à proteção dos dados pessoais como direito fundamental no contexto legislativo brasileiro.

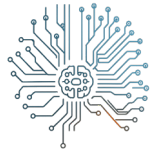
Em suma, por mais que o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965) de 2014 (Brasil, 2014), já abordasse a proteção à confidencialidade e inviolabilidade da vida privada no mundo digital, a garantia à proteção dos dados pessoais no Brasil se deu em 14 de agosto de 2018, através da Lei nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) (Brasil, 2018), que tem por objetivo proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A partir disso, é importante destacar o conceito de dados pessoais definido pela LGPD, sendo: as informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável<sup>9</sup>, deixando a salvo que no caso dos

---

social, a Quarta Revolução Industrial, impulsionada pelas conexões entre as máquinas e os seres humanos. Além disso, a volumosa produção de dados, sua coleta e processamento, *Big Data*, também tornou-se fundamental no desenvolvimento das relações negociais por meio da criação de grandes bancos de dados (Menezes, 2022).

<sup>9</sup> “Artigo 5º: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (Brasil, 2018).





dados anônimos<sup>10</sup>, apenas serão considerados pessoais se a autoria puder ser identificada.

Posteriormente, consolidou-se no entendimento doutrinário e jurisprudencial que a proteção aos dados pessoais, inclusive no meio digital, já era um direito fundamental, decorrente do direito à intimidade e à vida privada. Ilustrando isso, o Supremo Tribunal Federal julgou, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.387 (Brasil, 2020b), que ação normativa governamental que ordenava às operadoras telefônicas o compartilhamento dos dados pessoais de seus usuários com o Governo Federal era inconstitucional (Martins, 2024). Sob essa óptica, decidiu o STF:

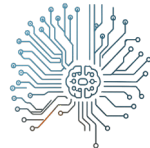
Tais informações, relacionadas à identificação – efetiva ou potencial – de pessoa natural, configuram dados pessoais e integram, nessa medida, o âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual (art. 5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII) [...]. A invasão injustificada da privacidade individual deve ser reprimida e, tanto quanto possível, prevenida [...]. Reforço, em cumprimento ao dever de justificação decisória, no âmbito de medida liminar, que a adequada tutela do direito à intimidade, privacidade e proteção de dados pessoais é estruturada pela característica da inviolabilidade. Vale dizer, uma vez afrontada a norma de proteção de tais direitos, o ressarcimento se apresenta como tutela insuficiente aos deveres de proteção (Brasil, 2020a).

Seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a incorporação do direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental foi concretizada por meio da aprovação da Emenda Constitucional de nº 115<sup>11</sup>, em 10 de fevereiro de 2022, que alterou a Constituição Federal para incluí-lo entre as garantias

<sup>10</sup> “Artigo 12: Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido” (Brasil, 2018).

<sup>11</sup> A Emenda Constitucional nº 115/2022 alterou a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (Brasil, 2022).





fundamentais e fixar privativamente à União a competência para legislar sobre a proteção e tratamento dos dados pessoais. Nesse viés, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 passou a contar com o inciso LXXIX, que determina ser assegurada entre as garantias e direitos fundamentais, nos termos da lei, a proteção aos dados pessoais, inclusive nos meios digitais (Brasil, 1988)<sup>12</sup>.

A própria Constituição já trazia consigo aspectos que abrangiam a normativa da proteção das informações pessoais. A título de exemplo, vale citar o inciso X, do artigo 5º, que considera invioláveis a vida privada e a intimidade<sup>13</sup>, o XII, do mesmo artigo, considerando também inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas<sup>14</sup>, tal como a instituição da ação de *habeas data*<sup>15</sup>, possibilitando o acesso e retificação de dados pessoais em bancos de dados de entidades governamentais de direito público (Brasil, 1988). Fora da esfera constitucional, na legislação infraconstitucional, o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, disserta uma série de direitos e garantias em relação aos dados pessoais presentes nos grandes bancos de dados e cadastros<sup>16</sup> (Doneda, 2011).

É notório que o direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental está intrinsecamente ligado à valorização principiológica da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que, segundo Doneda (2011), os dados pessoais são uma extensão da própria pessoa natural, necessitando de mecanismos protetivos no viés jurídico, por tratar-se de expressão direta de

<sup>12</sup> “Artigo 5º: LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais” (Brasil, 1988).

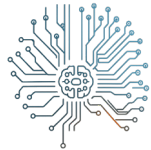
<sup>13</sup> “Artigo 5º: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Brasil, 1988).

<sup>14</sup> “Artigo 5º: XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (Brasil, 1988).

<sup>15</sup> “Artigo 5º: LXXII - conceder-se-á “*habeas-data*”: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo” (Brasil, 1988).

<sup>16</sup> “Artigo 43: O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes [...]” (Brasil, 1990).





personalidade. No contemporâneo contexto da quarta revolução industrial, os indivíduos permanecem cada vez mais conectados a dispositivos inteligentes e redes sociais, a mesma medida em que uma massa enorme de dados pessoais são coletados e armazenados sem mesmo o conhecimento do usuário, originando uma posição de vulnerabilidade àquele que utiliza dos meios digitais em face às grandes empresas e instituições (Rosa, 2024).

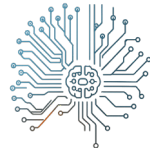
Logo, visto a consolidação do direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental, graças às transformações sociais, políticas e econômicas oriundas da Quarta Revolução Industrial, assegurando “a proteção ao direito à privacidade, bem como o livre desenvolvimento da dignidade da pessoa humana e da personalidade da pessoa natural” (Rosa, 2024, p. 63), faz-se necessária a intensa intervenção estatal na era digital, com o objetivo de fortalecer a estrutura de segurança pública no Brasil.

## 2 A (IN)EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA ESFERA PENAL FRENTE AO EFICIENTISMO NA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Diante da expansão digital das denominadas tecnologias de informação e comunicação<sup>17</sup>, as quais tiveram o acesso impulsionado em decorrência dos reflexos da pandemia de Covid-19 que impossibilitava as relações físicas das pessoas, a utilização destas tecnologias digitais pela sociedade tornou-se um mecanismo primordial para manter as atividades econômicas, bem como as relações humanas. Assim, os recursos tecnológicos cresceram em termos de relevância organizacional e operacional da sociedade, impactando, conseqüentemente, as estruturas sociais e os sistemas econômicos.

<sup>17</sup> As tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem ser definidas enquanto o conjunto de tecnologias que permitem a produção, acesso e propagação de informações, além daquelas que permitem a comunicação entre as pessoas (Rodrigues, 2016).





De todo modo, considerando esse contexto de constante evolução tecnológica que propulsiona cada vez mais a produção de dados pessoais, também denota-se o reflexo da era informacional e digital no campo da segurança pública. Com isso, as tecnologias de informação e comunicação foram sendo aplicadas em diversos campos operacionais da sociedade, como por exemplo no âmbito de investigação e evidências científicas, bem como nas práticas de monitoramento utilizadas nas atividades de vigilância, objetivando maior eficiência na política de segurança pública.

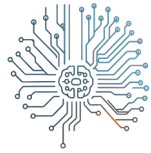
Todavia, o grande desafio da utilização, na política de segurança pública, dessas tecnologias de informação e comunicação consiste em garantir a devida proteção jurídica aos dados pessoais dos sujeitos, de modo a possibilitar que as autoridades utilizem essas informações no âmbito de suas atividades, porém, equilibrando com a efetiva proteção jurídica prevista constitucionalmente aos dados pessoais. Dessa forma, o direito fundamental à proteção de dados pessoais não será violado, garantindo ao indivíduo o tratamento adequado de tais informações, lhes sendo resguardado o uso abusivo, ilimitado, equivocado ou discriminatório pelas instituições.

Com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, o Brasil entrou para o rol dos países que legislam especificamente sobre o tema. Dessa forma, apesar de ter sido um marco normativo referente à proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda é insuficiente para regular a realidade jurídica da temática no país, em razão da inexistência<sup>18</sup> de lei que trate especificamente da proteção de dados pessoais para fins penais em geral, campo em que, os direitos e as garantias fundamentais do indivíduo são mais relativizados.

Esse hiato legislativo possibilita uma perigosa interpretação normativa, situação que pode isentar o aplicador em considerar os casos em que uma pessoa é ofendida em sua privacidade, além de outros direitos fundamentais violados,

<sup>18</sup> O artigo 4º, da Lei Geral de Proteção de Dados inclui nas exceções de aplicabilidade o tratamento de dados pessoais nos casos de segurança pública e persecução penal (Brasil, 2018).



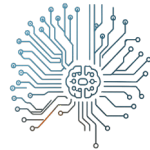


não de maneira direta, mas pelo uso inadequado das informações pessoais disponíveis em bancos de dados. Ressalta-se que atualmente as pessoas são identificadas em diversas situações relacionais, não de forma direta, mas a partir da representação de sua personalidade contida nos dados pessoais, evidenciando ainda mais a estreita relação entre esses dados, a identidade e a personalidade de cada indivíduo. Somente no campo da interceptação, da escuta e do grampo telefônico, a título exemplificativo, não é possível oferecer uma proteção efetiva aos dados pessoais na medida que sua relevância demanda nos tempos atuais, o que o torna paradigmático (Doneda, 2011).

Para além da insegurança jurídica do operador da lei nos casos de persecução penal e na política de segurança pública quanto à temática, uma vez que as diretrizes do tratamento de dados pessoais não pairam sob a garantia da Lei Geral de Proteção de Dados, observa-se, também, a inefetividade do direito fundamental à proteção de dados pessoais nesses casos. Em razão da ausência de legislação específica que oriente os procedimentos de tratamento de dados pessoais no âmbito da segurança pública e persecução penal, torna-se impossível garantir que o direito fundamental à proteção de dados pessoais seja de fato efetivado; em outras palavras, não há parâmetros basilares para a proteção desse direito, como limites e procedimentos norteadores para o adequado tratamento dos dados pessoais nessa seara.

Diante disso, a existência de casos invariavelmente falhos, que fazem uso de dispositivos tecnológicos no campo da política de segurança pública é alarmante. Inclusive com viés racial, pessoas são consideradas suspeitas pela disponibilidade de seus dados, como fotografias e demais informações obtidas em diversas oportunidades, sem qualquer justificativa ou autorização judicial, o que reforça um estigma social e racista, que perpetua ao longo do tempo dentro do sistema penal brasileiro. Confirmando esse cenário, o Relatório da Coordenadoria de Defesa Criminal e da Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça da Defensoria Pública do Rio de Janeiro aponta que, houve erro em pelo menos 58 casos de reconhecimento fotográfico, os quais resultaram em acusações injustas e





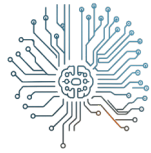
em prisões de pessoas que nada tinham a ver com o crime que lhes era imputado. Com base nessas informações apresentadas entre 1º de junho de 2019 e 10 de março de 2020, o racismo estrutural é reafirmado pelo fato de que 70% dos acusados injustamente eram pessoas negras (Rio de Janeiro, 2020).

Apesar dos tribunais se manifestarem e, em muitos casos, anularem diversas decisões que tenham como fundamentação tão somente a prova do reconhecimento facial para proceder à condenação do acusado, tais atos ainda não são formas efetivas de prevenir que se incorra novamente em casos falhos eivados de viés racial. A inexistência de legislação específica sobre o tratamento dos dados pessoais na política de segurança pública, obstaculiza a efetivação do direito fundamental à proteção de dados pessoais nesse âmbito, viabilizando, portanto, a proliferação de um espaço institucional com poderes ilimitados, impulsionado pela reivindicação social de práticas fomentadoras voltadas para um eficientismo do sistema.

Para tanto, a questão central que permeia o eficientismo na política de segurança pública e que, corrobora para essa lacuna legislativa sobre a proteção e tratamento de dados pessoais na esfera penal, trata-se da instauração de uma cultura do medo, que exerce forte influência na formação do imaginário coletivo. Difundida em grande escala pelos seus alarmistas, como a mídia, imprensa escrita, jornalistas, religiosos, políticos, entre tantos outros setores que estão interessados no controle social e/ou na obtenção do lucro, a cultura do medo tem como pretensão destacar incessantemente os crimes, enfatizando a violência mediante percepções distorcidas da realidade, provocando um incessante sentimento de insegurança na população (Glassner, 2003).

Dessa forma, o medo fictício incitado por alarmistas (Glassner, 2003) emerge como uma potencialidade concreta na mente do indivíduo, levando-o a acreditar na iminência de um evento. Essa perspectiva, concebida como real, engendra insegurança, resultando na alteração substancial da rotina diária das pessoas, podendo culminar em reações semelhantes ou até mais intensas do que as inicialmente concebidas (Baierl, 2004). Com isso, a disseminação de





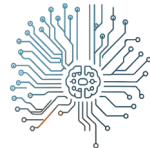
narrativas sensacionalistas incentiva práticas totalitárias por parte dos órgãos institucionais responsáveis pela segurança pública, atingindo determinados grupos estigmatizados e segregados ao longo do tempo.

A formação da opinião pública pelos meios massivos de comunicação acerca dos medos, da insegurança e da necessidade de afastá-los por meio da intervenção do sistema punitivo deságua na pressão popular sobre os poderes públicos para que as reformas penais necessárias para fazer frente à “cada vez mais aterradora criminalidade” sejam efetivamente levadas a cabo (Callegari; Wermuth, 2009, p. 64).

O medo, utilizado como mecanismo de controle social e instrumento de pressão intencional, provoca o rompimento das formas de agregação social, promovendo o desencadeamento de uma sociedade cada vez mais segregada que reafirma preconceitos e estereótipos (Baierl, 2004). A partir da criação do “outro” no imaginário coletivo, a cultura do medo figura como elemento primordial na gestão da vida e, conseqüentemente, na tomada de decisões por parte do Estado. Esse cenário de total insegurança é resultado da desconstrução do Estado de bem-estar social e vigência do modelo neoliberal, que colabora para a implementação de dispositivos de segurança e, conseqüentemente, promoção do controle social.

O Estado, através de um conjunto de processos e tecnologias de controle, que têm como base a vida humana, ou seja, o corpo coletivo da população, em oposição ao corpo individual, passa a exercer perante a sociedade os mecanismos de poder denominados de biopolítica (Foucault, 1999). Sob esse aspecto, é nos processos sobre a vida que a sistemática da biopolítica se constitui, abrangendo as questões de natalidade, doenças, óbitos e assim por diante, sendo nessa estatização do biológico, em conjunto com as técnicas de disciplinamento, que haverá a ruptura na forma de exercício do poder soberano, implementando-se um novo poder que incide no biológico e controle populacional, passando a ser compreendido como o “fazer viver e deixar morrer” (Bortolozzi Junior, 2019).



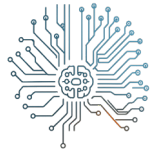


Então, a biopolítica atua na gestão da vida da população, abrangendo o controle sob quais corpos, grupos, culturas, etnias, classes etc., são considerados dignos e desejáveis para o “fazer viver” e, em contrapartida, determinará quais segmentos são passíveis do “deixar morrer”. A tática dos combates e da guerra que sustentavam o “poder matar para poder viver”, tornou-se o mais novo princípio de estratégia do Estado voltado para a questão biológica das populações, em que “o poder de morte [...] apresenta-se agora como o complemento de um poder que se exerce, positivamente, sobre a vida, que empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto” (Foucault, 1999, p. 129). Assim, centra-se no “corpo-espécie” e nos processos biológicos que são condicionados a uma série de intervenções e controles promovedores de regulação, ou seja, uma biopolítica da população que exerce gerência sob os corpos não de forma individual e disciplinadora, mas direcionada àqueles sujeitos pertencentes a determinados estratos sociais.

Considerando essa perspectiva, como consequência, tem-se implementada uma “luta das raças” que se torna o discurso do poder “centrado, centralizado e centralizador”, porém, não voltado para a luta entre duas raças, mas condicionado a uma raça determinante como sendo a verdadeira e única, dotada de poder e titular da norma “contra aqueles que estão fora dessa norma, contra aqueles que constituem outros tantos perigos para o patrimônio biológico” (Foucault, 2005, p. 73). Todavia, a narrativa construída como pretensão da defesa da sociedade a condiciona para a existência de um inimigo comum, a figura do horror que deve ser eliminada da sociedade para, então, finalmente possa ocorrer a sua normalização. Esse é o cenário ideal para a vigência de um Estado punitivista, cujas práticas serão justificadas pela defesa e segurança da população.

Dessa forma, a expansão do Direito Penal é demarcada com teses como, por exemplo, a do Direito Penal do Inimigo, de modo a evidenciar o contexto, em que um lado tem-se disposta maior insegurança, no “[...] sentido de que as sociedades pós-modernas perderam os referenciais modernos e caminham como ‘almas errantes’ à procura de identidade”, fazendo com que surjam novos





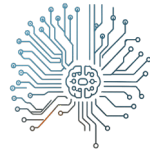
“medos”, e do outro a permissividade, tendo em vista a existência desses “novos riscos” que o cenário atual apresenta, de modo que passa-se a admitir “[...] certas flexibilizações de direitos e garantias penais e processuais penais que passam a ser consideradas como meros ‘obstáculos’ à eficiência que se espera em relação ao exercício do *jus puniendi* estatal” (Wermuth, 2017, p. 2067-2068).

É nesse contexto que o Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para Segurança Pública e Persecução Penal, denominado LGPD Penal (Brasil, 2020a), foi recebido duramente pelos órgãos de segurança pública e persecução penal, com críticas exacerbadas quanto ao seu conteúdo, o qual, de acordo com estas instituições, limitaria totalmente o poder de ação e de defesa do Estado, inviabilizando a execução das atividades de prevenção, detecção, investigação e repressão de infrações penais, além de servir como barreira para o combate à criminalidade. O referido Anteprojeto de Lei (LGPD Penal), foi apresentado pela Comissão de Juristas<sup>19</sup> instituída para o encargo de elaboração do mesmo, no Congresso Nacional em novembro de 2020, visando suprir a lacuna da vigente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, devido sua inaplicabilidade para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais (Brasil, 2018).

Em que pese as críticas direcionadas à proposta legislativa, o objetivo da LGPD Penal não é obstaculizar as ações do Estado, muito pelo contrário, visa aprimorar a eficiência investigativa dos órgãos de proteção e repressão penal, de modo que sejam harmonizados os deveres Estatais de promover a segurança pública, com a devida proteção das prerrogativas fundamentais dos titulares dos dados pessoais, evitando, assim, abusos e violações aos direitos humanos. Porém, se a perspectiva das instituições voltarem-se tão somente para o discurso mencionado por Foucault (2005) como defesa da sociedade, em que se tem

<sup>19</sup> Por Ato do Presidente da Câmara dos Deputados, em 26 de novembro de 2019, foi instituída uma Comissão de Juristas, liderada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro (Brasil, 2019), para estudo e elaboração de um texto normativo, com o objetivo de cumprir o disposto no §1º, do artigo 4º, da Lei Geral de Proteção de Dados, o qual determina que o tratamento de dados pessoais referentes a segurança pública e persecução penal, deverão ser regidos por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, bem como os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na LGPD (Brasil, 2018).



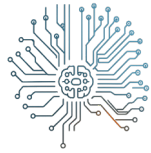


traçada uma guerra contra àqueles sujeitos responsáveis pela barbárie, é impossível vislumbrar a promulgação de qualquer normativa que garanta a efetividade do direito fundamental à proteção de dados pessoais; enquanto a narrativa fixar-se no eficientismo da política de segurança pública, os dispositivos tecnológicos para esse fim serão utilizados sem observância de limites.

Nessa seara, o desejo por um Estado punitivista é incentivado pela cultura do medo, que impulsiona a disseminação de narrativas voltadas para o eficientismo nas práticas punitivas, como forma de combate e repressão ao “inimigo comum”. Com isso, as novas tecnologias surgem enquanto possibilidades para atingir esse grau de eficiência incitado e objetivo principal das políticas criminais contemporâneas, devido a vigência de um cenário marcado pela preocupação com a segurança coletiva em detrimento às liberdades individuais. Assim, tem-se o controle seletivo de determinados estratos sociais que são considerados “incorrigíveis” ou, até mesmo, “irrelevantes”. Porém, questiona-se se esse movimento de utilização de novas tecnologias no âmbito da segurança pública, aparentemente visando o ganho de agilidade e eficiência das instituições penais, não estaria, em muitos casos, apenas reforçando a lógica estabelecida dentro desse sistema (Wermuth, 2017).

Dessa forma, as novas tecnologias utilizadas sem quaisquer limites no âmbito da segurança pública, apenas reforçam uma prática eficientista do processo penal, fazendo com que se perpetue o máximo potencial persecutório, de modo a atingir o resultado pretendido voltado para o “benefício” do maior número de pessoas. Alicerçado na cultura do medo, esse cenário condiciona as práticas eficientistas para fins (proteção e eliminação do inimigo comum) que podem (e devem) justificar os meios. Nesse contexto, direitos e garantias fundamentais são irrelevantes e a lógica que prevalece na eficiência da persecução penal segue a seguinte dinâmica: “[...] para se chegar a resultados (condenações e encarceramento) é necessário afastar os obstáculos (garantias). E assim a constituição passa a ser um mero detalhe que pouco importa ao legislador ou ao juiz” (Gomes, 2019, p. 339).



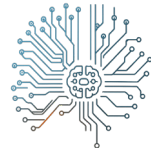


Os procedimentos de tratamento de dados pessoais no âmbito penal e segurança pública, ao serem excluídos do rol de hipóteses de aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, condicionam (nesse aspecto), a existência de um sistema penal menos garantista, dotando o Estado de poder incondicionado, sem quaisquer limitações, princípios norteadores e regras para a coleta, armazenamento, processamento, utilização, disseminação ou transferência das informações. Diante disso, a regulação dos procedimentos que envolvem o acesso a dados pessoais neste campo, objetiva proporcionar proteção adequada tanto ao titular dos dados, quanto para as autoridades, de modo que os atores envolvidos tenham segurança jurídica quando procederem o tratamento destes. Além do mais, a ausência de marco normativo para o tratamento de dados pessoais nessa esfera, incorre em prejuízos significativos que impossibilitam a efetivação de cooperações internacionais, impedindo que os órgãos possam acessar as tecnologias mais modernas e bases de dados relevantes (Mendes; Abreu, 2022).

A partir da promulgação de normativa específica sobre proteção de dados pessoais para fins de persecução penal e segurança pública, possibilita a existência de parâmetros procedimentais determinados, de modo estabelecer os procedimentos necessários para o tratamento de dados pessoais pelos órgãos de investigação, bem como ampliar a transparência sobre os dados que estão sendo tratados, permitindo a responsabilização de usos secundários destas informações, como forma de minimizar os riscos de tratamentos abusivos e ilegais (Mendes; Abreu, 2022). Diante de uma legislação nesse âmbito, haverá, então, a efetivação do direito fundamental à proteção de dados, porém, essa efetividade somente será possível se houver instrumentalidade processual de cunho garantista e se “[...] o artesão do direito possuir conhecimento mínimo para exigir a prestação jurisdicional” (Carvalho, 2008, p. 16).

Portanto, a inserção de novas tecnologias no campo da segurança pública tem auxiliado significativamente nas práticas de combate à criminalidade, todavia, considerando a prevalência da cultura do medo que dissemina no imaginário coletivo a existência do inimigo comum, o eficientismo na





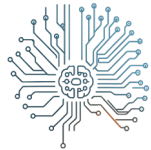
política de segurança é medida impositiva, condicionando o Estado para um caráter punitivo e policial, motivo o qual há tantos óbices discursivos que possibilitem a efetivação da LGPD Penal. Assim, verifica-se que o grande desafio está entre a necessidade de otimização do serviço dos órgãos de segurança pública na prevenção e combate às práticas criminais, e a necessária proteção ao direito fundamental à proteção de dados pessoais, de modo que não sejam violados os direitos do titular destas informações, bem como não seja inviabilizada a ação e os interesses do Estado. Enquanto restar essa lacuna legislativa, não há possibilidades de garantia do direito fundamental à proteção de dados pessoais no âmbito penal, prevalecendo, então, o eficientismo na política de segurança pública.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O presente artigo buscou analisar o déficit legislativo brasileiro acerca do direito fundamental à proteção de dados pessoais na esfera penal, considerando as práticas voltadas para a eliminação do “inimigo comum” que fomentam o eficientismo na política de segurança pública. Assim, primeiramente foi compreendido o direito à proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental, o que denota a relevância jurídica e avanço normativo ao longo dos anos sobre a temática. Em razão da sociedade digital e da informação que foi impulsionada pelas novas tecnologias na última década, tornaram os dados pessoais uma espécie de extensão dos sujeitos, motivo pelo qual surgiu a necessidade em proteger constitucionalmente os dados pessoais.

Além da proteção constitucional aos dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados também figura enquanto marco normativo sobre a temática, legislando sobre limites e regramentos a serem seguidos quando do uso de dados pessoais. Porém, a referida lei não é aplicável para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais (Brasil, 2018). Diante disso, no segundo tópico do





presente artigo, verificou-se a inefetividade do direito fundamental à proteção de dados pessoais na política de segurança pública, tendo em vista a inexistência legislativa que proporcione a efetividade desse direito fundamental, de modo a impedir o uso abusivo e ilimitado pelos órgãos institucionais, bem como trazendo princípios norteadores para o tratamento de dados pessoais nesse âmbito.

Para tanto, essa omissão legislativa acerca da proteção de dados pessoais na política de segurança pública, alicerçados à cultura do medo disseminada pelos meios de comunicação em massa, que operam no imaginário coletivo, reforçam a eficiência punitivista do sistema penal como forma de eliminação do inimigo comum. Considera-se, neste sentido, que a edição de uma legislação específica, tal como previsto no Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal (LGPD Penal), se conduzidos sob a primazia do interesse de proteção aos direitos humanos, poderão se constituir em instrumentos limitadores na publicização e acesso aos dados pessoais dos titulares, objetivando garantir a real efetivação do direito fundamental à proteção de dados pessoais.

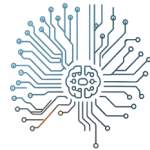
## REFERÊNCIAS

BAIERL, Luzia Fátima. **Medo social**: da violência visível ao invisível da violência. São Paulo: Editora Cortez, 2004.

BORTOLOZZI JUNIOR, Flávio. “**Resistir para re-existir**” **Criminologia (d) e resistência e a (necro)política brasileira de drogas**. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html). Acesso em: 6 jun. 2025.





BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 24 abr. 2014. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm). Acesso em: 6 jun. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 59, 15 ago. 2018. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm). Acesso em: 6 jun. 2025.

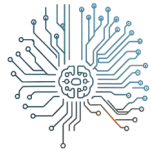
BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 1990. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8078compilado.htm#art118](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm#art118). Acesso em: 6 out. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Grupo de Trabalho**: Comissão de Juristas, Segurança Pública. Brasília: 2019. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/conheca-a-comissao/presidencia>. Acesso em: 6 jun. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para Segurança Pública e Persecução Penal – LGPD Penal**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020a. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/DADO-SAnteprojetoComissaoProtecaoDadosSegurancaPersecucaoFINAL.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.387**. Julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393. Relatora Ministra Rosa Weber. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 07 de maio de 2020b. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.





CALLEGARI, André Luis; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Deu no jornal: Notas sobre a contribuição da mídia para a (ir)racionalidade da produção legislativa no bojo do processo de expansão do direito penal. **Revista Liberdade IBCCRIM**, n. 2, 2009. Disponível em: [https://ibccrim.org.br/media/publicacoes/arquivos\\_pdf/integra2.pdf#page=56](https://ibccrim.org.br/media/publicacoes/arquivos_pdf/integra2.pdf#page=56). Acesso em: 6 jun. 2025.

CANCELIER, Mikhail Vieira de Lorenzi. O direito à privacidade hoje: perspectiva histórica e o cenário brasileiro. **Seqüência Estudos Jurídicos e Políticos**, Florianópolis, v. 38, n. 76, p. 213–240, 2017. DOI: 10.5007/2177-7055.2017v38n76p213. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2017v38n76p213>. Acesso em: 6 jun. 2025.

CARVALHO, Salo de. **Pena e Garantias**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

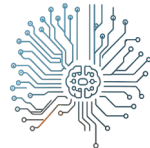
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. **Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem**, 1948. Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.

DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. **Espaço Jurídico Journal of Law**, vol. 12, n. 2, p. 91–108, 2011. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/1315>. Acesso em: 6 jun. 2025.

DONEDA, Danilo. **Da privacidade à proteção de dados pessoais: fundamentos da lei geral de proteção de dados**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. 2024. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/>. Acesso em: 6 jun. 2025.





FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: a vontade do saber**. Rio de Janeiro: Graal, 1999.

FOUCAULT, Michel. **Em defesa da sociedade**: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. FGV. Centro de Políticas Sociais. **Percepções da Crise**, 2018. Disponível em: [https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Pesquisa\\_Percepcoes-Da-Crise\\_MarceloNeri\\_FGVSocial.pdf](https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Pesquisa_Percepcoes-Da-Crise_MarceloNeri_FGVSocial.pdf). Acesso em: 6 jun. 2025.

GLASSNER, Barry. **Cultura do Medo**. São Paulo: Francis, 2003.

GOMES, Marcus Alan de Melo. Investigação criminal e direitos humanos. **Lusíada Repositório das Universidades Lusíada**: Lusíada, n. 21-22, 2019, p. 327-340. Disponível em: [http://193.136.186.9/bitstream/11067/5458/1/ld\\_21\\_22\\_10.pdf](http://193.136.186.9/bitstream/11067/5458/1/ld_21_22_10.pdf). Acesso em: 6 jun. 2025.

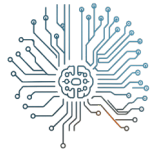
MARTINS, Flávio. **Curso de direito constitucional**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024.

MENDES, Laura Schertel.; ABREU, Jacqueline. Carta das Editoras - Dossiê Temático Privacidade e Proteção de Dados Pessoais na Segurança Pública e no Processo Penal. **Direito Público**, v. 18, n. 100, 2022. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/6214>. Acesso em: 6 jun. 2025.

MENEZES, Daniel Francisco Nagao. Impactos da quarta revolução industrial no direito: uma análise preliminar. **Revista Ratio Juris**, v. 17, n. 34, p. 169-188, 2022. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5857/585773978008/585773978008.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023.





ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, 1948. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1948%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Universal%20dos%20Direitos%20Humanos.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.

ORWELL, George. **1984**. São Paulo: Editora Nacional, 2003.

RAUTENBERG, Sandro; CARMO, Paulo Ricardo Viviurka do. *Big Data e Ciência dos Dados: complementaridade conceitual no processo de tomada de decisão*. Brazilian Journal of Information Studies: **Research Trends**. 13:1 (2019) p.56-p.67. ISSN 1981-1640. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6983493>. Acesso em: 6 jun. 2025.

RIO DE JANEIRO. Defensoria Pública. **Relatório revela 58 acusados injustamente identificados por engano**. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10660-Relatorio-revela-58-acusados-injustamente-identificados-por-engano>. Acesso em: 6 jun. 2025.

RODRIGUES, Ricardo Batista. **Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação**. Recife: IFPE, 2016.

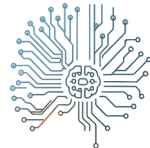
ROSA, Milena Cereser da. **Segurança pública e proteção de dados pessoais: possibilidades e desafios frente aos direitos humanos**. 1. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2024.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. Trad. Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis. The Right to Privacy. **Civillistica.com**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 1–22, 2013. Disponível em: <https://civillistica.em-nuvens.com.br/redc/article/view/127>. Acesso em: 6 jun. 2025.

WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Política criminal atuarial: contornos biopolíticos da exclusão penal. **Revista Direito e Práxis**: Rio de Janeiro, vol. 08, n. 03, p. 2043-2073, 2017. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistaceaju/article/view/22314/21391>. Acesso em: 6 jun. 2025.





# DIREITO, REGULAÇÃO E COLONIALISMO DIGITAL: NOTAS SOCIOJURÍDICAS SOBRE O PAPEL DAS AUTORIDADES DE PROTEÇÃO NA AMÉRICA LATINA

Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros<sup>1</sup>

Vinícius Sampaio<sup>2</sup>

Julia Tosatto<sup>3</sup>

## INTRODUÇÃO

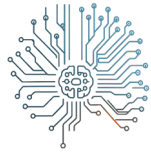
Quando John Perry Barlow publicou a “Declaração de Independência do Ciberespaço” (1996), restou claro a intenção de separação entre o mundo físico e o mundo digital. O documento surge defendendo que conceitos jurídicos tradicionais não poderiam ser plenamente aplicáveis ao ciberespaço, uma vez que foram historicamente construídos com base em uma realidade material. A proposta, portanto, é que as dinâmicas sociais, comunicacionais e informacionais, no ambiente digital, não seriam estruturadas sobre a materialidade, mas sim sobre fluxos de dados imateriais e descentralizados.

<sup>1</sup> Professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Doutor em direito pela Universidade de São Paulo, com apoio da FAPESP; Mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo; Realizou estágio de pós-doutorado em Economia Política Internacional pela Universidade de São Paulo, com apoio da CAPES; Foi visiting researcher no Instituto Internacional de Sociologia Jurídica de Oñati (Espanha) e fez estágio doutoral “sanduíche” na Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia em Los Angeles (EUA); É coordenador no grupo de pesquisa Direito & Regulação da Sociedade, cadastrado no diretório do CNPq. E-mail: marco.barros@mackenzie.br.

<sup>2</sup> Doutorando em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Law & Social Change: The Challenges of Transnational Regulation na Università degli Studi Roma Tre, Itália (dupla titulação); Mestre em Direito da Sociedade da Informação e Bacharel em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Membro do grupo CNPq Direito & Regulação da Sociedade (Mackenzie); Advogado. E-mail: viniucussampaio@dir@gmail.com.

<sup>3</sup> Advogada; Mestranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie; Possui pós-graduação em Compliance Digital pela mesma universidade; Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Direito & Regulação da Sociedade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: julia.tosatto@mackenzista.com.br.





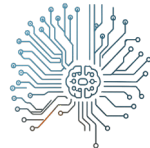
Barlow (1996), portanto, destaca a tentativa de setores tradicionais da indústria da informação - que, em tese, se tornariam obsoletos diante das transformações tecnológicas - de manter sua relevância por meio da imposição de legislações restritivas. Essas normas buscariam estender a noção de propriedade intelectual a ponto de restringir o livre uso e a circulação de ideias, tratando-as como se fossem meros produtos industriais. Assim, o que se pode observar, através da declaração, é uma visão emancipatória da internet e do ambiente digital, entendido como um espaço de inclusão universal. Contudo, o que o que não estava previsto é que, através da extração<sup>4</sup> e do controle de dados, as dinâmicas colonialistas não apenas persistiriam, como seriam potencializadas.

Por dinâmicas colonialistas este texto compreende, no âmbito das teorias pós-coloniais, a prática de mecanismos hegemônicos de dominação não limitados aos países, mas também às organizações comerciais. Destaque ao conceito de colonialidade do poder desenvolvido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano (1997), que propõe uma nova forma de entender os legados do colonialismo no mundo globalizado. Essa ideia não se refere apenas à colonização como um evento histórico encerrado, mas a um padrão de poder global que persiste mesmo após o fim formal das colônias.<sup>5</sup> A colonialidade do poder é uma estrutura duradoura

<sup>4</sup> A lógica de funcionamento das grandes plataformas digitais contemporâneas pode ser compreendida, em grande medida, a partir do conceito de “superávit comportamental”, desenvolvido por Shoshana Zuboff (2020). Esse conceito se refere à parcela dos dados gerados pelas interações dos usuários que extrapola a finalidade inicial de melhoria dos serviços oferecidos. Inicialmente, esses dados tinham como objetivo otimizar ferramentas, como os mecanismos de busca, a fim de proporcionar uma experiência mais eficaz e personalizada. No entanto, com o tempo, parte significativa desses dados passou a ser redirecionada para outro propósito: alimentar modelos de previsão comportamental utilizados no mercado publicitário. Em outras palavras, além dos dados estritamente necessários para o funcionamento técnico das plataformas, foram sendo capturados sinais adicionais - como padrões de navegação, tempo de permanência, cliques, localização, e até informações contextuais inferidas - que se tornaram altamente valiosos para a personalização de anúncios e, conseqüentemente, para a maximização dos lucros. Esse excedente comportamental, portanto, representa a base de um modelo de negócios orientado à vigilância e à extração contínua de valor a partir da vida cotidiana dos indivíduos. Esse processo de coleta massiva, muitas vezes invisível e opaca ao usuário comum, exige uma infraestrutura técnica na qual a extração de dados é naturalizada e incentivada. É nesse ponto que se evidencia a centralidade da extração de dados como pré-condição para a constituição e expansão desse excedente comportamental, que alimenta, de forma retroalimentada, os lucros exponenciais das plataformas.

<sup>5</sup> Para este texto é importante diferenciar os conceitos de colonialismo, colonialidade e descolonialidade, bem como entender a relação entre os termos. A partir de Walter Dignolo, é o caso de entender o colonialismo como domínio político da metrópole sobre a colônia e colonialidade como uma derivação deste domínio e que repercute a partir das percepções culturais, econômicas, políticas, dentre outras, do povo colonizador a respeito do colonizado. Diz Dignolo (2008, p. 10) [...] “colonialidade designa histórias, subjetividades, formas de vida, saberes e subjetividades colonizados, a partir das quais surgem as respostas “descoloniais”. De





de dominação que foi estabelecida durante o colonialismo e que continua a organizar o mundo contemporâneo, especialmente nas esferas econômica, política, epistêmica e, com destaque neste texto, com o âmbito digital.

A colonialidade do poder se relaciona com o colonialismo digital na medida em que as estruturas de dominação, exploração e hierarquização criadas no período colonial continuam operando — agora por meio das tecnologias digitais. O colonialismo digital pode ser compreendido como uma forma de dominação global, baseada no controle dos dados, da informação, das plataformas e da infraestrutura digital. Conforme a jurista holandesa Marietje Schaake (2024) explica, inicialmente celebradas como instrumentos de empoderamento cívico e democratização, as tecnologias digitais e, em especial, as plataformas de mídias sociais foram amplamente associadas à ampliação da liberdade de expressão, ao fortalecimento da esfera pública e à facilitação da mobilização social. No entanto, essa visão otimista desconsiderou um aspecto fundamental: a capacidade de governos de também se apropriarem dessas tecnologias de forma estratégica. Estados têm demonstrado um alto grau de sofisticação no uso de ferramentas digitais para fins de vigilância, desinformação, censura seletiva e controle da narrativa pública<sup>6</sup>. Assim, as mesmas plataformas que possibilitam a organização de movimentos sociais e a disseminação de discursos dissidentes também são utilizadas para mapear opositores, manipular o debate público e reforçar estruturas de poder autoritário (Shaake, 2024, p. 3).

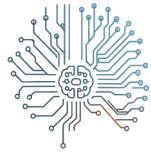
O que se deve observar é que o avanço tecnológico não apenas possibilitou que os Estados se digitalizassem, mas também conferiu aos entes privados um poder significativo sobre a dinâmica do espaço digital. Isso ocorre porque a infraestrutura técnica, os dados, os algoritmos e, sobretudo, as decisões sobre

---

maneira que se, por um lado, colonialidade é a face invisível da modernidade é também, por ou outro lado, a energia que gera a descolonialidade.”

<sup>6</sup> Relatório do Conselho da Europa (2023) indicou o uso de tecnologias de vigilância avançada, como o *software* espião Pegasus, por Estados-membros do Conselho da Europa contra seus próprios cidadãos. Tais informações indicam que o uso interno dessas ferramentas de espionagem digital não está restrito a regimes autoritários, mas também ocorre em contextos democráticos, suscitando sérias preocupações quanto à violação de direitos fundamentais, especialmente no que tange à privacidade, liberdade de expressão e proteção de dados pessoais.





o que pode ou não circular nas plataformas digitais<sup>7</sup> estão, em grande medida, concentrados nas mãos de grandes corporações. Essas empresas não apenas controlam os meios de acesso e difusão da informação, como também exercem um papel quase regulatório, ao estabelecer regras próprias de moderação de conteúdo, coleta de dados e priorização algorítmica (Schaake, 2024, p. 8).

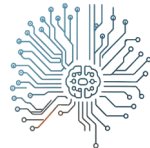
Segundo Tello (2023) grandes corporações - conhecidas atualmente como *Big Techs* - não apenas oferecem serviços tecnológicos globalmente, mas implementam uma infraestrutura digital que lhes confere um poder desproporcional. Esse poder vai além da esfera econômica: ao fornecerem conectividade, plataformas e sistemas operacionais, essas empresas tornam-se agentes político-corporativos, capazes de influenciar diretamente as dinâmicas sociais, culturais e até governamentais dos países em que atuam. Essa lógica reproduz uma relação de dependência, similar à do colonialismo tradicional, na medida em que enfraquece a soberania tecnológica dos países receptores e compromete sua capacidade de desenvolver políticas autônomas de inovação, ciência e indústria. Dessa forma, a expansão das “*Big Techs*” é apresentada como uma forma de dominação moderna, que desloca o protagonismo dos Estados e redefine os centros de poder na ordem global.

Essa tentativa de imposição de legislações unilaterais por parte de indústrias informacionais sediadas no Norte Global, especialmente nos Estados Unidos, revela uma dimensão contemporânea do colonialismo. Mesmo diante das possibilidades tecnológicas de disseminação descentralizada do conhecimento, essas corporações buscam manter o controle sobre a circulação de ideias e expressões culturais, por meio da mercantilização do pensamento e da ampliação de direitos de propriedade intelectual com alcance extraterritorial. Tal dinâmica reflete uma lógica colonial ao subordinar a produção simbólica global aos interesses econômicos e jurídicos de centros de poder distantes, reforçando

---

<sup>7</sup> Isso é importante mencionar porque o estado atual da internet se estrutura, em grande medida, por meio de plataformas digitais. Conforme Srnicek (2017) explica, as plataformas se consolidaram como um novo modelo de negócio dominante na economia contemporânea. Com essa transição, observa-se a ascensão de empresas que detêm poder econômico e informacional sem precedentes, criando estruturas quase monopolistas e altamente concentradas.





assimetrias históricas e restringindo a autodeterminação informacional de populações periféricas.

Assim, o termo colonialismo digital<sup>8</sup> expressa uma crítica que almeja denunciar as relações de dependência econômica e tecnológica de países periféricos em relação às organizações que proveem tecnologias digitais e pertencem a nações com maior desenvolvimento socioeconômico. Tello (2023) recobra o conceito de imperialismo (ou neoimperialismo, a depender da referência), segundo o qual os países desenvolvidos continuam a explorar nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Especialmente importante é retomar as abordagens sobre colonialismo nas ciências sociais, dentre as quais pode-se destacar o estudo feito por Nothias (2025), que traça um panorama histórico sobre esse tema e demonstra que não apenas a academia, mas ativistas, jornalistas e artistas também vêm se debruçando sobre esse fenômeno desde o fim da década passada.

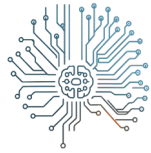
Como um dos pontos principais desse tópico, o autor destaca que “uma ênfase excessiva nas macroestruturas de dominação pode deixar de considerar a capacidade de ação local e as contingências, assim como a retórica anticolonial pode abrir caminho para políticas nacionalistas reacionárias” (Nothias, 2025, p. 10)<sup>9</sup>. Paradoxalmente, os governos parecem ir na contramão dessas críticas, buscando parcerias público-privadas em prol do desenvolvimento, num imediatismo por vezes irrefletido em detrimento do desenvolvimento econômico local e da proteção da sua soberania frente a esses agentes econômicos que, na nova configuração do capitalismo de dados, emergem como organizações que transcendem seu papel econômico e desempenham ações políticas.

Naturalmente, isso desperta especial interesse das nações que constituem a América Latina, países em desenvolvimento que dependem de tecnologias digitais estrangeiras e cujos cidadãos consomem diariamente conteúdos em plataformas

<sup>8</sup> Ver: KWET, Michael. Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. *Race & Class*, v. 60, n. 4, 2019. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306396818823172>. DOI: <https://doi.org/10.1177/0306396818823172>.

<sup>9</sup> Original em inglês: “[...] an overemphasis on macro structures of domination can fail to account for local agency and contingencies, and how anti-colonial rhetoric can pave the way for reactionary nationalist policies.”



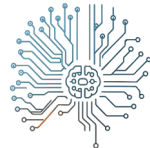


on-line também sediadas nos mesmos países que protagonizam a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico respectivos a essas ferramentas. É importante destacar que, embora a América Latina seja composta por uma grande variedade de experiências sociais, culturais e políticas, é possível identificar certas marcas históricas que atravessam os países da região e que influenciam a forma como a tecnologia é pensada e implementada (Ricaurte; Gómez-Cruz; Siles, 2024). Assim, embora haja diferenças, é possível observar um conjunto de experiências históricas comuns, como o passado colonial e a contínua influência geopolítica dos Estados Unidos, especialmente durante o século XX (Ricaurte; Gómez-Cruz; Siles, 2024).

Além disso, mesmo após os processos de independência formal, persistem formas sutis e estruturais de dominação que ainda moldam relações de poder, produção de conhecimento e circulação de tecnologias (Ricaurte; Gómez-Cruz; Siles, 2024). Esses fatores históricos e políticos ajudam a compreender por que certos imaginários sociotécnicos ganham força na região: eles não emergem em um vácuo, mas sim de um contexto de dependência e disputas por soberania tanto no plano simbólico quanto no material (Ricaurte; Gómez-Cruz; Siles, 2024).

Este texto busca explorar essa dinâmica em duas partes: inicialmente, por meio da análise de estudos de caso, procura-se compreender as diferentes formas pelas quais o chamado “colonialismo digital” se manifesta na região, evidenciando como as estruturas de poder global influenciam a circulação de tecnologias e dados. Em um segundo momento, a pesquisa se volta à fragmentação regulatória presente na América Latina, com o objetivo de mapear as autoridades nacionais de proteção de dados nos países da região. Busca-se, com isso, investigar se os Estados latino-americanos possuem órgãos reguladores consolidados e, sobretudo, se existe alguma iniciativa coordenada que permita uma atuação conjunta entre esses países - algo que poderia fortalecer o bloco regional frente aos desafios de regulação e *enforcement* impostos pelas grandes plataformas digitais. No final, a operação do colonialismo digital revela os desafios de enfrentamento de legados coloniais que exigem uma reinvenção jurídica para o enfrentamento das injustiças





no âmbito digital, exigindo na prática uma ruptura e resiliências das autoridades de proteção dados na América Latina.

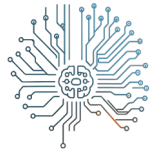
## **1 AS DIFERENTES DINÂMICAS DO COLONIALISMO DIGITAL: UMA PERSPECTIVA POR MEIO DE ESTUDOS DE CASOS**

De acordo com a análise de Ricaurte, Gómez-Cruz e Siles (2024), as dinâmicas do colonialismo digital operam em duas escalas distintas, mas interconectadas. A primeira é uma escala macro-macro, de caráter planetário, que envolve as relações de poder entre grandes corporações tecnológicas e Estados. Nesse nível, destacam-se os vínculos entre empresas transnacionais e governos economicamente e geopoliticamente relevantes, os quais, longe de estarem desvinculados entre si, atuam de forma articulada, muitas vezes subordinando ou condicionando a soberania de Estados periféricos e menos poderosos.

A segunda escala diz respeito à relação Estado-cidadão, abordando como as dinâmicas tecnológicas afetam diretamente os direitos individuais, a cidadania digital e a forma como os dados pessoais são coletados, processados e utilizados pelas instituições públicas ou mediadas por agentes privados. Essa dupla escala evidencia a complexidade da colonialidade digital contemporânea, que combina assimetrias globais de poder com processos locais de vigilância, controle e exclusão.

Ainda que tal proposta sobre as duas escalas de operação do colonialismo digital ofereça uma importante contribuição para compreender os arranjos de poder contemporâneos, propõe-se aqui a inclusão de uma terceira dimensão analítica: a escala empresa-usuário. Essa escala diz respeito às interações cotidianas que ocorrem diretamente entre as plataformas digitais e os indivíduos, fora da mediação explícita do Estado. Trata-se de observar como as corporações, especialmente as plataformas digitais globais, exercem poder normativo e disciplinar por meio de termos de uso, políticas algorítmicas, práticas de coleta de dados e mecanismos de moderação de conteúdo.





## 1.1 A ESCALA MACRO-MARCO E AS MICROTAREFAS

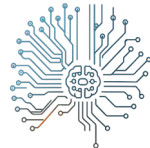
No contexto das transformações econômicas e tecnológicas contemporâneas, observa-se o surgimento de uma nova divisão, marcada pela crescente centralidade dos chamados bens intangíveis. Tal reconfiguração global, estabelece uma distinção cada vez mais acentuada entre os países inseridos nas cadeias de valor por meio de atividades de alto valor agregado - como pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, finanças, serviços especializados e gestão da informação - e aqueles cuja participação permanece vinculada à produção material, seja de bens primários ou de produtos manufaturados com baixo conteúdo tecnológico (Dowbor, 2025).

Essa clivagem contemporânea supera a lógica tradicional da divisão entre economias exportadoras de matérias-primas e economias industrializadas, instaurando uma nova assimetria que se expressa na dicotomia entre produção material e produção imaterial. Enquanto os centros econômicos concentram as atividades relacionadas à circulação do saber, à gestão dos dados e ao controle das infraestruturas digitais, as regiões periféricas, em especial no Sul Global, ocupam predominantemente funções operacionais ou extrativistas, muitas vezes vinculadas à lógica da plataformação e da dependência tecnológica.

Assim, as nações mais desenvolvidas mantêm o controle sobre o progresso tecnológico por meio do domínio de patentes, da atuação de grandes corporações e de políticas públicas estruturadas que incentivam a inovação (Dowbor, 2025). Esse avanço, no entanto, frequentemente se apoia em dinâmicas assimétricas: países do Sul Global são responsáveis por fornecer recursos naturais estratégicos e por desempenhar funções essenciais na cadeia produtiva, seja na fabricação de componentes, seja na execução de tarefas por meio de plataformas digitais (Valente; Grohmann, 2024).

Além disso, essas nações exercem papel central no fornecimento de dados, insumos valiosos para o funcionamento e o aprimoramento de sistemas





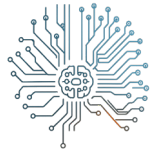
baseados em inteligência artificial (Zuboff, 2020). A coleta massiva desses dados é majoritariamente realizada por empresas sediadas em países ricos, sobretudo nos Estados Unidos, que dispõem de infraestrutura avançada para seu armazenamento e processamento (Jung, 2022). Com isso, reforça-se uma nova forma de dependência: a digital, marcada pelo controle de infraestruturas, plataformas e fluxos de informação, aprofundando as desigualdades históricas e ampliando a exploração do trabalho precário nos territórios periféricos (Valente; Grohmann, 2024).

Desta forma, tais países continuam a ser tratados, sobretudo, como fontes de exploração, não como participantes autônomos no ecossistema digital. Atualmente, por exemplo, observa-se uma fragmentação crescente das responsabilidades tradicionais dos grandes empregadores, que agora se distribuem ao longo de extensas cadeias globais de fornecimento. Essa terceirização é viabilizada por plataformas digitais que conectam empresas a uma força de trabalho global, disponível sob demanda e contratada para tarefas específicas. Plataformas como Amazon Mechanical Turk (Mturk), CloudFactory, CrowdFlower e LeadGenius são exemplos disso, permitindo que empresas acessem trabalhadores em países do Sul Global, como Colômbia, para executar atividades de forma padronizada, dentro de prazos rígidos (Mejias; Couldry, 2024).

No contexto do trabalho realizado nas plataformas de microtarefas, como o MTurk, é possível observar uma variedade impressionante de tarefas realizadas por trabalhadores, ou “*turkers*”, como são chamados (Moreschi; Pereira; Cozman, 2020). Esses trabalhadores, predominantemente de países periféricos, executam uma série de atividades que revelam a fragmentação do trabalho digital no cenário global (Jung, 2022).

No início do desenvolvimento da MTurk, engenheiros da empresa tentaram criar um sistema automatizado capaz de identificar e excluir conteúdos duplicados no site (Schwartz, 2019). À primeira vista, essa tarefa parecia trivial para um software, já que consistia em comparar objetos e eliminar repetições. No entanto, o desafio revelou-se mais complexo do que o previsto, exigindo uma





capacidade de discernimento, especialmente entre imagens e textos semelhantes, que os algoritmos não conseguiam reproduzir com precisão. A dificuldade residia justamente nos aspectos sutis da percepção, algo ainda intrinsecamente humano (Schwartz, 2019).

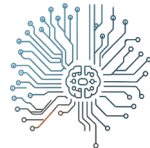
Diante da limitação da automação, surgiu uma solução proposta por um dos gerentes da empresa, que registrou a ideia de um sistema híbrido, combinando processamento computacional com trabalho humano distribuído (Schwartz, 2019). O modelo consistia em fragmentar tarefas complexas em pequenas unidades operacionais (subtarefas), delegando sua execução a uma rede de trabalhadores humanos interconectados, que atuavam de forma paralela (Schwartz, 2019).

O sistema, batizado como “*Mechanical Turk*”, faz alusão a uma “engenhoca” do século XVIII: uma suposta máquina de jogar xadrez que, na verdade, escondia uma pessoa dentro (Stephens, 2022). A metáfora é precisa, o que a plataforma faz é ocultar o trabalho humano sob a aparência de uma automação autônoma. A lógica por trás da MTurk é a de tornar invisível a ação humana, mesmo quando ela é essencial para que a tecnologia funcione (Schwartz, 2019).

Essa invisibilidade é reforçada por um design que despessoaliza completamente os trabalhadores. Em vez de nomes, os indivíduos são identificados por números, e qualquer contato entre quem oferece a tarefa e quem a realiza é mediado por uma interface impessoal, sem espaço para diálogo direto (Moreschi; Pereira; Cozman, 2020). O próprio fundador da empresa, Jeff Bezos, chegou a se referir a esses trabalhadores como “inteligência da inteligência artificial” (Stephens, 2022). Trata-se, portanto, de uma estratégia que instrumentaliza o trabalho humano ao mesmo tempo em que apaga sua presença, gerando implicações éticas profundas sobre reconhecimento, remuneração e direitos desses sujeitos (Moreschi; Pereira; Cozman, 2020).

As tarefas descritas pelos “*turkers*” brasileiros, como “analisar imagens de zebras”, “marcar partes do corpo em fotos de pessoas brigando”, “assistir filmes e avaliá-los” ou “identificar flores e frutas em plantas brasileiras” (Moreschi; Pereira;





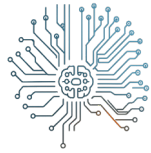
Cozman, 2020), ilustram a diversidade e a complexidade do trabalho realizado nessas plataformas. No entanto, essa diversidade de tarefas também evidencia a precarização do trabalho, visto que muitas dessas atividades são de baixo valor, sem benefícios ou garantias, e não exigem habilidades especializadas (Mejias; Couldry, 2024). Além disso, algumas das tarefas mencionadas pelos “*turkers*” envolvem conteúdos potencialmente prejudiciais, como imagens pornográficas, cenas violentas ou invasões de privacidade (Moreschi; Pereira; Cozman, 2020). Tarefas como “analisando imagens de mortes violentas” são exemplos claros da exposição a conteúdos prejudiciais (Moreschi; Pereira; Cozman, 2020).

Um dos aspectos mais marcantes do modelo de plataformas como MTurk é a extrema precarização do trabalho envolvido. Os trabalhadores, que integram a base da cadeia de treinamento de sistemas de inteligência artificial, muitas vezes recebem valores irrisórios por tarefa, com pagamentos mínimos que podem ser de apenas US\$ 0,01 por atividade, conforme site da empresa. Esse tipo de remuneração revela a lógica de exploração que sustenta parte significativa da economia digital, em que tarefas essenciais para o funcionamento de sistemas automatizados são realizadas por trabalhadores invisibilizados e desvalorizados.

Embora esses indivíduos estejam profundamente envolvidos em etapas críticas do processo, como anotação de dados, moderação de conteúdo e categorização de imagens, sua posição social e econômica é completamente dissociada daquela ocupada por engenheiros e desenvolvedores (Schwartz, 2019). Assim, cria-se uma hierarquia dentro do ecossistema da inteligência artificial, que reproduz desigualdades históricas de classe e trabalho, colocando o chamado “trabalho de microtarefas” em um patamar inferior e desprotegido, mesmo quando sua contribuição é indispensável.

Dessa forma, observa-se que, apesar de serem parte fundamental da engrenagem que sustenta os sistemas de inteligência artificial, os trabalhadores de microtarefas permanecem à margem das discussões sobre valorização profissional, reconhecimento e direitos. O modelo adotado por plataformas como o MTurk escancara a face oculta da inteligência artificial, cuja eficácia depende, em grande





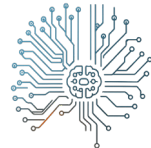
medida, da mão de obra humana precarizada, mal remunerada e despersonalizada. Ao mesmo tempo em que viabiliza a escala e a velocidade exigidas pelos projetos de IA, esse arranjo reforça desigualdades globais e aprofunda a assimetria entre os que projetam a tecnologia e os que a sustentam anonimamente. Portanto, é urgente repensar as condições de trabalho nesse setor, incluindo não apenas a discussão sobre remuneração justa, mas também mecanismos de proteção, reconhecimento e transparência em relação a esse tipo de trabalho invisível<sup>10</sup>.

## 1.2 A ESCALA ESTADO-CIDADÃO E O SISTEMA PREDITIVO DE GRAVIDEZ EM SALTA

De acordo com Ricaurte, Gómez-Cruz e Siles (2024), países do Sul Global se tornam consumidores passivos de soluções tecnológicas desenvolvidas no Norte Global, em vez de agentes autônomos na construção de suas infraestruturas digitais. A crença de que empresas transnacionais podem oferecer soluções “gratuitas” para problemas estruturais - como conectividade, inclusão digital ou modernização da administração pública, acaba por legitimar a ausência de políticas de investimento em infraestrutura pública e a terceirização de serviços essenciais (Ricaurte; Gómez-Cruz; Siles, 2024). Isso favorece a consolidação de plataformas privadas como mediadoras privilegiadas do espaço digital, permitindo a extração massiva de dados, muitas vezes sem a devida transparência, responsabilização ou controle soberano.

<sup>10</sup> Ao refletir sobre os impactos da economia digital, é essencial considerar não apenas os aspectos imateriais do fluxo de dados e do trabalho remoto, mas também os custos ambientais concretos associados às infraestruturas físicas que sustentam esse sistema. Cada dispositivo que utilizamos para acessar e interagir digitalmente está intrinsecamente ligado a uma cadeia global de extração mineral, produção industrial e descarte que tem consequências profundas, sobretudo para países do Sul Global (Mejias; Couldry, 2024). Os componentes essenciais desses dispositivos, como chips e baterias, dependem de matérias-primas como silício, fósforo, estanho, prata, cobalto e lítio. Esses elementos são extraídos majoritariamente de territórios na África, Ásia e América Latina, muitas vezes em contextos marcados por condições de trabalho precárias, exploração e até violência (Mejias; Couldry, 2024). No deserto do Atacama, no Chile, o método de extração por evaporação em salares tem causado escassez hídrica para povos indígenas que habitam a região há séculos, como o povo Lickan Antay. Esse é um exemplo claro de como a expansão das tecnologias digitais pode aprofundar desigualdades históricas e violar direitos de comunidades locais, mesmo sob o discurso da “inovação sustentável”.



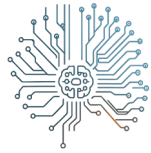


Isso é importante de compreender pois, historicamente, os processos coloniais não se limitaram à dominação territorial, econômica ou política; eles também se sustentaram em um projeto simbólico e epistemológico mais profundo (Mejias; Couldry, 2024). Para que o domínio fosse legitimado, tornou-se necessário impor uma visão de mundo específica. Essa lógica de superioridade justificava a chamada “missão civilizatória”, em que a imposição cultural era vista como um dever moral dos colonizadores (Mejias; Couldry, 2024). Com isso, o colonialismo atuava não apenas sobre os corpos, por meio da exploração e da violência física, mas também sobre as subjetividades. A construção de um imaginário único e excludente permitia o controle das formas de pensar, sentir e imaginar o mundo. Essa forma de dominação simbólica é um dos pilares da colonialidade que ainda persiste em diversas estruturas contemporâneas, inclusive na maneira como se pensa e se produz tecnologia e conhecimento na atualidade (Mejias; Couldry, 2024).

Essa forma de dependência aprofunda a assimetria no acesso e controle sobre os dados, que hoje se constituem como um dos principais ativos econômicos e estratégicos da era digital (Ricaurte; Gómez-Cruz; Siles, 2024). Ao ceder o controle de sua infraestrutura informacional a atores privados estrangeiros, os países latino-americanos renunciam parte significativa de sua soberania tecnológica, ficando limitados não apenas na formulação de políticas públicas digitais, mas também em sua capacidade de regular os fluxos de informação, proteger os direitos dos cidadãos e promover um modelo de desenvolvimento tecnológico inclusivo, democrático e situado (Shaake, 2024).

A forma como dados pessoais são coletados, processados e utilizados por instituições públicas - muitas vezes com mediação de agentes privados estrangeiros - revela uma nova camada de controle social. Nessa dinâmica, a dimensão Estado-cidadão da colonialidade digital se revela na forma como o poder público passa a exercer controle sobre a vida dos indivíduos por meio de sistemas tecnológicos opacos e pouco regulados. A cidadania digital é comprometida, pois os direitos à privacidade, à autodeterminação informativa e à não discriminação são frequentemente ignorados. Assim, evidencia-se a complexidade da colonialidade





digital: as tecnologias além de reforçarem assimetrias globais, também se tornam instrumentos de vigilância e exclusão em nível local.

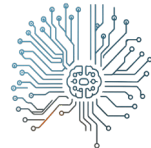
O caso da província de Salta, na Argentina, é um exemplo contundente da aplicação de tecnologias digitais em políticas públicas de maneira alinhada à lógica da colonialidade. Em parceria com a Microsoft, o governo local desenvolveu uma plataforma de intervenção social baseada em inteligência artificial com o objetivo de prever, com até cinco ou seis anos de antecedência, quais meninas teriam alta probabilidade de engravidar na adolescência (Jemio; Hagerty; Aranda, 2022). A ferramenta prometia que seria capaz de identificar essas meninas individualmente, incluindo nome, sobrenome e endereço, com base em dados considerados sensíveis, como etnia, nacionalidade, deficiência, condições de moradia e localização geográfica (Jemio; Hagerty; Aranda, 2022).

Embora tenha sido apresentado como uma política de prevenção, sob o argumento de que a gravidez precoce comprometeria o futuro de adolescentes, o projeto em questão levantou sérias preocupações. A coleta de dados ocorreu entre 2016 e 2017, por meio de questionários aplicados em bairros de baixa renda da capital (Balmaceda; Pedace; Schleider, 2022). A pesquisa abrangeu cerca de 300 mil pessoas, sendo pouco mais de 12 mil meninas e adolescentes entre 10 e 19 anos. No caso de menores de idade, os dados foram coletados mediante consentimento ou através de entrevista com o chamado “chefe de família” (Balmaceda; Pedace; Schleider, 2022).

Ademais, ao categorizar adolescentes como futuras mães com base em seus perfis sociodemográficos, ele acabava por reforçar estereótipos históricos ligados à etnia e à marginalização, gerando um efeito discriminatório (Balmaceda; Pedace; Schleider, 2023). Além disso, havia uma notável opacidade nos critérios utilizados: não foi divulgado como os dados eram tratados, quais variáveis influenciavam as decisões algorítmicas, tampouco se existiam mecanismos de auditoria ou contestação (Balmaceda; Pedace; Schleider, 2022).

Como resultado, meninas tornaram-se alvos de intervenções estatais baseadas em previsões altamente questionáveis. Esse caso evidencia como tecnologias supostamente neutras podem reproduzir e aprofundar desigualdades





sociais quando implementadas sem uma abordagem crítica, democrática e situada. Ele também demonstra como o uso de inteligência artificial no âmbito de políticas públicas pode operar como uma nova forma de vigilância e controle sobre populações vulnerabilizadas, deslocando o foco de transformações estruturais para intervenções individualizadas e punitivas.

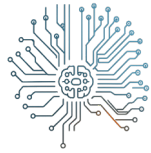
### 1.3 A ESCALA EMPRESA-USUÁRIO E O CASO META

Ao se adicionar uma terceira escala de análise ao debate sobre colonialismo digital, torna-se evidente que a dominação informacional não se limita apenas aos grandes blocos geopolíticos nem às relações formais entre Estado e cidadão. Essa camada mais difusa e cotidiana revela como os usuários - especialmente aqueles oriundos de países periféricos - são constantemente inseridos em dinâmicas opacas de extração de valor, moldadas por códigos algorítmicos e regimes normativos impostos unilateralmente por plataformas globais.

Nesse cenário, o indivíduo deixa de ser sujeito de direitos para ser tratado como objeto de processamento contínuo de dados. A recente atualização da política de privacidade da Meta exemplifica esse fenômeno: cidadãos brasileiros têm suas informações pessoais, inclusive sensíveis e presentes em imagens, áudios e vídeos, capturadas para o treinamento de modelos de inteligência artificial generativa, muitas vezes sem base legal adequada, sem transparência suficiente e com barreiras substanciais para o exercício de direitos fundamentais (Brasil, 2024).

A opção de *opt-out*, por exemplo, é disfarçada sob mecanismos labirínticos que dificultam sua efetiva utilização, gerando um déficit informacional profundo e reforçando a assimetria entre controlador e titular (Brasil, 2024). Trata-se, portanto, de uma forma contemporânea de sujeição, em que o poder se exerce por meio da arquitetura das plataformas e da lógica algorítmica, colocando milhões de usuários sob vigilância e exploração contínua, sem os devidos meios de contestação, compreensão ou autodeterminação (Mejias; Couldry, 2024).





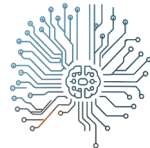
Tal configuração demanda uma crítica incisiva não apenas das práticas corporativas, mas também da insuficiência das salvaguardas jurídicas diante de um modelo tecnológico que avança sobre a esfera privada dos indivíduos de forma silenciosa, persistente e altamente assimétrica. A assimetria não se limita ao tratamento dos dados em si, mas se estende também à forma como as informações sobre essas práticas são comunicadas aos usuários, revelando uma diferença significativa entre o nível de proteção oferecido a cidadãos europeus e brasileiros.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, na União Europeia, a Meta adotou uma postura mais cautelosa, anunciando publicamente que não utiliza conteúdos gerados por menores de 18 anos no treinamento de seus modelos de IA e promovendo ampla divulgação das alterações na política de privacidade (Brasil, 2024). Os usuários europeus foram notificados de forma proativa, tanto por e-mails personalizados quanto por notificações nos aplicativos, garantindo-lhes maior clareza, previsibilidade e possibilidade de reação informada (Brasil, 2024).

Essa discrepância evidencia um duplo padrão na governança de dados pessoais, no qual países periféricos são frequentemente tratados como laboratórios de teste ou zonas de menor exigência regulatória por grandes corporações tecnológicas globais. Tal dinâmica revela mais do que uma simples assimetria técnica ou jurídica: trata-se da reprodução contemporânea da colonialidade do poder, conforme apontada no início do texto. A colonialidade, nesse caso, manifesta-se na persistência de uma ordem global hierárquica, onde populações do Sul Global são sistematicamente colocadas em posições de vulnerabilidade e subordinação, inclusive no campo da economia digital e da proteção de dados.

A ausência de informações claras, acessíveis e precisas sobre o uso de dados pessoais — especialmente aqueles coletados para fins de treinamento de inteligência artificial — configura não apenas uma violação ao princípio da transparência, previsto na LGPD, mas também reforça um padrão histórico de expropriação de recursos informacionais e cognitivos. Trata-se de um novo ciclo de exploração, em que o dado se torna a nova matéria-prima do extrativismo





digital, e os territórios periféricos, por sua vez, continuam a ocupar a posição de provedores involuntários dessa riqueza.

Ao naturalizar a desproteção de populações inteiras com base em sua posição geopolítica e econômica, o colonialismo digital atualiza os mecanismos da colonialidade do poder, promovendo um modelo de inovação tecnológica que ignora os princípios de justiça, equidade e soberania digital. Tal cenário demanda, com urgência, o fortalecimento dos mecanismos nacionais de fiscalização e regulação, além da construção de uma governança digital global comprometida com os direitos humanos, a autodeterminação dos povos e a reparação das desigualdades históricas, conforme será delimitado no próximo item.

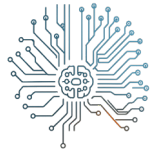
## 2 FRAGMENTAÇÃO REGULATÓRIA NA AMÉRICA LATINA

A fragmentação regulatória na América Latina compromete a capacidade de *enforcement* das autoridades nacionais da região. Embora o Brasil tenha elaborado a LGPD com forte inspiração no RGPD, há uma distinção fundamental entre essas normas: não temos uma norma aplicável à nossa região; não há um regulamento ou acordo comum à América do Sul, por exemplo, ao contrário do regulamento europeu, que se irradia por toda a toda a União Europeia, cujos países-membros têm ainda normas e autoridades nacionais responsáveis pela proteção de dados.

Isso se revela, por exemplo, no fato de que os países da América Latina (ou da América do Sul, ou mesmo do Mercosul) não têm uma norma supranacional. Aliás, alguns deles sequer têm normas gerais de proteção de dados, ou autoridades constituídas exclusivamente dessa função. Observe-se o quadro<sup>11</sup> a seguir, que concentra informações sobre algumas das principais economias da América Latina:

<sup>11</sup> Os dados foram compilados a partir de relatório da renomada agência de consultoria Ernst & Young, e verificados diretamente nos sites oficiais dos países aos quais se referem. Fonte principal: PROTECCIÓN de Datos Personales en LATAM: Guía de Consulta Rápida. EY, 9 dez. 2024. Disponível em: [https://www.ey.com/es\\_ce/insights/law/proteccion-de-datos-personales-en-latam](https://www.ey.com/es_ce/insights/law/proteccion-de-datos-personales-en-latam).



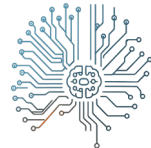


Quadro 1 - Fragmentação Regulatória na América Latina: Quadro Comparativo entre Países da Região

País	Lei específica	Autoridade exclusiva de Proteção de Dados?
Argentina	<b>Sim:</b> Ley de Protección de Datos Personales – LPDP (Ley nº 25.326).	<b>Não.</b> Função exercida pela Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que monitora o desempenho da transparência na gestão pública, garante o acesso à informação e a proteção de dados no país.
Brasil	<b>Sim:</b> Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018).	<b>Sim:</b> Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.
Chile	<b>Sim:</b> Ley nº 19.628 sobre Protección de Datos Personales – LPDP.	<b>Não.</b> Função exercida pelo Servicio Nacional del Consumidor – SERNAC.
Colômbia	<b>Sim.</b> Ley Estatutaria 1581 de 2012.	<b>Não.</b> Função exercida pela Superintendencia de Industria y Comercio.
Costa Rica	<b>Sim:</b> Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley nº 8.968/2011).	<b>Sim:</b> Agencia de Protección de Datos de los Habitantes – PRODHAB.
Equador	<b>Sim:</b> Ley Orgánica de Protección de Datos Personales – LOPDP.	<b>Sim:</b> Superintendencia de Protección de Datos Personales.
México	<b>Sim:</b> Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.	<b>Sim:</b> Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – INAI.
Panamá	<b>Sim:</b> Ley nº 81 sobre Protección de Datos (Decreto Ejecutivo 285/2021).	<b>Sim:</b> Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información – ANTAI.
Paraguai	<b>Sim:</b> Sim: Ley nº 6534/2020 (sobre relações creditícias).	<b>Não.</b> Funções exercidas pelo Banco Central del Paraguay – BCP e pela Secretaría de Defensa del Usuario y Consumidor – SEDECO.
Peru	<b>Sim:</b> Ley de Protección de Datos Personales – LPDP (Ley nº 29733).	<b>Sim:</b> Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
República Dominicana	<b>Sim:</b> Ley nº 172-13 (de 2013).	<b>Não.</b> Função exercida pelo Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones – INDOTEL.
Uruguai	<b>Sim:</b> Ley de Protección de Datos Personales (Ley nº 18331, de 2008).	<b>Não.</b> Função exercida pela Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento – AGESIC, por meio da sua Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales – URCDP.

Fonte: os autores (2025).





Essas informações trazem inferências consistentes com a hipótese aventada neste estudo: Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, República Dominicana e Uruguai não contam com autoridades nacionais de proteção de dados independentes e imbuídas exclusivamente dessa função; as instituições competentes para tal acumulam outras funções, relacionadas à transparência governamental, proteção do consumidor, regulação da indústria, etc. (informação que traz especial interesse para o Brasil, pela proximidade territorial com quatro dessas cinco nações).

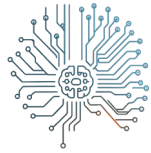
Isso gera uma falta de coesão normativa que dificulta o a efetivação da proteção de dados em toda a região latino-americana. Parte da resistência europeia ao colonialismo digital estadunidense ou chinês não nasce apenas da sua força econômica, mas justamente da sua unidade normativa, que favorece ao mesmo tempo a proteção de dados das pessoas e as transações comerciais transnacionais - aliás, a competitividade comercial vinha destacada já na Diretiva 96 da UE, anterior ao RGPD.

Essa reflexão já vem sendo apontada em nível internacional, a exemplo do comentário de Belli e Zingales (2025, tradução nossa) em Editorial da *International Review of Law, Computers & Technology*, em edição especial que reuniu trabalhos apresentados na CPDP Latam 2023, que sintetiza o problema de forma simples, mas compreensiva:

Um ponto recorrente em várias discussões foi a necessidade de reforçar a coordenação e a ação multissetorial em nível latino-americano, a fim de enfrentar desafios comuns (reconhecimento facial, inteligência artificial generativa, transferências seguras de dados etc.), especialmente no que diz respeito ao fortalecimento da coordenação entre as autoridades regulatórias regionais.

Nenhum regulador tem um papel mais fundamental do que as autoridades de proteção de dados na orientação da evolução tecnológica baseada na coleta e no tratamento de enormes quantidades





de dados (pessoais). Nesse sentido, é necessária uma atuação conjunta para fomentar a integração da autodeterminação informacional como princípio orientador do desenvolvimento.

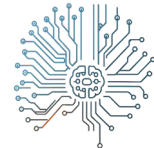
Como destacamos na abertura do CPDP LatAm 2023, temos a responsabilidade de construir essa simbiose entre inovação e proteção de dados. Como afirmou o Artigo 1º da Lei Francesa de Proteção de Dados (1978), de maneira extremamente visionária: “A informática deve estar a serviço de cada cidadão.”

Entretanto, diferentemente da região europeia, onde o desenvolvimento regulatório ao longo dos últimos 50 anos foi acompanhado, primeiro, pela criação de um tratado regional — a Convenção 108 — e, depois, por sucessivas evoluções legislativas e até mesmo pela criação de um órgão coordenador comum, o Comitê Europeu de Proteção de Dados (EDPB), tal evolução institucional ainda é inexistente na região sul-americana (Belli; Zingales, 2025, tradução nossa).

Os desafios impostos pelo colonialismo digital são intrinsecamente transnacionais: grandes e poderosas corporações, vindas especialmente dos Estados Unidos e (algumas) da China fornecem tudo o que é necessário para se utilizar as tecnologias digitais, ao mesmo tempo em que, por meio destas mesmas ferramentas, exploram ativos digitais produzidos pelos usuários latino-americanos (constituídos não apenas por consumidores individuais, mas também por organizações e governos). Parece-nos evidente, portanto, a necessidade de se fortalecer a unidade regional latino-americana (ou sul-americana, por exemplo), a fim de se robustecer a tutela da proteção de dados e a competitividade econômica dos países dessa região.

Nesse sentido, destaca-se a importância de mecanismos como a Rede Ibero-americana de Proteção de Dados (RIPD), criada formalmente em 2003 durante o II Encontro Ibero-americano de Proteção de Dados, na Guatemala. A RIPD é composta atualmente por 34 entidades — 16 autoridades nacionais de proteção de dados (membros plenos) e 18 organizações com estatuto de observadores. Desde sua concepção, o objetivo da RIPD tem sido estabelecer um





fórum permanente de coordenação e cooperação regional no campo da proteção de dados pessoais.

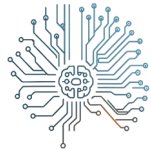
Mais do que um espaço técnico de intercâmbio, a RIPD constitui uma infraestrutura política e normativa essencial para o fortalecimento da soberania digital na região ibero-americana. Ao promover o diálogo entre diferentes países com laços linguísticos, culturais e históricos comuns, a rede permite a construção de soluções jurídicas contextualizadas, capazes de responder aos desafios colocados pela crescente digitalização e pelos fluxos transnacionais de dados. Nesse sentido, a RIPD pode atuar como contrapeso à concentração de poder das grandes corporações globais de tecnologia, cujas práticas, muitas vezes, impõem modelos regulatórios assimétricos e favorecem a extração descontrolada de dados em países do Sul Global.

A atuação coordenada da RIPD é particularmente relevante no combate ao que se entende por colonialismo digital. Ao articular respostas regionais, fomentar o intercâmbio de experiências e promover o desenvolvimento de legislações nacionais, a RIPD reforça a capacidade dos países ibero-americanos de resistir às dinâmicas extrativistas de dados e de garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, com base em valores democráticos e na equidade.

Um dos marcos desse esforço coletivo foi a adoção, em 2017, dos “Standards de proteção de dados pessoais para os países ibero-americanos”, documento que busca estabelecer parâmetros comuns para o desenvolvimento normativo da região. Esses padrões funcionam como referência para a elaboração de legislações em países que ainda não regulamentaram plenamente esse direito, bem como instrumento de atualização e harmonização de marcos legais já existentes. Ao fazer isso, a RIPD fortalece a integração regional e amplia a capacidade dos Estados-membros de negociar e se posicionar internacionalmente com mais autonomia e legitimidade.

Assim, a RIPD não apenas promove a proteção de dados pessoais no espaço ibero-americano, mas também atua como agente estratégico na construção de um ecossistema digital mais justo, inclusivo e soberano, contribuindo ativamente





para o enfrentamento das injustiças estruturais herdadas do colonialismo, agora reproduzidas na esfera digital.

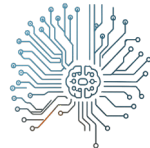
## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise proposta pelo presente estudo evidencia as diferentes escalas em que as dinâmicas coloniais e neocoloniais continuam a afetar a América Latina, sobretudo no campo da governança digital. A complexidade do cenário torna evidente que, apesar do avanço das tecnologias de dados e da crescente centralidade da infraestrutura digital na vida social, a região ainda carece de uma estrutura consolidada de produção crítica e autônoma sobre essas temáticas. Esse vazio epistêmico e institucional se relaciona diretamente com o que Aníbal Quijano conceituou como colonialidade do poder — ou seja, a persistência de padrões coloniais de dominação que, mesmo após a independência política dos países, continuam a organizar hierarquicamente o saber, o poder e o ser.

A colonialidade se manifesta, nesse caso, pela subordinação da América Latina a centros tecnológicos e epistemológicos do Norte Global, que impõem seus modelos de inovação, suas infraestruturas digitais e seus regimes regulatórios como paradigmas universais. Ao mesmo tempo, as assimetrias econômicas, políticas e sociais estruturais da região limitam a capacidade dos países latino-americanos de produzir teorias próprias, disputar sentidos e influenciar decisões globais sobre o papel dos dados na sociedade. Essa dependência não é apenas técnica ou econômica, mas epistêmica, pois envolve a exclusão de vozes locais na definição dos termos do debate sobre soberania informacional, inteligência artificial, algoritmos e proteção de dados.

Enquanto a União Europeia, por exemplo, avança na construção de um marco regulatório coeso e internacionalmente influente — como demonstrado pelo RGPD e pela recente regulação da inteligência artificial — os países latino-americanos ainda enfrentam dificuldades significativas em institucionalizar



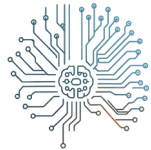


políticas públicas robustas, coordenadas e sensíveis ao contexto regional, capazes de reconhecer a centralidade dos dados nas disputas por soberania, justiça social e democracia. Essa fragmentação institucional não apenas reduz a eficácia das respostas nacionais, mas também enfraquece a capacidade regional de resistir ao colonialismo digital, que se expressa na lógica extrativista das grandes corporações tecnológicas que operam globalmente, mas se aproveitam das fragilidades normativas e políticas locais.

Nesse contexto, a RIPD emerge como uma importante estratégia de enfrentamento da colonialidade digital, ao propor uma articulação regional orientada pela cooperação técnica, pelo compartilhamento de experiências e pela construção de padrões normativos comuns. Desde sua criação em 2003, a RIPD tem contribuído para o fortalecimento institucional das autoridades nacionais de proteção de dados, funcionando como um espaço político e técnico de construção de soberania regulatória no Sul Global. Ao articular-se como uma rede horizontal, com base na cooperação entre países historicamente marginalizados nas esferas globais de decisão, a RIPD rompe com o padrão da colonialidade do saber, que historicamente desqualificou os sistemas normativos e as práticas jurídicas do Sul. A rede atua, assim, não apenas como mecanismo de defesa técnica contra abusos das big techs, mas também como expressão de uma resistência política à reprodução de hierarquias coloniais no ambiente digital.

No entanto, apesar de seu valor político e simbólico, a efetividade de soluções regionais como a RIPD encontra limites concretos frente à estrutura altamente consolidada do colonialismo digital, que opera em múltiplas frentes — políticas, econômicas, jurídicas e culturais — com forte apoio de interesses corporativos transnacionais, arquiteturas jurídicas globais assimétricas e ecossistemas tecnológicos profundamente enraizados em relações de dependência. Além disso, o fato de muitas das legislações nacionais de proteção de dados estarem alinhadas aos marcos regulatórios europeus ou norte-americanos, mesmo sem a devida adaptação ao contexto local, reforça uma forma de submissão normativa e epistemológica que dificulta a construção de alternativas verdadeiramente emancipatórias.





Nesse sentido, a mera existência de fóruns regionais pode não ser suficiente para neutralizar os efeitos da colonialidade digital, a menos que venha acompanhada de investimentos, no fortalecimento institucional das autoridades nacionais, educação digital cidadã e articulação internacional com outros movimentos do Sul Global. A superação da colonialidade do poder no campo digital exige não apenas cooperação técnica, mas uma disputa ativa por narrativas, modelos jurídicos e epistemologias que resgatem a dignidade, a soberania e os direitos das populações historicamente marginalizadas.

## REFERÊNCIAS

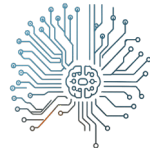
BALMACEDA, Tomás; PEDACE, Karina; SCHLEIDER, Tobias. What Artificial Intelligence is hiding: Microsoft and vulnerable girls in northern Argentina. *In*: Transnational Institute (org.). *State of Power 2023 – Digital Power* [e-book]. Amsterdam: **Transnational Institute**, p. 76–84, fev. 2022. Disponível em: <https://www.tni.org/en/publication/state-of-power-2023-digital-power>. Acesso em: 14 abr. 2025.

BARLOW, John Perry. Uma declaração de independência do ciberespaço. **Electronic Frontier Foundation**, 1996. Disponível em: <https://www.eff.org/cyberspace-independence>. Acesso em: 14 abr. 2025.

BELLI, Luca; ZINGALES, Nicolo. Cooperation and innovation to build meaningful data protection in Latin America. **International Review of Law, Computers & Technology**, v. 39, n. 1, p. 1–5, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2351670>.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Voto nº 11/2024/DIR-MW/CD. **Processo nº 00261.004509/2024-36**. Interessado: Meta Platforms Inc - Facebook Serviços Online do Brasil. Diretora relatora: Miriam Wimmer. Brasília, DF: ANPD, 2024.





CONSELHO DA EUROPA. **Pegasus and similar spyware and secret State surveillance**: Resolution 2513 (2023). Assembleia Parlamentar. Disponível em: <https://pace.coe.int/en/files/33116/html>. Acesso em: 14 abr. 2025.

DOWBOR, Ladislau. **Os desafios da revolução digital**: libertar o conhecimento para o bem comum. São Paulo: Elefante, 2025.

JEMIO, Diego; HAGERTY, Alexa; ARANDA, Florencia. The case of the creepy algorithm that ‘predicted’ teen pregnancy: a government leader in Argentina hailed the AI, which was fed invasive data about girls. The feminist pushback could inform the future of health tech. **Wired**, 16 fev. 2022. Disponível em: <https://www.wired.com/story/argentina-algorithms-pregnancy-prediction/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

JUNG, Maximilian. Digital capitalism is a mine not a cloud: exploring the extractivism at the root of the data economy. *In*: TRANSNATIONAL INSTITUTE (org.). **State of Power 2023 – Digital Power** [e-book]. Amsterdam: Transnational Institute, p. 65–75, fev. 2022. Disponível em: <https://www.tni.org/en/publication/state-of-power-2023-digital-power>. Acesso em: 14 abr. 2025.

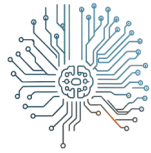
KWET, Michael. Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. **Race & Class**, v. 60, n. 4, 2019. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306396818823172>. DOI: <https://doi.org/10.1177/0306396818823172>. Acesso em: 14 abr. 2025.

MEJIAS, Ulises Ali; COULDRY, Nick. **Data grab**: the new colonialism of big tech and how to fight back. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2024.

MIGNOLO, Walter. **La opción descolonial**. Letral, [S.l.], n. 1, p. 4-22, 2008.

MORESCHI, B.; PEREIRA, G.; COZMAN, Fabio G. The brazilian workers in Amazon Mechanical Turk: Dreams and realities of ghost workers. **Contracampo – Brazilian Journal of Communication**, 39 (1), 2020.





NOTHIAS, Toussaint. An intellectual history of digital colonialism. **Journal of Communication**, 2025, [*ahead of print*]. Disponível em: <https://academic.oup.com/joc/advance-article/doi/10.1093/joc/jqaf003/8078024>.

PROTECCIÓN de Datos Personales en LATAM: Guía de Consulta Rápida. **EY**, 9 dez. 2024. Disponível em: [https://www.ey.com/es\\_ce/insights/law/proteccion-de-datos-personales-en-latam](https://www.ey.com/es_ce/insights/law/proteccion-de-datos-personales-en-latam).

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina. **Anuario Mariateguiano**, v. 101, n. 1, p. 113-122, 1997.

RICOURTE, Paola; GÓMEZ-CRUZ, Edgar; SILES, Ignacio. Algorithmic governmentality in Latin America: sociotechnical imaginaries, neocolonial soft power, and authoritarianism. **Big Data & Society**, jan./mar. 2024, p. 1–6. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/20539517241229697>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SCHAAKE, Marietje. **The tech coup: how to save democracy from Silicon Valley**. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2024.

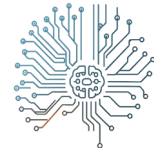
SCHWARTZ, Oscar. **Untold history of AI: how Amazon's Mechanical Turkers got squeezed inside the machine**. IEEE Spectrum, 22 abr. 2019. Disponível em: <https://spectrum.ieee.org/untold-history-of-ai-mechanical-turk-revisited-tkkt>. Acesso em: 15 abr. 2025.

SRNICEK, Nick. **Platform Capitalism**. Cambridge: Polity Press, 2017.

STEPHENS, Elizabeth. The mechanical Turk: a short history of 'artificial intelligence'. **Cultural Studies**, v. 37, n. 1, p. 1–23, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09502386.2022.2042580>. Acesso em: 15 abr. 2025.

TELLO, Andrés. Sobre el colonialismo digital: Datos, algoritmos y colonialidad tecnológica del poder en el sur global. **InMediaciones de la Comunicación**, v. 18, n. 2, Montevideo, 2023, p. 89-110. Disponível em: <https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicacion/article/view/3523/3813>.

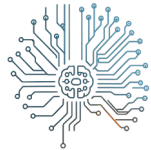




VALENTE, Jonas C. L.; GROHMANN, Rafael. Critical data studies with Latin America: theorizing beyond data colonialism. **Big Data & Society**, v. 11, n. 1, p. 1–13, jan./mar. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/20539517241227875>. Acesso em: 14 de abril de 2025.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano frente às novas fronteiras do poder. Tradução: George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.





# O PENSAMENTO COLONIAL E OS ALGORITMOS NO BRASIL

Michelle Fernanda Martins<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

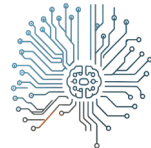
Quando pensamos em direitos humanos, e em especial em sua positivação, é possível perceber o pensamento colonial, uma vez que essa representa principalmente as lutas europeias e suas reivindicações, como o parlamentarismo inglês, a revolução francesa e a independência americana, demonstrando o desejo de potências colonizadoras. E a positivação desses direitos representa grandes avanços no reconhecimento de direitos, contudo é perceptível que são contribuições localizadas e parciais.

A teoria dominante dos direitos humanos também é caracterizada pelo racionalismo, que representa um ideário moderno-burguês, onde é considerado que os direitos são inerentes aos seres humanos, mas acabam existindo outros “não humanos” que são explorados, e hoje representam sujeitos e grupos oprimidos vulneráveis, como, por exemplo, os negros, os índios e as mulheres.

Dentro de tal perspectiva, mostra-se relevante compreender a importância do pensamento descolonial para que se compreenda que não existe tão somente a perspectiva europeia e as contribuições ocidentais, assim aprendendo os pensamentos contra-hegemônicos da modernidade e os movimentos sociais de resistência. Nessa vertente de pensamento, esse artigo se propõe a explorar dois conceitos: a colonialidade do poder, de Aníbal Quijano, e a geopolítica do conhecimento, de Walter Mignolo.

<sup>1</sup> Doutoranda em Direito e Sociedade (Unilasalle); Mestre em Direito e Sociedade (Unilasalle); Especialista em Direito Público; Graduada em Direito pela (Ulbra); Professora Universitária (Ulbra); Advogada. E-mail: michifm@gmail.com.





A colonialidade do poder é justamente esta denúncia de que o colonialismo continua a existir, e que é um poder mundial eurocentrado e capitalista, construído a partir da ideia de raça. Essa vertente de pensamento também pretende demonstrar que existem pensamentos que foram obscurecidos pela colonialidade da Modernidade. A geopolítica do conhecimento, por sua vez, denuncia que os modos de conceber, produzir e transmitir os saberes se dizem neutros e universais, contudo, em realidade, são eurocêntricos e dependentes da expropriação de outros saberes.

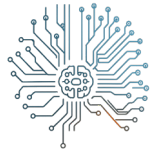
Por meio destes pensamentos, este artigo científico questiona se este pensamento colonial e eurocentrismo não está presente nas legislações brasileiras que regulamentam a Internet, que hoje é vista como um direito humano essencial e possui uma grande repercussão, sendo analisado o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Resolução nº 615 do CNJ, e quais os riscos que isso pode apresentar.

Portanto, como objetivo geral, pretende-se responder se há uma tendência eurocêntrica nas legislações acima mencionadas. Para isso, se utilizará o método dedutivo e a pesquisa exploratória.

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, com pesquisa em legislações, artigos científicos, doutrina e revistas especializadas. Também foram utilizadas reportagens para dados informativos.

A primeira seção do artigo trabalha a ideia de eurocentrismo na teoria dos direitos humanos e a necessidade de um pensamento descolonial dentro desta teoria. Na segunda seção, abordar-se-á duas perspectivas de conhecimento dentro do grupo Modernidade/Colonialidade, que representa o pensamento descolonial: a colonialidade do poder e a geopolítica do conhecimento. Por fim, na terceira seção, abordar-se-á a internet como direito humano e o possível pensamento colonial nas legislações brasileiras que regulamentam a Internet.





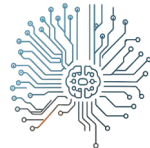
## 1 O EUROCENTRISMO NA TEORIA DOS DIREITOS HUMANOS E A NECESSIDADE DO PENSAMENTO DESCOLONIAL

No artigo “Para além do discurso eurocêntrico dos direitos humanos: contribuições da descolonialidade”, Fernanda Frizzo Bragato faz uma crítica descolonial, destacando que a teoria dominante dos direitos humanos se baseia em duas concepções centrais. A autora destaca que, do ponto de vista histórico-geográfico, defende-se a ideia que o reconhecimento de direitos adveio das lutas políticas europeias, dentre as quais o parlamentarismo inglês, a revolução francesa e a independência americana, sem que se analise que essa é uma contribuição localizada e parcial, e não global. Já do ponto de vista filosófico-antropológico, sua fundamentação baseia-se na concepção de indivíduo racional e autossuficiente da Modernidade, sem que se veja que esse ideário permitiu que outros não humanos fossem explorados, que hoje representam os grupos oprimidos e vulneráveis, sendo ignorado que as sociedades são culturalmente plurais (Bragatto, 2014, p. 202).

Nesse artigo, a autora propõe que essa crítica seja construída a partir de duas ideias centrais: a transmodernidade, de Enrique Dussel, e a geopolítica do conhecimento, de Walter D Mignolo, as quais propõem o debate das inconsistências da concepção histórico-geográfica dos direitos humanos, e tentam demonstrar as razões pelo qual o discurso da Modernidade Ocidental se projetou como um discurso hegemônico. A autora propõe ainda a utilização das categorias da colonialidade do poder e da diferença colonial para analisar as inconsistências da concepção antropológica-filosófica que se funda na ideia da racionalidade (Bragatto, 2014, p. 202, 205-206).

É importante saber que “as expressões ‘europeu’ e ‘eurocentrismo’ não estão atreladas ao aspecto geográfico, mas, possuem acepção política, o que nos remete a forma de dominação imperialista pautada nos ideais modernos” (Romaguera; Teixeira; Bragato, 2014, p. 6). Bragato, Romaguera, Teixeira e Bragato destacam que o discurso dos Direitos Humanos “são definidores da humanidade, e nada





tem de inerente ao Ser Humano”, pois não há reconhecimento de quem seria o sujeito concreto dessa ideologia, de modo que “uma mulher negra do ‘terceiro mundo’ tem a Humanidade de um homem branco, heterossexual, proprietário e europeu” (Romaguera; Teixeira; Bragato, 2014, p. 7).

Importante, para adentrar na temática principal deste artigo, compreender no que consiste o eurocentrismo. Conforme Aníbal Quijano:

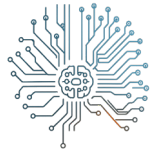
Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes de mediados do século XVII, ainda que algumas de suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou mesmo antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente hegemônica percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa. Sua constituição ocorreu associada à específica secularização burguesa do pensamento europeu e à experiência e às necessidades do padrão mundial de poder capitalista, colonial/moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América.

Não se trata, em conseqüência, de uma categoria que implica toda a história cognoscitiva em toda a Europa, nem na Europa Ocidental em particular. Em outras palavras, não se refere a todos os modos de conhecer de todos os europeus e em todas as épocas, mas a uma específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se torna mundialmente hegemônica colonizando e sobrepondo-se a todas as demais, prévias ou diferentes, e a seus respectivos saberes concretos, tanto na Europa como no resto do mundo (Quijano, 2005, p. 126).

Portanto, o eurocentrismo nos remete a perspectiva de dominação da Europa burguesa, a qual traz o pensamento hegemônico, e coloca as necessidades de padrão mundial do poder capitalista, colonial, eurocentrado. O eurocentrismo é ainda “uma lógica fundamental para a reprodução da colonialidade do saber” (Ballestrin, 2013, p. 103).

Em “A gramática do tempo”, Boaventura de Sousa Santos destaca que “Em cada era, um povo assume a responsabilidade de conduzir a Ideia Universal, tornando-se, assim, o povo histórico universal”, tendo essa prerrogativa passado “sucessivamente dos asiáticos para os gregos, depois para os romanos e, finalmente,





para os povos germânicos.” Por fim, o sociólogo destaca que “O futuro da América do Norte é ainda um futuro europeu, formado pelos restos da população europeia” (Santos, 2010, p. 191).

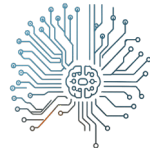
Nesse sentido, Fernanda Bragato destaca que o expressivo e expansivo reconhecimento dos direitos humanos traz as ideias de igualdade, não discriminação e valorização da diversidade, o qual remonta as origens histórico-geográficas do contexto europeu moderno, o que traz um grande desafio, principalmente considerando o seu fundamento antropológico-filosófico, que é a essência universal do homem, o qual é baseado na racionalidade, onde o homem é elevado ao centro do universo (Bragato, 2014, p. 207), pois é importante saber o que é considerado o homem.

O êxito da visão individualista coincide com a positivação dos direitos humanos, a qual é feita através da Declaração dos Direitos de Virgínia de 1776 e a Declaração Francesa do Homem e do Cidadão de 1789 (Bragato, 2014, p. 207). Na Declaração de Direitos de Virgínia, é expresso, em seu artigo 1º, que ““todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade” (EUA, 1776). Já na Declaração Francesa do Homem e do Cidadão, é expresso que “Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum.”, enquanto, no artigo 2º, é expresso que “A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão.” (França, 1789).

Portanto, com base nos diplomas legais acima citados, percebe-se que a vida, a liberdade e a propriedade passam a ser consideradas direitos inatos e invioláveis do homem, as quais são asseguradas por uma igualdade formal<sup>2</sup>, ideias que são a representação da ideia do sujeito racional e da viabilização do

<sup>2</sup> A igualdade formal trata-se da igualdade da lei que possui aplicação igual diante de todos. A igualdade material resulta da “repartição igual de todos os bens sociais por todos os indivíduos”, pretendo alcançar a justiça social (Helvesley, 2004, p.162).





projeto liberal-burguês da sociedade, o que auxiliou na expansão do capitalismo. Esse discurso surge como uma exigência de autonomia dos particulares contra o Estado, em uma revolta contra o Absolutismo (Bragatto, 2014, p. 209).

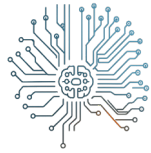
Contudo, quando se equiparam os direitos humanos com os direitos naturais do homem, formulados pelos jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII, dizendo que os direitos são inerentes aos homens, está se dizendo que o que fundamenta esses direitos é a racionalidade, que é da natureza do homem, de modo que “Esta racionalidade o faz senhor de si mesmo e de suas escolhas, razão por que seria uma violência impedir o homem de fazer livre uso da sua razão” (Bragatto, 2014, p. 209).

Como esses direitos humanos derivariam “de um estado pré-social ou de natureza”, se compreenderia que o “indivíduo que existe e subsiste sozinho e onde a sociedade não é o momento de realização do humano. O outro, portanto, não é o que possibilita a existência do sujeito, mas o limite para o exercício da liberdade” (Bragatto, 2014, p. 209). Logo, pensa-se somente no indivíduo, sem analisar a sua relação com a sociedade.

Portanto, conclui-se que “as Declarações modernas não objetivam a concessão de uma vida digna para todos os seres humanos, mas garantir o exercício de liberdade para aqueles que, por suas próprias forças, fossem capazes de exercê-la” (Bragatto, 2014, p. 210). Dessa forma, a racionalidade acabou se tornando um fator de exclusão dos seres humanos que estejam fora do modelo culturalmente dominante, qual seja “a figura do europeu, branco, do sexo masculino, cristão, conservador, heterossexual e proprietário” (Bragatto, 2014, p. 210).

Embora a teoria mais reconhecida dos direitos humanos traga o contexto europeu moderno, é necessário saber que existem outras contribuições que não só as ocidentais, e que representam a sua própria cultura. Também existem problemas que a civilização “ocidental” não consegue resolver, conforme nos ensina Aimé Cesáire:





O fato é que a chamada civilização “europeia”, civilização “ocidental”, tal como foi moldada por dois séculos de governo burguês, é incapaz de resolver os dois principais problemas aos quais sua existência deu origem: o problema do proletariado e o problema colonial. Levada ao tribunal da “razão” e ao tribunal da “consciência”, a Europa se mostra impotente para justificar-se. Cada vez mais, se refugia na hipocrisia, tanto mais odiosa por ter cada vez menos chances de enganar (Cesáire, 2020, p. 9).

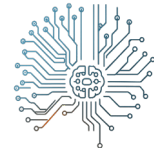
No mesmo sentido, aponta Angela Davis, quando diz que as lutas progressistas “estão fadadas ao fracasso se não tentarem desenvolver uma consciência sobre a insidiosa promoção do individualismo capitalista”, citando como exemplo o racismo, a repressão e a pobreza (Davis, 2018, p. 19). Sabendo que não existem só os saberes hegemônicos e que precisamos buscar respostas em outros locais, é extremamente relevante compreender como ocorre o pensamento descolonial, que nasce nos primórdios na Modernidade, ainda que em condição periférica, podendo ser citado Poma de Ayala, lutas de contestação colonial e a independência do Haiti (Bragato, 2014, p. 210).

O pensamento descolonial está inserido nas formas de pensamento contra-hegemônicas da modernidade, e se inspira nos movimentos de resistência que ocorreram no período colonial, mas que acabaram sendo ofuscados pela retórica da Modernidade (Bragato, 2014, p. 210).

De acordo com o que nos ensina Fernanda Bragato, o que é chamado de pensamento descolonial tem relação aos estudos do grupo chamado Modernidade/Colonialidade, que é composto por pensadores latino-americanos ou envolvidos com a realidade latino-americana, e que propõem uma ruptura mais radical, ao que denominam desobediência epistêmica, em relação ao saber europeu, até em relação a sua veia mais crítica, com a escola de Frankfurt (Bragato, 2014, p. 211).

Luciana Ballestrin explica como o grupo Modernidade/Colonialidade foi sendo construído:



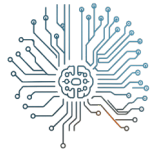


O Grupo Modernidade/Colonialidade foi sendo paulatinamente estruturado por vários seminários, diálogos paralelos e publicações. Ainda no ano de 1998, um importante encontro apoiado pela CLACSO e realizado na Universidad Central de Venezuela, reuniu pela primeira vez Edgardo Lander, Arturo Escobar, Walter Dignolo, Enrique Dussel, Anibal Quijano e Fernando Coronil. A partir deste, foi lançada em 2000 uma das publicações coletivas mais importantes do M/C: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. No mesmo ano de 1998, Ramon Grosfoguel e Agustín Lao-Montes reuniram em Binghamton, para um congresso internacional, Enrique Dussel, Walter Dignolo, Anibal Quijano e Immanuel Wallerstein. Nesse congresso foi discutida pelos quatro autores a herança colonial na América Latina, a partir da análise do sistema-mundo de Wallerstein (Castro-Gomez; Grosfoguel, 2007 *apud* Ballestrin, 2013, p. 97).

A autora segue descrevendo que, nos anos 1999 e 2000 (2001, 2002, 2003, 2004, 2006), ocorreram outros eventos, os quais incorporaram os seguintes nomes “Javier Sanjines, Catherine Walsh, Nelson Maldonado-Torres, Jose David Saldívar, Lewis Gordon, Boaventura de Sousa Santos, Margarita Cervantes de Salazar, Libia Grueso e Marcelo Fernandez Osco (Castro-Gomez; Grosfoguel, 2007; Dignolo, 2010 *apud* Ballestrin, 2013, p 97-99), e cita outros estudiosos que estariam conectados ao grupo, como “Jorge Sanjines, Ana Margarita Cervantes-Rodriguez, Linda Alcoff, Eduardo Mendieta, Elina Vuola, Marisa Belausteguigoitia e Cristina Rojas” (Escobar, 2003 *apud* Ballestrin, 2013, p. 98).

Para finalizar, Luciana Ballestrin apresenta um quadro, onde destaca o perfil dos membros do grupo Colonialidade-Modernidade, destacando, contudo, que esse quadro não esgota as mais variadas áreas que seus integrantes transitam, e que há um “mea culpa” de Arturo Escobar sobre a pouca participação de mulheres no grupo (Ballestrin, 2013, p. 98):





Quadro 1 – Perfil dos membros do Grupo Colonialidade/Modernidade

integrante	área	nacionalidade	universidade onde leciona
Anibal Quijano	sociologia	peruana	Universidad Nacional de San Marcos, Peru
Enrique Dussel	filosofia	argentina	Universidad Nacional Autónoma de México
Walter Mignolo	semiótica	argentina	Duke University, EUA
Immanuel Wallerstein	sociologia	estadounidense	Yale University, EUA
Santiago Castro-Gómez	filosofia	colombiana	Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia
Nelson Maldonado-Torres	filosofia	porto-riquenha	University of California, Berkeley, EUA
Ramón Grosfóguel	sociologia	porto-riquenha	University of California, Berkeley, EUA
Edgardo Lander	sociologia	venezuelana	Universidad Central de Venezuela
Arthuro Escobar	antropologia	colombiana	University of North Carolina, EUA
Fernando Coronil*	antropologia	venezuelana	University of New York, EUA
Catherine Walsh	linguística	estadounidense	Universidad Andina Simón Bolívar, Equador
Boaventura Santos	direito	portuguesa	Universidade de Coimbra, Portugal
Zulma Palermo	semiótica	argentina	Universidad Nacional de Salta, Argentina

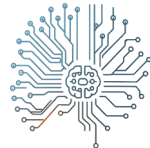
\*Falecido em 2011.

Fonte: Ballestrin, 2013, p. 98.

Luciana Ballestrin destaca que muitos dos integrantes do grupo já haviam desenvolvido teorias próprias na década de 1970, como é o caso de “Dussel e a Filosofia da Libertação, Quijano e a Teoria da Dependência, e Wallerstein e a Teoria do Sistema-Mundo”, de modo que houve influência desse pensamento crítico, porém destaca que “o grupo compartilha noções, raciocínios e conceitos que lhe conferem uma identidade e um vocabulário próprio, contribuindo para a renovação analítica e utópica das ciências sociais latino-americanas do século XXI” (Ballestrin, 2013, p. 99).

Dentro da teoria crítica dos estudos do grupo Modernidade/Colonialidade, para a discussão central do presente artigo, nos interessa compreender no que consiste a geopolítica do conhecimento (Walter Mignolo) e no que consiste a colonialidade do poder (Anibal Quijano), temática que será abordada no próximo tópico.





## 2 OS DIREITOS HUMANOS E DUAS PERSPECTIVAS DO GRUPO MODERNIDADE/COLONIALIDADE: A COLONIALIDADE DO PODER (ANÍBAL QUIJANO) E A GEOPOLÍTICA DO CONHECIMENTO (WALTER MIGNOLO)

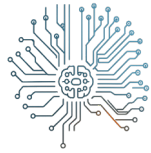
Após compreender como o pensamento eurocêntrico se consolidou na teoria dos direitos humanos e a necessidade de uma abordagem descolonial, torna-se essencial apresentar algumas das principais contribuições teóricas que sustentam essa perspectiva crítica.

Dentro do grupo Modernidade/Colonialidade, destacam-se duas concepções fundamentais para o entendimento das estruturas de dominação ainda presentes no mundo contemporâneo: a colonialidade do poder, formulada por Aníbal Quijano, e a geopolítica do conhecimento, desenvolvida por Walter Mignolo. Ambas oferecem instrumentos teóricos indispensáveis para compreender como as relações de poder, saber e ser foram moldadas pela Modernidade e continuam a influenciar a produção do conhecimento, a formulação das normas jurídicas e a efetivação dos direitos humanos.

### 2.1 A COLONIALIDADE DO PODER (ANÍBAL QUIJANO)

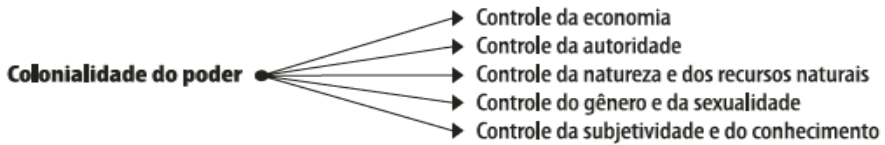
Quem desenvolve o conceito de colonialidade do poder é Aníbal Quijano, um dos membros do grupo Modernidade/Colonialidade, em 1989, que passa a ser difundido pelo grupo, e este conceito “exprime uma constatação simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo.” Esse conceito tem uma dupla intenção, pois ao mesmo tempo em que denuncia as formas coloniais de dominação, também explica processos e formas de conhecimento que teriam sido apagados pela modernidade (Ballestrin, 2013, p. 99).





A colonialidade se apresenta em uma tripla dimensão, abrangendo o poder, o saber e o ser, de modo que a “colonialidade do poder” abrange outros aspectos que não somente o do poder (Ballestrin, 2013, p. 100), conforme nos mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Dimensões da colonialidade: poder, saber e ser

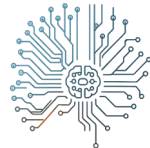


Fonte: Mignolo, 2010, p. 2 *apud* Ballestrin, 2013, p. 100.

Aníbal Quijano ressalta que o dominador colonial que hoje afeta a totalidade da população mundial possui três elementos centrais: a colonialidade do poder, o capitalismo e o eurocentrismo. Destaca que esse domínio padrão não pode apagar a heterogeneidade histórico-estrutural:

Nesse sentido específico, a humanidade atual em seu conjunto constitui o primeiro *sistema-mundo global* historicamente conhecido, não somente um *mundo* como o que talvez tenham sido o chinês, o hindu, o egípcio, o helênico-romano, o maia-asteca ou o tauantinsuiano. Nenhum desses possíveis mundos teve nada em comum exceto um dominador colonial/imperial e, apesar de que assim se propõe da visão colonial eurocêntrica, não se sabe se todos os povos incorporados a um daqueles mundos tiveram também em comum uma perspectiva básica a respeito das relações entre o humano e o restante do universo. Os dominadores coloniais de cada um desses mundos não tinham as condições, nem provavelmente o interesse, de homogeneizar as formas básicas de existência social de todas as populações de seus domínios. Por outro lado, o atual, o que começou a formar-se com a América, tem em comum três elementos centrais que afetam a vida cotidiana da totalidade da população mundial: *a colonialidade do poder, o capitalismo e o eurocentrismo*. Claro que este padrão de poder, nem nenhum outro, pode implicar que a heterogeneidade histórico-estrutural tenha sido erradicada dentro de seus domínios (Quijano, 2005, p. 124).





O pensador entende que foi decisivo para a modernidade que o centro hegemônico estivesse localizado na zona centro-norte da Europa Ocidental, e para que este pensamento virasse a hegemonia mundial, de modo que ajuda a esclarecer a razão pela qual a colonialidade do poder vai desempenhar um papel significativo na elaboração eurocêntrica da modernidade (Quijano, 2005, p. 125).

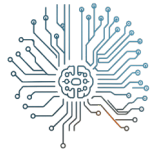
Quijano destaca ainda que “a colonialidade do poder está vinculada com a concentração na Europa do capital, dos assalariados, do mercado de capital, enfim, da sociedade e da cultura associadas a essas determinações” (Quijano, 2005, p. 125). Por fim, Aníbal explica que:

A elaboração intelectual do processo de modernidade produziu uma perspectiva de conhecimento e um modo de produzir conhecimento que demonstram o caráter do padrão mundial de poder: colonial/moderno, capitalista e eurocentrado. Essa perspectiva e modo concreto de produzir conhecimento se reconhecem como eurocentrismo (Quijano, 2005, p. 126).

Portanto, o que se observa é que a “colonialidade do poder” é um pensamento desenvolvido por Aníbal Quijano, um dos componentes do grupo Modernidade/Colonialidade, que expõe que as relações de dominação não finalizaram com o fim do colonialismo, e que a retórica da Modernidade foi construída com base em um padrão dominante do colonizador, que envolve não só a esfera do poder, mas também a esfera intelectual, a economia, a autoridade, entre outros.

Também é ressaltado que esse padrão dominante é eurocêntrico, colonial e capitalista, o que acabou por produzir uma perspectiva do conhecimento homogênea, “apagando” as outras. A “colonialidade do poder”, além da perspectiva de denunciar a dominação do colonizador, objetiva dar visibilidade a outras formas de conhecimento que teriam sido ofuscadas pela Modernidade.





Walter Mignolo destaca que, para entender a colonialidade do poder, deve-se “primeiro aceitar a colonialidade como constitutiva da modernidade e não apenas como uma derivação da modernidade - ou seja, primeiro vem a modernidade e depois a colonialidade” (Mignolo, 2020, p. 210).

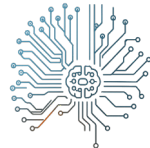
Portanto, a colonialidade do poder é um estudo descolonial que objetiva dar visibilidade à dimensão colonial da modernidade e demonstrar o caráter eurocêntrico do conhecimento dominante, ao mesmo tempo que visa à descolonialidade do poder.

A colonialidade do poder demonstra a contradição da concepção humana europeia, ao mesmo tempo em que permite demonstrar a fragilidade do discurso dominante dos direitos humanos. Essa teoria prega que é importante reconhecer a existência do outro, que é diferente e invisível, e “cuja identidade foi (des)construída pelos processos de hierarquização moderno-coloniais” (Bragato, 2014, p. 223).

Outro questionamento importante a se fazer é se os direitos humanos são para seres humanos, por qual razão índios e negros estiveram excluídos da proteção formal durante muito tempo (Bragato, 2014, p. 223). No Brasil, por exemplo, a escravidão acabou somente em 1888, com a Lei Áurea (Brasil, 1888), muito tempo após a Declaração dos Direitos de Virgínia de 1776 e a Declaração Francesa do Homem e do Cidadão de 1789. É possível ainda incluir as mulheres aqui que, no Brasil, por exemplo, só conquistaram o direito ao voto em 1932 (Brasil, 1932).

Em relação aos direitos das mulheres, que deixaram de ser reconhecidos, é possível ainda citar a revolucionária francesa Olympe de Gouges, pseudônimo de Marie Gouze, que propôs a Declaração da Mulher e da Cidadã, em 1791, pois desejava que fossem assegurados às mulheres os mesmos direitos que eram aos homens. Contudo, os seus ideais estavam muito à frente do que a sociedade patriarcal e o governo francês conseguiam suportar naquele momento, de modo que acabou condenada a guilhotina em 1793, pois foi denunciada por ser uma mulher “desnaturada” (Moreira; Silva, 2013. p. 15) e “perigosa demais”.





Portanto, o que se vê é que quando se fala em “direitos do homem”, se exclui ao menos metade da humanidade, e se vê que existe uma parcela da sociedade que não se objetivava proteger, pois não eram considerados cidadãos, como os indígenas, os escravos, os criminosos e os doentes mentais (Bragato, 2014, p. 223), razão pela qual é necessário descortinar a “colonialidade do poder” e pensar em uma nova perspectiva dos direitos humanos.

## 2.2 A GEOPOLÍTICA DO CONHECIMENTO (WALTER MIGNOLO)

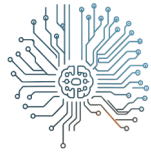
Outro conceito importante a ser explorado, para a análise do presente artigo, é a geopolítica do conhecimento, criado e difundido por Walter Mignolo, outro componente do grupo Modernidade/Colonialidade.

A geopolítica do conhecimento quer desmitificar a lógica existente nas formas de produção e adesão do conhecimento, pois informa que hoje a produção do conhecimento pressupõe a existência de sujeitos que estão autorizados a enunciá-lo e outros que são sujeitados. E afirma que os processos históricos serão inadequadamente compreendidos com a ótica exclusivamente eurocêntrica (Bragato, 2014, p. 216-217).

Walter Mignolo explica que a geopolítica do conhecimento se organiza através da “diversificação, através da história, das diferenças coloniais e imperiais” (Mignolo, 2020, p. 190). O autor explica ainda que:

Quijano e Dussel tornam possível, não só conceber o sistema-mundo moderno/colonial como uma estrutura socio-histórica coincidente com a expansão do capitalismo, mas também conceber a colonialidade e a diferença colonial como loci de enunciação. Isto é precisamente o que quero dizer por geopolítica do conhecimento e diferença colonial (Mignolo, 2000, p.78-142 *apud* Mignolo, 2020, p. 192).





Nessa vertente de pensamento, portanto, é importante admitirmos a diferença colonial, que aponta para o reconhecimento do outro na Modernidade, assim como compreendermos o que é a geopolítica do conhecimento, a qual

é efetivamente a diferença colonial irredutível – a diferença entre o centro e a periferia, entre a crítica eurocêntrica do eurocentrismo e a produção de conhecimento por aqueles que participaram na construção do mundo moderno/colonial e aqueles que foram excluídos dos debates. Las Casas defendeu os índios, mas estes não participaram nas discussões sobre os seus direitos (Mignolo, 2020, p. 194).

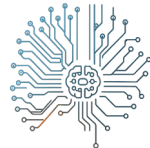
A geopolítica do conhecimento defende que é preciso reconhecer outros saberes que não o eurocêntrico, pois denuncia que os modos de conceber, produzir e transmitir os saberes na Modernidade, com base na racionalidade, que se dizem um conhecimento neutro e universal, quando, na verdade, trata-se de um conhecimento eurocêntrico e dependente da expropriação de outros saberes.

Algo que precisa ser falado é que “A diferença colonial epistêmica é cúmplice do universalismo, sexismo e racismo” (Ballestrin, 2013, p. 104), razão pela qual precisa ser debatida e novos horizontes para os direitos humanos precisam ser criados, assim como uma desobediência e ruptura epistêmica se mostra necessária.

Ao analisar a geopolítica do conhecimento sob a perspectivas dos direitos humanos, há uma inconsistência na concepção histórico-geográfica dominante, pois, embora não se possa ignorar a contribuição ocidental para a afirmação dos direitos humanos, é necessário reconhecer que ela é limitada e pontual (ocidente moderno), pois o colonialismo traz brutalidades e horrores, como o genocídio indígena, a escravidão africana, o saque das riquezas dos continentes colonizados, a ideologia do racismo e da intolerância, além de duas guerras mundiais (Bragato, 2014, p. 218-219).

Reconhecer essa dimensão colonial dos direitos humanos é o primeiro passo para construir uma teoria dos direitos humanos que compreenda a





totalidade dos eventos modernos. Para isso, é preciso visibilizar e reinterpretar as lutas políticas dos povos colonizados, sendo possível encontrar subsídio teórico nos ideais de Las Casas e Poma de Ayala, e nos objetivos dos movimentos de libertação das Américas, Ásia e África, onde há um potencial libertador da Modernidade (Bragato, 2014, p. 219-220).

Das lutas políticas do mundo colonizado, é possível depreender uma reação contra o abuso e a imposição de diferentes tipos de poder, seja ele político, econômico, cultural e epistemológico, sobre os povos colonizados, as mulheres, os deficientes, as pessoas de cor e outras pessoas em grupos humanos desfavorecidos (Bragato, 2014, p. 220).

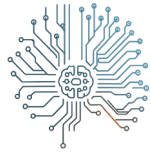
Fernanda Bragato destaca que a modernidade, por não ser um fenômeno linear e intraeuropeu, torna possível reconhecer onde os fundamentos dos direitos humanos podem ser encontrados, de um lado ou de outro da linha abissal. Desse modo, o reconhecimento dos direitos humanos, ao longo do século XX, pode ser compreendido como reconhecimento dos povos oprimidos para o reconhecimento de seus direitos e de sua cidadania, como é o caso dos pobres, das mulheres, estrangeiros, entre outros (Bragato, 2014, p. 220).

Estas lutas fazem com que “humano” e “humanidade” passem a ter uma extensão maior. As rebeliões contra o poder colonial auxiliaram no reconhecimento de valores que hoje se traduzem como direitos humanos, assim como ajudam a compreender a dinâmica que os direitos humanos hoje possuem (Bragato, 2014, p. 220).

Em “Se Deus fosse um ativista dos Direitos Humanos”, Boaventura de Sousa Santos questiona se outros direitos humanos são possíveis, e responde dizendo que:

Isso não significa que os direitos humanos devem ser descartados. Pelo contrário, nunca como hoje foi importante não desperdiçar ideias e práticas de resistência. Significa apenas que só reconhecendo as debilidades reais dos direitos humanos é possível construir a partir deles, mas também para além deles, ideias e práticas fortes de





resistência. Esta reconstrução vai permitir que os direitos humanos se tornem um instrumento de luta, resistência e alternativa, ainda que limitado (Santos, 2014, p. 104).

Em resumo, não se pode negar o esforço político do ocidente para a história dos direitos humanos, mas é importante compreender que essa contribuição é limitada e pontual, apresentando falhas e inconsistências, assim como é necessário reconhecer a sua perspectiva colonial, bem como que existiram outras contribuições para o reconhecimento, extensão e significado dos direitos humanos. É preciso (re)inventar os direitos humanos sem desconhecer o avanço em seu reconhecimento.

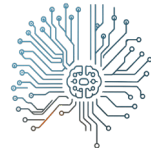
### 3 A INTERNET COMO DIREITO HUMANO E O PENSAMENTO COLONIAL NAS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS DO MUNDO VIRTUAL

Valério Mazzuoli, ao conceituar direitos humanos, explica que seriam aqueles direitos que estariam garantidos por um caráter internacional, ou seja, direitos garantidos por “declarações ou tratados celebrados entre Estados com o propósito específico de proteger os direitos (civis e políticos; econômicos, sociais e culturais etc.) das pessoas sujeitas à sua jurisdição” (Mazzuoli, 2021, p. 21)

O internacionalista destaca ainda que essas normas “podem provir do sistema global (pertencente à Organização das Nações Unidas, por isso chamado “onusiano”) ou de sistemas regionais de proteção (v.g., os sistemas europeu, interamericano e africano)” (Mazzuoli, 2021, p. 21).

Dentro dessa perspectiva e dessa conceituação, surgem alguns questionamentos, principalmente no mundo globalizado e interconectado que hoje vivemos: o direito digital é um direito humano? O acesso à internet é um direito humano? A cidadania digital é um direito humano? As normas





que regulamentam essas normas representam uma colonialidade do saber ou a geopolítica do conhecimento?

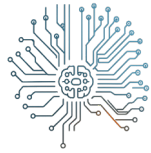
Em 03.06.2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a internet é um direito humano, após a França e o Reino Unido terem bloqueado o acesso de pessoas que não respeitavam direitos autorais na web, e de países impedirem acesso às redes sociais para reduzir protestos da população (Globo.com, 2011), sendo esta última uma prática cotidianamente repetida por empresas e governos, onde existem ameaças como o desligamento deliberado de acesso à Internet, censura e coleta de dados (ONU, 2017).

Embora se possa questionar a importância de discutir o direito à internet como direito humano, enquanto existem outros direitos ainda mais essenciais que não são garantidos à população mundial, como água, eletricidade, saneamento básico e o combate à fome, não há como negar a importância dessa discussão, principalmente após os avanços tecnológicos ocorridos com o advento da pandemia mundial do COVID19 a partir do ano de 2020 (Moreira; Pinheiro, 2020), que trouxe vários aspectos da nossa vida para o mundo digital. Além disso, os direitos humanos precisam ser respeitados também na esfera virtual.

Uma outra palavra, dentro e fora da Internet, que tem ganhado muita notoriedade e sido discutida nos últimos dois anos é o “metaverso”, principalmente após gigantes da tecnologia, como Facebook e Microsoft, terem demonstrado interesse em explorar esta tecnologia. O Facebook, inclusive, mudou seu nome para “Meta”. Metaverso é uma tecnologia na qual os seres humanos podem interagir uns com os outros por avatares em ambiente virtual, criado inicialmente por Neal Stephenson em seu livro *Snow Crash* (Nevasca, no Brasil) (Garcia, 2021, p. 29). Quando se vive neste presente, não há como não nos importarmos e não olharmos para a realidade virtual e, por consequência, a Internet.

E tal situação causa grande preocupação, principalmente quando temos o dado de que, na população mundial, 2,9 milhões de pessoa nunca acessaram à internet, o que representa praticamente 25% da população mundial (ONU, 2021). Assim, pergunta-se: como garantir a cidadania digital dessas pessoas?





Como não as excluir do mundo, já que grande parte de acontecimentos passou a ocorrer online?

Não há como negar a importância que o mundo digital e, por consequência, a internet, possuem atualmente. A título de exemplo, nos eventos recentes que envolvem a guerra entre Ucrânia e Rússia, o grupo hacker Anonymous declarou apoio à Ucrânia e “guerra cibernética” contra o governo russo, já deixando o site do Ministério da Defesa da Rússia fora do ar na manhã do dia 25 de fevereiro de 2022 (Best, 2022), demonstrando a importância da internet, e como ela pode representar uma solução ou um problema nas guerras modernas.

Na realidade brasileira, existe atualmente a Proposta de Emenda Constitucional n.º 8/2020, que visa a alçar o acesso à internet ao status de direito fundamental, sendo definido que o acesso à internet é hoje elemento essencial para o desenvolvimento da cidadania (Senado Federal, 2020).

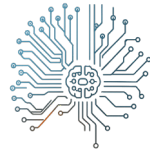
Outrossim, cabe ressaltar que os direitos humanos e os direitos fundamentais também precisam ser respeitados no ambiente virtual. Sendo o acesso à internet um direito humano e possivelmente um direito fundamental, mostra-se relevante compreender como o Brasil regulamenta esse espaço.

Cabe ressaltar que, dentro do direito digital, há ainda diversos outros assuntos que demandam preocupação e merecem ser investigados, entre os quais podem ser citadas a proteção de dados pessoais e a regulamentação da inteligência artificial nas organizações e, por consequência, nos tribunais.

Uma das leis mais importantes, no Brasil, para a regulamentação da internet, é o Marco Civil da Internet (MCI), a Lei 12.965/2014, que se pretende uma “Constituição da Internet” (Magrani, 2019, p. 74), e que regulamenta “os princípios, garantias, direitos e deveres para uso da Internet no Brasil”, onde é definido que “O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania” (Brasil, 2014).

Antes da promulgação desta lei, existiam diversas decisões judiciais conflitantes sobre a liberdade de expressão, o acesso ao conhecimento e o direito à





privacidade no uso da internet que tornavam dificultosa a aplicação da legislação. Primeiramente, foi criado o Projeto de Lei 84/99, também conhecido como Lei Azeredo, que criou uma revolta popular, pois era uma lei extremamente punitivista. Houve tanta mobilização que foi aberta a possibilidade de uma lei para regulamentar a Internet. A lei foi precedida de diversas consultas públicas por meio de plataforma online, ouvindo instituições públicas e privadas, contendo também opiniões da academia e da sociedade (Magrani, 2019, p. 73-74)

Embora o Marco Civil da Internet seja bastante elogiado pela forma democrática com que foi construída a lei, através de consultas públicas e com amplos debates, a lei não traz conceituações importantes, como “dado pessoal” e de “dado sensível”, para que seja possível coibir a coleta, o tratamento abusivo e a monetização de dados.

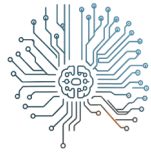
O MCI traz uma carga axiológica, porém não compreende a totalidade da tutela e da segurança do usuário, que vem a ser complementada pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Lei 13.709/2018.

E é a partir da Lei Geral de Proteção de Dados que se consegue visualizar uma preferência pela tendência eurocêntrica na legislação brasileira que regulamenta a Internet, tendo em vista que ela segue o modelo da União Europeia, o General Protection Data Regulation (GDPR). Nesse sentido, nos aponta Eduardo Magrani:

Uma das similaridades que mais chama a atenção entre a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e o GDPR é quanto aos princípios. A Lei tem os princípios dispostos no art. 6º, enquanto o GDPR os prevê em seu artigo 5º. Apesar de apresentarem nomenclaturas distintas, os princípios são praticamente idênticos (Magrani, 2019, p. 103).

Ademais, além da similaridade do texto legal, percebe-se que a Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada em 2018, apenas dois anos após a promulgação do GDPR, em 2016.





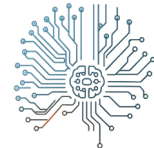
Outro local onde se visualiza essa influência eurocêntrica é na Resolução 332 do CNJ, que foi a primeira resolução utilizada para regulamentar a utilização da inteligência artificial nos tribunais, onde, nas considerações iniciais, constava a seguinte informação: “CONSIDERANDO o contido na Carta Europeia de Ética sobre o Uso da Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais e seus ambientes” (Brasil, 2020), demonstrando esta tendência, passando, posteriormente, a ser revogadas pela Resolução 615 do CNJ. Em 2024, foi publicado o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (Regulamento (UE) 2024/1689), que certamente inspirará o marco regulatório brasileiro.

Contudo, essa preferência é perigosa, pois pode demonstrar uma continuidade da geopolítica do conhecimento, onde as nações seguem produzindo o conhecimento, sendo a nação colonizadora “autorizada” a deter o conhecimento, enquanto a nação colonizada segue apenas reproduzindo este conhecimento, e não considera as suas peculiaridades locais. Do mesmo modo, há ainda aqui uma matriz colonial do poder (colonialidade do poder), onde as grandes potências mundiais, como os EUA e a China, detêm o poder da internet e do algoritmo, e muitas vezes continuam reproduzindo os abusos inerentes ao sistema capitalista e desigual da Modernidade, onde alguns seres humanos estiveram e continuam excluídos da proteção dos direitos humanos.

Um algoritmo, para a informática, é um “conjunto de regras que fornecem uma sequência de operações capazes de resolver um problema específico” (Houaiss, 2020, Online). Dentro da Internet, esses algoritmos são complexos de instruções que são seguidos para realizar determinada atividade, como para resolver um problema. Esses algoritmos podem representar riscos, pois podem estar enviesados. O viés algorítmico é quando existe ampliação de condições discriminatórias a partir do funcionamento “técnico” do algoritmo, geralmente em relação a questões étnicas e raciais, de gênero e de orientação sexual.

Outro conceito importante de ser compreendido, para que visualizemos os riscos, é o da inteligência artificial, que é extremamente complexo, mas pode ser sucintamente definido como “um conjunto de algoritmos programados de





ordem a cumprir objetivos específicos. Para ilustrar, um veículo autônomo está projetado com algoritmos sistematizados de acordo com as regras de como se movimentar na rua” (Freitas; Freitas, 2020).

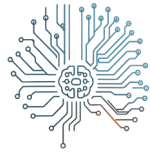
Um dos exemplos de desrespeito aos direitos humanos e fundamentais, bem como de viés algorítmico, com a utilização de inteligência artificial pelo poder estatal, que é possível citar é o caso do sistema de inteligência artificial denominado COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), utilizado pelos Estados Unidos, que era utilizado para avaliar o risco de reincidência dos acusados nos EUA, o qual apresenta resultados que podem ser considerados discriminatórios, pois havia distinção entre os réus brancos e os réus negros (Alves, 2020, p. 42), o que não pode ser permitido.

Outro exemplo é retratado no documentário Coded Bias, da diretora Shalini Kantayya, que retrata o caso da programadora negra Joy Buolamwini, cientista de computação do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), que não tinha a sua pele negra reconhecida pelos algoritmos de reconhecimento facial, demonstrando o viés racista do algoritmo (Netflix, 2020).

Outro caso é do Kyle Behm, que teve muitas dificuldades para encontrar um emprego e para ser aprovado no vestibular por ter sido diagnosticado com transtorno bipolar. Embora tivesse notas excelentes no SAT, vestibular estadunidense, não foi aprovado. Kyle precisou ingressar com notificação contra sete empresas – Kroger, Finish Line, Home Depot, Lowe’s, PetSmartm Walgreen Co. e Yum Brands - pelo uso de teste de personalidade que havia sido feita pela Kronos, empresa de gerenciamento de força de trabalho, para compreender que provavelmente era esse o motivo da sua recusa na universidade, assim como também a razão pela qual não conseguiu uma vaga de emprego (O’Neil, 2020, p. 164-167).

Tal discussão é inevitável, quando muito se discute sobre a neutralidade dos algoritmos, e qual a consequência que a utilização dos algoritmos pode acarretar, e quando o sistema capitalista exponencializa possíveis danos, assim como possível desrespeito aos direitos fundamentais, haja vista que o controle





destes algoritmos se encontra nas mãos de pouquíssimas empresas no mundo que possuem o controle desses algoritmos. E há aqui notoriamente uma reprodução da colonialidade do poder e da geopolítica do conhecimento.

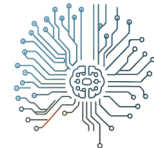
Os especialistas de tecnologia em algoritmos vão defender que o algoritmo é neutro, apenas refletindo a informação que o programador nele colocou, tratando-se de pura matemática. Contudo, aqui reside o perigo, pois ele refletirá a intenção do seu criador. Nesse sentido, ensina Sérgio Amadeu Silveira:

Nem softwares, nem os algoritmos nele contidos são neutros. Eles geram efeitos e foram criados e desenvolvidos para determinadas finalidades. Apesar de serem imateriais e invisíveis, os algoritmos têm um ponto de partida e uma finalidade original que pode ter sido alterada pelos seus usuários ou pelo próprio algoritmo, caso tenha embutido em seu código rotinas de autocorreção e aprendizagem. Algoritmos são invenções, e, como toda invenção, guarda as intenções dos seus criadores. Isso é muito importante, pois os algoritmos não são desenvolvidos pelo setor público; em geral, nascem dentro de empresas e corporações que os vendem ao Estado. Para serem vendidos, são apresentados como maravilhas técnicas, como soluções que simplesmente fazem o que queremos, sem interferir em nossas práticas, em nossos gostos, em nossas opiniões e em nossa forma de classificar e ver. O algoritmo, como produto, para parecer mais eficaz deve parecer mais neutro, completamente adequado e submetido aos interesses de seus compradores.

Primeira grande questão: os algoritmos são invisíveis, complexos e escritos em linguagem matemática. Por ser invisíveis, para muitos, os algoritmos não são percebidos, na prática é como se não existissem (Silveira, 2017).

O algoritmo é criado com um objetivo e, para esta finalidade, serão criados seus códigos, que terão a intenção dos seus criadores. Algoritmos geralmente são criados dentro de empresas e, portanto, são produtos, que podem vir a ser vendidos para o Estado, que buscam atender ao interesse dos compradores, que normalmente são motivados por essa suposta “neutralidade” que tornará o produto mais eficaz.





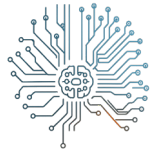
Além disso, os provedores de algoritmos afirmam a sua imparcialidade para que eles sejam reconhecidos como possuindo um conhecimento relevante. Assim nos ensina Tarleton Gillespie, que ainda refere que o Google foi muito inflexível em relação à “neutralidade” do seu algoritmo:

Acima de qualquer coisa, os provedores dos algoritmos de informações devem assegurar que seus algoritmos são imparciais. A performance da objetividade algorítmica tornou-se fundamental para a manutenção dessas ferramentas como mediadoras legítimas do conhecimento relevante. Nenhum provedor tem sido mais inflexível sobre a neutralidade do seu algoritmo quanto o Google, que responde regularmente às solicitações de alteração nos resultados de busca reivindicando que o algoritmo não deve ser adulterado. A empresa celebrenemente se retirou completamente do mercado chinês, em 2010, ao invés de censurar seus resultados, embora tenha consentido com as regras da China antes, e pode ter se retirado para não ter de admitir que estava perdendo para as concorrentes chinesas. Mesmo apesar dessa postura, o Google alterou seus resultados quando surgiram reclamações sobre uma imagem de Michelle Obama, editada de forma racista, aparecendo no topo dos resultados de busca de Imagens. A empresa também fornece um mecanismo de “busca segura” para não exibir palavrões e imagens sexuais para menores, e se recusa a auto-completar pesquisas que indiquem serviços de troca de arquivos em formato torrent. No entanto, o Google afirma regularmente que não altera seus índices, nem manipula seus resultados (Gillespie, 2018, p. 108).

Alberto J. Tapia Hermida também destaca que hoje vivemos o “mito dos algoritmos neutros”, que é acompanhando pelo “paradoxo da transparência digital”, e que repetir essa informação de modo generalizado pode gerar riscos, como excluir parte da população que não possui acesso à rede ou conhecimento para utilizá-la, bem como o enorme custo de mão-de-obra e o encerramento massivo de sucursais:

La afirmación generalizada de que el uso de algoritmos en las finanzas tiene un impacto neutral en el sentido de que no afecta a los riesgos que se generan para el consumidor porque se asientan sobre registros interconectados imposibles de manipular (por ejemplo, en el caso





del blockchain). Es más, las campañas publicitarias de las grandes entidades financieras anuncian de manera idílica, pomposa e insistente la digitalización de sus servicios bancarios como un remedo del paraíso terrenal, sin advertir del enorme efecto que tiene de exclusión de grandes capas de población que —por razones de edad o de capacidad económica— carecen de acceso a la red y de conocimientos para utilizarla; amén de los enormes costes labores y el cierre masivo de sucursales (Hermida, 2020, p. 1).

Dentro de todo esse contexto, onde uma minoria de empresas gigantescas detém o poder de produzir e expandir os algoritmos, que repercutem em todas as áreas de nossa vida, e possuem quase a totalidade de nossos dados, a internet – em especial os algoritmos e a inteligência artificial - representam um risco que deve ser muito bem compreendido, assim como regulamentado de acordo com a nossa realidade.

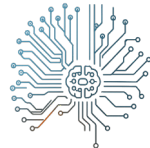
Portanto, questiona-se se seguir uma tendência eurocêntrica em nossas legislações que regulamentam estas questões é a melhor opção para o Brasil, ou se não estamos apenas a reproduzir um discurso de “colonizado”, apenas seguindo o discurso eurocêntrico, capitalista e colonizador mais uma vez, agora com repercussões mundiais.

Esse artigo não tem a pretensão de responder profundamente este questionamento, mas tão somente de levá-lo e apresentar seus possíveis problemas, para que a “colonialidade do poder” e a “geopolítica do conhecimento” do mundo real não sejam reproduzidas agora no “mundo virtual”, em uma escala muito maior.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste artigo, foi possível constatar que a teoria dos direitos humanos demonstra um discurso dominante eurocêntrico, colonizador e capitalista, o que faz com que esta teoria represente somente o lado das sociedades





colonizadoras, e não das sociedades colonizadas. Também foi visto que não se pode desconhecer o esforço histórico e teórico do Ocidente moderno, mas que é essencial que se saiba que essa contribuição é localizada e parcial, merecendo um aprofundamento que inclua outros conhecimentos e outros saberes que não os dominantes.

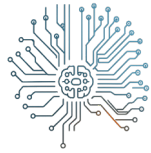
Foi possível ver que existem diversas teorias e pensadores que não representam esta teoria dominante e que são muito relevantes, mas que foram obscurecidos pela Modernidade e pelo pensamento racional - que coloca o indivíduo como centro de tudo -, que merecem ser desbravadas para o conhecimento e aprofundamento do pensamento descolonial. Dentro dessa teoria, dois pensamentos se destacaram: a colonialidade do poder (Aníbal Quijano) e geopolítica do conhecimento (Walter Mignolo)

A colonialidade do poder e a geopolítica do conhecimento denunciam, cada uma a seu modo, essa matriz colonial do poder, que se reproduz não somente no âmbito econômico e político, mas também na construção do conhecimento. A geopolítica do conhecimento quer desmitificar a lógica existente nas formas de produção e adesão do conhecimento, enquanto a colonialidade do poder quer demonstrar as contradições das concepções humanistas europeias e demonstrar a importância do reconhecimento do outro, que era diferente e invisível na Modernidade, e cuja identidade teria sido desconstruída pelos processos de hierarquização moderno-coloniais.

Outro fato constatado através deste pensamento colonial, e que merece ser observado, é que esse colonialismo do poder não traz respostas essenciais para os problemas do mundo atual, como racismo, a pobreza e a repressão, problemas que devem ser combatidos se desejamos o reconhecimento dos direitos humanos a todos e a todas.

Dentro dessa perspectiva, e considerando a internet como um direito humano, questionou-se se as relações virtuais não estariam reproduzindo essa colonialidade do poder e geopolítica do conhecimento, haja vista que são citados casos em que é possível perceber uma discriminação algorítmica, quando, por





exemplo, o rosto negro não é reconhecido pelo algoritmo de reconhecimento facial.

Também se questionou se o Brasil não estaria tendo um pensamento colonial e, por consequência, uma tendência eurocêntrica ao criar legislações que regulamentam aspectos da Internet. Ao fim, percebeu-se que sim, uma vez que a Lei Geral de Proteção de Dados é bastante similar ao General Protection Data Regulation (GDPR), que é a legislação de proteção aos dados da União Europeia. E do mesmo modo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao regulamentar a Resolução nº 615 do CNJ, que trata da utilização da inteligência artificial nos tribunais, em suas considerações iniciais, aponta como fundamento o Regulamento Europeu que trabalha sobre esta temática.

Portanto, concluiu-se que é possível perceber esta tendência eurocêntrica e o pensamento nas leis e regulamentos brasileiros que trazem regras para a Internet, o que denota preocupações, pois a realidade brasileira é diferente da europeia, e parece mais uma vez estar se reproduzindo o discurso colonizador.

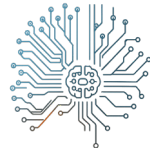
Contudo, por serem questões recentes, ainda não é possível perceber quais as efetivas consequências destas opções, mas é fundamental estarmos atentos para estes riscos, para evitar desrespeito aos direitos humanos, aqueles que envolvem a todos (e a todas) e não somente o padrão dominante.

## REFERÊNCIAS

ALVES, Ellen Maciel. **Inteligência Artificial e Direito**: uma análise sobre os impactos de novas tecnologias e o uso da inteligência artificial no judiciário brasileiro. Sousa: [s.n], 2020.

BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. **Revista Brasileira de Ciência Política** (Impresso), v. 2, p. 89-117, 2013.





BEST, Paul. Hacking collective Anonymous appears to declare war on Putin after Russia invades Ukraine. **Fox News**. 25 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://www.foxnews.com/us/hacking-collective-anonymous-declare-war-putin-russia-invades-ukraine>. Acesso em: 25 fev. 2022.

BRAGATO, Fernanda Frizzo. Para além do discurso eurocêntrico dos Direitos Humanos: Contribuições da descolonialidade. **Revista Novos Estudos Jurídico** - Eletrônica, Vol. 19 n.1 - jan-abr, 2014. Disponível em: <https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5548>. Acesso em: 20 fev. 2022.

BRASIL. Lei n. 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. **Coleção das Leis do Império do Brasil**, 1888. Parte I. Tomo XXXV., p. 1. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lim/lim3353.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3353.htm). Acesso em: 25 fev. 2022.

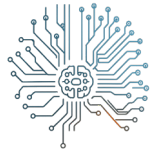
BRASIL. Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Decreta o Código Eleitoral. **Diário Oficial da União**, p. 3385, 26 fev. 1932. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1930-1949/d21076.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d21076.htm). Acesso em: 24 fev. 2022.

BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 24 abr. 2014. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm). Acesso em: 25 fev. 2022.

BRASIL. CNJ. **Resolução nº 332**, de 21 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/wpcontent/uploads/2020/08/Resoluc%CC%A-7a%CC%83o-332-CNJ.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2021.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 615, de 11 de março de 2025**. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-332-CNJ.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2021.





BRASIL. Senado Federal. **Proposta de Emenda à Constituição n. 8**, de 2020. Altera o art. 5º da Constituição Federal, para incluir o acesso à internet entre os direitos fundamentais. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8075089&cts=1630435791761&disposition=inline>. Acesso em: 25 fev. 2022.

CESÁIRE, Aimé, **Discurso sobre o colonialismo**. Tradução de Claudio Willer. São Paulo: Veneta, 2020.

DAVIS, Angela. **A liberdade é uma luta constante**. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2018.

EUA. **Declaração de Direitos da Virginia**, de 12 de junho de 1776. Disponível em: [https://www3.al.sp.gov.br/repositorio/ilp/anexos/1788/YY2014MM-11DD18HH14MM7SS42-Declara\\_\\_o%20da%20Virginia.pdf](https://www3.al.sp.gov.br/repositorio/ilp/anexos/1788/YY2014MM-11DD18HH14MM7SS42-Declara__o%20da%20Virginia.pdf). Acesso em: 23 fev. 2022.

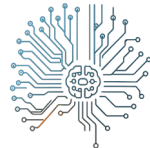
FRANÇA. **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão**, de 26 de agosto de 1789. Disponível em: [https://www.senat.fr/lng/pt/declaration\\_droits\\_homme.html](https://www.senat.fr/lng/pt/declaration_droits_homme.html). Acesso em: 23 fev. 2022.

FREITAS, Juarez; FREITAS, Thomas Bellini. **Direito e inteligência artificial: em defesa do humano**. Belo Horizonte: Fórum, 2020.

GARCIA, Jardel Lucas. Ressignificando o conceito de presencialidade: o conceito de metaverso e suas potencialidades. *In*: GARCIA, Jardel Lucas; MEHLECKE, Querte Teresinha Conzi. **Combine**: pessoas, virtualidade e finanças. 1 ed. Porto Alegre [RS]: Faculdade CMB. 88 p. E-book.

GLOBO.COM. ONU afirma que acesso à internet é um direito humano. **G1**, São Paulo, 03 de junho de 2011. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/06/onu-afirma-que-acesso-internet-e-um-direito-humano.html>. Acesso em: 25 fev. 2022.





GILLESPIE, Tartelon. A relevância dos algoritmos. **Parágrafo**, São Paulo, Brasil, v. 6, n. 1, p. 95-121, jan./abr. 2018. Disponível em: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5971548/mod\\_resource/content/1/722-2195-1-PB.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5971548/mod_resource/content/1/722-2195-1-PB.pdf). Acesso em: 01 mar. 2022.

GOUGES, Olympe de. **Déclaration des Droits de la femme et de la citoyen-ne**, de setembro de 1791. Disponível em: <http://www.siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Gouges-D%C3%A9claration.pdf>. Acesso: 24 fev. 2022.

HELVESLEY, José. Isonomia Constitucional: Igualdade formal versus igualdade material. **Revista ESMAFE**, Recife, n. 7, p. 143-164. Disponível em: <https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/260/251>. Acesso em: 02 mar. 2022.

HERMIDA, Alberto J. Tapia. Decálogo de la Inteligencia Artificial Ética Y Responsable En La Unión Europea. **Diario La Ley**, Nº 9749, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, 04 de dezembro de 2020. Disponível em: [http://www.aidaargentina.com/wp-content/uploads/Dec%C3%A1logo\\_de\\_la\\_inteligen...-1.pdf](http://www.aidaargentina.com/wp-content/uploads/Dec%C3%A1logo_de_la_inteligen...-1.pdf). Acesso em: 02 mar. 2022.

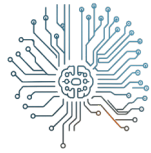
HOUAISS, a. **Dicionário online de português**. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/houaiss/>.

MAGRANI, Eduardo. **Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade**. 2. ed. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Curso de Direitos Humanos**. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense, MÉTODO, 2021.

MIGNOLO, Walter. A Geopolítica do Conhecimento e a Diferença Colonial. **Revista Lusófona de Educação**, v. 48, n. 48, p. 187-224, 2020. Disponível em: <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/issue/view/758>. Acesso em: 24 fev. 2022.





MOREIRA, Ana Carolina Santana; SILVA, César Augusto S. da. A dinâmica do Direito Internacional e o movimento político a favor das mulheres. *In*: GUIMARÃES,

Verônica Maria Bezerra. **Direitos Humanos e Relações Internacionais**: Debates

Contemporâneos. Dourados: Editora UFGD, 2013, p. 13-29. Disponível em: <https://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/EDITORA/catalogo/direitos-humanos-e-relacoes-internacionais-debates-contemporaneos-veronica-maria-bezerra-guimaraes-org.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2022.

MOREIRA, Ardilhes; PINHEIRO, Lara. OMS declara pandemia de coronavírus. **G1**, São Paulo, 11 de março de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml>. Acesso em: 02 mar. 2022.

NETFLIX. **Coded Bias**. 2020. Diretora: Shalini Kantayya. 1h25min.

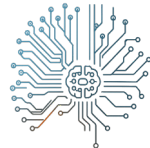
O'NEIL, Cathy. **Algoritmos de destruição em massa**: como o big data aumenta a desigualdade e ameaça à democracia. 1 ed. Santo André, SP: Editora Rua do Sabão, 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relator da ONU critica violação de governos e empresa a direitos na Internet. 14 de junho de 2017. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/76836-relator-da-onu-critica-violacao-de-governos-e-empresas-direitos-na-internet>. Acesso em: 25 fev. 2022

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). 2,9 bilhões de pessoas nunca acessaram a internet. 02 de dezembro de 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/161450-29-bilhoes-de-pessoas-nunca-acessaram-internet>. Acesso em: 25 fev. 2022.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. *In*: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais**. Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, setembro de 2005, fp 117-142.





ROMAGUERA, D. C. L.; TEIXEIRA, J. P. A.; BRAGATO, F. F. Por uma crítica descolonial de ideologia humanista dos Direitos Humanos. **Derecho y Cambio Social**, v. 38, p. 1-27, 2014. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5470223.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2022.

SANTOS, Boaventura de Souza. **A gramática do tempo**: para uma nova cultura política. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SANTOS, Boaventura de Souza. **Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2014.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Governo dos algoritmos. **Revista de Políticas Públicas UFMA**, v. 21, p. 267-281, 2017.

UNIÃO EUROPEIA, **General Data Protection Regulation**, de 14 de abril de 2016. Disponível em: <https://gdpr-info.eu>. Acesso em: 25 fev. 2022

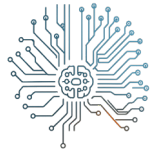
UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (regulamento inteligência artificial) e altera determinados atos legislativos da**

**União**. Bruxelas, de 21 de abril de 2021. Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/>

PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN

UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que cria regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e que altera os Regulamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e as Diretivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regulamento da Inteligência Artificial)**. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX-X%3A32024R1689](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:X%3A32024R1689). Acesso em: 25 mar. 2025.





## PLURALISMO JURÍDICO: FUNDAMENTOS DE UMA NOVA CULTURA NO DIREITO

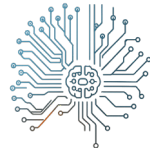
Emerson Wendt<sup>1</sup>

A presente resenha tem como objeto o livro do Professor Doutor Antonio Carlos Wolkmer, intitulado “**Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito**”.

Antes, porém, cumpre destacar um pouco do histórico do autor, Prof. Dr. Antonio Carlos Wolkmer, que é formado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS, 1977). Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela UNISINOS (1980). Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1983) e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 1992). Além de sua formação, seu histórico acadêmico e profissional é extenso: Professor Titular Aposentado no Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Docente Permanente no Programa de Pós-Graduação em Direito e Sociedade do UNILASALLE-RS. Coordenador e Professor do Mestrado em Direitos Humanos e Sociedade da UNESCO. Consultor Ad Hoc da CAPES e do CNPq, sendo deste pesquisador nível 1-A. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC entre 2007-2011. Membro do Comitê Assessor para a área do Direito do Comitê de Assessoramento de Antropologia, Arqueologia, Ciência Política, Direito, Relações Internacionais e Sociologia - CA-CS, do CNPq (2009-2012). Membro do Comitê Científico do Institut International d'Études et de Recherches sur les Biens Communs, Paris/Napoli. e do Grupo de Trabajo CLACSO: “Pensamiento Jurídico Crítico”. 2016-2018 (Buenos Aires/Equador). Socio da *Sociedad Argentina de Sociología Jurídica* (SASJU). *Member*

<sup>1</sup> Doutor e Mestre em Direito pela Universidade La Salle, Canoas/RS; Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade La Salle, Canoas/RS e líder do Grupo de Pesquisa Teorias Sociais do Direito; Editor-revisor da revista Direito & TI ([www.direitoeti.com.br](http://www.direitoeti.com.br)), Qualis B1 Capes; Delegado de Polícia Civil do Estado do RS. *E-mail*: [emersonwendt@gmail.com](mailto:emersonwendt@gmail.com). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9475388941521093>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0195-5445>.

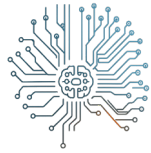




*International Political Science Association* (IPSA, Canada), bem como do *Instituto Internacional de Derecho y Sociedad* - IIDS (Lima, Perú), e do *Research Committee on Sociology of Law* (RCSL). Membro da Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia do Direito (ABRAFI), do Instituto Brasileiro de História do Direito (IBHD), da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano e Associado Honorário do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI). Membro vitalício da Academia Catarinense de Letras Jurídicas (ACALEJ - Cadeira nº 10). Coordenador do NEPE/UFSC - Núcleo de Estudos e Práticas Emancipatórias); e do NUPEC - Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania, UNESC-SC. Prêmio Pesquisador Destaque do Direito nos 50 anos Comemorativos da UFSC, em 2010. Professor colaborador permanente do *Master y Doctorado en Derechos Humanos y Interculturalidad de la Universidad Pablo de Olavide* (Sevilha, Espanha), *de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad A. San Luis Potosí* (Mexico) *y del Doctorado en Derecho - Modalidad Especial - de la Universidad de Buenos Aires* (Argentina) *y del Diplomado en Antropología Jurídica y Derechos Indígenas, de la Universidad de Chile, y del Doctorado en Derecho, de la Universidad Libre* - Bogotá, Colombia. Professor convidado em diversas universidades e programas de pós-graduação no exterior: Espanha, Itália, México, Perú, Colômbia, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Costa Rica e Porto Rico.

Como refere seu Lattes, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: Sociologia Jurídica, Pluralismo Jurídico, História do Direito, Filosofia do Direito e Direitos Humanos, Cultura Jurídica e Constitucionalismo Latino-Americano. Por outro lado, possui sua própria teoria de direitos humanos, pautados na pluralidade material essencial que deve norteá-los e, por isso, pode ser chamada de Teoria Wolkmeriana de Direitos Humanos. Pretende-se, no entanto, extrair as principais informações daquela que é considerada uma de suas principais contribuições para o Direito e para a Sociologia do Direito, que foi sua tese doutoral.





## INTRODUÇÃO

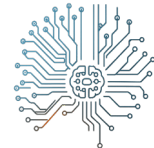
O autor parte de um núcleo baseador do pluralismo jurídico, que é a negação de que seja o Estado o único poder político e exclusiva fonte de toda a produção do Direito, porém ponderando a necessidade de avanços em uma nova direção do pluralismo, “gerado pelas contradições de modelos de produção e distribuição de riqueza e pelo processo dialético de necessidades inerentes aos agentes históricos presentes” (Wolkmer, 2015, p. 14), reconhecendo-se novas formas de normatividade resultantes de ações sociais participativas.

A partir dessas percepções iniciais, Wolkmer (2015, p. 14) define o pluralismo jurídico como “a multiplicidade de manifestações ou práticas normativas num mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e culturais”, ou seja, foca na necessidade de se considerar o contexto real das comunidades e grupos, as suas demandas específicas, das profundas condições sociais geradas pelo capital globalizado, e não propriamente do *dever ser* normativo baseado no sistema hegemônico dominante.

Assim, tendo como campo de pesquisa a “estrutura sociopolítica do Capitalismo periférico latino-americano”, o autor procura responder, ao longo da obra, ao problema de pesquisa: (a) como se estrutura, se instrumentaliza, se operacionaliza e se efetiva a contínua recriação do processo das práticas jurídicas comunitárias/diferenciadas num amplo espaço público de democratização, descentralização e participação? (b) até que ponto, e em que medida, uma nova formulação prático-teórica do Direito, em sociedades instáveis, desiguais e conflituosas do Capitalismo periférico (Sul global), permeia, presentemente, pela legitimidade específica de um pluralismo jurídico calcado nas privações cotidianas de novos sujeitos coletivos? (Wolkmer, 2015, p. 14).

Portanto, o foco do autor, usando o marco teórico do pluralismo jurídico, são os movimentos de baixo para cima, de um pluralismo, político e jurídico,





“adaptado às contingências históricas periféricas como a latino-americana, dominada por uma tradição normativa centralizadora, autoritária e dependente” (Wolkmer, 2015, p. 16), considerando os interesses cotidianos individuais e coletivos (“novas singularidades sociais”), em uma “perspectiva de complexidade e interculturalidade” (Wolkmer, 2015, p. 18). Evitar o discurso do individualismo é fundamental para Wolkmer (2015, p. 18), devendo-se considerar o “sujeito histórico-em-relação”, ou seja, dentro de um contexto de alteridade e racionalidade emancipatória do sujeito e/ou novos sujeitos coletivos: o poder comunitário como fonte de produção normativa (Wolkmer, 2015, p. 22).

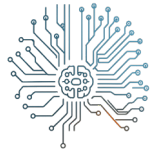
## **1 ORIGEM, EVOLUÇÃO E DECLÍNIO DA CULTURA JURÍDICA ESTATAL**

O primeiro capítulo encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira analisa o monismo como projeto da modernidade liberal-capitalista, e, a segunda aborda aspectos da crises de hegemonia e disfunções do paradigma jurídico.

### **1.1 O MONISMO COMO PROJETO DA MODERNIDADE LIBERAL-CAPITALISTA**

O autor parte da necessidade de uma análise centrada na práxis cotidiana e que não se pode ter uma visão ampla de “determinada forma positivada de Direito” se não foi “identificado a que tipo de organização social está vinculado e que espécie de relações estruturais de poder, de valores epistêmicos e de interesses materiais reproduz” (Wolkmer, 2015, p. 23). Também, os modelos culturais refletem concepções, significados e valores específicos, de determinado tempo e espaço, e os fenômenos jurídicos são reflexos desse momento, por isso há, em





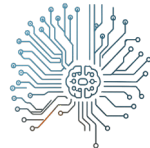
cada período histórico, um “certo tipo de ordenação jurídica” (Wolkmer, 2015, p. 24).

O Direito da sociedade moderna (eurocêntrico) formou-se a partir da sociedade burguesa, do modo de produção material (capitalista), de hegemonia ideológica liberal (individualista) e com a forma de organização institucional de poder (Estado Soberano), sendo que essas diferentes estruturas compatibilizam-se “na constituição e na práxis de um paradigma jurídico universalista”, marcado pelos princípios do monismo, da estatalidade, da racionalidade formal, da certeza e da segurança jurídica (Wolkmer, 2015, p. 24), cultura jurídica essa que passa a ser questionada a partir da globalização e das transformações (econômicas e políticas) geradas pela complexidade de conflitos daí advindos, bem como das sociedades periféricas e dependentes.

A análise de Wolkmer (2015, p. 25-46) vai além da transição do sistema feudal, com características plurais (organização e jurídica), para o sistema burguês, centrado no modo de produção capitalista, territorialmente concentrado, passando pela sua associação à filosofia liberal, de um lado revolucionária/progressista (em relação aos regimes totalitários) e de outro conservadora (em relação às reivindicações populares e democráticas), nos seus traços diversos e essenciais, formados por núcleos: (a) econômico – livre iniciativa empresarial, propriedade privada, economia de mercado –, (b) político-jurídico – Estado de Direito, soberania popular, supremacia constitucional, separação de poderes, representação política, direitos civis e políticos –, e (c) ético-filosófico – liberdade pessoal, crença e otimismo na vida, individualismo.

O individualismo, por sua vez, ganha destaque no contexto da filosofia liberal, pois há priorização do homem, como centro autônomo de decisões econômicas, políticas e racionais, sendo a sociedade uma soma de vontades individuais. Nesse contexto capitalista, burguês, liberal e individualista, a estrutura de poder político-institucional assegura “a especificidade desses novos interesses” (Wolkmer, 2015, p. 39), ou seja, a centralização da força soberana, da secularização e da burocracia administrativa. Eis o projeto racional da humanidade,





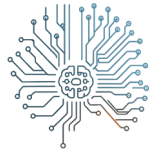
transmutado do natural para o social, civil, onde a tomada de consciência do homem do seu condicionamento para a vida em sociedade e da capacidade de que dispõe para controlar, organizar, gerir e utilizar tais condicionamentos para sua sobrevivência (Wolkmer, 2015, p. 40).

A soberania passou, gradativamente, por um processo de mutação de sua figura, do soberano pessoal, o rei, o monarca, para o soberano impessoal, o Estado, a Nação. Porém, as concepções de poder soberano foram alicerçadas por Hobbes, em *Leviatã*, sendo possível se constituir um Estado por aquisição (força natural, da coação, do medo e da subordinação) ou por instituição (construído politicamente, pela pactuação dos homens, conforme Wolkmer, 2015, p. 41).

O capitalismo sofreu complexas transformações no decorrer da história, permitindo-se periodicizar os momentos do moderno Estado burguês ocidental. Esse Estado que, segundo Wolkmer (2015, p. 43-44), desenvolve-se no “crescente espaço de inserção e acumulação de capital”, aliado com “a existência de novas necessidades específicas geradas pela sociedade industrial de massa, da progressiva burocratização da administração pública e do permanente ‘assistencialismo’ estatal”, o que ocorre não só pela regulação dos conflitos entre capital e trabalho, mas também pela institucionalização das políticas previdenciária e sindical, tendo o Estado de Bem-Estar sido constituído e evoluído no processo de mediar, de conciliar os interesses do capital e as demandas sociais. Porém, na segunda metade do Séc. XX, surge um novo período, de complexidade e avanço, com características de processos de desorganização, reordenação e flexibilização global do capital internacional, havendo também formas de descentralização do poder, crescente presença de novos sujeitos participantes (individuais e coletivos) e “a especificidade de polos normativos insurgentes e informais que expressam a retomada de certas práticas pluralistas”. Valores da Idade Média, desconstruídos pela sociedade burguês-capitalista, são retomados no Séc. XX: descentralização, corpos intermediários, corporativismo associativo e pluralismo.

A tradição jurídica, lógico-formalista, formada seja pelo sistema do *Civil Law* seja pelo *Common Law*, são fenômenos jurídicos da sociedade moderna,





de matriz eurocêntrica, de caráter monista, baseado na modernidade burguês-capitalista e na centralização da organização política do Estado, situação que não pode olvidar a existência de um pluralismo jurídico e de “uma tradição de fontes bem mais antiga de formulações jurídicas comunitárias” (Wolkmer, 2015, p. 45), dentre as quais o Direito Eclesiástico e o Direito Internacional.

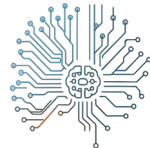
Porém, o Direito Estatal passou por um processo de formação do princípio unitário, com ciclos históricos e principais momentos do monismo jurídico, além de pressupostos e caracterização, detalhadamente abordados por Wolkmer (2015, p. 46-68).

O monismo centralizador, segundo Wolkmer (2015, p. 46), é fruto do somatório ou da conexão estreita entre a “suprema racionalização do poder soberano” e a “positividade formal do Direito”, frutos do interesse da nobreza e do clero, a burguesia mercantil, em reger de maneira genérica, abstrata e racional, todas as áreas de interesse, como comércio, propriedade, herança, contratos etc. Os princípios jurídicos foram se moldando com a transformação da sociedade, adequando-se aos novos interesses (sempre hegemônicos). A validação das normas ocorre não pela eficácia ou aceitação espontâneas, mas pela sua produção em conformidade com as regras e mecanismos previamente estabelecidos, com coação punitiva e de origem do poder público, este centralizado burocraticamente: é a legitimidade jurídico-racional, do Estado de Direito, este que se garante como um poder soberano máximo, controlado e regulado pelo Direito.

Esse mesmo Estado de Direito acaba por dissimular a realidade social, dissimulando as suas contradições e condições materiais de desigualdade, simulando uma igualdade inexistente, porém abstrata. A evolução do monismo jurídico ocidental compreende quatro grandes ciclos:

- *primeiro ciclo*, composto da formação do monismo jurídico, que ocorre com o declínio da Igreja e do pluralismo corporativista medieval (Feudalismo), associados ao Capitalismo mercantil, ao fortalecimento do poder aristocrático e ao Estado absolutista. O Direito é, no caso, o Direito Estatal, vinculado ao Estado absolutista de Thomas Hobbes. Período: Séc. XVI e XVII.



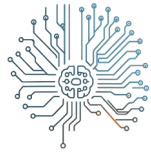


- *segundo ciclo*, composto do período que vai da Revolução Francesa (Iluminismo) até o final das principais codificações do Sec. XIX, com estruturação e solidificação da legalidade estatal burguês-capitalista no Ocidente, sendo o Direito Estatal reflexo não mais do soberano, mas sim produto da rearticulação das novas condições advindas do Capitalismo concorrencial, da crescente produção industrial, da ascensão da classe burguesa enriquecida e do liberalismo econômico (leis de mercado, tendentes à mínima intervenção do Estado). O privilégio da lei escrita como fonte do Direito não emana mais do soberano absolutista, mas sim da “vontade geral da nação soberana” (Wolkmer, 2015, p. 52).

Reforça-se o monismo com as manifestações do historicismo teleológico de Rudolf von Jhering (o Direito é um sistema de normas imperativas caracterizadas pela “coação” e garantida pela força do Estado) e com os rumos da *Common Law*, marcadas pelo utilitarismo formalista de John Austin. Após a Revolução Francesa, implanta-se a centralização da instituição burocrática e um corpo orgânico de normas abstratas, sob o controle do poder estatal: um Direito nacional unificado. É desse período as codificações, que responderam às necessidades posteriores de segurança e estabilidade da burguesia, especialmente quando vivenciam a etapa do Capitalismo concorrencial. Esse período também sobre grande influência do imaginário jusnaturalista e do amplo processo de racionalização da vida (Wolkmer, 2015, p. 54). Segundo Wolkmer (2015, p. 55), “A ideologia positivista procurou banir todas as considerações de teor metafísico-racionalista do Direito, reduzindo tudo à análise de categorias empíricas na funcionalidade de estruturas legais em vigor.” Neste ciclo então o Direito só é Direito quando produzido pelo Estado e quando é Direito Positivo, desconsiderando-se todas as outras formas de normatividade, conservadas e/ou praticadas. Mesmo na *Common Law* o Direito Judicial, criado pelos juízes, é Direito Estatal, pois que a atribuição foi concedida aos juízes pelo próprio Estado (John Austin).

- *terceiro ciclo*, caracterizado por uma legalidade dogmática e com rígidas pretensões universais de cientificidade, entre os anos 1920 e 1960. A representação principal desse período é de Hans Kelsen, com seu sistema de hierarquia de





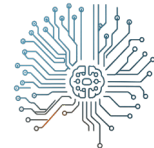
normas, de graus sucessivos e de extensão e eficácias decrescentes, consideradas já as normas de caráter internacional, as nacionais e as relativas às organizações públicas e privadas, considerando-se que o Estado é o Direito Positivo, é o Estado de Direito: Estado como a ordem jurídica. Nesse período há o apontamento dos direitos sociais.

- *quarto ciclo*, que se inicia a partir dos anos 1960/70, relacionado às novas necessidades de reordenação e de globalização do capitalismo monopolista (de acumulação), havendo novas demandas político-econômicas, aumento de conflitos entre grupos e classes sociais, surgimento de complexas contradições culturais e materiais de vida inerentes à sociedade de massa. Nesse período surge o esgotamento do paradigma da legalidade e a crise do monismo jurídico.

São pressupostos da dogmática jurídica do monismo jurídico:

- (a) Estatalidade – centralização, burocratização e secularização do poder soberano nacional.
- (b) Unicidade – toda sociedade tem apenas um único Direito, que só pode ser produzido através de órgãos e de instituições reconhecidos e/ou oficializados pelo Estado.
- (c) Positivização – todo direito se reduz ao Direito Positivo, composto de um ordenamento sistemático, rigidamente fechado e completo, a organização centralizada do poder e o funcionamento de órgãos aptos a assegurar o cumprimento das regras pressupostamente neutras e universais (Wolkmer, 2015, p. 64).
- (d) Racionalização – consiste na organização da vida, por divisão e coordenação das diversas atividades, com base em um estudo preciso das relações entre os homens, com seus instrumentos e seu meio, com vistas à maior eficácia e rendimento (Wolkmer, 2015, p. 66).  
No caso do monismo jurídico, a racionalidade (formal) jurídica,





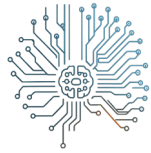
positivista, fundada na presunção da universalidade e neutralidade das regras jurídicas.

## 1.2 CRISE DE HEGEMONIA E DISFUNÇÕES DO PARADIGMA JURÍDICO

Observa Wolkmer (2015, p. 72-3) que supremacia, então representada pelo “estatismo jurídico moderno, que funcionou corretamente com sua racionalidade formal e serviu adequadamente às prioridades institucionais por mais de dois séculos”, em razão (a) da crise do Capitalismo monopolista, (b) da conseqüente globalização e concentração do capital atual, e, (c) bem como com o colapso do aparato liberal-individualista, “a não mais atender a totalidade complexa dos sistemas organizacionais e dos novos sujeitos sociais” (Wolkmer, 2015, p. 72-3), pois que desconsiderou as demais fontes do direito, sejam elas informais, extra estatais, espontâneas, indígenas etc. (exteriorizações normativas múltiplas), oriundas e representadas por corpos sociais autônomos (comunas, assembleias, sindicatos, corporações, grupos sociais etc.). Há, portanto, nessa crise, uma colidência entre o racionalismo formal e a racionalidade material, esta “enquanto prática social marcada por novas formas de conflitos e demandas” (Wolkmer, 2015, p. 73).

Wolkmer (2015, p. 74) recorre a Jürgen Habermas e cita as quatro crises relativas ao desenvolvimento do Capitalismo avançado: crise de legitimação, crise de motivação, crise econômica e crise de racionalidade, sendo as duas primeiras manifestações de uma crise de identidade e as duas últimas uma crise sistêmica. Essas crises são contextuais e relacionais, não isoladas, transitórias, ligadas ou não a aspectos estruturais e/ou operacionais, podendo ser o prenúncio de uma quebra de ordem, com possibilidade de um desfecho sem controle e até de uma reação destruidora.

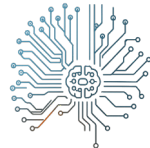




A crise, então, segundo Wolkmer (2015) é uma noção que tem por finalidade servir para opor uma ordem ideal a uma desordem real, na qual a ordem jurídica é contrariada por acontecimentos e fatos para os quais ela não sabe dar respostas eficazes. Essa crise está conectada à crise dos fundamentos e dos paradigmas que norteiam a modernidade. O que está em crise é o paradigma da Dogmática Jurídica estatal, consolidada nos Sécs. XVIII e XIX. Usa Wolkmer (2015, p. 76) do significado de “crise” como a “disfuncionalidade, a falta de eficácia ou o esgotamento do modelo ou situação histórica, aceitos e tradicionalmente vigentes”, ou seja, enfoca sua atenção para a crise real e não meramente subjetiva. Apoiando-se em Thomas Kuhn, Wolkmer (2015, p. 77) entende que um paradigma só vai substituir outro quando e no momento que ele mostre a ser um modelo efetivo na resolução de todo o problema ou de pelo menos alguns dos problemas que o paradigma anterior não solucionava, não apresentava a resposta ou era incapaz de explicar um aspecto considerado importante. As crises então são uma “pré-condição necessária para a emergência de novas teorias e de novos paradigmas” (Wolkmer, 2015, p. 77).

Se o paradigma da *Dogmática Jurídica* oferecia respostas previsíveis e regulares, garantindo certeza e segurança, típicos da modernidade, atualmente já não o faz, por estar (a) presa à legalidade formal escrita, (b) presa ao tecnicismo de um conhecimento abstrato e estático e (c) presa ao monopólio da produção normativa estatal, (d) ter se afastado das práticas sociais cotidianas, (e) ter desconsiderado a pluralidade de novos conflitos sociais, de massa, (f) ter desprezado as emergentes manifestações extralegislativas, (g) ter dado pouca atenção às contradições das sociedades liberal-burguesas, e, (h) por ser omissa e descompromissada com as mais recentes investigações interdisciplinares (Wolkmer, 2015, p. 78-9). Os paradigmas da *Dogmática Jurídica* não conseguem mais resolver os problemas e não consegue mais fornecer orientações, diretrizes e normas capazes de nortear a convivência social contemporânea, especialmente os relacionados à natureza coletiva dos conflitos grupais e classistas.





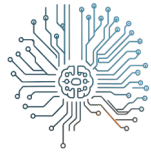
Os *paradigmas alternativos*, por sua vez, têm uma perspectiva que transcende os limites da dogmática, captando os antagonismos sociais e conferindo dinamismo e flexibilidade aos mecanismos jurídicos legais e extralegais, estatais e extraestatais (Wolkmer, 2015, p. 80), a exemplo dos novos mecanismos de autorregulação dos conflitos e de resolução de interesses emergentes, com novas fórmulas novas de negociação, mediação e arbitramento.

Destaca Wolkmer (2015, p. 81) a necessidade de se considerar e alicerçar o Direito em um pluralismo, capaz de reconhecer e legitimar normatividades extra e intraestatais, “engedradas por carências e necessidades próprias das contingências de sujeitos coletivos recentes, e de apreender as especificidades das representações formadas juridicamente no contexto de sociedades subalternas do Capitalismo periférico”, ou seja, a opção é por um pluralismo liberador. Defende, então, a proposta de um pluralismo jurídico comunitário-participativo, “configurado através de espaços públicos abertos e compartilhados democraticamente, privilegiando a participação direta de socialidades excluídas e subalternas, capazes de instaurar novos direitos enquanto necessidades desejadas e possibilitando que o processo histórico de lutas se encaminhe por vontade e por manifestação autêntica das bases comunitárias” (Wolkmer, 2015, p. 82).

## **2 ESPAÇO DA CRISE CONTEMPORÂNEA – A JUSTIÇA NO CAPITALISMO PERIFÉRICO BRASILEIRO**

No segundo capítulo, Wolkmer (2015, p. 83-126) aborda a crise do monismo jurídico, da Dogmática Jurídica, tendo por base o Brasil, situado no Sul Global, ou seja, no ambiente periférico e descolonial latino-americano, enfocando o sentido real do capitalismo periférico, levando-se em consideração que este significa “um modelo de desenvolvimento que estabelece dependência, submissão e controle das estruturas socioeconômicas e político-culturais locais e/ou nacionais aos interesses das transnacionais e das economias dos centros





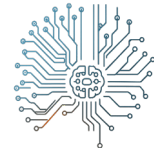
hegemônicos” (Wolkmer, 2015, p. 83), ou seja, os países periféricos possuem economias de dependência “por serem controlados e por reproduzirem as condições e o jogo de interesses do capital central dominante”: o Norte Global (Wolkmer, 2015, p. 84).

Na análise e compreensão do ‘periférico’ e da ‘dependência’, reforça Wolkmer (2015, p. 85), que tem de se ter claro também o papel interno de colonização nas relações sociais e nas contradições de classes, pois que dependência tem relação com (a) as condições criadas pelo sistema-mundo de nominação político-econômico mundial e (b) as relações de classe e da ação ético-cultural dos agentes e dos grupos na esfera de colonização de cada nação e de cada Estado.

O paradigma jurídico tradicional é o mesmo nos países industriais avançados e nos países em desenvolvimento da periferia. Encontra-se um Direito identificado com a lei e como produção exclusiva do Estado, porém com certas diferenciações estruturais e conjunturais, que são díspares especialmente se considerarmos as necessidades e os interesses em jogo nos dois campos, o do Norte Global e o periférico, do Sul Global.

As diferenças ocorrem, pois em sociedades industriais avançadas a maior preocupação é com os direitos sociais, socialização dos direitos e acesso à Justiça etc., enquanto nas sociedades industriais periféricas as prioridades são por direitos civis, direitos políticos e direitos socioeconômicos, pelo controle de conflitos latentes relacionados às carências materiais e às necessidades de sobrevivência (Wolkmer, 2015, p. 87-8). As singularidades das sociedades periféricas tornam mais clara a falência e as incongruências do modelo da legalidade liberal-burguesa, transplantado à periferia, pois que é tênue sua efetividade em responder às demandas por novos direitos e em resolver os latentes conflitos coletivos na AL. Foca o autor na análise do Brasil, com uma sociedade com “instituições frágeis e submissas, uma cultura de importação e reprodução, uma ideologia de liberalismo conservador, uma democracia formal e elitista, uma economia historicamente dependente” (Wolkmer, 2015, p. 89).





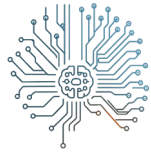
## 2.1 TRAJETÓRIA DA CULTURA JURÍDICA NO BRASIL

A cultura jurídica brasileira, nos momentos distintos passando pela Colônia, pelo Império e pela República, sempre foi marcada pela supremacia do oficialismo estatal sobre as diversas formas de pluralidade de fontes normativas que já existiam, sofrendo profunda influência dos princípios e diretrizes do Direito colonizador alienígena, revelando-se comprometido com a estrutura elitista de poder (Wolkmer, 2015, p. 89). Em contraponto, algumas práticas jurídicas comunitárias, tanto nos quilombos, quanto nos povos indígenas e/ou reduções indígenas jesuítas, constituíram-se e constituem-se em formas remotas de um Direito não estatal.

A trajetória brasileira é diversa da Europeia na formação do Estado, pois este surgiu antes mesmo da ideia de sociedade civil e/ou nação soberana, pois foi instaurado a partir de uma estrutura herdada de Portugal (semifeudal, patrimonialista e burocrático), impondo-se sobre as práticas jurídicas comunitárias, nativas e consuetudinárias aquelas oriundas da cultura legal europeia e da Coroa Portuguesa (Ordenações), garantidoras dos impostos e dos direitos aduaneiros, além de impor coação penal. A legislação canônica, mesmo com o advento do Império, teve uso até a formação da República e o Direito oficial era o da autoridade constituída, adaptado da legislação portuguesa e distante das práticas jurídicas comunitárias. Admitia-se, no entanto, certo tipo de pluralismo jurídico (ex.: o casamento religioso), porém tratava-se de uma modalidade de pluralismo jurídico conservador e elitista, reproduzidor da convivência das forças dominantes, porquanto considerava tão somente o Direito do Estado e o Direito da Igreja.

O positivismo jurídico brasileiro, essencialmente monista, estatal e dogmático, instaurado com uma ordem liberal-burguesa e de cultura jurídica positivista, é construído a partir de uma ideologização representada e promovida pelos dois polos de ensino jurídicos criados na primeira metade do Séc. XIX, a





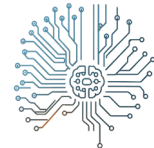
‘Escola de Recife’ e a ‘Faculdade de Direito do Largo de São Francisco’. O Direito Estatal vem a regular então os intentos dos proprietários de terras e da burguesia, ocultando uma sociedade de classe virulentamente estratificada: o Estado dita o monopólio da produção jurídica.

No entanto, o Brasil não deixava de ter padrões de legalidade (direito formal e informal): (a) as leis formais, das escolas de Direito e do governo oficial; (b) as leis dos coronéis, os grandes proprietários de terras e a elite comercialmente ativa, e (c) a legislação comunitária, as leis populares, consuetudinárias, dos pequenos agricultores, camponeses, caipiras e dos pobres das zonas urbanas. A influência formalista é mais acentuada dentre os cultores da doutrina penal brasileira (antes da República, as duas únicas codificações foram a Penal e a Processual Penal). É uma visão formalista do Direito, focada em garantir os valores burgueses e insistente em categorias formuladas na Revolução Francesa: as verdades são perenes e imutáveis, capazes de exercer o controle social, com segurança e neutralidade. Por outro lado, não há que se negar a existência paralela de um Direito Comunitário, obstaculizado ou negado pelo monopólio do poder oficial, porém gerado e utilizado por grandes parcelas da população (setores discriminados e excluídos da vida política).

## 2.2 NECESSIDADES, DIREITOS E A QUESTÃO DOS CONFLITOS

Wolkmer (2015, p. 96-7) parte da concepção de que a crise do monismo jurídico – e seu caráter estatal, centralizado e burocrático –, está centrada na questão dos princípios, fundamentos, valores e objetivos. As carências por bens materiais e não materiais, que são inerentes à condição humana e que são constantemente mutáveis em razão do desenvolvimento da sociedade, traduzem-se em novos direitos e, em sendo frustrados, consubstanciam-se em uma dinâmica de conflitos. A reivindicação, então, das vontades coletivas, que são em regra subalternas e excluídas, pela (a) defesa dos direitos adquiridos e pela (b) criação





ininterrupta dos “novos” direitos, sendo que a demanda e implementação dos mesmos só são assegurados ou conseguidos através de um processo de lutas comunitárias e conflitos coletivos por necessidades não satisfeitas.

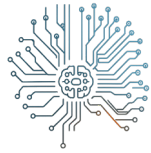
A aquisição de consciência das carências e necessidades são direcionadoras da concretização de reivindicações por direitos e, no caso de países periféricos como o Brasil, são direitos básicos para a sobrevivência de considerável parcela da população (direito à água, saúde, saneamento, assistência médica. Então, a luta por “novos” direitos parte de duas frentes, sendo uma relativa à exigência de tornar efetivos e eficazes os direitos já registrados normativamente, e, a outra, na reivindicação e reconhecimento dos direitos que emergem de novas necessidades que a própria população cria e se atribui. O processo de construção coletivo de um conjunto de direitos está sendo realizado pelos movimentos sociais, que são uma nova “legitimidade de poder”, como observa Wolkmer (2015, p. 99).

Destaca o autor (Wolkmer, 2015, p. 99-102) a importância da questão dos conflitos, pois que a própria vida social, concebida por evoluções, rupturas e mudanças, contempla essencialmente os conflitos no contexto de qualquer sociedade. Os conflitos surgem da limitação, colisão ou disputa entre interesses e podem ser de três tipos: (a) individual, (b) entre indivíduos ou grupos dentro de uma organização, e, (c) conflito interorganizacional (entre organizações ou grupos). Além disso, os conflitos podem ser de diversas ordens e níveis (de classe, políticos, étnicos etc.), podendo ser analisados sobre os aspectos da dimensão (número de participantes), intensidade (envolvimento e grau de atuação dos atores participantes) e objetivos (fins perseguidos, reformas, mudanças etc.).

O estudo dos conflitos sociais, segundo o autor, permite a análise do tema sob diferentes óticas:

(a) “teoria sociológica do consenso”, onde o conflito é visto como uma situação de perturbação da ordem, de desequilíbrio, de patologia social (V. Pareto, E. Durkheim e T. Parson);





(b) “teoria sociológica da coação”, que admite que o conflito é elemento nuclear e impulsionador da sociedade, fator de criatividade e de mudanças (K. Marx, G. Sorel, G. Simmel, A. Touraine, R. Dahrendorf)<sup>2</sup>.

Wolkmer (2015, p. 102-3) adota a noção de conflitos sociais ou conflitos coletivos que são capazes de inegáveis mudanças na sociedade, no aparelho estatal e no sistema de legalidade, “simbolizando lutas históricas de sujeitos sociais que reivindicam necessidades fundamentais capazes de erradicar a condição de exploração econômica, colonialidade política e exclusão cultural”. Os conflitos sociais estão, então, pautados sobre as demandas não atendidas ou não satisfeitas, entre a defesa de manter ou de mudar o *status quo*.

### 2.3 O PODER JUDICIÁRIO E SUA INEFICÁCIA INSTRUMENTAL

Wolkmer (2015, p. 103-112) aponta que a tradição monista brasileira e sua legalidade vive “profunda crise paradigmática de acesso à justiça”, pois que não é capaz de absorver e analisar os “novos” conflitos coletivos (configurados por mais de um indivíduo, grupos ou camadas sociais) do final do Séc. XX e início do Séc. XXI, procurando desqualificar a relevância de toda e qualquer manifestação normativa não estatal.

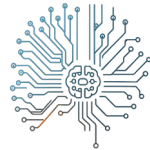
A ineficiência do modelo monista para equacionar os conflitos sociais pode ser ditada em dois níveis: (a) no âmbito do órgão singular ou aparato interpretativo oficial – Poder Judiciário, e, (b) no contexto da própria legislação positiva estatal (Código Civil e Código de Processo Civil).

Wolkmer (2015) detalha, então, os aspectos sobre a crise que perpassa a administração da justiça (no Brasil):

- a crise do Judiciário é crise política dos canais de representação dos interesses coletivos presentes nas democracias burguesas representativas;

<sup>2</sup> Outro autor que pode ser citado nesse contexto é Franz Neumann.





- as instâncias jurisdicionais na Europa e EUA têm sido relativamente eficazes na análise e efetivação/reconhecimento de novos direitos provenientes de movimentos sociais, situação não refletida no Judiciário da periferia;

- o Judiciário brasileiro é entravado na mesma crise estatal e, mesmo acionado constantemente a responder por conflitos de massas de natureza social e patrimonial, o faz com limitações ou sem eficácia;

- o alcance dos procedimentos lógico-formais do Judiciário nacional, em face da retórica da neutralidade, é incapaz de acompanhar o ritmo das transformações sociais e a especificidade cotidiana dos novos conflitos sociais;

- o Judiciário brasileiro é de perfil conservador e de pouca eficácia na solução rápida e global de questões emergenciais vinculadas à sociedade;

- o Judiciário nacional está formado numa cultura jurídica incapaz de compreender a sociedade e seus conflitos e a má vontade em discutir a democratização efetiva deste ramo do Estado;

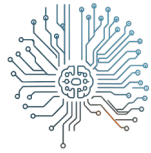
- o Judiciário brasileiro não tem sido a instância marcada por uma postura independente, criativa e avançada, em relação aos graves problemas de ordem política e social. É um órgão elitista, distanciado da sociedade, inviabilizando o acesso à imensa maioria da população de baixa renda;

- por ser de difícil acesso, lento e oneroso, inviável para controlar e reprimir conflitos, acaba por favorecer a emergência de outras agências alternativas “não institucionalizadas” ou instâncias judiciais “informais”;

- o Judiciário brasileiro pode ser um local onde se buscam tanto decisões incertas toleráveis quanto não decisões, estas supostamente ditadas para não agravar conflitos e provocar mais confrontos;

- a crise do sistema judiciário tem levado à expansão de práticas normativas informais na resolução de conflitos (mediação, convenções coletivas, acordos, arranjos setoriais de interesses etc.).





Frente à crise e seus aspectos, surgem alternativas apontadas como possíveis pelo autor nas sociedades periféricas, como a brasileira:

- (a) ampliação qualitativa dos canais institucionalizados de acesso à justiça;
- (b) reconhecimento e incentivo de outras instâncias normativas informais, seja representada por um certo tipo de justiça consentida pelo próprio Estado, seja representada por manifestações comunitárias não oficiais (justiça comunitária popular);
- (c) reconhecimento e ampliação de uma Justiça feita pelo Estado-Administração.

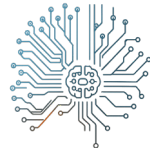
Democratizar e descentralizar a Justiça, mudando o aparelho tradicional de jurisdição do Estado, impondo-se o desenvolvimento de procedimentos plurais de acesso e controle da população à administração da Justiça, buscando-se que (a) juízes e tribunais reconheçam e saibam aplicar formas flexíveis de alternativas de Direito e (b) que haja aceitação, por parte dos canais institucionalizados do Estado, das práticas comunitárias de negociação e resolução de conflitos.

## 2.4 CONFLITOS COLETIVOS NO BRASIL: PRÁTICAS SOCIAIS COMO MARCO HISTÓRICO-POLÍTICO

Ao analisar empiricamente várias situações históricas e concretas sobre o conflito de terras, urbanas e rurais, ocorridas no Brasil desde 1970, Wolkmer (2015, p. 112-126), analisa a crise do monismo jurídico e do Judiciário brasileiro e sua atenção e validação do sistema Estatal e burguês vigente, previsto no Código Civil, que relaciona a posse à propriedade, observando três caminhos diversos:

1º) atuação tradicional do Poder Judiciário, com aplicação pura e simples da legislação estatal oficial, determinando a reintegração de posse e expulsão dos invasores;





2º) atuação inoperante em nível crescente, quando o Judiciário é ausente ou pouco eficaz, nos casos em que a resolução dos conflitos se dá pelo Estado-Administração, com desapropriação, indenização, assentamento ou transferência; e

3º) atuação alternativa em nível de exceção, quando o Judiciário, por razões de relevância social/pública e justiça social, entendo por negar a desapropriação.

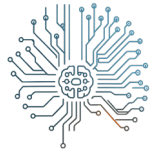
Destaca o autor a incapacidade e limitação do Direito Estatal em solucionar os problemas ou até em agravar os conflitos, ocasionando, de outra ordem, a expansão do Direito Comunitário não estatal, baseado na consciência do sujeito coletivo em relação às carências, demandas e necessidades materiais e não materiais, direito esse de teor informal e consensual. O paradigma do Direito, segundo Wolkmer (2015, p. 125), deve ser o que leva em conta o fato emergencial, as necessidades e carências cotidianas, que leve à definição de uma nova legalidade, plural e comunitária. Por exemplo, no caso dos conflitos de terra, mudar o foco do paradigma de “função social da propriedade” para “função social da posse”.

### **3 AS FONTES DE PRODUÇÃO DA NOVA CULTURA JURÍDICA**

Os novos agentes da produção jurídica surgem das tensões sociais oriundas da exclusão e privação de meios para satisfazer as necessidades materiais e não materiais que levem à vida digna: suas aspirações, carências e exigências são fatores potenciais e fontes de produção jurídica, ou seja, “captar o conteúdo e a forma do fenômeno jurídico mediante a informalidade de ações concretas de atores coletivos, consensualizados pela identidade e autonomia de interesses do todo comunitário” (Wolkmer, 2015, p. 127), abstraídos dos rituais e formas institucionalizadas de Direito.

São pluralidade de interesses e diversas formas de agir, não oficiais e informais, societárias e autônomas, consubstanciadas em movimentos sociais, analisados pelo autor “como expressão específica e mais significativa de um novo





sujeito histórico, singular e coletivo, subalterno e excluído, personagem central da ordem pluralista, fundada em outro modelo de cultura político-jurídica” (Wolkmer, 2015, p. 128), em quatro momentos.

### 3.1 OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO NOVOS SUJEITOS HISTÓRICOS

A categoria político-sociológica dos “novos movimentos sociais” é o primeiro momento analisado por Wolkmer (2015, p. 129-149), sendo eles agentes responsáveis por uma cultura política diferenciada.

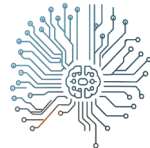
Wolkmer (2015) define como “novos movimentos sociais” os

sujeitos históricos transformadores (sem sentido individual e coletivo), advindos de diversos estratos sociais e integrantes de uma prática política cotidiana com reduzido grau de “institucionalização” imbuídos de princípios valorizativos comuns, resistentes às estruturas oficiais de poder, e objetivando a realização de necessidades humanas fundamentais (Wolkmer, 2015, p. 130).

O conceito perfaz, então, um recorte de sua análise a certo tipo específico de movimentos sociais, analisando seu conteúdo, valores, formas de ação, atores sociais e fatores reais quanto à sua origem e quanto ao seu desenvolvimento histórico. Diferencia esses “novos” movimentos sociais dos “antigos”, relacionados à classe operária e influenciados pelo socialismo, marxismo e anarco-sindicalismo, com objetivos material e econômico calcados em relações instrumentais imediatas e que mantém relações de subordinação aos órgãos institucionalizados (partido ou sindicato).

Os novos movimentos sociais surgem na segunda metade do Séc. XX e lhes é reconhecida a possibilidade de construírem um novo paradigma de cultura política e de organização social emancipatória, isso por serem respostas





naturais à mutabilidade das circunstâncias históricas envolvendo a sociedade, convivente num processo de rupturas e crise de valores, frutos de “ciclos” culturais e ideológicos e de “flutuações” políticas, econômicas e sociais.

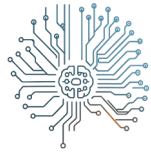
São eles, os movimentos sociais emergentes, reflexo da globalização econômica e cultural, do incremento da urbanização, e, dentre outros aspectos, do esgotamento do modelo de Estado, provocado pela ineficiência administrativa, pela incapacidade de prestar serviços e deterioração de sua legitimidade. Especificamente em relação aos sistemas periféricos (citando Fernando Calderón), são motivos para os novos movimentos sociais a crise das estruturas de poder e a crise de racionalidade que envolve a sociedade burguês-capitalista (Wolkmer, 2015, p. 113), surgindo eles como uma nova ordem social emancipadora.

As causas motivadoras também são diversas nos países periféricos, nos quais a luta é pela redistribuição dos meios de consumo coletivo e reivindicações pela melhoria das condições de vida, pois são relativos às contradições geradas pelo próprio desenvolvimento da sociedade capitalista (brasileira): os movimentos se colocam, diante das carências e do aumento das demandas por direitos, como uma resposta para uma nova organização da sociedade.

Wolkmer (2015, p. 135-6) enfoca no encadeamento de dois planos diferenciados mas complementares para a compreensão dos fatores determinantes da origem dos novos movimentos sociais: (a) fatores de ordem estrutural, vinculados às contradições, imposições e rearranjos do sistema de produção capitalista, e, (b) fatores de ordem conjuntural, que realçam “a particularidade das crises geradas pelo próprio desenvolvimento interno de nossas estruturas socioeconômicas dependentes e pelas necessidades cíclicas compartilhadas e sempre crescentes da população em torno da melhoria das condições de vida” (Wolkmer, 2015, p. 136).

O conteúdo/objetivos desses movimentos sociais surgidos especialmente após 1970 são essencialmente voltados à satisfação das necessidades humanas fundamentais (existenciais, materiais e culturais): direito a espaço físico e núcleo de atividades vitais (corpo, saúde, identidade sexual); direito a cidade





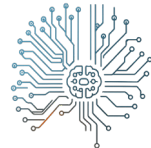
e boa vizinhança; direito à herança e à identidade cultural, étnica, nacional de linguística; direito às condições físicas de vida e à sobrevivência da humanidade em geral. As prioridades, logicamente, são sobre as necessidades materiais, relativas à qualidade de vida.

Independentemente do tipo de movimento social, subsistem determinados valores compartilhados na maior parte deles: a identidade e autonomia. Atentando a certos interesses de parcelas significativas da sociedade global, o “princípio da identidade” respeita a individualidade, identidade local e regional e, também, a noção de liberdade individual associada à liberdade coletiva. A noção de “identidade” deve ser concebida como “um processo de resistência e de ruptura que permite que identidades coletivas se tornem sujeitos da própria história” (Wolkmer, 2015, p. 139). O valor/princípio da autonomia “significa que os sujeitos são responsáveis por suas próprias ações, na medida em que elas decorrem de suas aspirações, de seus interesses e de suas experiências cotidianas” (Wolkmer, 2015, p. 141), constituindo-se, assim, em ação autônoma e independente dos atores coletivos dentro de um contexto de interação histórico-social.

Os novos movimentos sociais são, assim, um paradigma alternativo de cultura política, rompendo com antigas formas de organização e efetivando pequenas transformações e microrrevoluções cotidianas, conduzindo-se por critérios diversos do material (dos movimentos tradicionais), ou seja, pela afetividade, por relações de expressividade, orientações comunitárias e organização horizontal. As posturas e/ou formas de ação dos novos movimentos são: (a) reivindicação; (b) contestação, e, (c) participação.

Wolkmer (2015, p. 144) considera importante contextualizar o que chama de “base social” dos novos atores centrais da ação coletiva, sendo que ela seria diferente nos países centrais e nos países periféricos, pois naqueles haveria uma identificação dos mesmos dentro de uma nova classe média (movimentos envolvendo pacifismo, feminismo, proteção ambiental etc.), enquanto que nos países do Sul global os movimentos seriam predominantemente de classe popular, com intensas lutas de classes e que buscam a subsistência e identidade de seus





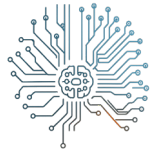
membros. Porém, os novos movimentos sociais nos países periféricos não têm como paradigma único o recorte econômico, pois outras prioridades também são pontuadas, sejam elas étnicas, culturais, ecológicas, religiosas, de gênero, juvenis etc. (Wolkmer, 2015, p. 146), ou seja, são inúmeras posturas dos sujeitos coletivos, reunindo sujeitos de diferentes classes a partir de interesses comuns (ex.: movimento estudantil).

### 3.2 REPRESENTAÇÃO, ESTADO E IDENTIDADE DOS ATORES SOCIAIS

Wolkmer (2015, p. 149-162) parte da premissa de que a “vontade comunitária” participativa não mais perpassa pelos padrões comuns de representatividade e de institucionalidade, comuns aos movimentos modernos, pois nas sociedades complexas - ou em rede, os movimentos sociais “inauguram um estilo de política pluralista assentado em práticas não institucionais e autossustentáveis, e nele avançam, buscando firmar identidades coletivas e promovendo um *locus* democrático, descentralizado e participativo” (Wolkmer, 2015, p. 149).

Essa capacidade da vontade coletiva comunitária desloca os critérios de legitimidade da representação formal para modalidades plurais que medeiam entre a participação autônoma e a representação popular de interesses, ou seja, não é uma representação com mandato, com delegação dos interessados, como ocorre com os sindicatos, políticos etc., cuja medição da legitimidade está na legalidade. Nos novos movimentos sociais, a medição da legitimidade está na efetividade das demandas, no atendimento dos interesses reais da comunidade ou grupo, havendo, portanto, novas formas de legitimidade, que “politizam progressivamente a vida social e imprimem formas distintas de relações e de organização social que independem dos padrões ritualizados da ‘institucionalização’ convencional” (Wolkmer, 2015, p. 151-2). Esses novos movimentos rompem com a “padronização opressora” e constroem





uma nova identidade coletiva, com base participativa e autônoma, com aptidão para responder às necessidades humanas fundamentais (Wolkmer, 2015, p. 153), cuja mobilização ocorre e se articula em paralelo aos mecanismos representativos tradicionais e independentemente do Estado.

O surgimento e atuação dos novos movimentos sociais ocorre em face da crise de legitimidade e a incapacidade de também os partidos políticos filtrarem as demais sociais e transformá-las em decisões políticas. Os interesses sociais tornaram-se fragmentados e houve a ampliação dos conflitos de natureza não econômica, com uma pluralidade de lutas que escapam dos trâmites oficiais e “ensejam a multiplicidade insurgente de arenas decisórias” (Wolkmer, 2015, p. 158).

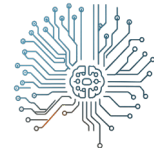
Porém, a falta de institucionalidade e de representatividade representam um empecilho à consecução de objetivos de satisfação das necessidades, havendo necessidade de compatibilizar as práticas democráticas participativas diretas com mecanismos particulares de democracia representativa (Wolkmer, 2015, p. 160). As identidades coletivas não devem e não podem recusar formalmente a possibilidade de uma negociação que, em regra, institucionalize suas práticas.

Segundo Wolkmer (2015, 162), parece correto, em face do contexto, que se (a) situe os movimentos sociais em um campo plural de articulação, organização, mobilização com autonomia relativa (frente ao poder estatal), e se (b) encare a questão da institucionalização através da compreensão de graus diversos, quer dizer, com modalidades que implicam ou o máximo ou o mínimo de formalização (agregação de interesses emergentes contraditórios).

### 3.3 OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO FONTE DE PRODUÇÃO JURÍDICA

Segundo Wolkmer (2015, p. 162-3), a fonte primária do Direito deve estar, “essencialmente, na dinâmica interativa e espontânea da própria sociedade





humana, representada pela multiplicidade de *campi* sociais”, ou seja, relacionada às relações sociais e às necessidades cotidianas desejadas.”

As transformações da vida social constituem, assim, a formação primária de um ‘jurídico’ que não se fecha exclusivamente em proposições genéricas e em regras estáticas e fixas formuladas para o controle e a solução dos conflitos, mas se manifesta como resultado do interesse e das necessidades de agrupamentos associativos e comunitários, assumindo um caráter espontâneo, dinâmico, flexível e contextual (Wolkmer, 2015, p. 163).

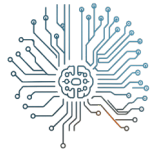
As fontes formais, gerais e abstratas do Direito, não são capazes de se conectar às aspirações jurídicas “mais desejadas, vivas e concretas das forças societárias subalternizadas e excluídas” (Wolkmer, 2015, p. 163).

A (a) dialética da *práxis* da vida cotidiana e (b) a materialização normativa como expressão de processos históricos de lutas pela satisfação de necessidades por direitos devem ser o campo de visão das novas fontes do Direito, pois ele deve “estar nas e ser fruto das práticas sociais” (Wolkmer, 2015, p. 164), sejam elas supraestatais ou infraestatais.

A constituição e o desenvolvimento do “Direito vivo” se prendem às condições da vida cotidiana, que tem sua real eficácia na ação de grupos associativos e organizações comunitárias, ou seja, as vontades coletivas organizadas, pois lutam e buscam a satisfação de novos direitos, ainda não contemplados e nem sempre conhecidos pela legislação oficial de um Estado (Wolkmer, 2015, p. 164-5). O Direito Estatal é, então, somente uma espécie dentro do gênero Direito, como fenômeno cultural.

São exemplos de vontades coletivas que podem elaborar e aplicar suas próprias disposições normativas: corporações de classe, associações profissionais, conselhos de fábrica, sindicatos, cooperativas, agremiações esportivas e religiosas, fundações educacionais e culturais, dentre outras. As regulações nesse campo são





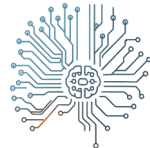
*internas, informais, autônomas e espontâneas*, ainda, *paralelas e independentes* da normatividade estatal.

O Estado não é, então, a única fonte normativa, não é o tutor permanente da sociedade, podendo ser concebido como uma “simples instância mandatária da comunidade” (Wolkmer, 2015, p. 166), permitindo-se aferir que a *vidas cotidianas*, presentes nas periferias capitalistas, inclusive do Brasil, são marcadas pela produção e circulação de bens e serviços, com consequência para a mudança de valores e de ordenação social, o que favorece a criação de novos padrões e conceitos normativos, ou seja, o “novo” tem seus limites circunscritos na própria materialidade da vida cotidiana sendo, portanto, uma autonomia relativa (Wolkmer, 2015, p. 167).

As *novas identidades coletivas*, capazes de introjetar direitos que não passam pela positivação estatal, segundo Wolkmer (2015, p. 168), aparecem diante das novas exigências, “necessidades e conflitos em espaços sociais e políticos fragmentados, tensos e desiguais, envolvendo classes, grupos comunitários e coletividades plurinacionais”, que importam na “utilização de novos procedimentos, novas formas de ação compartilhada e de diálogo intercultural (prático-teórico)”. São, portanto, de caráter múltiplo, informal e mutável. O que se transforma, com a mobilização dos novos movimentos, é o espaço da cidadania.

Nesse contexto emerge uma “nova concepção de juridicidade que não se identifica com os direitos estatais consagrados” (Wolkmer, 2015, p. 169). Para o autor, para dar eficácia à nova legalidade se torna inegável a presença e a interferência dos movimentos sociais, porém, deve ser uma legalidade “contextualizada e autônoma” que se imponha, “capaz não só de redefinir democraticamente as regras institucionais de convivência, mas também de influenciar, reordenar e alterar os critérios que têm embasado o Direito estatal, herdeiro do Iluminismo moderno.” (Wolkmer, 2015, p. 170).





### 3.4 NECESSIDADES COMO FATOR DE VALIDADE DE “NOVOS” DIREITOS

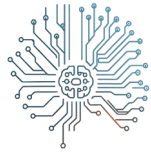
Neste tópico, Wolkmer (2015, p. 170-182) explora “as necessidades” como fator de validade dos novos direitos, pois estes, objetivados pelas identidades coletivas, expressam a intermediação entre necessidades, conflitos e demandas, sendo essencial ver como se representa a estrutura das necessidades essenciais, sejam elas existenciais (de vida), materiais (de subsistência) ou culturais, não correspondendo o termo “necessidades” apenas ao contexto economicista. Essas necessidades estão em constante mutação, redefinição e recriação em face de serem inesgotáveis e ilimitadas no tempo e no espaço.

Os sujeitos sociais passam por um processo que Wolkmer (2015, p. 173) chama de “preliminar de vivência objetiva da negação das necessidades e da insatisfação de carências”, e – esses sujeitos – acabam por adquirir “consciência de seu estado de marginalidade concreta” e “constituir uma identidade autônoma capaz de se autodirigir por uma escolha emancipada que se efetiva em mobilização, organização e socialização”, sendo relevante o processo de conscientização, ou seja, a percepção de necessidades comuns e a ausência de direitos.

Wolkmer (2015, p. 174-6) pontua que, embora as conquistas históricas pelos direitos à liberdade individual, à participação política e à igualdade econômica, desencadeados em face das necessidades conjunturais de época e relacionados às condições históricas da sociedade burguesa liberal-capitalista, esse avanço não incluiu importantes direitos relacionados às necessidades sociais básicas, os quais exigem uma certa ação positiva do Estado para assegurá-los.

No entanto, ainda persistem diferenças quanto às reivindicações quanto às necessidades no Norte Global e no Sul Global, porquanto naquele a razão das lutas está nos direitos difusos, direitos das minorias, à proteção ambiental, desarmamento, bioética, novas tecnologias, enquanto que nos países periféricos as reivindicações são, sobretudo, sobre os direitos civis, políticos e sociais, pois são





relacionados à sobrevivência, subsistência e qualidade de vida: (a) prerrogativas de liberdade e segurança; (b) participação política e democratização da vida comunitária; (c) direitos básicos de subsistência e de melhoria da qualidade de vida.

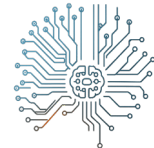
Nesses espaços periféricos então se dá uma luta constante engendrada pela pluralidade dessas manifestações por novos direitos, tudo isso em face das novas condições de vida e das crescentes prioridades que vão sendo geridas e impostas pela colonialidade. Elementos básicos da cidadania não são atendidos e são desrespeitados, fazendo com que os sujeitos coletivos busquem sua satisfação através de mobilizações e ações coletivas, perfazendo-se o novo na forma de obtenção dos direitos, pois não passam mais pelas vias tradicionais e provém de um processo de lutas e conquistas para que haja seu reconhecimento pelo Estado.

Dentre os direitos de novo tipo, Wolkmer (2015, p. 179-80), relaciona:

- direito a satisfazer as necessidades existenciais;
- direito a satisfazer as necessidades materiais;
- direito a satisfazer as necessidades sociopolíticas;
- direito a satisfazer as necessidades culturais;
- direito a satisfazer as necessidades difusas;
- direito das minorias e das diferenças étnicas.

A concepção é pela minimização da insatisfação e plena vivência de direitos comunitários, estes que se impõem como exigência de uma vida compartilhada: “pluralismo comunitário-participativo, cuja fonte do direito é o próprio humano projetado em suas ações coletivas, internalizadas da historicidade concreta, da liberdade emancipada e do reconhecimento pela diversidade” (Wolkmer, 2015, p. 181).





## 4 PLURALISMO JURÍDICO: PROJEÇÃO DE UM MARCO DE ALTERIDADE

Explora Wolkmer (2015, p. 183-328) a “oportunidade” de, em meio a crise de valores e desajuste institucional das sociedades periféricas complexas, da crise estrutural das ‘novas’ formas racionais de legitimação da produção capitalista, da crise e saturação do modelo liberal de representação política e, também, da crise do esgotamento do instrumental jurídico estatal, estabelecer-se um outro paradigma para a cultura política e jurídica, capaz de abarcar e atender o “mundo da vida”.

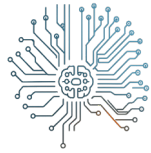
Enfatiza Wolkmer (2015, p. 183) a necessidade de repensar a racionalidade como uma “constelação que vai se refazendo” e que pode englobar a proliferação dos espaços públicos, caracterizados não só pela coexistência das diferenças, mas também com atenção à diversidade dos sistemas jurídicos e circunscrita à multiplicidade de fontes normativas informais e difusas.

Um corpo teórico novo, legitimado a partir de práticas cotidianas e sociais, disseminadas e interatuantes, protagonizadas pelos “novos atores sociais”, os sujeitos coletivos, é a tendência natural e plural, afastada do modelo reducionista técnico-formal do monismo jurídico, estatal e centralizador.

Prega Wolkmer (2015, p. 184) a necessidade de se construir uma práxis normativa sedimentada no “novo” tipo de pluralismo, “como marco de ruptura e denúncia dos mitos sacralizados do instituído e como expressão mais direta dos interesses e exigências da experiência interativa histórico-social”.

Assim, a formulação do “novo” pluralismo deve perpassar pela visualização dele como um fenômeno de possibilidades e dimensões de universalidade cultural e, também, como modelo que incorpora condicionantes inter-relacionados (seja formal ou informal) adequado às especificidades e às condições históricas de micro e macro sociedades políticas. Esse novo pluralismo deve ser “inovador” nas





sociedades periféricas latino-americanas, inserido nas contradições materiais e nos conflitos sociais, sendo

determinante do processo de práticas cotidianas insurgentes e do avanço da ‘autorregulação’ do próprio poder societário. O novo pluralismo jurídico, de características participativas, é concebido a partir de uma nova racionalidade e uma nova ética, pelo refluxo político e jurídico de novos sujeitos – os coletivos; de novas necessidades desejadas – os direitos construídos por processos históricos de lutas; e pela reordenação da sociedade civil – a descentralização normativa do centro para a periferia; do Estado para a Sociedade; da lei para os acordos, os arranjos, a negociação (Wolkmer, 2015, p. 184).

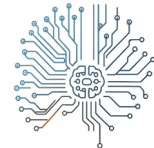
A dinâmica do novo pluralismo jurídico passa por um amplo espaço público aberto, compartilhado e democrático, e, na América Latina, por experiências de justiça informal, popular ou alternativa, pelo direito consuetudinário e pela justiça indígena, pela justiça comunitária, pelo novo constitucionalismo andino (plurinacional e transformador – Venezuela, Equador e Bolívia), pelo direito da favela.

Diferente de outros autores, Wolkmer (2015, p. 261-7) adota uma classificação simplificada e objetiva do pluralismo jurídico, que se processa em uma dualidade do ‘pluralismo jurídico estatal’ (reconhecido, permitido e controlado pelo Estado) e do ‘pluralismo jurídico comunitário’ (espaço formado por forças sociais e sujeitos coletivos com identidade e autonomia próprias, subsistindo independente do controle estatal).

Aborda, também, Wolkmer (2015, p. 266-7) a necessária diferença entre o pluralismo jurídico e “uso alternativo do Direito”, porquanto, embora sendo próximos, este está estreitamente relacionado ao Direito oficial, com a legalidade posta, explorando suas fissuras, ambiguidades e deficiências em favor de segmentos sociais desfavorecidos.

Dentre os novos sujeitos históricos nos países periféricos da América Latina, está uma constelação de múltiplas subjetividades coletivas, que aglutinam:





(a) os camponeses sem-terra, os trabalhadores agrícolas e os imigrantes rurais; (b) os operários mal remunerados e explorados; (c) os subempregados, os desempregados e os trabalhadores eventuais; (d) os marginalizados dos aglomerados urbanos, subúrbios e vilas, carentes de bens materiais e de subsistência, sem água, luz, moradia e assistência técnica; (e) as crianças e pobres e menores abandonados; (f) as minorias étnicas discriminadas; (g) as populações indígenas ameaçadas e exterminadas; (h) as mulheres, os negros e os anciões que sofrem todo o tipo de discriminação, e; (i) as múltiplas organizações comunitárias, associações voluntárias e movimentos sociais reivindicativos de necessidades e direitos (Wolkmer, 2015, p. 281).

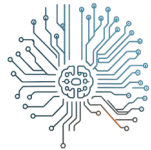
Wolkmer (2015) sustenta que o pluralismo como paradigma de uma cultura político-jurídica diferenciada e compartilhada deve sustentar-se em:

- mecanismos instrumentais que possam viabilizar sua ‘estrutura formal’ direcionada à “ação prática coletiva”, ou seja, o desenvolvimento de uma cidadania coletiva;

- mecanismos instrumentais que possam viabilizar sua “ação prática individual”, ou seja, direcionada à percepção e favorecimento de valores éticos da alteridade, para com o ‘outro’.

Também, o pluralismo deve conter ação teórica – níveis do saber e do conhecimento – objetivando processos racionais emancipatórios, com mecanismos instrumentais capazes de romper os obstáculos do paradigma do monismo centralizador e estatal. No caso da América Latina, o pluralismo deve adotar uma pedagogia libertadora, comprometida com o processo de descolonização e conscientizadora, fazendo com que os agentes coletivos e individuais sejam agentes históricos de juridicidade, sejam fontes do pluralismo cultural político-jurídico.





## 5 PLURALISMO JURÍDICO NAS PRÁTICAS DE JUSTIÇA PARTICIPATIVA

No último capítulo, Wolkmer (2015, p. 329-399) aborda quatro pontos distintos em relação às práticas jurídicas pluralistas e informais:

- Práticas pluralistas alternativas – no nível de legislação e jurisdição, *surgidas no interior* da própria ordem jurídico-estatal:

(a) produção normativa institucionalizada: (1) Convenções coletivas do trabalho; e, (2) Ações propostas por sujeitos coletivos;

(b) a resolução dos conflitos institucionalizada: (1) Conciliação, mediação, arbitragem e juizados especiais; e, (2) “Prática” e “uso” alternativos do Direito

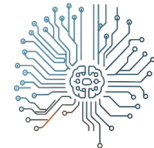
- Práticas pluralistas alternativas – no nível de legislação e jurisdição, instituídas à margem da juridicidade posta pelo Estado:

(a) no nível de resolução de conflitos: novas modalidades não institucionais de mediação, conciliação, juízes arbitrais e justiça comunitária; formas não convencionais, ampliadas e socializadas de mecanismos alternativos de resolução de conflitos; extensão e fragmentação de comitês e conselhos populares de justiça; criação de tribunais de bairros e de vizinhança; justiça distrital, justiça restaurativa, juizados e juntas itinerantes;

(b) no nível das fontes de produção legislativa: reapropriação e alargamento de novas formas de ‘convenção coletiva’ do trabalho, do consumo e do uso social; formação de ‘acordos coletivos’, ‘negociações consensuais’ e de ‘arranjos’ político-jurídicos de agregação de interesses; imposição de ‘acertos comunitários’ mediante mobilização e pressão advindas das carências e necessidades dos novos sujeitos individuais e coletivos.

- Reais implicações da cultura jurídica informal, no que tange às novas formas de legitimidade, da efetividade do justo ilegal, dos critérios de eticidade, da natureza alternativa da sanção e da justiça informal em face da mudança dos papéis entre Estado e Sociedade;





- Influência na formação da nova cultura jurídica pluralista latino-americana dos “valores” trazidos pelos movimentos sociais, como “identidade”, “autonomia”, “satisfação das necessidades”, “participação democrática de base”, expressão cultural do “novo” e igualmente a proposição de um “outro significado” de justiça.

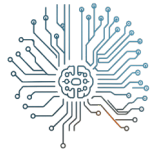
\*\*\*

A abordagem conclusiva de Wolkmer (2015, p. 401-14) é no sentido de que o reconhecimento de outra cultura jurídica só ocorre “sob a condição de deslocamento, ruptura e transformação substancial com as formas tradicionais e centralizadoras de se fazer o ‘jurídico’”, ou seja, que a mudança de paradigma no Direito deve partir de fundamentos de efetividade material e formal que encaminhe para uma proposta “prático-teórica” de pluralismo, cujo poder advém da Sociedade.

Um novo paradigma que, portanto, rompa com a colonialidade do saber, da cultura, da política e do jurídico, direcionando para “um modelo cultural estruturado na proliferação de espaços públicos locais, na pluralidade do ‘social’”, com atenção às “prioridades concretas de um mundo da vida compartilhada” e enfoque “na emancipação e libertação de experiências humanas plurais e na construção de um conhecimento que, como assinala Boaventura de Souza Santos, é sempre ‘aproximado, provisório e contextualizado’ a partir da práxis concreta” (Wolkmer, 2015, p. 402).

O conteúdo de novos direitos é engendrado consensualmente, pelos novos sujeitos coletivos e individuais, tendo em vista aquilo que é política e socialmente relevante e justo, estando a força da autorregulação logicamente vinculada ao grau de autonomia e identidade desses sujeitos sociais, capaz de fixar preceituações que sejam acatadas e respeitadas pelos seus membros.





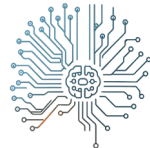
Os interesses emergentes e os reclamos do todo social é que determinam a atuação do Estado e a produção da juridicidade. [...] Somente modificando as regras atuais da lógica imperante (democracia ‘representativa’ elitista, Estado como fonte única do Direito etc.) é que os direitos nascidos de processos comunitários deixarão de ser inferiores, confrontados, cooptados ou negados pelo Direito Positivo do Estado. [...] Com efeito, o ‘novo’ está em captar o que já existe subjacentemente na realidade e não a idealização utópica, algo que não existe, impossível de se apreender.” (Wolkmer, 2015, p. 404).

Não há necessidade, portanto, de ruptura com o modelo anterior, mas de progressão e mudanças graduais, preservando-se as conquistas políticas e jurídicas já efetivadas. Pode existir a coexistência entre os Direitos formais e os informais (dos sujeitos emergentes), tanto pela existência em conflito, quanto pela convivência e absorção de um pelo outro, complementando-se, porém o debate, quando há o conflito, deve ser sobre o que é mais justo e a medida do que seja o justo e quem é legitimado a dizê-lo, ou seja, o justo como aquilo que é correspondente às aspirações legítimas e que atendam satisfatoriamente as necessidades estabelecidas democraticamente pela própria sociedade.

A consciência libertadora, capaz de encaminhar à emancipação, pode ser buscada e ampliada com uma boa educação cultural, pois esta pode auxiliar a perceber adequadamente as relações entre as necessidades reais e efetivas ocorrentes em relação a determinados sujeitos sociais, ampliando seus horizontes de “poder societário” e aptos à consecução de seus objetivos no atendimento aos direitos e necessidades básicas e/ou em reivindicação.

Reforça Wolkmer (2015, p. 411), a necessidade de se encaminhar para um pluralismo transformador, de teor “comunitário-participativo”, pois este é o que realmente procura promover e estimular a participação múltipla dos segmentos populares e dos novos sujeitos individuais e coletivos, identificados com as novas exigências presentes na sociedade e com os processos de lutas históricas descolonizadoras. Esse novo pluralismo expressa funções de convergência e de integração, unindo indivíduos, povos, comunidades, sujeitos coletivos e





outras identidades organizadas em torno de necessidades comuns, de maneira intercultural e com direito à diferença, à autonomia e ao reconhecimento.

Wolkmer (2015, p. 412-4), chega a 11 conclusões a partir da análise dos cinco capítulos de sua tese:

1<sup>a</sup>) em estruturas colonizadas do Capitalismo periférico, como é o da AL, a ordem jurídica deve reconhecer outras fontes plurais de produção legal “autônomicas” geradas no seio da própria sociedade e para ela orientadas;

2<sup>a</sup>) a crise da hegemonia do estatuto jurídico liberal revela haver uma resposta, gradual e progressiva, da Sociedade assentada em proposições culturais que partam das condições e das práticas cotidianas, instituídas por novos atores, processadas por novos direitos enquanto reconhecimento às diferenças e às diversidades étnico-culturais;

3<sup>a</sup>) o novo paradigma está focado em uma práxis dinâmica, marcada por horizontes de frágeis igualdades, processos históricos de lutas e por espaços de conflitos intermitentes, não mais nos rígidos ditames das regras tecnoformais e ordenações teórico-abstratas;

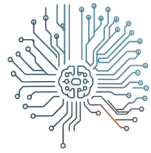
4<sup>a</sup>) os pressupostos de legitimação são diferenciados também, sendo que a legitimidade pluralista advém do poder de participação, eficácia social e no reconhecimento do justo comunitário;

5<sup>a</sup>) a criação permanente de novos direitos, que assumem dimensão individual, coletiva e social, está relacionada com o grau de eficácia de uma resposta à situação ou condição de privação, negação ou ausência de necessidades reivindicadas por sujeitos subalternos individuais/coletivos;

6<sup>a</sup>) os movimentos sociais, enquanto novos sujeitos, tornam-se portadores privilegiados do pluralismo político e jurídico transformador que nasce das lutas e das reivindicações em torno de carências, aspirações desejadas e necessidades humanas fundamentais, motivo pelo qual são fontes do Direito;

7<sup>a</sup>) as práticas pluralistas concorrentes, no âmbito da legislação e da jurisdição, ocorrendo no interior da própria ordem jurídica ou à margem do





Direito posto pelo Estado, constituem uma cultura comunitária instituinte e compartilhada, caracterizadas pela subsistência;

8ª) os modos de conceber a racionalidade e a ética a partir do novo pluralismo parte do refluxo jurídico e político de sujeitos coletivos, pautados pelas novas necessidades, em lutas históricas, na qual há reordenação e deslocamento normativo do centro para a periferia, ou seja, do Estado para a Sociedade, da Lei para os acordos, arranjos e negociações;

9ª) o desafio está em transpor, buscando pontos de aproximação e de inserção, sem perder a própria identidade, num cenário de insurgência e criatividade crítica como a simbiose planetária da vida humana e do ecossistema;

10ª) o novo pluralismo não inviabiliza a existência de um Estado fiscalizado e controlado pelo poder local comunitário, também não exclui aceitar a “questão” Estado, suas transformações, refundações e desdobramentos mais recentes;

11ª) o reconhecimento de outro paradigma cultural de validade para o Direito, representado por nova configuração de pluralismo, designado como *pluralismo jurídico comunitário-participativo*.

## REFERÊNCIA

Wolkmer, Antonio Carlos. **Pluralismo Jurídico**: fundamentos de uma nova cultura no direito. 4ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Saraiva, 2015.



